



Comisión de Postulación para la Elección de Magistrados de la Corte de
Apelaciones y otros Tribunales Colegiados de Igual Categoría

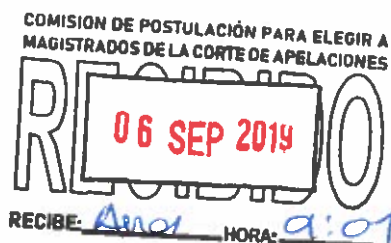
FECHA DE ENTREGA: 06/09/2019 HORA: 9:01

No. DE EXPEDIENTE: 172

NOMBRE DEL POSTULANTE: Noé Adalberto Ventura
Lozano

RAZONES DEL MEMORIAL: En el numeral 7, se
acompañar la constancia del último cargo
desempeñado

PERSONA QUIEN RECIBE: Ana Recinos



Expediente No.: 172

HONORABLES MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE POSTULACIÓN PARA MAGISTRADOS DE LA CORTE DE APELACIONES Y OTROS TRIBUNALES DE IGUAL CATEGORÍA, DEL PERIODO 2019-2024. -----

NOÉ ADALBERTO VENTURA LOYO, de datos de identificación conocidos en esa Honorable Comisión de Postulación de la Corte de Apelaciones y Otros Tribunales de Igual Categoría del periodo 2019-2024, y actuando bajo la Dirección y Procuración del Abogado y Notario, Licenciado **JOSÉ ENRIQUE RIOS MARTÍNEZ**, cuyo Bufete Profesional, se encuentra ubicado en trece calle uno guion diez zona diez, con Número de Colegiado veintinueve mil ochocientos noventa y seis (29896), Número de teléfono celular cincuenta y nueve millones setecientos noventa y seis mil setecientos sesenta y dos (59796762), y señalando para recibir notificaciones en Diagonal 6 diecisiete guion treinta y cinco Oakland zona diez y comparezco con el objeto de **PRESENTAR PRUEBAS DE DESCARGO EN CONTRA DE LA EXCLUSIÓN DE MI EXPEDIENTE IDENTIFICADO CON EL NUMERO 172**, de conformidad con la publicación en la cual se notifica por medio del Secretario Doctor Ranulfo Rafael Rojas Cetina, de la Comisión de Postulación para Magistrados de la Corte de Apelaciones y Otros Tribunales de Igual Categoría para el Periodo 2019-2024; en la cual se acordó de conformidad con el Artículo 17 de la Ley de Comisiones de Postulación, que los aspirantes que integraran la Nómina de 270 candidatos a Ocupar las Magistraturas, de Cortes de Apelaciones y Otros Tribunales de Igual Categoría, que no reúnen los requisitos previstos en la Ley y exigidos en la Convocatoria de acuerdo a la Legislación Vigente, se informa que se tienen **TRES DIAS**, comprendidos del miércoles 4 al viernes 6 de Septiembre de este año para presentar las **Pruebas de Descargo**, por lo que me permito exponer los siguientes:

HECHOS:

I.- CAUSAL DE EXCLUSION:

En la publicación antes indicada de la parte introductoria del presente memorial, en la casilla respectiva aparece el Número de Expediente 172, que corresponde a mi Persona como Aspirante a ser seleccionado para ocupar una de las Magistraturas de Cortes de Apelaciones y Otros Tribunales de Igual Categoría, y en la casilla denominada **INCONVENIENTES ENCONTRADOS EN EXPEDIENTE**, se consignó que en el numeral 7, solo acompaño la constancia del último cargo desempeñado; y en tal virtud, ese numeral corresponde al Formulario de Solicitud de Inscripción y Control de Requisitos de Postulantes a Magistrado de la Corte de Apelaciones y Otros Tribunales de Igual Categoría, y que se refiere a Constancia de no haber sido sancionado por el régimen disciplinario de la Institución donde labora actualmente y de las Instituciones en las cuales haya laborado, siempre y cuando exista régimen disciplinario, de no ser así, acompañar constancias sobre ese extremo, con número de Folio Nueve. -----

II.- ARGUMENTOS DE DERECHO DE DEFENSA:

En virtud de lo antes expuesto, **a ese respecto me pronuncio que en el Expediente Original que presenté a esa Comisión de Postulación para ocupar una Magistratura de Cortes de Apelaciones y Otros Tribunales de Igual Categoría, en las Instituciones en las cuales desempeñe Cargo Público y que consigne en el Curriculum Vitae y de lo cual adjunte sus respectivos atestados y es de aclarar que las Leyes respectivas de creación de la entidades Públicas en donde desempeñe cargo público, no contemplan o existía a esa fecha de ocupar tales cargos, ningún Régimen, Unidad y Órgano Disciplinario respectivo, y el primero de los cargos desempeñados fue el de: ASESOR JURÍDICO, DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, de fecha 19 de diciembre de 1985, Nombramiento del Jefe de Estado, cargo entregado por renuncia de fecha 3 de marzo de 1986, Atestado que se encuentra en el folio número 669 del**



Expediente Número 172; y del cual el desempeño fue de dos meses con doce días y en ese entonces, el Ministerio de Finanzas Públicas, *regía sus funciones de conformidad con lo establecido en la Ley del Ministerio de Finanzas Públicas* Decreto 106-71, del Congreso de la República, y dicha ley fue derogada por el Decreto 114-97 del Congreso de la República a la presente fecha ese Departamento de Abogacía y Procuración, **YA NO EXISTE Y TAMPOCO SE CONTEMPLO EN LA LEY DEROGADA ANTES INDICADA, NINGUN REGIMEN, ÚNIDAD Y ORGANO DISCIPLINARIO**, y posteriormente me desempeñe como **ASESOR EN LA COMISIÓN NACIONAL DEL MEDIO AMBIENTE DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA**, según Acuerdo Gubernativo de Nombramiento Número 77 de fecha 1 de septiembre de 1987, del cual tome posesión el día 2 de octubre de dicho año; al 28 de junio de 1991, el cual se encuentra en el folio número 665 del Expediente Número 172, entidad que **YA NO EXISTE** y esa comisión fue creada por la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente Decreto Número 68-86, y la cual fue reformada por el Decreto Número 90-2000, al crearse el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, disolviendo la referida comisión, y en la Ley citada **NO SE CONTEMPLO NINGÚN REGIMEN, ÚNIDAD Y ORGANO DISCIPLINARIO** y hasta la presente fecha que funge ese Ministerio, y de eso hace 28 años, así también me desempeñe como **JEFE DE LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN**, de fecha 18 de diciembre de 2000 al 2 de agosto de 2002, el cual se encuentra en el folio número 687 del Expediente Número 172, y que se rige por la Ley Orgánica del Ministerio Público Decreto 512 del Congreso de la República en el año 1948, la cual en el Artículo 90 del Decreto Número 40-94 Disposiciones derogatorias, se derogo el Decreto No. 512 del Congreso de la Republica que contiene la Ley Orgánica del Ministerio Publico, en lo

concerniente a la Sección de Fiscalía así como los Acuerdos Gubernativos 393-90 de fecha 9 de mayo de 1990, 527-90 de fecha 31 de mayo 1990, 898-90 de fecha 21 de septiembre de 1990 y cualquier otra disposición que se opongan o limite las funciones contenidas en esta ley, de igual forma desempeñe el cargo y de ello hace 17 años, de **SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, CONAP**, de fecha 2 de agosto del 2002 al 11 de febrero de 2004, el cual se encuentra en el folio numero 681 del Expediente Número 172, y dicho cargo se rige por la Ley de Áreas Protegidas Decreto 4-89 del Congreso de la República, el cual no **CONTEMPLA EN LA LEY INDICADA, NINGUN REGIMEN, UNIDAD Y ORGANO DISCIPLINARIO**, de lo cual hace 15 años.-----

En cuanto a los demás cargos tales como Secretario, Oficial, Comisario y de Juzgados de Primera Instancia en el Sector Justicia, que aparecen detallados en los folios 660, al 662, **A ESA FECHA NO EXISTÍA RÉGIMEN DE LA UNIDAD DISCIPLINARIA, SINO HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 1999**, que se ordenó la **PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN de la referida Ley**, en que se ordenó publicar y cumplir la Ley de Servicio Civil del Organismo Judicial Decreto, del No.48-99, del Congreso de la República de Guatemala, y se creó la Unidad correspondiente del Sistema de Recursos Humanos del Organismo Judicial, en Título V REGIMEN DISCIPLINAR, Capítulo II, **PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO del Artículo 54 al 71 de la referida Ley** y así mismo deseo aclarar que en las Certificación que se extendió por parte de la Secretaria de la Junta de Disciplina Judicial, con fecha 7 de junio del 2019 y con el Visto Bueno del Presidente de la Junta de Disciplina Judicial, en su contenido consignó que con base a los datos de la Junta de Disciplina Judicial, como Órgano disciplinario que inicio en funciones el 21 de agosto del año 2000 a la **presente fecha**, establece que el suscrito **NO TIENE NINGUNA SANCIÓN DISCIPLINARIA VIGENTE; NI HA SIDO OBJETO DE**

RECOMENDACIÓN DE DESTITUCION POR PARTE DE LA JUNTA DE DISCIPLINA JUDICIAL.-----

III.- VERIFICACION DE REQUISITOS DE ASPIRANTES

Así mismo el Artículo 12 de la Ley de Comisiones de Postulación, Decreto Número 19-2009, establece taxativamente los documentos a presentar por parte de quienes aspiren dentro de la nómina respectiva, a ocupar una Magistratura de Corte de Apelaciones, el cual expresa: "para lo cual se deberá presentar": 1) Constancia de ser colegiado activo; 2) Constancia o certificación donde consten los años de ejercicio profesional o constancia de haber desempeñado un período completo como Magistrado de la Corte de Apelaciones o Juez de Primera Instancia, en el caso de los aspirantes a Magistrados de la Corte Suprema de Justicia o de Magistrados de la Corte de Apelaciones; 3) Presentar constancia de antecedentes policíacos; 4) Presentar constancia de antecedentes penales; 5) Presentar constancia de no haber sido sancionado por el tribunal de honor del colegio profesional respectivo; y, 6) Declaración jurada donde conste que el candidato está en el pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos y que no ha sido inhabilitado para ejercer cargos públicos; y la verificación de los requisitos de conformidad con lo que preceptúa el Artículo 13 de la Ley antes indicada debe verificarse en congruencia con la Constitución Política de la República, leyes constitucionales, leyes ordinarias aplicables y lo dispuesto por la Ley de Comisiones de Postulación y *al referirse dicha norma a leyes ordinarias aplicables, las Instituciones Públicas en donde me desempeñe nunca establecieron Regímenes, Unidades u Órganos Disciplinarios y es por ello, que las normas Jurídicas antes citadas de la Ley de Comisiones de Postulación Decreto No 19-2009, debe interpretarse de conformidad con el Artículo 10 párrafo segundo de la Ley del Organismo Judicial, que se refiere a la Interpretación de la Ley y que el conjunto de una ley servirá para ilustrar*



el contenido de cada una de sus partes, pero los pasajes de la misma se podrán aclarar atendiendo al orden siguiente: a) A la finalidad y al espíritu de la misma; b) A la historia fidedigna de su institución; c) A las disposiciones de otras leyes sobre casos o situaciones análogas, d) Al modo que parezca más conforme a la equidad y a los principios generales del derecho, y a la presente fecha una entidad no existe como es el caso de la Comisión Nacional de Medio Ambiente de la Presidencia de la República en donde ocupe el cargo de **Asesor Técnico IV, en La Comisión Nacional del Medio Ambiente de la Presidencia de la República**, y cuando labore como **Asesor Jurídico de la Dirección de Asuntos Jurídicos, Departamento de Abogacía y Procuración, del Ministerio de Finanzas Públicas**, con base a la Ley del Ministerio de Finanzas Públicas Decreto Numero 106-71, y la misma fue derogada por el Decreto 114-92 del Congreso de la República como Ley del Organismo Ejecutivo y no contempló la primera de las antes citadas **NINGÚN RÉGIMEN, UNIDAD Y ÓRGANO DISCIPLINARIO**, y por ende ese Departamento ya no existe y como consecuencia los otros cargos como **SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, CONAP y JEFE DE LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN**, no contemplaron en sus Leyes respectivas **Ningún Régimen, Unidad y Órgano Disciplinario**, debiéndose entender por **Régimen Disciplinario**: al conjunto de normas que rigen una actividad, para poner en práctica una serie de principios relativos al orden de legalidad, independencia, imparcialidad, favorabilidad, presunción de inocencia, derecho de defensa, debido proceso, oralidad, publicidad, libertad probatoria, contradictorio, derecho de audiencia, objetividad el que debe contar con un procedimiento disciplinario, administrativo de oficio, especial y de orden interno e implica la regulación del ejercicio de los poderes



disciplinarios de la Administración sobre sus funcionarios, en defensa del buen orden de la función pública así como los derechos de recurrir las Resoluciones correspondientes y a efecto de no limitar la participación y garantizar la Tutela de los Derechos Fundamentales que la parte considerativa a que hace referencia la Ley de Comisiones de Postulación DECRETO NÚMERO 19-2009, y garantizar la actividad de la Comisión y que el proceso de elección de aspirantes a Magistrados se desarrolle en el marco de un criterio objetivo y funcional debe si lo considera oportuno corroborar por los medios idóneos respectivos la información que he proporcionado en el Expediente No. 172 que se me ha asignado, y que el Artículo 18 de la Referida Ley establece en un listado que es enunciativo y no limitativo dirigirse a las entidades que puedan brindar información pertinente de las instituciones relacionadas en la documentación presentada y en el caso del suscrito como Magistrado de Corte de Apelaciones cuyo periodo está vigente al Consejo de la Carrera Judicial, Junta de Disciplina judicial y Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y en todo caso, la Comisión deberá verificar los antecedentes del solicitante en cualquier otra dependencia en donde como profesional haya laborado y si en mi caso, así fuere la COMISION ESTA FACULTADA Y DEBERA CORROBORAR tal como lo ordena la Ley respectiva.-----

Así mismo, LA COMISIÓN PARA MAGISTRADOS DE LA CORTE DE APELACIONES Y OTROS TRIBUNALES DE IGUAL CATEGORÍA, DEL PERIODO 2019-2024, debe valorar el Contenido del punto segundo del Acta Notarial de fecha veintiocho de agosto de dos mil diecinueve, que se refiere a la Declaración Jurada autorizada por el Notario José Enrique Ríos Martínez, y signada por el suscrito, en la que Declaro Bajo Juramento Solemne, de que no he sido inhabilitado

para ejercer Cargos Públicos, de conformidad con el Artículo 16 de la Ley de Probidad y Responsabilidad de Empleados Públicos y por otra parte, que obra a folio 841, del Expediente Número 172 que he presentado con base al Formulario de Solicitud de Inscripción y Control de Requisitos de Postulantes a Magistrado de la Corte de Apelaciones y Otros Tribunales de Igual Categoría en el que declare Bajo Juramento, que se tienen todas las calidades para participar y de conformidad con nuestra Constitución Política de la República de Guatemala, y que son derechos y deberes de los ciudadanos, **Elegir y Ser electo**, tal como lo establece el Artículo 136 literales b) y d), de la Constitución Política de la República de Guatemala, lo cual se encuentra sustentado en el sistema de valores y principios del régimen Democrático y personalista de la Constitución Política de la República de Guatemala, y al Principio de Igualdad en tener iguales oportunidades y en que no deben establecerse excepciones o privilegios, que excluyan a unos, de lo que se concede a otros en iguales circunstancias, sean estas positivas o negativas, es decir, que conlleve un beneficio o un perjuicio a la persona sobre la que recae el supuesto contemplado en la ley, a efecto de no transgredir el precepto constitucional que reconoce el Derecho de Igualdad ante la Ley, cuando la norma sin justificación, busca hacer una distinción, colocando a un determinado sujeto en un plano desigual, limitándolo o restringiéndolo en sus derechos frente a otros, de similares características o condiciones, o sea que las personas deben gozar de los mismos derechos y de las mismas delimitaciones determinadas por la ley; y debe tenerse a cuenta que los requisitos para ser Magistrado o Juez es de que se debe ser guatemalteco de origen, de reconocida honorabilidad, estar en el goce de sus derechos de ciudadanos y ser abogados colegiados, salvo las excepciones que la ley establece con respecto a este último requisito en relación a determinados Jueces de Jurisdicción Privativa y Jueces Menores, tal como lo establece el Artículo 207 de la



Constitución Política de la República de Guatemala y que para optar a empleos o cargos públicos no se atenderá mas que ha razones fundadas en méritos de capacidad, idoneidad y honradez según el Artículo 113 de la Constitución Política de la República de Guatemala, y al Artículo 12 párrafo segundo de la Ley de Comisiones de Postulación Decreto Número 19-2009 que debe contener la tabla de gradación de calificaciones de los aspirantes en cuatro aspectos tales como A. Los méritos éticos; B. Los méritos académicos; C. Los méritos profesionales; y, D. Los méritos de proyección humana y en el Apartado a. Ético del Artículo 12, en el Numeral 5 de la Ley de Comisiones de Postulación Decreto 19-2009, se expresa que se debe de presentar "5. Presentar constancia de no haber sido sancionado por el Tribunal de Honor del colegio Profesional respectivo"; y en ese orden de ideas la Ley de la Carrera Judicial Decreto Numero 32-2016, preceptúa que la Comisión de Postulación quienes hayan ejercido la Magistratura y que reúnan los requisitos Constitucionales y Legales para el cargo, la Comisión de Postulación, integrará la nómina preferentemente y que se debe aplicar el procedimiento y los principio establecidos en la Ley de Comisiones de Postulación que estable el Artículo 2 de la Ley de Comisiones de Postulación Decreto 19-2009, en su Numeral 2 y literal c que las instancias Estatales y no Estatales que tenga relación con los requisitos que debe llenar el Funcionario que se está eligiendo deberán facilitar su colaboración inmediata con las atribuciones que por Ley les corresponde a la Comisión de Postulación cuando esta se le requiera y que en los procesos de selección de candidatos se observaran criterios, requisitos y condiciones concretas y tangibles en los factores de ponderación establecidos, eliminando criterios, requisitos y condiciones subjetivas y discrecionales y además al fin de garantizar la debida transparencia del proceso de selección la Comisión de Postulación esta investida en la competencia suficiente para requerir información necesaria como parte del procedimiento e

información que aporten las entidades enumeradas en el Artículo 18 de la Ley de Comisiones de Postulación Decreto Numero 19-2009, y que practicaran cuantas diligencias consideren conveniente y necesarias incluyendo la celebración de entrevista personal, pública y privada tal como lo establece el Artículo 21 de la referida ley.-----

IV.- CONCLUSIONES:

Respetables Representantes de esa Honorable Comisión de Postulación para Magistrados de la Corte de Apelaciones y Otros Tribunales de Igual Categoría para el Periodo 2019-2024, por este medio vengo a **SOLICITARLES** que se **DECLARE SIN LUGAR LA EXCLUSIÓN**, de que fui objeto en la Notificación que se publicó por parte del Secretario Doctor Ranulfo Rafael Rojas Cetina, de esa Comisión de Postulación el día martes 3 de septiembre del año dos mil diecinueve, al haber presentado las respectivas **Pruebas de Descargo y las Argumentaciones en Defensa de la Exclusión de mi Expediente con número 172**, que se describieron en los Apartados respectivos numerales romanos I, II, III y IV del presente memorial y así poder participar en el proceso de La Elección de Magistrados de Cortes de Apelaciones y Otros Tribunales de Igual Categoría, para el Periodo 2019-2024, de conformidad con lo que establecen los **Artículos 113 y 207 la Constitución Política de la República de Guatemala y 12 y 13 de la Ley de Comisiones de Postulación Decreto 19-2009 del Congreso de la República.** -----

IV.- PRUEBAS DE DESCARGO:

Por este medio vengo a presentar *fotocopias simples, como Medios de Prueba de Descargo, las Leyes atinentes a cada una de las Instituciones en donde desempeñe Cargo Público para los efectos legales consiguientes tales como:* -----

a) Ley del Ministerio de Finanzas Públicas, Decreto Numero 106-71, en la cual no se contemplaba ningún **Régimen, Unidad y Órgano Disciplinario respectivo**, misma que

fue derogada por el Decreto 114-97 del Congreso de la República, y en la cual se contemplan las Nuevas Funciones del Ministerio de Finanzas Públicas en el Artículo 35.-----

b) Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente Decreto 68-86 del Congreso de la República, que fue reformada y que suprimió La Comisión Nacional de Medio Ambiente, al crearse el Ministerio de Ambiente en el Artículo 29 Bis del Decreto 114-97 del Congreso de la República, y que no contempló *ningún Régimen, Unidad y Órgano Disciplinario respectivo*. -----

c) Ley del Organismo Ejecutivo Decreto 114-97 del Congreso de la República, de fecha 10 de diciembre de 1997, que creo el Ministerio de Ambiente y Suprimió la Comisión Nacional de Medio Ambiente de la Presidencia de la República, en el Artículo 29 Bis, que la contemplaba el Decreto Numero 68-86. -----

d) Reformas a la Ley del Organismo Ejecutivo, Decreto Número 114-97 del Congreso de la Republica, Decreto Numero 90-200 del Congreso de la Republica, que en las disposiciones finales y derogatorias Capitulo IV Artículo 8, se refiere a la liquidación de la Comisión Nacional de Medio Ambiente y de la Secretaria del Medio Ambiente y los Recursos Naturales de la Presidencia de la Republica, al crearse el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, según el Artículo 3 del Referido Decreto de Reforma.---

e) Ley Orgánica del Ministerio Público Decreto 512 del Congreso de la República del veinticinco de 1948, la cual en el Artículo 90 Disposiciones derogatorias, se derogo el Decreto No. 512 del Congreso de la Republica que contiene la Ley Orgánica del Ministerio Publico en lo concerniente a la sección de Fiscalía así como los Acuerdos Gubernativos 393-90 de fecha 9 de mayo de 1990, 527-90 de fecha 31 de mayo 1990, 898-90 de fecha 21 de septiembre de 1990 y cualquier otra disposición que se opongan



o limite las funciones contenidas en esta ley en la que no se estableció propiamente un Régimen Unidad y Órgano Disciplinario como tal .-----

f) Ley Orgánica del Ministerio Público, Decreto Numero 40-94, promulgado el día 3 de mayo de 1994, Aprobado el 12 de mayo de 1994 y publicado con fecha 3 de mayo de 1994, en el Diario de Centroamérica.-----

*g) Ley de Áreas Protegidas Decreto Numero 4-89 del Congreso de la República de Guatemala, siete de febrero de mil novecientos ochenta y nueve y sus Reformas Decreto Numero 110-96 del Congreso de la Republica, y su Reglamento según Acuerdo Gubernativo 759-90 del 22 de agosto 1990, la cual no contempla en la misma **ningún Régimen, Unidad y Órgano Disciplinario respectivo.***-----

*h) Decreto Número 1568, Reglamento General de Tribunales fecha de fecha 31 de agosto de 1934, el cual no contempló **ningún Régimen, Unidad y Órgano Disciplinario respectivo como tal** y fue Reformado por el Acuerdo Numero 36-2004 de fecha 11 de agosto del año 2004.*-----

*i) Ley de Servicio Civil del Organismo Judicial, Decreto Numero 48-99 del Congreso de la República de Guatemala, de fecha 30 de noviembre de 1999, y hasta esa fecha **NO EXISTÍA RÉGIMEN DE LA UNIDAD DISCIPLINARIA, en el Organismo Judicial, SINO HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 1999, en que se ordenó la PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN de la referida Ley y se creó la Unidad correspondiente del Sistema de Recursos Humanos del Organismo Judicial, tal como aparece consignado en el Título V REGIMEN DISCIPLINAR, Capítulo II, PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO del Artículo 54 al 71 de la referida Ley.***-----

FUNDAMENTO DE DERECHO:

Artículo 28 de la Constitución Política de la República, "Derecho de defensa.
Primer párrafo, establece: Los habitantes de la República de Guatemala tienen derecho

Lic. José Enrique Ríos Martínez

AO-0449709

Artículo 12 de la Ley de Comisiones de Postulación. Aprobación del Perfil de aspirantes. Las Comisiones de Postulación elaborarán el perfil de los profesionales, a que deberán aspirar, quienes se incluyan dentro de la nómina respectiva, con el objeto de elevar la calidad ética, académica, profesional y de proyección humana de los funcionarios públicos electos mediante este procedimiento. Para tal efecto tomarán en consideración los aspectos siguientes: a.- Ético: Comprende lo relacionado con la moral, honorabilidad, rectitud, independencia e imparcialidad comprobadas, para lo cual se deberá presentar: i) Constancia de ser colegiado activo; ii) Constancia o certificación donde consten los años de ejercicio profesional o constancia de haber desempeñado un periodo completo como Magistrado de la Corte de Apelaciones o Juez de Primera Instancia, en el caso de los aspirantes a Magistrados de la Corte Suprema de Justicia o de Magistrados de la Corte de Apelaciones; iii) Presentar constancia de antecedentes policíacos; iv) Presentar constancia de antecedentes penales; v) Presentar constancia de no haber sido sancionado por el tribunal de honor del colegio profesional respectivo; y, vi) Declaración jurada donde conste que el candidato está en el pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos y que no ha sido inhabilitado para ejercer cargos públicos.

b.- Académico: Comprende lo relacionado con la docencia universitaria, títulos

académicos, estudios, ensayos, publicaciones, participación en eventos académicos y méritos obtenidos. c.- Profesional: Comprende todo lo relativo con la experiencia profesional del aspirante, quien tiene que cumplir los requisitos establecidos en la Constitución Política de la República o leyes aplicables, según el cargo al cual opte. d.- Proyección humana: Comprende aspectos relacionados con la vocación de servicio y liderazgo; A su vez, la Comisión de Postulación debe aprobar una tabla de gradación de calificaciones de los aspirantes, de uno (1) a cien (100) puntos, con el objeto de cuantificar numéricamente en una sola tabla, los siguientes cuatro aspectos: A.- Los méritos éticos; B.- Los méritos académicos; C.- Los méritos profesionales; y, D.- Los méritos de proyección humana. Dicha tabla debe ser tomada como base por los miembros de la Comisión de Postulación, en el momento de la votación, con el objeto de elaborar nóminas de candidatos con un alto perfil. -----

Artículo 18. De la Ley de Comisiones de Postulación DECRETO NÚMERO 19-2009
Verificación de antecedentes. Cada una de las Comisiones de Postulación está facultada y deberá corroborar, por los medios idóneos respectivos, la información proporcionada por el profesional de que se trate en el expediente que corresponda. Los medios idóneos serán los descritos en el siguiente listado, que es enunciativo y no limitativo: A. La dirección de recursos humanos de las entidades o instituciones que el aspirante mencione como antecedentes laborales; B. La Policía Nacional Civil; 9 C. El Ministerio Público; D. El Organismo Judicial, a través de la Unidad de Antecedentes Penales; y, E. Todas las instituciones relacionadas con la documentación presentada por los candidatos y la información proporcionada por los mismos. Para el efecto, deberán dirigirse a las entidades que puedan brindar la información pertinente, cuyas autoridades deberán prestar la colaboración debida. 1. En el caso de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Magistrados de la Corte de Apelaciones y otros

tribunales de igual categoría y Jueces de Primera Instancia, cuyo periodo de funciones esté vigente, y presenten papelería para optar a los cargos de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Magistrados de la Corte de Apelaciones, la información deberá requerirse a las entidades siguientes, siendo el listado enunciativo y no limitativo: a. Consejo de la Carrera Judicial; b. Junta de Disciplina Judicial; y c. Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala.-----

En la **DECLARACION UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS**, Adoptada y proclamada por la Asamblea General en su resolución 217 A (III), de 10 de diciembre de 1948: **Artículo 28** Toda persona tiene derechos a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta Declación se hagan plenamente efectivos. -----

PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLITICOS, entrada en vigor: 23 de marzo de 1976, de conformidad con el Artículo 49 lista de los Estados que han ratificado el pacto **Declaraciones y reservas (en Ingles)**, segun los Articulos que a continuacion se describen de esta Pacto:-----

Artículo 25 Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de la distinciones mencionadas en el articulo 2, sin restricciones indebidas, de los siguientes derechos y oportunidades: **a)** Participar en la direccion de los asuntos públicos, directamente o por medio de representante libremente elegidos; **c)** Tener acceso, en condiciones generales e igualdad, a las funciones publicas de su pais.-----

Artículo 26 Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual proteccion de la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión,



opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. -----

Artículo 5. Libertad de Acción. de la Constitución Política de la República de Guatemala: Toda persona tiene derecho a hacer lo que la ley no prohíbe; no está obligada a acatar órdenes que no estén basadas en ley y emitidas conforme a ella. Tampoco podrá ser perseguida ni molestada por sus opiniones o por actos que no impliquen infracciones a la misma.-----

Artículo 44. Derechos inherentes a la persona humana. de la Constitución Política de la República . Los derechos y garantías que otorga la Constitución no excluyen otros que, aunque no figuren expresamente en ella, son inherentes a la persona humana. El interés social prevalece sobre el interés particular. Serán nulas ipso jure las leyes y las disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden que disminuyan o tergiversen los derechos que la Constitución garantiza.-----

Artículo 153. Imperio de la ley de la Constitución Política de la República. El imperio de la ley se extiende a todas las personas que se encuentren en el territorio de la República. -----

PETICIONES:

DE FORMA:

- a) Que se admita para su trámite el presente memorial, se tome nota del lugar que señalo para recibir Citaciones y Notificaciones y del auxilio profesional del Licenciado José Enrique Ríos Martínez.-----
- b) Que se tengan por presentados los documentos señalados como Medios de Prueba de Descargo, en el Apartado respectivo del presente Memorial los cuales adjunto y Fundamentos de Derecho citados.-----



DE FONDO:

a) Que la Honorable **COMISIÓN DE POSTULACIÓN PARA MAGISTRADOS DE LA CORTE DE APELACIONES Y OTROS TRIBUNALES DE IGUAL CATEGORÍA PARA EL PERIODO 2019-2024**, al **RESOLVER DECLARE SIN LUGAR LA EXCLUSIÓN DE QUE FUI OBJETO EN LA NOTIFICACIÓN PUBLICADA POR PARTE DE ESA COMISIÓN DE POSTULACIÓN, EL 3 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019**, al haber presentado las Pruebas de Descargo y las Argumentaciones y Fundamento de Derecho que se describieron en los Apartados respectivos Numerales Romanos I, II, III y IV del presente Memorial y se incorpore mi expediente identificado con el Número 172, para poder participar en el **proceso de Comisiones de Postulación, para elegir Magistrados de Corte de Apelaciones y Otros Tribunales de Igual Categoría del periodo ya indicado**, ya que en los distintos cargos que desempeñe tales como *Asesor Técnico IV, en La Comisión Nacional del Medio Ambiente de la Presidencia de la República, y cuando labore como Asesor Jurídico del Ministerio de Finanzas Públicas, Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Áreas Protegidas, de la Presidencia de la República, CONAP y Jefe de la Unidad de Medio Ambiente de la Procuraduría General de la Nación*, **NO CONTEMPLARON EN SUS LEYES RESPECTIVAS NINGÚN RÉGIMEN, UNIDAD Y ÓRGANO DISCIPLINARIO**, por lo que, debe cumplirse lo que establecen los Artículos 113 y 207 la Constitución Política de la República de Guatemala, y de los Requisitos esenciales que establecen específicamente los Artículos 12 y 13 de la Ley de Comisiones de Postulación Decreto 19-2009, **que para optar cargos públicos no se atenderá más que a razones fundadas en méritos de capacidad, idoneidad y honradez y que se tomarán en**

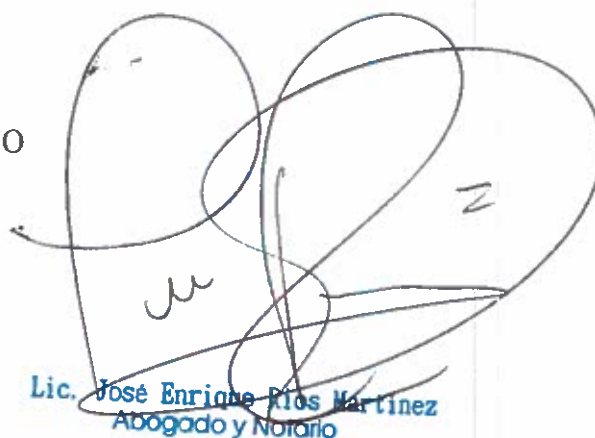
consideración los aspectos éticos, académicos, profesionales y de proyección humana.-----

CITA DE LEYES: Artículos 1, 2, 4, 12, 29, 30, 44, 46, 113, 136, 203, 204, 205, 207, 208, 210, 217, 218, de la Constitución Política de la República de Guatemala; 1, 2, 6, 10, 86, 87, de la Ley del Organismo Judicial Decreto Numero 2-89; 1, 2, 4, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, de la Ley de Comisiones de Postulación Decreto Numero 10-2009; 1, 2, 7, 8, 9, 30, 32, 37, 48, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 59, 63 Ley de la Carrera Judicial Decreto 32-2016 y sus Reformas Decreto Numero 17-2017; 1, 2, 26, 37, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, de la Ley del Servicio Civil del Organismo Judicial Decreto Numero 48-99 del Congreso de la República de Guatemala. Acompaño una copia del presente Memorial, Documentos Adjuntos y Copia Digital en PDF. -----

Guatemala, 5 de Septiembre de 2019.



EN SU AUXILIO



Lic. José Enrique Ríos Martínez
Abogado y Notario

El Guatemalteco

DIARIO OFICIAL DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA.—CENTRO AMERICA

FUNDADO EL 10. DE ENERO DE 1855. — SEGUNDA EPOCA

Registrado como correspondencia de segunda clase en la Administración Central de Correos de Guatemala, el 6 de marzo de 1930, bajo el No. 749.

Impreso en Diario de Centro

América, 9a. Av. 11-34, Zona 1.

DIRECTOR: ALBERTO ARRIOLA LIGORRIA

COMO EXCH

GUATEMALA, LUNES 20 DE DICIEMBRE DE 1971

NUMERO 72

SUMARIO

ORGANISMO LEGISLATIVO

DECRETO NUMERO 102-71

DECRETO NUMERO 106-71

DECRETO NUMERO 107-71

ORGANISMO EJECUTIVO

MINISTERIO DE COMUNICACIONES

Y OBRAS PUBLICAS

Se otorga el contrato número 64, celebrado entre el Viceministro de Comunicaciones y Obras Públicas y el representante de «CONSTRUCCIONES MODERNAS, SOCIEDAD ANONIMA» (COMO-PA) para la ejecución de los trabajos de mejoramiento de la terracería y drenajes y la construcción de dos puentes y del pavimento de la carretera «Santa Lucía Cotzumalguapa. —El Cerro Colorado», Proyecto CDA-17.TPA.

Ampliase en la furina que se menciona, el artículo 50. del Acuerdo dictado por el Ministerio de Comunicaciones y Obras Públicas con fecha 15 de noviembre de 1971.

MINISTERIO DE ECONOMIA

DECLAMENTO DEL REGISTRO MERCANTIL

Ante la Comisión de la Compañía «Alliance Assurance Company Limited», de nacionalidad británica, para que se retire en forma definitiva del país, todas sus operaciones en la República de Guatemala.

Ofrecase al señor Arturo Matheu Palomo, para la compra de su propiedad, denominada «Productores Industriales», la prórroga que se menciona.

ANUNCIOS VARIOS

Asesorías farmacéuticas. — Líneas de transporte. — Constitución de sociedades. — Modificación de sociedades. — Prórroga de sociedades. — Fusión de sociedades. — Registro de marcas. — Titulos supletorios. — Licitaciones. — Premios.

Compañía Comercial Curacao de Guatemala, S. A. Balance general al 31 de diciembre de 1970.

Banco de Guatemala, Balance general al 30 de noviembre de 1971.

ORGANISMO LEGISLATIVO

DECRETO No. 102-71

El Congreso de la República de Guatemala,

CONSIDERANDO:

Que una de las principales formas de resolver los problemas de índole social en beneficio de las comunidades es dotarlas de los más indispensables elementos para la subsistencia cotidiana; y que el agua uno de los elementos necesarios para la vida y especialmente si éste proviene de fuentes que a juicio de las autoridades sanitarias y después de los exámenes de laboratorio sea el indicado para surtir a los habitantes;

CONSIDERANDO:

Que los vecinos de la aldea Tierra Blanca, del municipio de Jalpatagua, departamento de Jutiapa, han solicitado la expropiación de una fracción de terreno de una finca de propiedad particular, en la que se encuentra una fuente de agua, para aprovecharla y contar con ese preciado líquido y recomendando al Congreso la declaratoria de utilidad pública beneficio e interés públicos, para la expropiación de que se trate, cuando se compruebe la necesidad que exista, como en el presente caso, debe accederse a la solicitud.

POR TANTO

Con base en los artículos 71, inciso 2o. del artículo 129, párrafo tercero del artículo 136 de la Constitución de la República y 2o. del Decreto 529 del Congreso, Ley de Expropiación,

DECRETA:

Artículo 1o.—Se declara de utilidad colectiva, beneficio e interés públicos, la expropiación a favor de la Municipalidad de Jalpatagua, departamento de Jutiapa, de una fracción de terreno donde se encuentra localizado un ojo de agua en jurisdicción de la aldea Tierra Blanca del mismo municipio, de la finca denominada «El Rosario», inscrita en el Registro General de la Propiedad bajo el número 205, folio 160, libro 73 correspondiente a la inscripción número 53 de Jalapa-Jutiapa, para la introducción de agua potable a la aldea Tierra Blanca. La expropiación se concretará al terreno estrictamente indispensable para la realización de la obra especificada, y en todo caso se procederá de conformidad con la Ley de Expropiación.

Artículo 2o.—El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial.

Pase al Organismo Ejecutivo para su publicación y cumplimiento.

Dado en el Palacio del Organismo Legislativo, en la ciudad de Guatemala, a los veinticuatro días del mes de noviembre de mil novecientos setenta y uno.

MARIO A. SANDOVAL ALARCON,
Presidente.

J. RAMIRO QUILHADA FERNANDEZ,
Primer Secretario.

OLIVERIO CASTAREDA PAIZ,
Segundo Secretario.

Palacio Nacional: Guatemala, diez y seis de diciembre de mil novecientos setenta y uno.

Publíquese y cúmplase.

CARLOS ARANA OSORIO.

El Ministro de Gobernación,
JORGE ARENALES CATALAN

DECRETO No. 106-71

El Congreso de la República de Guatemala,

CONSIDERANDO:

Que es responsabilidad del Gobierno de la República de la organización, dirección, administración y control de la actividad fiscal y, en general, de cualquier otra actividad relacionada con el desarrollo ordenado de las finanzas públicas;

CONSIDERANDO:

Que para el satisfactorio cumplimiento de dichas funciones con el objeto de alcanzar las metas que se ha propuesto el Gobierno de la República en el Plan Nacional de Desarrollo, es necesario adecuar la actual organización del Sector Público Financiero a los requerimientos que se derivan de las mismas;

CONSIDERANDO:

Que para tal efecto deben proveerse las normas legales necesarias que permitan al Organismo Ejecutivo dictar las medidas reglamentarias, organizativas y operativas que se requieren.

POR TANTO,

En uso de las facultades que le confiere el inciso 1o. del artículo 170, de la Constitución de la República,

DECRETA:

La siguiente:

LEY DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS

ARTICULO 1o.—DENOMINACION A partir de la vigencia de esta Ley, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público se denominará Ministerio de Finanzas Públicas.

ARTICULO 2o.—INTEGRACION DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO. El estudio, programación, dirección y administración superiores de la actividad fiscal, monetaria, cambiaria, crediticia y, en general, cualquier otra función relacionada con el desarrollo ordenado de las finanzas públicas corresponde al Sector Público Financiero y, por su medio, el Gobierno de la República aplica la política financiera del país. Se entiende por Sector Público Financiero el complejo orgánico de todas las dependencias y entidades gubernamentales que tienen competencia para actuar en áreas generales o específicas de dichas actividades. En consecuencia, forman parte del Sector Público Financiero las dependencias y entidades siguientes:

- 1.—El Ministerio de Finanzas Públicas;
- 2.—La Junta Monetaria;
- 3.—El Banco de Guatemala; y
- 4.—Cualquier otra institución o dependencia gubernamental que se cree en el futuro con responsabilidad para actuar en áreas generales o específicas relacionadas con las finanzas públicas.

La coordinación del Sector Público Financiero corresponde al Ministerio de Finanzas.

ARTICULO 3o.—DIRECCION SUPERIOR. Para los efectos del artículo anterior y a partir de la vigencia de esta ley, los cuerpos directivos superiores de las instituciones gubernamentales que forman el Sector Público Financiero quedan integradas con el Ministro de Finanzas como miembros ex officio, y con los demás miembros que determinen las leyes que establecen dichos cuerpos directivos.

ARTICULO 4o.—FUNCIONES Y ATRIBUCIONES. Compete al Ministerio de Finanzas Públicas la realización de las funciones y atribuciones siguientes:

- 1) Programar, ejecutar y evaluar el desarrollo de las actividades que competen al Ministerio, en concordancia con los planes generales de desarrollo;
- 2) Cobrar, recaudar, controlar, fiscalizar y administrar los impuestos y, en general, todas las demás rentas, tributos e ingresos que deba percibir el Gobierno de la República, de conformidad con la ley;
- 3) Formular y preparar, anualmente, en coordinación con la Secretaría General del Consejo Nacional de Planificación Económica, el proyecto de presupuesto de ingresos y egresos del Estado de acuerdo con los planes y programas de desarrollo aprobados por el Gobierno de la República;
- 4) Administrar, ejecutar y liquidar el Presupuesto anual de ingresos y egresos del Estado;
- 5) Inventariar y registrar el patrimonio del Estado, incluyendo el de sus entidades descentralizadas, autónomas y semiautónomas;
- 6) Llevar la contabilidad de la Nación, lo que debe incluir sus variaciones y las operaciones administrativas y financieras del Estado previstas en el Presupuesto de ingresos y egresos del mismo, y las no previstas en dicho Presupuesto pero que afecten a su patrimonio o a las finanzas públicas;
- 7) Administrar el sistema aduanero de la República, de conformidad con la ley y convenios internacionales;
- 8) Dictar las medidas pertinentes para atender oportunamente los gastos y demás obligaciones a cargo del Gobierno de la República;
- 9) Contratar, en coordinación con la Secretaría General del Consejo Nacional de Planificación Económica, la deuda pública interna y externa sometiendo tal contratación a la aprobación del Congreso de la República; y establecer y mantener los registros y controles correspondientes;
- 10) Aprobar o improbar, en coordinación con la Secretaría General del Consejo Nacional de Planificación Económica, previamente a su presentación a la entidad financiera respectiva, toda solicitud de las entidades descentralizadas, autónomas y semiautónomas, para contratar préstamos internos y externos, o de cualquier otra naturaleza que constituyan deuda pública. Se exceptúan de esta disposición las instituciones bancarias del Estado y las municipalidades, las cuales se deben regir para tal efecto por las leyes específicas aplicables. Asimismo, se exceptúa a la Universidad de San Carlos de Guatemala, cuando se trate de préstamos internos, pero deberá informar del monto, plazo y demás condiciones de los mismos al Ministerio de Finanzas Públicas, con el único objeto del registro de la deuda pública;
- 11) Formular y resolver en forma exclusiva la

DECRETO No. 107-71**El Congreso de la República de Guatemala,****CONSIDERANDO:**

Que la instrucción y educación militar son obligatorias, continuas y progresivas desde el ingreso en el Ejército;

CONSIDERANDO:

Que siendo el curso de Comando y Estado Mayor una de las máximas aspiraciones de todo Oficial del Ejército de Guatemala, para consolidar su profesionalización, es justo estimular a los elementos del Ejército de Guatemala que, en su mayor afán de superación, han efectuado estudios de Estado Mayor en el Centro de Estudios Militares y obtenido los diplomas respectivos;

POR TANTO,

En cumplimiento de las atribuciones que le confiere el inciso 10. del artículo 170 de la Constitución de la República,

DECRETA:

Las siguientes reformas al Decreto 433 del Congreso de la República reformado por el Decreto-Ley número 214:

Artículo 10.—Se adiciona el inciso b) del artículo 10, con el numeral 14, así:

«14. Curso de Comando y Estado Mayor».

Artículo 20.—Se adiciona un artículo después del artículo 17, así:

«Artículo 17-A. — El distintivo de Comando y Estado Mayor consistirá en una placa esmaltada de color negro de 30 milímetros de alto y 23 milímetros de ancho, y con ribete de color dorado de un milímetro de ancho. Sobre la placa irá el escudo del curso de Comando y Estado Mayor, en dorado, cuyo diámetro es de 20 milímetros. Se conferirá y tendrán derecho a usarlo:

- Los Oficiales Instructores-Fundadores del Curso de Comando y Estado Mayor y que de conformidad con dictamen del Centro de Estudios Militares, hayan contribuido a la estructuración de dicho curso;
- Los oficiales que obtengan el diploma que acredite que han aprobado el curso de Comando y Estado Mayor, impartido en el Centro de Estudios Militares; y siempre que el curso lo hubieren recibido con asistencia personal, conforme al Reglamento y demás disposiciones respectivas y no por correspondencia u otra forma distinta».

Artículo 30.—El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial. Pase al Organismo Ejecutivo para su publicación y cumplimiento.

Dado en el Palacio del Organismo Legislativo, en la ciudad de Guatemala, a los nueve días del mes de diciembre de mil novecientos setenta y uno.

MARIO SANDOVAL ALARCON,
Presidente.

J. RAMIRO QUIJADA FERNANDEZ,
Primer Secretario.

OLIVERIO CASTAÑEDA PAIZ,
Segundo Secretario.

Palacio Nacional: Guatemala, diez y seis de diciembre de mil novecientos setenta y uno.

Publíquese y cúmplase.

CARLOS ARANA OSORIO.

El Ministro de la Defensa Nacional,
LEONEI VASSAUX MARTINEZ.

ORGANISMO EJECUTIVO**MINISTERIO DE COMUNICACIONES
Y OBRAS PUBLICAS**

Apruébase el contrato número 61, celebrado entre el Viceministro de Comunicaciones y Obras Públicas y el representante de "CONSTRUCCIONES MODERNAS, SOCIEDAD ANONIMA" (COMOSA), para la ejecución de los trabajos de mejoramiento de la terracería y drenajes y la construcción de dos puentes y del pavimento de la carretera "Santa Lucía Cotzumalguapa—El Cajón—Cerro Colorado", Proyecto CDA-17-TPA.

Palacio Nacional: Guatemala 20 de noviembre de 1971.

Visto el contrato número sesenta y cuatro (64), celebrado en fecha veinte de septiembre de mil novecientos setenta y uno entre el Viceministro de Comunicaciones y Obras Públicas, ingeniero Roberto Antonio Barillas Flores en representación del Gobierno de Guatemala y el señor Julio Ricardo Matheu Escobar quien actúa como Presidente y Representante legal de "Construcciones Modernas, Sociedad Anónima" (COMOSA), por el cual dicha Compañía se compromete efectuar para el Gobierno

la ejecución de los trabajos de mejoramiento de la terracería y drenajes y la construcción de dos puentes y del pavimento de la carretera "Santa Lucía Cotzumalguapa—El Cajón—Cerro Colorado", Proyecto CDA-17-TPA, por el precio total de un millón treinta y tres mil seiscientos cuatro quetzales cincuenta y cuatro centavos (Q1.633.604.54).

El Presidente de la República,

Con base en las facultades que le confiere el inciso 4o. del artículo 189 de la Constitución de la República,

ACUERDA:

Aprobar las cláusulas (14) cláusulas de que consta el contrato de mérito.

Comuníquese.

ARANA O.

El Ministro de Comunicaciones
y Obras Públicas,
JOSE FELIX REYES A.

El Ministro de Hacienda
y Crédito Público,
JORGE LAMPORT RODIL.

Número sesenta y cuatro (64). Contrato celebrado entre el Gobierno de Guatemala y "Construcciones Modernas, Sociedad Anónima" (COMOSA), para la ejecución de los trabajos de mejoramiento de la terracería y drenajes y la construcción de dos puentes y del pavimento de la carretera "Santa Lucía Cotzumalguapa—El Cajón—Cerro Colorado", Proyecto CDA-17-TPA. Licitación Pública número cincuenta y uno guión setenta y uno (51-71), adjudicada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en resolución número trece mil trescientos diez (13310), dictada con fecha diecinueve de agosto de mil novecientos setenta y uno.

Roberto Antonio Barillas Flores, de cuarenta y ocho años de edad, casado, ingeniero civil, guatemalteco, de este domicilio y vecindad, procediendo en representación del Gobierno de Guatemala, en su calidad de Viceministro de Comunicaciones y Obras Públicas, que acredita por medio del Acuerdo Gubernativo de fecha primero de julio de mil novecientos setenta y el Acta número dieciocho guión setenta (280-70) del primero del mismo mes, donde consta que tomó posesión del cargo para el cual fue nombrado, por una parte y por la otra, el señor Julio Ricardo Matheu Escobar, de sesenta y cinco años de edad, casado, comerciante e industrial, guatemalteco, de este domicilio y vecindad, se identifica con cédula de vecindad número de orden: A guión uno (A-1), Registro dieciséis mil seiscientos sesenta y dos (16.762), extendida por la Municipalidad de esta capital, señalando para notificaciones la Ruta dos (2) dos guión treinta (2-30), zona cuatro (4), quien actúa como Presidente y Representante legal de "Construcciones Modernas, Sociedad Anónima" (COMOSA), que acredita con: a) Acta notarial de nombramiento de fecha veintiocho de febrero de mil novecientos sesenta y ocho, suscrita por el notario Federico Guillermo Pírol Von Landsdorf, contenida en una hoja de papel sellado del valor de diez quetzales (Q10.00) con número de orden G ciento cuatro mil noventa y siete (G104097), Registro ciento cuatro mil doscientos cincuenta y siete (104257) del actual quinquenio; b) Testimonio de la escritura pública número ciento dos (102) pasada ante los oficios del notario Rafael Antonio Cuestas con fecha dieciséis de junio de mil novecientos cincuenta y tres, registrada en el Registro Civil de esta capital el siete de julio del mismo año, bajo partida número ochenta (80), folio cuatrocientos sesenta y ocho (468) del libro veintuno (21) de Personas Jurídicas, por la cual se constituyó la compañía "La Vivienda, Constructora Guatemalteca, Sociedad Anónima"; c) Testimonio de la escritura pública número veinte (20) pasada ante los oficios del notario Rafael Antonio Cuestas el dieciséis de julio de mil novecientos cincuenta y tres, registrada en el Registro Civil de esta capital el veintidos del mismo mes y año, bajo partida número noventa y cuatro (94) folios del treinta y tres (33) al treinta y seis (36) del libro veintidos (22) de Personas Jurídicas, por la que se modifica el nombre de la razón social "La Vivienda, Constructora Guatemalteca, Sociedad Anónima" por el de "Construcciones Modernas, Sociedad Anónima" (COMOSA); d) Testimonio de la escritura pública número ciento ochenta y dos (182) de fecha doce de octubre de mil novecientos cincuenta y tres, pasada ante el notario Rafael Antonio Cuestas, registrada en el Registro Civil de esta capital el treinta del mismo mes y año, bajo partida número ciento cincuenta y ocho (158), folios del cuatrocientos treinta y cuatro (434) al cuatrocientos treinta y siete (437) del libro veintidos (22) de Personas Jurídicas, por la que se amplía la escritura indicada en el inciso b) que antecede; e) Testimonio de la escritura pública número ochenta (80) de fecha veintidos de enero de mil novecientos cincuenta y seis, pasada ante los oficios del notario Rafael Antonio Cuestas, registrada en el Registro Civil de esta capital el treinta del mismo mes y año, bajo partida número dieciséis (16) folios cincuenta y seis (56) y cincuenta y siete (57) del libro veintidos (22) de Personas Jurídicas, por la que se reorganiza la sociedad antes mencionada, aprobada por Acuerdo Gubernativo de fecha diecinueve de noviembre de mil novecientos cincuenta y tres, modificado por el Acuerdo Gubernativo del ocho de marzo de mil novecientos cincuenta y seis. Documentación que se tuvo a la vista. Las personas que se ejercitan son suficientes de conformidad

solicitudes de exoneración de impuestos, tasas y demás tributos fiscales otorgados conforme disposiciones legales, debiendo en su caso establecer y mantener los registros correspondientes a tales operaciones;

12)—Cumplir y vigilar el estricto cumplimiento de las disposiciones de la Ley de Compras y Contratación de Bienes, Suministros, Obras y Servicios, en lo que sea de su competencia;

13)—Promover las acciones judiciales necesarias que se originen por adeudos al Fisco, así como todas aquellas a que den lugar los delitos o faltas en perjuicio de las finanzas públicas;

14)—Aprobar los proyectos de contratos en que inter venga cualquier dependencia del Organismo Ejecutivo cuando afecten el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado o el patrimonio nacional, y llevar los registros respectivos;

15)—Dictar las medidas para prevenir, y en su caso, seguir las averiguaciones necesarias para comprobar los hechos y actos contra el Fisco y presentar las denuncias correspondientes a los tribunales de justicia;

16)—Controlar, registrar, vigilar y custodiar los caudales y bienes de la nación, cuando dichas funciones no estén encomendadas expresamente por ley a otras dependencias o entidades gubernamentales; y

17)—Ejercer las demás funciones que le asignen la Constitución y otras leyes de la República.

ARTICULO 50.—EXCLUSIONES. Ninguna otra entidad del sector público en general, o del sector público financiero en particular, puede desempeñar funciones y prestar servicios equivalentes a los del Ministerio de Finanzas Públicas sin que previamente lo autorice el titular del mismo.

ARTICULO 60.—ORGANOS DE CONSULTA. Para el cumplimiento de las funciones que le confiere esta ley, se faculta al Ministro de Finanzas para establecer los órganos o comités de consulta que estime convenientes, quedando las dependencias públicas y las entidades descentralizadas, autónomas o semiautónomas, obligadas a prestar la colaboración que para tal efecto se les solicite.

ARTICULO 70.—DELEGACION DE FUNCIONES Y ATRIBUCIONES. Las funciones y atribuciones del Ministro, Vice-Ministro, directores o jefes de departamento pueden ser delegados en los funcionarios que se designen mediante resolución expresa del titular del ramo.

ARTICULO 80.—NORMAS REGLAMENTARIAS. El reglamento de esta ley, debe establecer la organización del Ministerio de Finanzas Públicas y fijar las funciones y atribuciones de cada una de sus unidades administrativas. El reglamento debe emitirse y entrar en vigor, dentro de un término máximo de dos meses a partir de la vigencia de esta ley.

ARTICULO 90.—FACULTADES OTORGADAS POR OTRAS LEYES. Las facultades otorgadas por otras leyes en vigor a las distintas dependencias del Ministerio de Finanzas Públicas estarán en lo sucesivo a cargo de las nuevas unidades que se establezcan mediante el reglamento a que se refiere el artículo anterior. En consecuencia, en tanto se emite y entra en vigor dicho reglamento, las actuales dependencias continuarán prestando sus servicios de acuerdo con la legislación vigente.

ARTICULO 10.—CLASES PASIVAS. Con excepción de la contabilidad y pago de las prestaciones derivadas del régimen de Clases Pasivas Civiles del Estado, las operaciones de registro, trámite y autorización de dicho régimen actualmente a cargo del Ministerio de Finanzas Públicas se transfieren a la Oficina Nacional de Servicio Civil. En consecuencia, las funciones antes indicadas atribuidas en forma específica a la Contaduría General de la Nación y al Ministerio de Finanzas Públicas conforme el Decreto 28-70, del Congreso de la República y su reglamento, quedan a cargo de la Oficina Nacional de Servicio Civil a partir de la vigencia de esta ley. El Ministerio de Finanzas Públicas debe dictar las medidas necesarias para el debido cumplimiento de lo dispuesto en este artículo.

ARTICULO 11.—DEROGATORIA. A excepción de la vigencia transitoria a que se refiere el artículo 50, de esta ley, al entrar en vigor la misma quedan derogados el ordinal VII, del artículo 12 y el artículo 20, del Decreto número 93, del Congreso de la República y todas las demás disposiciones legales y reglamentarias en lo que se opongan a la misma.

ARTICULO 12.—VIGENCIA. El presente decreto entrará en vigor, ocho días después de su publicación en el Diario Oficial.

Pase al Organismo Ejecutivo para su publicación y cumplimiento.

Dado en el Palacio del Organismo Legislativo, en la ciudad de Guatemala, a los ocho días del mes de diciembre de mil novecientos setenta y uno.

MARIO SANDOVAL ALARCON,
Presidente.

J. RAMIRO QUIJADA FERNANDEZ,
Primer Secretario.

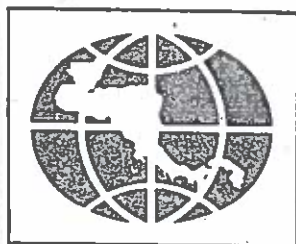
OLIVERIO CASTAÑEDA PAIZ,
Segundo Secretario.

Palacio Nacional: Guatemala, quince de diciembre de mil novecientos setenta y uno.

Publíquese y cúmplase.

CARLOS ARANA OSORIO.

El Ministro de Gobernación,
JORGE ARENALES CATALAN.



Diario de Centro América

Organo oficial de la República de Guatemala

● Tomo CCXXX

● Decano de la Prensa Centroamericana

● Director: Danilo de León

● Guatemala, viernes 19 de diciembre de 1986

● Número 27

SUMARIO

ORGANISMO LEGISLATIVO

CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA

DECRETO NUMERO 68-86

ORGANISMO EJECUTIVO

MINISTERIO DE ECONOMIA

Otorgase a la empresa "Textiles Río Blanco, Sociedad Anónima", que se abrevia "Textiles Río Blanco" y de nombre comercial "Textiles Río Blanco, S. A.", calificación de Industria dentro de la Categoría II.

Concédesse a la Sociedad "Colgate Palmolive Company", la patente de invención que se indica.

Concédesse a la Sociedad "Brown & Williamson Tobacco Corporation", la patente de invención que se detalla.

Concédesse a la Sociedad "Schering Corporation", la patente de invención que se menciona.

Otorgase calificación de Empresa Industrial de Exportación Parcial a la empresa "Industria de Tubos y Perfiles, Sociedad Anónima", que puede abreviarse "Industria de Tubos y Perfiles, S. A.", de nombre comercial "Intupersa".

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

Reconócese para los efectos presupuestarios y contables, el pago de los gastos de Administración del Contrato número 36, celebrado entre el Gobierno de la República y el ingeniero civil Héctor Medrano Barrera.

MINISTERIO DE GOBERNACION

Elevase a categoría de Aldea el caserío Posonichpa Chiquito, municipio de Culico, departamento de Huehuetenango.

MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS

Acuérdase que para los efectos de la actualización del Plan de Clasificación de Puestos, el Gobierno de la República a través de los órganos correspondientes, realizará en el transcurso del Ejercicio Fiscal 1987, la encuesta de Clasificación de los Puestos del Organismo Ejecutivo incluidos dentro del Plan.

Acuérdase exonerar de los requisitos de licitación y autorización al Comité de Reconstrucción Nacional de los materiales y suministros que se detallan, con destino al municipio de El Palmar, Quetzaltenango.

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

Acuérdase la distribución en detalle de la asignación de veinte millones de quetzales correspondientes a la Droguería Nacional y que figuran en la partida que se indica.

PUBLICACIONES VARIAS

JUNTA MONETARIA

RESOLUCION JM-266-86

DE LA JUNTA MONETARIA

MINISTERIO DE EDUCACION

JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL

RESOLUCION NUMERO 5-86

ANUNCIOS VARIOS

Matrimonios. — Líneas de Transporte. — Constituciones de Sociedad. — Modificaciones de Sociedad. — Disoluciones de Sociedad. — Patente de Invención. — Registro de Marcas. — Títulos Supletorios. — Edictos. — Remates.

Sykda, S. A.—Balance General al 30 de junio de 1985.

Almacén Paolo Di Genova, Sociedad Anónima. — Balance General al 30 de junio de 1984.

Empresas Agropecuarias Carlomar, S. A. — Balance General por el año terminado al 30 de junio de 1985.

Inversiones Fase, S. A. — Balance General al 30 de junio de 1985.

Agrícola Alabama, S. A.—Balance General al 30 de junio de 1985.

Organización Empresarial Administrativa, S. A.—Balance General Condensado al 30 de junio de 1985.

ORGANISMO LEGISLATIVO

CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA

DECRETO NUMERO 68-86

CONSIDERANDO:

Que la protección y mejoramiento del medio ambiente y los recursos naturales y culturales es fundamental para el logro de un desarrollo social y económico del país, de manera sostenida;

CONSIDERANDO:

Que Guatemala aceptó la declaratoria de principios de las resoluciones de la histórica conferencia de las Naciones Unidas, celebrada en Estocolmo, Suecia, en el año de 1972, y en tal virtud, debe integrarse a los programas mundiales para la protección y mejoramiento del medio ambiente y la calidad de vida en lo que a su parte territorial corresponde;

CONSIDERANDO:

Que en ausencia de un marco jurídico-institucional que permita normar, asesorar, coordinar y aplicar la política nacional y las acciones tendientes a la prevención del deterioro ecológico y mejoramiento del medio ambiente, se hace necesario emitir el correspondiente instrumento legal especial y crear una entidad específica para el logro de estos propósitos;

CONSIDERANDO:

Que la situación de los recursos naturales y el medio ambiente en general en Guatemala ha alcanzado niveles críticos de deterioro que inciden directamente en la calidad de vida de los habitantes y ecosistemas del país, obligándonos a tomar acciones inmediatas y así garantizar un ambiente propicio para el futuro,

POR TANTO,

En uso de las facultades que le confieren los artículos 157 y 171, inciso a) de la Constitución Política de la República de Guatemala,

DECRETA:

La siguiente

LEY DE PROTECCION Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE

TITULO I

Objetivos generales y ámbito de aplicación de la ley

CAPITULO I

Principios fundamentales

Artículo 1.—El Estado, las municipalidades y los habitantes del territorio nacional, propiciarán el desarrollo social, económico, científico y tecnológico que prevenga la contaminación del medio ambiente y mantenga el equilibrio ecológico. Por lo tanto, la utilización y el aprovechamiento de la fauna, de la flora, suelo, subsuelo y el agua, deberán realizarse racionalmente.

Artículo 2.—La aplicación de esta ley y sus reglamentos compete al Organismo Ejecutivo por medio de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, cuya creación, organización, funciones y atribuciones, establece la presente ley.

Artículo 3.—El Estado destinará los recursos técnicos y financieros para el funcionamiento de la Comisión Nacional del Medio Ambiente.

Artículo 4.—El Estado velará porque la planificación del desarrollo nacional sea compatible con la necesidad de proteger, conservar y mejorar el medio ambiente.

Artículo 5.—La descarga y emisión de contaminantes que afecten a los sistemas y elementos indicados en el artículo 10 de esta ley, deben sujetarse a las normas ajustables a la misma y sus reglamentos.

Artículo 6.—El suelo, subsuelo y límites de aguas nacionales, no podrán servir de reservorio de desperdicios contaminadores del medio ambiente o radioactivos. Aquellos materiales y productos contaminantes que esté prohibido su utilización en su país de origen no podrán ser introducidos al territorio nacional, salvo para uso científico, tecnológico o comercial, pero en todo caso necesitan autorización de conformidad con las leyes que rijan la materia.

Artículo 7.—Se prohíbe la introducción al país, por cualquier vía, de excrementos humanos o animales, basuras domiciliarias o municipales y sus derivados, cenizas o lodos cloacales, tratados o no, así como desechos tóxicos provenientes de procesos industriales, que contengan sustancias que puedan infectar, contaminar y/o degradar al medio ambiente y poner en peligro la vida y la salud de los habitantes, incluyendo entre ellas las mezclas o combinaciones químicas, restos de metales pesados, residuos de materiales radioactivos, ácidos y álcalis no determinados, bacterias, virus, huevos, larvas, esporas y hongos zoo y fitopatógenos.

Artículo 8.—Para todo proyecto, obra, industria o cualquier otra actividad que por sus características pueda producir deterioro a los recursos naturales renovables o no, al ambiente, o introducir modificaciones nocivas o notorias al paisaje y a los recursos culturales del patrimonio nacional, será necesario previamente a su desarrollo un estudio de evaluación del impacto ambiental, realizado por técnicos en la materia y aprobado por la Comisión del Medio Ambiente.

Artículo 9.—La Comisión Nacional de Protección del Medio Ambiente está facultada para requerir de las personas individuales o jurídicas, toda información que conduzca a la verificación del cumplimiento de las normas prescritas por esta ley y sus reglamentos.

Artículo 10.—El Organismo Ejecutivo por conducto de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, realizará la vigilancia e inspección que considere necesarias para el cumplimiento de la presente ley.

Al efecto, el personal autorizado tendrá acceso a los gares o establecimientos, objeto de dicha vigilancia e inspección, siempre que no se trate de vivienda, ya sea de ser así deberá contar con orden de juez competente.

TITULO II

Disposiciones preliminares

CAPITULO UNICO

Del objeto de la ley

Artículo 11.—La presente ley tiene por objeto velar por el mantenimiento del equilibrio ecológico y la calidad del medio ambiente para mejorar la calidad de vida de los habitantes del país.

Artículo 12.—Son objetivos específicos de la ley, los siguientes:

1) La protección, conservación y mejoramiento de los recursos naturales del país, así como la prevención del deterioro, y mal uso o destrucción de los mismos, y la restauración del medio ambiente en general;

2) La prevención, regulación y control de cualesquiera de las causas o actividades que origine deterioro del medio ambiente y contaminación de los sistemas ecológicos, y excepcionalmente, la prohibición en casos que afecten la calidad de vida y el bien común, calificados así, previos dictámenes científicos y técnicos emitidos por organismos competentes;

3) Orientar los sistemas educativos, ambientales y culturales, hacia la formación de recursos humanos calificados en ciencias ambientales y la educación a todos los niveles para formar una conciencia ecológica en toda la población;

4) El diseño de la política ambiental y coadyuvar en la correcta ocupación del espacio;

5) La creación de toda clase de incentivos y estímulos para fomentar programas e iniciativas que se encaminen a la protección, mejoramiento y restauración del medio ambiente;

6) El uso integral y manejo racional de las cuencas de sistemas hídricos;

7) La promoción de tecnología apropiada y aprovechamiento de fuentes limpias para la obtención de energía;

8) Salvar y restaurar aquellos cuerpos de agua que estén amenazados o en grave peligro de extinción; cualesquiera otras actividades que se consideren necesarias para el logro de esta ley.

Artículo 13.—Para los efectos de la presente ley, el ambiente comprende: los sistemas atmosféricos; hídricos (agua); lítico (rocas y minerales); edáfico (suelo); biótico (animales y plantas); elementos audiovisuales y recursos naturales y culturales.

TITULO III

De los sistemas y elementos ambientales

CAPITULO I

Del sistema atmosférico

Artículo 14.—Para prevenir la contaminación atmosférica y mantener la calidad del aire, el Gobierno, por medio de la presente ley, emitirá los reglamentos correspondientes y dictará las disposiciones que sean necesarias:

1) Promover el empleo de métodos adecuados para reducir las emisiones contaminantes;

2) Promover en el ámbito nacional e internacional las acciones necesarias para proteger la calidad de la atmósfera;

3) Regular las sustancias contaminantes que provoquen alteraciones inconvenientes de la atmósfera;

4) Regular la existencia de lugares que provoquen emanaciones;

5) Regular la contaminación producida por el consumo de los diferentes energéticos;

6) Establecer estaciones o redes de muestreo para detectar y localizar las fuentes de contaminación atmosférica;

7) Investigar y controlar cualquier otra causa o fuente de contaminación atmosférica.

CAPITULO II

Del sistema hídrico

Artículo 15.—El Gobierno velará por el mantenimiento de la cantidad del agua para el uso humano y otras actividades cuyo empleo sea indispensable, por lo que dictará las disposiciones que sean necesarias y las reglamentos correspondientes para:

a) Evaluar la calidad de las aguas y sus posibilidades de aprovechamiento, mediante análisis periódicos sobre sus características físicas, químicas y biológicas;

b) Ejercer control para que el aprovechamiento y uso de las aguas no cause deterioro ambiental;

c) Revisar permanentemente los sistemas de disposición de aguas servidas o contaminadas para que cumplan con las normas de higiene y saneamiento ambiental y fijar los requisitos;

d) Determinar técnicamente los casos en que debe producirse o permitirse el vertimiento de residuos, basuras, desechos o desperdicios en una fuente receptora, de acuerdo a las normas de calidad del agua;

e) Promover y fomentar la investigación y el análisis permanente de las aguas interiores, litorales y oceánicas, que constituyen la zona económica marítima de dominio exclusivo;

f) Promover el uso integral y el manejo racional de cuencas hídricas, manantiales y fuentes de abastecimiento de aguas;

g) Investigar y controlar cualquier causa o fuente de contaminación hídrica para asegurar la conservación de los ciclos biológicos y el normal desarrollo de las especies;

h) Propiciar en el ámbito nacional e internacional las acciones necesarias para mantener la capacidad reguladora del clima en función de cantidad y calidad del agua;

i) Velar por la conservación de la flora, principalmente los bosques, para el mantenimiento y el equilibrio del sistema hídrico, promoviendo la inmediata reforestación de las cuencas lacustres, de ríos y manantiales;

j) Prevenir, controlar y determinar los niveles de contaminación de los ríos, lagos y mares de Guatemala;

k) Investigar, prevenir y controlar cualesquiera otras causas o fuentes de contaminación hídrica.

CAPITULO III

De los sistemas lítico y edáfico

Artículo 16.—El Organismo Ejecutivo emitirá los reglamentos relacionados con:

a) Los procesos capaces de producir deterioro en los sistemas lítico (o de las rocas y minerales), y edáfico (o de los suelos), que provengan de actividades industriales, mineras, petroleras, agropecuarias, pesqueras u otras;

b) La descarga de cualquier tipo de sustancias que puedan alterar la calidad física, química o mineralógica del suelo o del subsuelo que le sean nocivas a la salud o a la vida humana, la flora, fauna y a los recursos o bienes;

c) La adecuada protección y explotación de los recursos minerales y combustibles fósiles, y la adopción de normas de evaluación del impacto de estas explotaciones sobre el medio ambiente a efecto de prevenir o minimizarlas;

d) La conservación, salinización, laterización, desertificación y aridificación del paisaje, así como la pérdida de transformación de energía;

e) El deterioro cualitativo y cuantitativo de los suelos.

f) Cualquiera otras causas o procesos que puedan provocar deterioro de estos sistemas.

CAPITULO IV

De la prevención y control de la contaminación por ruido o sonda

Artículo 17.—El Organismo Ejecutivo emitirá los reglamentos correspondientes que sean necesarios, en relación con la emisión de energía en forma de ruido, sonido, microondas, vibraciones, ultrasonido o acción que perjudiquen la salud física y mental y el bienestar humano, o que cause trastornos al equilibrio ecológico.

Se considera actividades susceptibles de degradar el ambiente y la salud, los sonidos o ruidos que sobrepasen los límites permisibles cualesquiera que sean las actividades o causas que los originen.

CAPITULO V

De la prevención y control de la contaminación visual

Artículo 18.—El Organismo Ejecutivo emitirá los reglamentos correspondientes, relacionados con las actividades que puedan causar alteración estética del paisaje y de los recursos naturales, provoquen ruptura del paisaje y otros factores considerados como agresión vi-

sual y cualesquiera otras situaciones de contaminación y de interferencia visual, que afecten la salud mental y física y la seguridad de las personas.

CAPITULO VI

De la conservación y protección de los sistemas bióticos

Artículo 19.—Para la conservación y protección de los sistemas bióticos (o de la vida para los animales y las plantas), el Organismo Ejecutivo emitirá los reglamentos relacionados con los aspectos siguientes:

a) La protección de las especies o ejemplares animales o vegetales que corran peligro de extinción;

b) La promoción del desarrollo y uso de métodos de conservación y aprovechamiento de la flora y fauna del país;

c) El establecimiento de un sistema de áreas de conservación a fin de salvaguardar el patrimonio genético nacional, protegiendo y conservando los fenómenos geomorfológicos especiales, el paisaje, la flora y la fauna;

d) La importación de especies vegetales y animales que deterioren el equilibrio biológico del país, y la exportación de especies únicas en vías de extinción;

e) El comercio ilícito de especies consideradas en peligro; y

f) El velar por el cumplimiento de tratados y convenios internacionales relativos a la conservación del patrimonio natural.

TITULO IV

Del órgano encargado de la aplicación de esta ley

CAPITULO I

De la creación de la Comisión Nacional del

Medio Ambiente

Artículo 20.—Se crea la Comisión Nacional del Medio Ambiente, la que dependerá directamente de la Presidencia de la República y su función será asesorar y co-ordinar todas las acciones tendientes a la formulación y aplicación de la política nacional, para la protección y mejoramiento del medio ambiente, propiciándola a través de los correspondientes Ministerios de Estado, Secretaría General del Consejo Nacional de Planificación Económica y dependencias descentralizadas, autónomas, semiautónomas, municipales y sector privado del país.

Artículo 21.—La Comisión Nacional del Medio Ambiente, se integra con:

a) Un Coordinador, quien la presidirá; y

b) Un Consejo Técnico Asesor.

Un reglamento interno establecerá la organización técnica y administrativa de la Comisión Nacional del Medio Ambiente.

Artículo 22.—El Coordinador Nacional del Medio Ambiente, será nombrado por el Presidente de la República, debiendo reunir las mismas calidades que los Ministros de Estado y ser profesional o técnico en la materia, con experiencia mínima de dos años.

Artículo 23.—Las funciones del Coordinador Nacional del Medio Ambiente, son las siguientes:

a) Asesorar al Ejecutivo en todos aquellos asuntos relacionados con la protección y mejoramiento del medio ambiente;

b) Presentar al Ejecutivo para su aprobación, las políticas ambientales del país;

c) Presidir el Consejo Técnico Asesor;

d) Concertar y coordinar, con base en los dictámenes y recomendaciones del Consejo Técnico Asesor, a los Ministerios de Estado, Secretaría General del Consejo Nacional de Planificación Económica y dependencias descentralizadas, autónomas, semiautónomas, municipalidades y Sector Privado del país, todas las acciones relacionadas con la protección y mejoramiento del medio ambiente;

e) Promover y coordinar la cooperación internacional técnica y financiera, para efectos de la protección y mejoramiento del medio ambiente; y

f) Las demás que establezca el Reglamento Interno.

Artículo 24.—El Consejo Técnico Asesor, se integra con diez miembros, un delegado titular y un suplente: de la Secretaría de Planificación Económica; del Sector Público Agrícola, del Ministerio de Desarrollo Urbano y Rural, del Ministerio de Educación, del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, del Ministerio de la Defensa Nacional, del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Industriales y Financieras (CACIF); de las Asociaciones de Periodistas de Guatemala, de la Universidad de San Carlos de Guatemala, de las Uni-

v
m
y

50
t

c)
d)

e)
f) A
k
pi
ar
g) P
ed
y
h) R
int
tal

i) Loc
y o
fuer
ta d

j) Man
disp
inta
mien
nals
Serv

k) Rep
relac

l) Prop
norm
lidad

m) Recor
de im
institu
de del
un de

n) Promo
cados

ñ) Promo
aprove
país;

o) Promot
tema es

p) Promov
cuperar

q) Propone
tal en l
arrollo;

r) El Cons
vés de
Medio A
promove
cemente
racional;

Las fur
sus objet
público y
bles en la
Ley del L

Las fun
tengan, al
los organi
que estén
biente y d

Artículo 26.—
ción Nacional c
operación de lo
ral del Consejo
dependencias d
mas, municipali

Artículo 27.—
Nacional del Me
de la peligrosid
ciencia ambient
de impacto ambi

versidades privadas del país. Todos ellos, preferiblemente con conocimientos en las ciencias ambientales y/o ecológicas.

Artículo 25.—Son funciones del Consejo Técnico Asesor, las siguientes:

- Formular la política nacional relativa a la Protección y mejoramiento del Medio Ambiente;
- Asesorar, supervisar, recomendar y dictaminar sobre todas las acciones para la aplicación de la política nacional para la protección y mejoramiento del Medio Ambiente;
- Supervisar el cumplimiento de los Convenios, Tratados y Programas Internacionales, de los que Guatemala forma parte en relación con la protección y mejoramiento del Medio Ambiente;
- Recomendar los estudios, las obras y trabajos, así como la implementación de medidas que sean necesarias para prevenir el deterioro del Medio Ambiente;
- Hacer las recomendaciones pertinentes, para que los proyectos de desarrollo contemplen las consideraciones ecológicas para el uso racional de los recursos naturales, la protección del Medio Ambiente, zonificación del espacio y la conservación y mejoramiento del patrimonio natural y cultural del país;
- Asesorar las instituciones públicas y privadas sobre las actividades y programas que conciernen a la prevención, control y mejoramiento de los sistemas ambientales;
- Promover la educación ambiental en los sistemas educativos, informativos y culturales, a fin de crear y fomentar una conciencia ecológica;
- Recabar, centralizar y analizar toda información inherente a la protección y mejoramiento ambiental a través de Bancos de Datos;
- Localizar, clasificar y evaluar en forma sistemática y ordenada, por medio de un registro catastral, las fuentes de contaminación y las áreas en donde exista deterioro ambiental;
- Mantener un registro actualizado de todas aquellas disposiciones legales, tanto a nivel nacional, como internacional, relativas a la protección y mejoramiento del ambiente. Las disposiciones internacionales serán remitidas a la Dirección General de Servicios de Salud;
- Representar al país en los eventos internacionales, relacionados con el medio ambiente;
- Propiciar y analizar cualesquiera reglamentos y normas que tiendan a mantener un ambiente de calidad;
- Recomendar y supervisar los estudios de evaluación de impacto ambiental a las personas, empresas o instituciones de carácter público o privado, a efecto de determinar las mejores opciones que permitan un desarrollo sostenido;
- Promover la formación de recursos humanos calificados en ciencias ambientales y recursos naturales;
- Promover estudios, estrategias y técnicas para el aprovechamiento racional de la fauna y la flora del país;
- Promover la creación, desarrollo y manejo del sistema en áreas de conservación.
- Promover y coordinar las acciones tendientes a recuperar ambientes deteriorados;
- Proponer la incorporación de la dimensión ambiental en las políticas, programas y proyectos de desarrollo; y
- El Consejo Técnico Asesor, podrá propiciar a través de la Comisión Nacional de Protección al Medio Ambiente, la creación de fundaciones para promover y divulgar estudios e investigaciones concernientes al Medio Ambiente, conservación, uso racional y sostenido de los recursos naturales.

Las fundaciones, para el mejor funcionamiento de sus objetivos, podrán recibir aportaciones del sector público y del privado. Estos aportes serán deducibles en los términos y condiciones que disponga la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Las fundaciones destinarán los recursos que obtengan, al incremento de programas que realicen los organismos de investigación existente y otros que estén relacionados con la conservación del ambiente y de los recursos naturales renovables.

Artículo 26.—Para el logro de sus propósitos, la Comisión Nacional del Medio Ambiente, contará con la cooperación de los Ministerios de Estado, Secretaría General del Consejo Nacional de Planificación Económica y dependencias descentralizadas, autónomas, semiautónomas, municipalidades y sector privado del país.

Artículo 27.—En casos de emergencia, la Comisión Nacional del Medio Ambiente, podrá emitir declaratoria de la peligrosidad en aquellas actividades de grave incidencia ambiental y realizar los estudios de evaluación de impacto ambiental que procedan.

Artículo 28.—Todas las dependencias públicas, entidades descentralizadas y las municipalidades deberán colaborar con la Comisión Nacional del Medio Ambiente, en todos aquellos asuntos que lo requieran. El Presidente de la República, cuando lo estime necesario, podrá convocar a sesión a la Comisión Nacional del Medio Ambiente, y si asiste, presidirá las sesiones de que se trate. La Comisión coordinará todas sus actividades con el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural.

TITULO V

CAPITULO UNICO

Infracciones, sanciones y recursos

Artículo 29.—Toda acción u omisión que contravenga las disposiciones de la presente ley, efectuando así de manera negativa la cantidad y calidad de los recursos naturales y los elementos que conforman el ambiente, se considerará como infracción y se sancionará administrativamente de conformidad con los procedimientos de la presente ley, sin perjuicio de los delitos que contempla el Código Penal.

Para el caso de delitos, la Comisión los denunciará a los tribunales correspondientes, impulsados por el Ministerio Público, que será parte de estos procesos para obtener la aplicación de las penas.

Artículo 30.—Se concede acción popular para denunciar ante la autoridad, todo hecho, acto u omisión que genere contaminación y deterioro o pérdida de recursos naturales o que afecte los niveles de calidad de vida.

Si en la localidad no existiera representante de la Comisión Nacional de Protección del Medio Ambiente, la denuncia se podrá hacer ante la autoridad municipal, la que la remitirá para su atención y trámite a la mencionada Comisión.

Artículo 31.—Las sanciones que la Comisión Nacional del Medio Ambiente dictamine, por las infracciones a las disposiciones de la presente ley, son las siguientes:

- A advertencia, aplicada a juicio de la Comisión Nacional del Medio Ambiente y valorada bajo un criterio de evaluación de la magnitud del impacto ambiental;
- Tiempo determinado para cada caso específico para la corrección de factores que deterioran el ambiente con participación de la Comisión en la búsqueda de alternativas viables para ambos objetivos;
- Suspensión cuando hubiere variación negativa en los parámetros de contaminación establecidos para cada caso específico por la Comisión Nacional del Medio Ambiente;
- Comiso de las materias primas, instrumentos, materiales y objeto que provengan de la infracción cometida, pudiéndose destinar a subasta pública o su eliminación cuando fueren nocivos al medio ambiente;
- La modificación o demolición de construcciones violatorias de disposiciones sobre protección y mejoramiento del Medio Ambiente;
- El establecimiento de multas para restablecer el impacto de los daños causados al ambiente, valorados cada cual en su magnitud; y
- Cualquiera otras medidas tendientes a corregir y reparar los daños causados y evitar la continuación de actos perjudiciales al medio ambiente y los recursos naturales.

Artículo 32.—La aplicación de las sanciones a que se refiere el artículo anterior, será competencia de la Comisión Nacional del Medio Ambiente.

Artículo 33.—Para la aplicación de lo regulado en este capítulo, la Comisión Nacional del Medio Ambiente, tendrá en cuenta discrecional:

- La mayor o menor gravedad del impacto ambiental;
- La trascendencia del mismo en perjuicio de la población;
- Las condiciones en que se produce; y
- La reincidencia.

Artículo 34.—Previo a imponer la sanción correspondiente, los infractores serán citados y oídos por la Comisión Nacional del Medio Ambiente. Estas sanciones las aplicará la Comisión, siguiendo el procedimiento de los incidentes, señalada en la Ley del Organismo Judicial.

Artículo 35.—Evacuada la audiencia y emitidos los dictámenes respectivos, la Comisión Nacional del Medio Ambiente, dictará la resolución correspondiente.

En los casos de incompetencia, sin más trámite se resolverá lo que en derecho corresponda.

Artículo 36.—Toda multa o sanción que se imponga, deberá hacerse efectiva en los plazos que la Comisión establezca para cada caso en particular. En caso de incumplimiento, se procederá de conformidad con la ley correspondiente, siempre que no existan recursos pendientes.

Las multas ingresarán al Fondo Común del Erario, en cuenta especial como disponibilidad privativa a favor de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, con destino a programas para la conservación y mejoramiento del ambiente, y la calidad de vida de los habitantes del país.

Artículo 37.—Toda persona que se considere afectada por los hechos degradantes al ambiente, podrá acudir a la Comisión Nacional del Medio Ambiente, a efecto que se investiguen tales hechos y se proceda conforme esta ley.

Artículo 38.—Las resoluciones que dicte la Comisión Nacional del Medio Ambiente, podrán ser revocadas de oficio cuando no estén consentidas por los interesados. Contra dichas resoluciones procede el recurso de revocatoria que agota la vía administrativa. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, conocerá de los recursos de revocatoria que se interpongan contra resoluciones de la Comisión y procede el recurso de lo Contencioso-Administrativo contra las resoluciones del Ministerio, el que podrá interponer también la Comisión, cuando considere se afecten los intereses de la Nación en materia de protección del Medio Ambiente.

Artículo 39.—La Comisión Nacional del Medio Ambiente, recomendará a la Presidencia de la República, las derogatorias fiscales como otro tipo de incentivos en base a solicitudes aprobadas por la Comisión Nacional del Medio Ambiente.

TITULO VI

Disposiciones transitorias y derogativas

CAPITULO I

Disposiciones transitorias

Artículo 40.—La Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, deberá integrar a la Comisión Nacional del Medio Ambiente a dichos consejos, con la finalidad de que la Comisión proponga la incorporación de la dimensión ambiental en las políticas, programas y proyectos de desarrollo.

CAPITULO II

Disposiciones derogatorias

Artículo 41.—Se derogan las leyes y disposiciones que se opongan a la presente ley, especialmente el Acuerdo Gubernativo número 204-86, de fecha 16 de abril de 1986, que creó la Comisión Nacional del Medio Ambiente, emitido por el Presidente de la República en Consejos de Ministros.

Artículo 42.—La presente ley entrará en vigencia, a los ocho días de su publicación en el Diario Oficial.

Pase al Organismo Ejecutivo, para su publicación y cumplimiento.

Dado en el Palacio del Organismo Legislativo, en la ciudad de Guatemala, a los veintiocho días del mes de noviembre de mil novecientos ochenta y seis.

ELIAN DARIO ACUNA ALVARADO,
Segundo Vicepresidente en funciones de Presidente.

ROBERTO ADOLFO VALLE VALDIZAN,
Secretario.

ROBERTO ALEJOS CAMBARA,
Secretario.

Palacio Nacional: Guatemala, cinco de diciembre de mil novecientos ochenta y seis.

Publíquese y cúmplase.

CEREZO AREVALO.

El Ministro de Gobernación,
JUAN JOSE RODIL PERALTA.

ORGANISMO EJECUTIVO

MINISTERIO DE ECONOMIA

Otógase a la empresa "Textiles Río Blanco, Sociedad Anónima", que se abrevia "Textiles Río Blanco" y de nombre comercial "Textiles Río Blanco, S. A.", calificación de industria dentro de la Categoría II.

ACUERDO NUMERO 195-86

Palacio Nacional: Guatemala, 28 de noviembre de 1986.

El Ministro de Economía,

CONSIDERANDO:

Que con fecha 14 de febrero de 1986, el señor David José Zúñiga Katán, actuando en calidad de administrador único y representante legal de la empresa "Tex-

ARTICULO 8.—Se reforma el Artículo 11., el cual queda así:

"ARTICULO 11.—El Fondo creado mediante este Decreto, asumirá las garantías extendidas por la Cámara Empresarial al amparo de convenios anteriores que suscribió con AID".

ARTICULO 9.—El presente Decreto entrará en vigencia el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial.

Pase al Organismo Ejecutivo para su publicación y cumplimiento.

Dado en el Palacio del Organismo Legislativo: en la ciudad de Guatemala, a los treinta días del mes de octubre de mil novecientos noventa y uno.

ROMEO ANTONIO ESCALANTE LEIVA,
Primer Vicepresidente,
en funciones de Presidente.

CARLOS BENJAMIN ESCOBEDO RODRIGUEZ,
Secretario.

JUAN JOSE ALFARO LEMUS,
Secretario.

Palacio Nacional: Guatemala, dieciocho de noviembre de mil novecientos noventa y uno.

Publíquese y cúmplase.

SERRANO ELIAS,

El Secretario General de la Presidencia
de la República,
MANUEL EDUARDO CONDE ORELLANA.

—★—

DECRETO NUMERO 75-91

El Congreso de la República de Guatemala,

CONSIDERANDO:

Que en 1986 se intentó introducir al país 10,000 toneladas diarias de desechos tóxicos con el pretexto de ser

desechos cloacales para producir abono orgánico, lo cual fue impedido por la oportuna intervención del Congreso de la República;

CONSIDERANDO:

Que en 1988 nuevamente se pudo evitar otro embarque de estos desechos que trajo como consecuencia, que el barco deambulara por África y el Caribe, siendo desechado por múltiples países incluyendo el Estado de donde salieron hasta que, lamentablemente, un País del Caribe aceptó esas 4,000 toneladas de desechos tóxicos;

CONSIDERANDO:

Que en 1989, 1990 y 1991 se ha intentado introducir dichos incineradores para producir energía eléctrica en la Costa Atlántica y en el municipio de Amatlán, departamento de Guatemala;

CONSIDERANDO:

Que hasta el día de hoy gracias a los Artículos 6 y 7 de la Ley de Mejoramiento y Protección del Medio Ambiente, Decreto 68-86 y a las presiones ciudadanas y la decisión política, han evitado que esto suceda;

CONSIDERANDO:

Que Guatemala no puede depender de la buena voluntad de un funcionario y ante la insistencia actual de introducir estos incineradores en Guatemala, es indispensable modificar el Artículo 6. de la ley antes mencionada;

CONSIDERANDO:

Que actualmente no hay tecnología nacional ni mundial para tratar desperdicios contaminantes radiactivos y nucleares en forma segura y apropiada.

POR TANTO,

En ejercicio de las atribuciones que le confieren los Artículos 97 y 171 inciso a) de la Constitución Política de la República de Guatemala.

DECRETA:

ARTICULO 1.—Se reforma el Artículo 6. de la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, Decreto número 68-86 del Congreso de la República, el cual queda así:

"ARTICULO 6.—El suelo, subsuelo y límites de aguas nacionales no podrán servir de reservorio de desperdicios contaminantes del medio ambiente o radiactivos. Aquellos materiales y productos contaminantes que estén prohibida su utilización en su país de origen no podrán ser introducidos en el territorio nacional".

ARTICULO 2.—El presente Decreto entrará en vigencia el día siguiente de su publicación en el diario oficial.

Pase al Organismo Ejecutivo para su publicación y cumplimiento.

Dado en el Palacio del Organismo Legislativo, en la ciudad de Guatemala, a los treinta días del mes de octubre de mil novecientos noventa y uno.

ROMEO ANTONIO ESCALANTE LEIVA,
Primer Vicepresidente
en Funciones de Presidente.

CESAR AUGUSTO PAIZ GOMEZ,
Secretario.

CARLOS BENJAMIN ESCOBEDO RODRIGUEZ,
Secretario.

Palacio Nacional: Guatemala, dieciocho de noviembre de mil novecientos noventa y uno.

Publíquese y cúmplase.

SERRANO ELIAS.

El Secretario General de la
Presidencia de la República,
MANUEL EDUARDO CONDE ORELLANA.

ORGANISMO EJECUTIVO

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Declárase necesaria y urgente la compra y contratación de bienes, servicios y suministros que realice la Vicepresidencia de la República, tendiente a la implementación y puesta en marcha del Parlamento Centroamericano.

ACUERDO GUBERNATIVO NUMERO 867-91

Palacio Nacional: Guatemala, 14 de noviembre de 1990

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA.

CONSIDERANDO:

Que el Gobierno de la República de Guatemala, necesita atender con urgencia la implementación y puesta en marcha del Parlamento Centroamericano, en virtud de ser el país sede;

CONSIDERANDO:

Que para satisfacer la necesidad referida, en forma pronta, con urgencia, adecuada y efectiva, según lo demanda la situación, es indispensable establecer un procedimiento extraordinario de excepción para la contratación y adquisición de bienes, servicios y suministros necesarios para la implementación e iniciación de actividades del Parlamento Centroamericano;

CONSIDERANDO:

Que habiendo obtenido los dictámenes favorables números 1187 y 813-91 de fechas 11 y 14 de octubre de 1991, de la Dirección Técnica del Presupuesto y de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Finanzas Públicas, respectivamente; siendo necesario emitir la disposición legal correspondiente.

POR TANTO:

En ejercicio de la función que le confiere el artículo 183, inciso e) y 194 literales c) y d) de la Constitución Política de la República de Guatemala y con base en lo dispuesto en los artículos 28 literal b), numeral 14 de la Ley de Compras y Contrataciones, Decreto 35-80 del Congreso de la

República, adicionado por el Decreto 40-86 del mismo Organismo y al "A" de su Reglamento,

EN CONSEJO DE MINISTROS

ACUERDA:

ARTICULO 1o. Se declara necesaria y urgente la compra y contratación de bienes, servicios y suministros que realice la Vicepresidencia de la República, tendiente a la implementación y puesta en marcha del Parlamento Centroamericano.

ARTICULO 2o. Para el efecto se autoriza a la Vicepresidencia de la República, para que sin sujetarse al régimen de Licitación Pública y de Cotizaciones pueda llevar a cabo la compra y contratación de los bienes, servicios y suministros con las personas individuales o jurídicas que estime conveniente, hasta por un monto de CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL QUETZALES (Q.4,182,000.00), sin más requisito que el de lograr para el Estado precios razonables y sujetándose a las normas que contengan los contratos que se celebren.

ARTICULO 3o. Las Partidas Presupuestarias que se utilizarán para la ejecución del gasto serán las siguientes:

UNIDAD EJECUTORA

Vicepresidencia de la República
Parlamento Centroamericano

CODIFICACION

91-0305-1,014-03-014-91-

GRUPO Y REGION	PARCIAL	TOTAL
1-100-00-006	60,000	
1-113-00-006	12,000	
1-115-00-006	2,000	
1-116-00-006	1,000	
1-121-00-006	15,000	
1-131-00-006	200,000	
1-144-00-006	200,000	
1-151-00-006	300,000	
1-159-00-006	15,000	805,000



Diario de Centro América

Organo oficial de la República de Guatemala

Decano de la Prensa Centroamericana

TOMO CCLVII ■ Guatemala, viernes 12 de diciembre de 1997 ■ Director: Héctor Cifuentes Aguirre ■ Administradora: Alma Lilliana García ■ NUMERO 96

SUMARIO

ORGANISMO LEGISLATIVO

CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA

DECRETO NUMERO 114-97

ORGANISMO EJECUTIVO

MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS

Normas procedimentales sobre los Convenios Bancarios.

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

Modifícase en la forma que se indica, el Acuerdo Gubernativo número 73-84 del 10 de febrero de 1984.

ANUNCIOS VARIOS

Matrimonios. — Registro de derechos de autor. — Constituciones de sociedad. — Modificaciones de sociedad. — Disolución de sociedad. — Registro de marca. — Títulos supletorios. — Edictos. — Remates.

Capeli Internacional, S. A. — Estado Financiero, Balance General al 30 de junio de 1997.

Empresa Agropecuaria La Corona, Sociedad Anónima. — Balance General al 30 de junio de 1997.

Exportadora Radha, Sociedad Anónima. — Balance General al 30 de junio de 1997.

Electrowatt, Ingenieros Consultores, S. A. — Balance General Ejercicio del 1o. de agosto al 31 de diciembre de 1983.

Electrowatt, Ingenieros Consultores, S. A. — Balance General Ejercicio del 1o. de enero al 31 de diciembre de 1984.

Baldosas de Mármol, S. A. — Balance General al 30 de junio de 1987.

Comercializadora de Café y Cardamomo, S. A. — Balance General Condensado al 30 de junio de 1987.

Pinto Hermanos, S. A., Granja Avícola El Pilar, S. A. — Balance General al 31 de octubre de 1987.

Comercial Omni de Guatemala, S. A. — Balance General al 31 de diciembre de 1987.

Comercial Ganadera Los Angeles, S. A. — Balance General al 30 de junio de 1986.

Nautilus, S. A. — Balance General Condensado en Liquidación al 30 de junio de 1987.

Comercial Ganadera Los Angeles, S. A. — Balance General al 30 de junio de 1985.

Agrotica, Sociedad Anónima. — Balance General al 30 de junio de 1987.

Transportes Costa a Costa de Guatemala, S. A. — Estado de Situación al 30 de junio de 1987.

Transportes Centroamericana de Carga, S. A. — Estado de Situación al 30 de junio de 1987.

Concepto Cargo de Guatemala, Sociedad Anónima. — Balance General al 31 de diciembre de 1987.

Nec do Brasil, S. A. — Balance General al 30 de junio de 1986.

ORGANISMO LEGISLATIVO

CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA

DECRETO NUMERO 114-97

El Congreso de la República de Guatemala,

CONSIDERANDO:

Que los Artículos 1 y 2 de la Constitución Política de la República establecen que "el Estado de Guatemala se organiza para proteger a las personas y a la familia; su fin supremo es la realización del bien común, siendo deber del Estado, además, garantizar a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona";

CONSIDERANDO:

Que la Constitución Política de la República establece sus Disposiciones Transitorias y Finales, la obligación del Presidente de la República para que en ejercicio de su iniciativa de ley remita al Congreso de la República el proyecto de Ley del Organismo Ejecutivo, a fin de modernizar y hacer más eficiente la administración pública;

CONSIDERANDO:

Que del último párrafo del Artículo 118 constitucional se infiere que el Estado guatemalteco ha de regirse según el principio de subsidiariedad, según el cual el Estado no se arroga funciones que pueden ser ejecutadas por los ciudadanos individual o libremente asociados;

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con el Artículo 140 de la Constitución Política de la República, el régimen de Gobierno del Estado de Guatemala es republicano, democrático y representativo y, que por consiguiente, es necesario que el ordenamiento jurídico propicie la participación ciudadana como aquel proceso por el cual los ciudadanos se involucran en la toma de las decisiones sobre políticas y acciones públicas y en la provisión de servicios de su interés, así como en la fiscalización ciudadana de la administración pública;

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con el Artículo 224 constitucional la administración será descentralizada; entendiéndose por descentralización el proceso mediante el cual el Gobierno central delega la ejecución y el control administrativo de ciertas funciones a entes distintos de sí mismo o a sus entidades autónomas y descentralizadas, reteniendo las funciones reguladora, normativa y de financiamiento con carácter subsidiario y de control;

CONSIDERANDO:

Que la estructura del Organismo Ejecutivo ya no responde adecuadamente a las exigencias de la población, situación que necesariamente debe ser replanteada,

creando así la base de una nueva administración pública capaz de satisfacer las demandas del nuevo milenio,

POR TANTO,

En ejercicio de las atribuciones que le confiere la literal a) del Artículo 171 de la Constitución Política de la República,

DECRETA:

La siguiente

LEY DEL ORGANISMO EJECUTIVO

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1o. — Ambito de la ley. La presente ley desarrolla los preceptos constitucionales sobre la organización, atribuciones y funcionamiento del Organismo Ejecutivo.

Artículo 2o. — Competencia del Organismo Ejecutivo. Dentro del marco de las funciones y atribuciones constitucionales y legales de los órganos que lo integran, compete al Organismo Ejecutivo el ejercicio de la función administrativa y la formulación y ejecución de las políticas de gobierno con las cuales deben coordinarse las entidades que forman parte de la administración descentralizada.

Artículo 3o. — Delegación. Las funciones de gestión administrativa y de ejecución y supervisión de la obra y servicios públicos podrá delegarse a terceras personas, comités, asociaciones o entidades, cuando el ejecutivo lo juzgare idóneo para lograr una mayor eficiencia y eficacia en el cumplimiento de sus funciones. La modalidad, el ámbito material y el régimen de la delegación se establecerá por acuerdo gubernativo que deberá publicarse en el Diario Oficial. No son delegables las funciones normativa, reguladora y de financiación subsidiaria.

Artículo 4o. — Principios que rigen la función administrativa. El fin supremo del Estado es el bien común y las funciones del Organismo Ejecutivo han de ejercitarse en orden a su consecución y con arreglo a los principios de solidaridad, subsidiariedad, transparencia, probidad, eficacia, eficiencia, descentralización y participación ciudadana.

Artículo 5o. — Integración del Organismo Ejecutivo. El Organismo Ejecutivo se integra de los órganos que dispone la Constitución Política, la presente y demás leyes. Según su función, los mismos podrán ser deliberativos, consultivos, de contralor y ejecutivos, al igual que podrán confluir en un órgano administrativo más de uno de dichos atributos.

Integran el Organismo Ejecutivo los Ministerios, Secretarías de la Presidencia, dependencias, gobernaciones departamentales y órganos que administrativa o jerárquicamente dependen de la Presidencia de la República.

También forman parte del Organismo Ejecutivo las Comisiones Temporales, los Comités Temporales de la Presidencia y los Gabinetes Específicos. Compete al Presidente de la República, mediante acuerdo gubernativo por conducto del Ministerio de Gobernación, crear y establecer las funciones y atribuciones, así como la temporalidad de los órganos mencionados en este párrafo.

CAPITULO II AUTORIDAD SUPERIOR

ARTICULO 6. Autoridad superior del Organismo Ejecutivo. La autoridad administrativa superior del Organismo Ejecutivo es el Presidente de la República. El Presidente de la República actuará siempre con los Ministros, en Consejo de Ministros o separadamente con uno o más de ellos, en todos los casos en que de sus actos surjan relaciones jurídicas que vinculen a la administración pública.

CAPITULO III DE LA ESTRUCTURA Y FUNCIONES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA

SECCION PRIMERA DE LA PRESIDENCIA Y VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

ARTICULO 7. Atribuciones del Presidente y Vicepresidente de la República. Además de las que les atribuyen la Constitución Política y otras leyes, el Presidente de la República debe velar porque la administración pública se desarrolle en armonía con los principios que la orientan, y porque el régimen jurídico-administrativo del Estado propicie la eficiencia y eficacia. A tales efectos, deberá ejercitar sus facultades de iniciativa de ley para proponer al Congreso de la República las leyes o reformas legislativas que le parezcan necesarias.

El Vicepresidente, de la República además de las atribuciones que señala la Constitución Política deberá coordinar los Gabinetes específicos que le sean asignados por el Presidente de la República.

SECCION SEGUNDA DE LAS SECRETARIAS DE LA PRESIDENCIA

ARTICULO 8. Naturaleza de las Secretarías de la Presidencia. Las Secretarías de la Presidencia son dependencias de apoyo a las funciones del Presidente de la República.

No podrán ejercer funciones de ejecución de programas, proyectos ni otras funciones a cargo de Ministerios u otras instituciones de Gobierno, con excepción de la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, quien sí podrá, por encargo del Presidente, realizar tales funciones.

ARTICULO 9. Secretaría General de la Presidencia. Es función de la Secretaría General de la Presidencia tramitar los asuntos de Gobierno del Despacho del Presidente. Para ejercer el cargo de Secretario General de la Presidencia se requieren los mismos requisitos que se exigen para ser Ministro y gozará de iguales prerrogativas e inmunidades. Además de lo dispuesto por la Constitución Política y otras leyes, el Secretario General de la Presidencia, tiene las atribuciones siguientes:

- Dar fe administrativa de los Acuerdos Gubernativos y demás disposiciones del Presidente de la República, suscribiéndolos.
- Distribuir las consultas técnicas y legales a los órganos de asesoría de la Presidencia.
- Revisar los expedientes que se sometan a conocimiento y aprobación del Presidente de la República.
- Velar porque el despacho del Presidente se tramite con la prontitud necesaria.

ARTICULO 10. Secretaría Privada de la Presidencia. La Secretaría Privada de la Presidencia tiene a su cargo, sin perjuicio de la competencia atribuida constitucional o legalmente a otros órganos públicos, las siguientes funciones específicas, relacionadas con el ejercicio de las funciones del Ejecutivo:

- Atender los asuntos de carácter privado del Presidente de la República.
- Llevar el registro y control de las audiencias e invitaciones del Presidente de la República.
- Atender el despacho de asuntos que se dirijan al Presidente de la República.
- Apoyar la gestión o trámite de los asuntos que se sometan a su consideración, orientándolos conforme a su naturaleza hacia los distintos despachos ministeriales, o en su caso, a las dependencias del Estado a que corresponden estos asuntos.
- Brindar atención a los planteamientos que se le presentan en forma individual.
- Atender los asuntos y relaciones políticas que le encomiende el Presidente de la República.

Para ejercer el cargo de Secretario Privado de la Presidencia se requieren los mismos requisitos que se exigen para ser Ministro y gozará de iguales prerrogativas e inmunidades.

ARTICULO 11. Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia. La Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia tiene a su cargo:

- Colaborar con el Presidente de la República en la coordinación del sistema nacional de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural y el Sistema de Consejos Regionales y Departamentales, así como en la formulación de políticas de desarrollo urbano y rural.

- Dar seguimiento, para garantizar su ejecución, a proyectos prioritarios que le encomiende el Presidente de la República.
- Ejercer la dirección ejecutiva del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural y el Sistema de Consejos Regionales y Departamentales, a efecto de coordinar la ejecución de proyectos y políticas aprobadas por éste.
- Ejercer la coordinación de las unidades ejecutoras a su cargo, así como velar por la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de los proyectos de desarrollo y otros que le asigne el Presidente de la República.

Para ejercer el cargo de Secretario de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia se requieren los mismos requisitos que se exigen para ser Ministro y gozará de derecho de antejuicio en la misma forma.

ARTICULO 12. Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia. La Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia tiene la función de servir como vínculo de información con los medios de comunicación social, y de formular, coordinar y ejecutar la política de comunicación del Gobierno de la República.

Para ejercer el cargo de Secretario de Comunicación Social de la Presidencia se requieren los mismos requisitos que se exigen para ser Ministro y gozará de derecho de antejuicio en la misma forma.

ARTICULO 13. Secretaría de Análisis Estratégico de la Presidencia. La Secretaría de Análisis Estratégico de la Presidencia tiene la función de proporcionar al Presidente toda la información, asesoría y recomendar la implementación de las acciones necesarias a manera de anticipar, prevenir y resolver situaciones de riesgo o amenaza de distinta naturaleza para el Estado democrático y sus habitantes, siendo su naturaleza estrictamente de carácter civil, y podrá tener acceso a información a través de fuentes públicas y a la que recaben los ministerios de Gobernación y de la Defensa Nacional. No tendrá la facultad de realizar ni de participar en investigaciones a favor de particulares, ni actuará de forma alguna para limitar o entorpecer el ejercicio de los derechos políticos y de libertad de emisión del pensamiento.

Para ejercer el cargo de Secretario de Análisis Estratégico de la Presidencia se requieren los mismos requisitos que se exigen para ser ministro, y gozará del derecho de antejuicio en la misma forma.

ARTICULO 14. Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. A partir de la vigencia de la presente ley, la Secretaría General del Consejo Nacional de Planificación Económica se establece como una Secretaría bajo la Presidencia de la República; cambia su denominación a la de Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia; y asume las siguientes funciones:

- Coadyuvar a la formulación de la política general del Gobierno y evaluar su ejecución.
- Diseñar, coordinar, monitorear y evaluar el Sistema Nacional de Proyectos de Inversión Pública y el Sistema Nacional de Financiamiento a la preinversión.
- Integrar y armonizar los anteproyectos de planes sectoriales recibidos de los ministerios y otras entidades estatales con los anteproyectos remitidos por los consejos de desarrollo regionales y departamentales.
- Elaborar conjuntamente con el Ministerio de Finanzas Públicas los procedimientos más adecuados para lograr la coordinación y la armonización de los planes y proyectos anuales y multianuales del sector público con los correspondientes presupuestos anuales y multianuales.
- Preparar conjuntamente con el Ministerio de Finanzas Públicas, de acuerdo con la política general del Gobierno y en consulta con los demás ministerios de Estado, el anteproyecto de presupuesto de inversión anual y multianual.
- Dar seguimiento a la ejecución del presupuesto de inversión e informar al Presidente de la República, individualmente o en Consejo de Ministros, sobre los resultados alcanzados, debiendo proponer las rectificaciones que estime necesarias.
- Formular, para conocimiento y aprobación del Presidente y en consulta con los Ministerios de Estado y las entidades estatales correspondientes, así como con otros organismos del sector público, las políticas y programas de cooperación técnica de organismos internacionales y de gobiernos extranjeros para la realización de proyectos de interés común y coordinar su ejecución, siempre que no estén ligados a operaciones de financiamiento externo, en cuyo caso será competencia del Ministerio de Finanzas Públicas.
- Coordinar el proceso de planificación y programación de inversión pública a nivel sectorial y público y territorial.
- Formular, para conocimiento y aprobación del Presidente, la política de preinversión, y promover la creación de los mecanismos financieros que funcionen descentralizadamente para el efecto.
- Crear y administrar el banco de becas que ofrece la comunidad internacional.
- Llevar a efecto las tareas que le sean confiadas por el Presidente y Vicepresidente de la República.
- Elaborar y proponer al Presidente de la República, para su aprobación, el proyecto de reglamento orgánico interno de la Secretaría a su cargo, en el que se han de establecer la estructura, organización y responsabilidades de sus dependencias, conforme a esta ley.
- Realizar las funciones y atribuciones que la Constitución Política atribuye al Órgano de Planificación del Estado y las que al mismo o a la Secretaría General de Consejo Nacional de Planificación Económica atribuyan otras leyes.

Para ser Secretario de Planificación y Programación de la Presidencia se requieren los mismos requisitos que se exigen para ser Ministro y gozará del derecho de antejudio en la misma forma.

ARTICULO 15. Adecuación del reglamento orgánico interno. Cuando así se considere, los titulares de las Secretarías de la Presidencia establecidas en la presente ley, elaborarán y propondrán al Presidente de la República, para su aprobación, un proyecto de modificaciones al reglamento orgánico interno de la Secretaría a su cargo.

El Presidente de la República tendrá además de las Secretarías señaladas en esta ley, las que sean necesarias para el apoyo de sus funciones; la regulación y atribuciones de estas, serán determinadas por la misma norma de su creación.

SECCION TERCERA DEL CONSEJO DE MINISTROS

ARTICULO 16. Consejo de Ministros. El Presidente de la República actúa en Consejo de Ministros cuando preside la reunión de todos los Ministros de Estado, debidamente convocados por el Presidente para ello. El Vicepresidente participa con voz y con voto en las reuniones del Consejo de Ministros y lo convoca y preside en ausencia del Presidente. En ausencia del titular de un ministerio, comparecerá al Consejo un Viceministro.

De las decisiones del Consejo de Ministros son solidariamente responsables los ministros que hubieren concurrido, salvo aquellos que hayan hecho constar su voto adverso. Cuando un Viceministro actúa en función de ministro, hace suya la responsabilidad.

ARTICULO 17. Funciones del Consejo de Ministros. Además de las que le asigna la Constitución Política y la ley, el Consejo de Ministros tiene las funciones siguientes:

- Discutir y proponer al Presidente de la República su parecer sobre las políticas, planes y programas de gobierno.
- Concurrir con el Presidente de la República a declarar o no la lesividad de los actos o contratos administrativos, para los efectos de la interposición del recurso de lo contencioso administrativo.
- Conocer y emitir opinión sobre los asuntos que someta a su consideración el Presidente de la República.

ARTICULO 18. Gabinetes específicos. Para fines de coordinación del diseño y gestión de acciones y políticas, así como la discusión y formulación de propuestas que atañen a más de un ministerio a ser presentadas al Presidente de la República, podrán funcionar gabinetes específicos creados por acuerdo gubernativo. Estos se integran, reunidos en sesión, por los ministros y otros funcionarios de alto nivel administrativo titulares de órganos o representantes de entidades estatales afines al objeto de los asuntos que toca abordar a cada gabinete específico.

Los Gabinetes Específicos serán coordinados por el Vicepresidente de la República o por el ministro que el Vicepresidente de la República designe.

SECCION CUARTA DE LOS MINISTERIOS

ARTICULO 19. Ministerios. Para el despacho de sus negocios el Organismo Ejecutivo tendrá los siguientes ministerios:

- Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
- Ministerio de Comunicaciones, Transporte, Obras Públicas y Vivienda
- Ministerio de Cultura y Deportes
- Ministerio de Economía
- Ministerio de Educación
- Ministerio de Energía y Minas
- Ministerio de Finanzas Públicas
- Ministerio de Gobernación
- Ministerio de la Defensa Nacional
- Ministerio de Relaciones Exteriores
- Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
- Ministerio de Trabajo y Previsión Social.

ARTICULO 20. Ministros de Estado. Los Ministros de Estado son los funcionarios titulares de los ministerios y los de superior jerarquía dentro de cada uno de ellos. Dependen del Presidente de la República, quien los nombra y remueve. Sus labores son coordinadas por el Vicepresidente de la República.

ARTICULO 21. Jerarquía administrativa de los Ministros de Estado. Los ministros de Estado tienen el mismo nivel jerárquico y goza de iguales prerrogativas e inmunidades.

ARTICULO 22. Actuación ministerial. Los Ministros tienen autoridad y competencia en toda la República para los asuntos propios de su ramo, y son responsables de sus actos de conformidad con la Constitución política de la República de Guatemala y las leyes.

Los ministros se reputarán como en falta temporal cuando se encuentren fuera del territorio de la República o imposibilitados por enfermedad u otra incapacidad, para el ejercicio de sus funciones; en caso de ausencia lo sustituirá el Viceministro con mayor antigüedad en el cargo o, en su defecto, por el Viceministro con la segunda mayor antigüedad.

ARTICULO 23. Rectoría sectorial. Los Ministros son los rectores de las políticas públicas correspondientes a las funciones sustantivas de cada Ministerio. Ejercen un papel de coordinación y facilitación de la acción del sector o sectores

bajo su responsabilidad, para lo cual deben coordinar esfuerzos y propiciar la comunicación y cooperación entre las diferentes instituciones públicas y privadas que corresponda. Todas las instituciones públicas que tengan funciones relacionadas con el o los ramos de cada Ministerio forman parte del sector o los sectores correspondientes y están obligadas a coordinar con el rector sectorial.

ARTICULO 24. Estructura administrativa de los Ministerios de Estado. Los Ministerios de Estado podrán estructurarse para el despacho de los asuntos que les competen, con las siguientes unidades administrativas:

Las funciones sustantivas estarán a cargo de:

- El Despacho Ministerial, integrado por el Ministro y los Viceministros.
- Las Direcciones Generales.
- Los Departamentos.

Las funciones administrativas estarán a cargo de:

- El Administrador General.
- Los Administradores específicos.

El Administrador General es la autoridad superior en materia administrativa y depende directamente del Ministro.

Las funciones de apoyo técnico estarán a cargo de:

- Asesoría Jurídica
- Planeamiento

La función de control interno estará a cargo de la Unidad de Auditoría Interna.

No obstante lo anterior, cada Ministerio podrá decidir por otras denominaciones, pero no podrán exceder del número de niveles administrativos previstos en este artículo. Los Ministerios reglamentarán su estructura y organización mediante su reglamento orgánico interno, de conformidad con esta ley. Dicho reglamento deberá emitirse mediante acuerdo gubernativo.

ARTICULO 25. Unidades especiales de ejecución. Por medio de acuerdo ministerial, los ministros podrán crear y suprimir Unidades Especiales de Ejecución, las cuales les estarán adscritas y responderán ante su autoridad. En el Acuerdo de creación se establecerán los recursos materiales, humanos y financieros de los cuales dispondrán para el desempeño de sus funciones. Las Unidades Especiales de Ejecución podrán llevar a cabo planes, programas o proyectos específicos, adecuándose a las necesidades de funcionamiento de la organización ministerial. Serán dependencias de carácter temporal, cuya duración se establecerá en el acuerdo de creación y se circunscribirá al período de tiempo que tome la ejecución de los planes, programas o proyectos para los que fueron creadas.

ARTICULO 26. Dependencia administrativa. Los Viceministros tienen jerarquía inmediata inferior a la del Ministro para el despacho y dirección de los negocios del ramo; sustituirán al Ministro en caso de falta temporal, en la forma que establece esta ley.

CAPITULO IV

SECCION PRIMERA

ATRIBUCIONES GENERALES DE LOS MINISTERIOS DE ESTADO

ARTICULO 27. Atribuciones generales de los Ministros. Además de las que asigna la Constitución Política de la República y otras leyes, los Ministros tienen las siguientes atribuciones:

- Cumplir y hacer que se cumpla el ordenamiento jurídico en los diversos asuntos de su competencia.
- Participar en las sesiones del Consejo de Ministros, en la formulación de la política económica y social del Gobierno y en los planes, programas y proyectos de desarrollo de largo, mediano y corto plazo.
- Ejercer la rectoría de los sectores relacionados con el ramo bajo su responsabilidad y planificar, ejecutar y evaluar las políticas públicas de su sector, en coherencia con la política general del gobierno, salvaguardando los intereses del Estado, con apego a la ley.
- Desconcentrar y descentralizar las funciones y servicios públicos que corresponden a su ramo, y proponer los mecanismos para que el Gobierno de la República asuma para sí, en plan subsidiario, el financiamiento de dichos servicios, cuando así corresponda; en su caso, delegar las funciones de gestión administrativa, ejecución y supervisión de conformidad con esta ley.
- En la ejecución de la política general del Gobierno, coordinar los esfuerzos de los órganos de la administración pública, bajo su responsabilidad, con las gobernaciones departamentales, las municipalidades, sector productivo, entidades privadas y la comunidad, respetando, en todo caso, la autonomía de los gobiernos municipales.
- Dirigir y coordinar la labor de las dependencias y entidades bajo su competencia, así como la administración de los recursos financieros, humanos y físicos bajo su responsabilidad, velando por la eficiencia y la eficacia en el empleo de los mismos.
- Gestionar la asignación presupuestaria de los recursos financieros necesarios para el funcionamiento de su ministerio y los programas de inversión de su ramo, velando porque los mismos sean invertidos con eficiencia, transparencia y conforme a la ley.
- Participar, bajo la coordinación de la entidad rectora, en la negociación y concreción de la cooperación internacional correspondiente a su ramo.

- i) Velar por el registro de los bienes de las dependencias a su cargo y remitir, al órgano correspondiente, certificación actualizada de los mismos, dentro de los primeros noventa días del próximo ejercicio fiscal.
- Suscribir los acuerdos gubernativos y decretos emitidos por el Presidente de la República en Consejo de Ministros, de conformidad con la ley y referendar las iniciativas de ley presentadas al Congreso de la República y los decretos, acuerdos o reglamentos dictados por el Presidente de la República, relacionados con su despacho.
- Preparar y presentar al Presidente de la República, los proyectos de ley, acuerdos, reglamentos, informes y demás disposiciones relacionadas con el ramo bajo su responsabilidad.
- Cuando así se considere, los Ministros de Estado elaborarán y propondrán al Presidente de la República, para su aprobación, un proyecto de modificaciones al reglamento orgánico interno del Ministerio a su cargo.
- m) Dictar los acuerdos, resoluciones, circulares y otras disposiciones relacionadas con el despacho de los asuntos de su ramo, conforme la ley.
- n) Presentar anualmente al Congreso de la República, dentro de los primeros diez días del mes de febrero de cada año, la memoria de las actividades de su ramo, que deberá contener, además, la ejecución presupuestaria de su Ministerio.
- o) Resolver sobre los informes que los gobernadores departamentales presenten a la Presidencia de la República sobre las anomalías o deficiencias en el desempeño de las labores correspondientes a su ramo en los departamentos.
- p) Tomar las medidas que correspondan, según la ley, en casos de faltas, incumplimiento de deberes u otras infracciones análogas cometidas por los funcionarios y empleados públicos bajo su autoridad, incluyendo los casos contenidos en los informes de los gobernadores departamentales.
- q) Resolver los recursos de revocatoria y reposición que se presenten, por acuerdos y resoluciones de la administración a su cargo.
- r) Celebrar y suscribir en nombre del Estado, los contratos administrativos relativos a los negocios que se relacionen con su ramo.

ARTICULO 28. Funciones administrativas de los Ministerios. En cada Ministerio deben reunirse todas las unidades de gestión administrativa de la administración general. Esta administración velará por el funcionamiento de: (i) administración general; (ii) comunicación social; (iii) secretaría; (iv) administración financiera; (v) recursos humanos; (vi) contrataciones y adquisiciones, y (vii) servicios generales. La administración general depende jerárquicamente del Ministro.

SECCION SEGUNDA FUNCIONES SUSTANTIVAS DE LOS MINISTERIOS DE ESTADO

ARTICULO 29. Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Le corresponde al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación atender los asuntos concernientes al régimen jurídico que rige la producción agrícola, pecuaria, hidrobiológica y el manejo sustentable de los recursos naturales renovables, así como, el que tiene por objeto mejorar las condiciones alimenticias de la población, la sanidad agropecuaria y el desarrollo productivo nacional; para ello tiene a su cargo las siguientes funciones:

- a) Formular y ejecutar participativamente la política de desarrollo agropecuario, hidrobiológico y de uso sustentable de los recursos naturales renovables, todo ello de conformidad con la ley.
- b) Proponer y velar por la aplicación de normas claras y estables en materia de actividades agrícolas, pecuarias, hidrobiológicas, forestales y fitozoosanitarias, buscando la eficiencia y competitividad en los mercados y teniendo en cuenta la conservación y protección del medio ambiente.
- c) Definir la política de ordenamiento territorial y de utilización de las tierras nacionales y de reservas de la nación, y promover la administración descentralizada en la ejecución de esta política; deberá velar por la instauración y aplicación eficaz de un sistema de normas jurídicas que definan con claridad los derechos y responsabilidades vinculadas a la posesión, uso, usufructo y, en general, la utilización de dichos bienes, mientras permanezcan bajo el dominio del Estado.
- d) Formular la política de servicios públicos agrícolas, pecuarios, hidrobiológicos forestales y fitozoosanitarios y administrar descentralizadamente su ejecución.
- e) En coordinación con el Ministerio de Educación y la Comisión Nacional del Medio Ambiente, formular la política de educación agropecuaria y sobre el medio ambiente, promoviendo la participación comunitaria.
- f) Promover, en coordinación con las autoridades legalmente competentes, las políticas para el mejoramiento y modernización de la administración descentralizada del sistema guatemalteco de áreas protegidas, así como la formulación de políticas para el desarrollo y conservación del patrimonio natural del país.
- g) Diseñar, en coordinación con el Ministerio de Economía, las políticas de comercio exterior de productos agropecuarios, forestales e hidrobiológicos.
- h) Impulsar el desarrollo empresarial de las organizaciones agropecuarias, forestales e hidrobiológicas, para fomentar el desarrollo productivo y competitivo del país;

- i) Desarrollar mecanismos que contribuyan a la seguridad alimentaria de la población;
- j) Ampliar y fortalecer los mecanismos de disponibilidad y acceso a la información estratégica a productores, comercializadores y consumidores.

ARTICULO 30. Ministerio de Comunicaciones, Transporte, Obras Públicas y Vivienda. Al Ministerio de Comunicaciones, Transporte, Obras Públicas y Vivienda le corresponde formular las políticas y hacer cumplir el régimen jurídico aplicable al establecimiento, mantenimiento y desarrollo de los sistemas de comunicaciones y transporte del país; al uso y aprovechamiento de las frecuencias radioeléctricas y del espacio aéreo; a la obra pública; a los servicios de información de meteorología, vulcanología, sismología e hidrología; y a la política de vivienda y asentamientos humanos; para ello, tiene a su cargo las siguientes funciones:

- a) Administrar en forma descentralizada y subsidiaria o contratar la provisión de los servicios de diseño, construcción, rehabilitación, mantenimiento y supervisión de las obras públicas e infraestructura a su cargo.
- b) Proponer al Organismo Ejecutivo las normas técnicas relativas a las obras públicas, para lo cual deberá coordinarse con los otros Ministerios correspondientes.
- c) Financiar subsidiariamente el diseño, construcción, rehabilitación y mantenimiento de las obras públicas.
- d) Crear y participar en la administración o contratación de los mecanismos financieros para la construcción, rehabilitación y mantenimiento de las obras públicas.
- e) Proponer para su aprobación y ejecutar los instrumentos normativos de los sistemas de transporte terrestre, fluvial, marítimo y aéreo, así como de las frecuencias radiales y televisivas, de telecomunicaciones, correos y telégrafos, velando por su pronta, estricta y eficiente aplicación.
- f) Administrar descentralizadamente lo relativo al aprovechamiento y explotación del espectro radioelectrónico.
- g) Velar por que se presten en forma descentralizada los servicios de información de meteorología, vulcanología, sismología e hidrología.
- h) Administrar la contratación, concesión y otras formas descentralizadas de prestación de los servicios públicos a su cargo y supervisar su ejecución.
- i) Ejercer la autoridad portuaria y aeroportuaria nacional.
- j) Ejercer la rectoría del sector público a cargo de la ejecución del régimen jurídico relativo a la vivienda y asentamientos humanos, y administrar en forma descentralizada los mecanismos financieros del sector público para propiciar el desarrollo habitacional del país.
- *k) Formular la política nacional de vivienda y asentamientos humanos y evaluar y supervisar su ejecución, dentro del marco de las leyes aplicables.
- l) Coordinar las acciones de las instituciones públicas que desarrollen programas y proyectos de vivienda y asentamientos humanos.

ARTICULO 31. Ministerio de Cultura y Deportes. Le corresponde atender lo relativo al régimen jurídico aplicable a la conservación y desarrollo de la cultura guatemalteca, y el cuidado de la autenticidad de sus diversas manifestaciones; la protección de los monumentos nacionales y de los edificios, instituciones y áreas de interés histórico o cultural y el impulso de la recreación y del deporte no federado ni escolar; para ello, tiene a su cargo las siguientes funciones:

- a) Formular, ejecutar y administrar descentralizadamente la política de fomento, promoción y extensión cultural y artística, de conformidad con la ley.
- b) Formular, ejecutar y administrar descentralizadamente la política de preservación y mantenimiento del patrimonio cultural de la Nación, de conformidad con la ley.
- c) Administrar descentralizadamente o contratar la operación de los medios de comunicación oficiales de radio y televisión.
- d) Promover y difundir la identidad cultural y valores cívicos de la Nación en el marco de su carácter pluriétnico y multicultural que los caracteriza.
- e) Crear y participar en la administración de los mecanismos financieros adecuados para el fomento, promoción y extensión cultural y artística.
- f) Propiciar la repatriación y la restitución al Estado de los bienes culturales de la Nación, sustraídos o exportados ilícitamente.
- g) Impulsar de forma descentralizada la recreación y el deporte no federado y no escolar.

ARTICULO 32. Ministerio de Economía. Le corresponde hacer cumplir el régimen jurídico relativo al desarrollo de las actividades productivas no agropecuarias, del comercio interno y externo, de la protección al consumidor, del fomento a la competencia, de la represión legal de la competencia desleal, de la limitación al funcionamiento de empresas monopolísticas, de inversión nacional y extranjera, de promoción a la competitividad, del desarrollo industrial y comercial; para ello, tiene a su cargo las siguientes funciones:

- a) Formular y ejecutar dentro del marco jurídico vigente, las políticas de protección al consumidor, de fomento a la competencia y de represión legal de la competencia desleal;
- b) Formular y ejecutar dentro del marco jurídico vigente, la política de inversión nacional y extranjera, de promoción de la competitividad, del desarrollo industrial y comercial, y proponer las directrices para su ejecución.

- c) Conducir, por delegación del Presidente de la República, las negociaciones de los convenios y tratados de comercio internacional bilateral y multilateral, y una vez aprobados y ratificados, encargarse de su ejecución.
- d) Proponer al Organismo Ejecutivo, en coordinación con los otros ministerios y organismos del Estado, las especificaciones y normas técnicas y de calidad de la producción nacional.
- e) Formular y ejecutar, de conformidad con la ley, la política arancelaria del país; y coordinar, analizar y dar seguimiento a los procesos de integración económica centroamericana y de negociación de tratados de libre comercio.
- f) Velar por la seguridad y eficiente administración de los registros públicos sometidos a su jurisdicción.
- g) Promover la creación y mejoramiento continuo de los procedimientos e instituciones registrales, instituidas para la seguridad del tráfico de los bienes inmuebles y demás bienes registrables.

ARTICULO 33. Ministerio de Educación. Le corresponde lo relativo a la aplicación del régimen jurídico concerniente a los servicios escolares y extrascolares para la educación de los guatemaltecos; para ello, tiene a su cargo las siguientes funciones:

- a) Formular y administrar la política educativa, velando por la calidad y la cobertura de la prestación de los servicios educativos públicos y privados, todo ello de conformidad con la ley.
- b) Coordinar con el Ministerio de Comunicaciones, Transporte, Obras Públicas y Vivienda las propuestas para formular y poner en vigor las normas técnicas para la infraestructura del sector.
- c) Velar porque el sistema educativo del Estado contribuya al desarrollo integral de la persona, con base en los principios constitucionales de respeto a la vida, la libertad, la justicia, la seguridad y la paz y al carácter multiétnico, pluricultural y multilingüe de Guatemala.
- d) Coordinar esfuerzos con las universidades y otras entidades educativas del país, para lograr el mejoramiento cualitativo del sistema educativo nacional.
- e) Coordinar y velar por el adecuado funcionamiento de los sistemas nacionales de alfabetización, planificación educativa, investigación, evaluación, capacitación de docentes y personal magisterial, y educación intercultural ajustándolos a las diferentes realidades regionales y étnicas del país.
- f) Promover la autogestión educativa y la descentralización de los recursos económicos para los servicios de apoyo educativo mediante la organización de comités educativos, juntas escolares y otras modalidades en todas las escuelas oficiales públicas; así como aprobarles sus estatutos y reconocer su personalidad jurídica.
- g) Administrar en forma descentralizada y subsidiaria los servicios de elaboración, producción e impresión de textos, materiales educativos y servicios de apoyo a la prestación de los servicios educativos.
- h) Formular la política de becas y administrar descentralizadamente el sistema de becas y bolsas de estudio que otorga el Estado.

ARTICULO 34. Ministerio de Energía y Minas. Le corresponde atender lo relativo al régimen jurídico aplicable a la producción, distribución y comercialización de la energía y de los hidrocarburos, y a la explotación de los recursos mineros; para ello, tiene las siguientes funciones:

- a) Estudiar y fomentar el uso de fuentes nuevas y renovables de energía; promover su aprovechamiento racional y estimular el desarrollo y aprovechamiento racional de energía en sus diferentes formas y tipos, procurando una política nacional que tienda a lograr la autosuficiencia energética del país.
- b) Coordinar las acciones necesarias para mantener un adecuado y eficiente suministro de petróleo, productos petroleros y gas natural de acuerdo a la demanda del país, y conforme a la ley de la materia.
- c) Cumplir y hacer cumplir la legislación relacionada con el reconocimiento superficial, exploración, explotación, transporte y transformación de hidrocarburos; la compraventa o cualquier tipo de comercialización de petróleo crudo o reconstituido, gas natural y otros derivados, así como los derivados de los mismos.
- d) Formular la política, proponer la regulación respectiva y supervisar el sistema de exploración, explotación y comercialización de hidrocarburos y minerales.
- e) Proponer y cumplir las normas ambientales en materia energética.
- f) Emitir opinión en el ámbito de su competencia sobre políticas o proyectos de otras instituciones públicas que incidan en el desarrollo energético del país.
- g) Ejercer las funciones normativas y de control y supervisión en materia de energía eléctrica que le asignen las leyes.

ARTICULO 35. Ministerio de Finanzas Públicas. Al Ministerio de Finanzas Públicas le corresponde cumplir y hacer cumplir todo lo relativo al régimen jurídico hacendario del Estado, incluyendo la recaudación y administración de los ingresos fiscales, la gestión de financiamiento interno y externo, la ejecución presupuestaria y el registro y control de los bienes que constituyen el patrimonio del Estado, para ello, tiene a su cargo las siguientes funciones:

- a) Formular la política fiscal y financiera de corto, mediano y largo plazo, en función de la política económica y social del Gobierno.
- b) Proponer al Organismo Ejecutivo la política presupuestaria y las normas para su ejecución dirigiendo, coordinando y consolidando la formulación del proyecto de presupuesto general de ingresos y egresos del Estado en lo que corresponde al Gobierno Central y entidades descentralizadas y autónomas para su presentación al Congreso de la República.
- c) Formular las normas para la desconcentración en la percepción de los ingresos y en la ejecución de los egresos.
- d) Programar el flujo de ingresos y egresos con base en las prioridades y disponibilidades del Gobierno, en concordancia con los requerimientos de los organismos y dependencias del Estado.

- e) Transferir a los Organismos y entidades del Estado los recursos financieros asignados en sus respectivos presupuestos, en función de los ingresos percibidos.

- f) Llevar el registro consolidado de la ejecución presupuestaria y de la contabilidad del Estado, facilitar los lineamientos de su aplicación desconcentrada, así como preparar los informes analíticos consolidados correspondientes.

- g) Evaluar cuatrimestralmente la ejecución del presupuesto general de ingresos y egresos del Estado y proponer las medidas correlativas que sean necesarias.

- h) Efectuar el cierre contable y liquidar anualmente el presupuesto general de ingresos y egresos del Estado.

- i) Recaudar, administrar, controlar y fiscalizar los tributos y, en general, todas las demás rentas e ingresos que deba percibir el Gobierno, de conformidad con la ley.

- j) Llevar los registros y ejercer las acciones administrativas y judiciales necesarias para cobrar los tributos que se adeuden y denunciar la posible comisión de delitos o faltas contra la hacienda pública.

- k) Administrar descentralizadamente el sistema aduanero de conformidad con la ley y los convenios internacionales.

- l) Proponer al Organismo Ejecutivo los anteproyectos de ley necesarios para la racionalización y sistematización de la legislación tributaria.

- m) Consolidar el registro de los bienes del Estado y de los títulos-valores que constituyan activos del Estado, incluyendo los de las entidades descentralizadas y autónomas.

- n) Controlar, registrar y custodiar los fondos y valores públicos, excepto cuando dichas funciones estén atribuidas por la ley a órganos o dependencias distintas.

- o) Definir, con base en la política económica y social del Gobierno, conjuntamente con el órgano de planificación del Estado, la política para la formulación, priorización evaluación y selección de proyectos de inversión y programas a ser ejecutados con recursos internos, financiamiento y cooperación externa.

- p) Programar, gestionar, negociar, contratar por delegación de la autoridad competente, registrar, y fiscalizar las operaciones de financiamiento externo, así como también disponer lo relativo a la cooperación internacional en general, y realizar los análisis respectivos para prever la capacidad de endeudamiento del Gobierno. Se exceptúan de esta función los casos contemplados en el inciso g) del artículo 14 de la presente ley.

- q) Programar, negociar, registrar, controlar y administrar el endeudamiento interno, las donaciones y los legados.

- r) Gestionar la constitución, en cualquiera de las instituciones del sistema bancario nacional, de los fideicomisos, fondos y otros instrumentos financieros y la ejecución de los programas del Gobierno Central, así como reglamentar, registrar y controlar su operación. Para el efecto se deberá coordinar conjuntamente con las instituciones responsables del sector.

- s) Programar y administrar el servicio de la deuda pública interna y externa del Gobierno Central y llevar el registro respectivo.

- t) Coordinar el sistema de contrataciones y adquisiciones del Gobierno Central y sus entidades descentralizadas y autónomas.

ARTICULO 36. Ministerio de Gobernación. Al Ministerio de Gobernación le corresponde formular las políticas, cumplir y hacer cumplir el régimen jurídico relativo al mantenimiento de la paz y el orden público, la seguridad de las personas y de sus bienes, la garantía de sus derechos, la ejecución de las órdenes y resoluciones judiciales, el régimen migratorio y referendar los nombramientos de los Ministros de Estado incluyendo el de quien lo suceda en el cargo; para ello, tiene a su cargo las siguientes funciones:

- a) Compilar y publicar ordenadamente los códigos, leyes y reglamentos de la República.

- b) Aprobar los estatutos de las fundaciones, y otras formas de asociación, que requieran por ley tal formalidad, y otorgar y reconocer la personalidad jurídica de las mismas.

- c) Ejercer la vigilancia y supervisión de los montes de piedad, rifas y loterías, salvo lo dispuesto por leyes específicas.

- d) Administrar descentralizadamente los registros y sistemas de documentación de identidad ciudadana, bajo su jurisdicción.

- e) Dar cumplimiento a las resoluciones emanadas de los tribunales de justicia en lo que le compete.

- f) Prestar el servicio de notariado del Estado a través del Escribano de Cámara y de Gobierno.

- g) Atender lo relativo a la impresión de publicaciones de carácter oficial.

- h) Velar por la eficiente administración de los registros públicos sometidos a su jurisdicción.

- i) Representar, en el seno de la administración pública, al Presidente de la República y coordinar sus relaciones con los gobernadores departamentales.

- j) Formular y ejecutar, dentro del marco de la ley, la política que en materia migratoria debe seguirse en el país.

- k) Administrar el registro, control y documentación de los movimientos migratorios.

- l) Controlar, conforme a la ley, el registro de las armas de fuego en circulación y la identificación de sus propietarios.

- m) Elaborar y aplicar planes de seguridad pública y encargarse de todo lo relativo al mantenimiento del orden público y a la seguridad de las personas y de sus bienes.

- n) Conducir los cuerpos de seguridad pública del Gobierno.

- o) Proponer los anteproyectos, para la reglamentación de los servicios privados de seguridad.
- p) Elaborar y aplicar las políticas de inteligencia civil, y recabar y analizar información para combatir el crimen organizado y la delincuencia común, dentro del marco de la ley.
- q) Administrar el régimen penitenciario del país, salvo aquello asignado a otros órganos del Estado.

ARTICULO 37. Ministerio de la Defensa Nacional. Le corresponde al Ministerio de la Defensa Nacional formular las políticas y hacer cumplir el régimen jurídico relativo a la defensa de la soberanía y de la integridad del territorio nacional; para lo que tiene a su cargo las siguientes funciones:

- a) Emitir las medidas necesarias para mantener la soberanía e integridad del territorio nacional y resguardar y proteger las fronteras.
- b) Ser el conducto de comunicación entre el Presidente de la República y el Ejército, y constituir el centro general directivo, orgánico y administrativo en cuanto concierne al Ejército; encargarse de todo lo relacionado con el régimen, movilización decretada por el Presidente de la República, doctrina del Ejército, de acuerdo con su Ley Constitutiva; administrar lo concerniente a la adquisición, producción, conservación y mejoramiento de equipo de guerra.
- c) Atender lo referente a la jerarquía, disciplina, instrucción y salubridad de las tropas y lugares de acuartelamiento; administrar lo relativo a los ascensos, retiros y excepciones militares, conforme a la ley, y actuar de conformidad con la Constitución Política de la República, y demás leyes, en lo concerniente a la impartición de justicia a los miembros del Ejército.
- d) Organizar y administrar los servicios militares establecidos por ley y la logística militar; controlar, conforme a la ley, la producción, importación, exportación, consumo, almacenamiento, traslado, préstamo, transformación, transporte, adquisición, tenencia, enajenación, conservación de armas de tipo militar que estén destinadas a uso militar, municiones, explosivos y toda clase de sustancias inflamables de uso bélico.
- e) Tomar las medidas necesarias para que en caso de limitación a los derechos constitucionales, las autoridades militares asuman las atribuciones que les corresponde, así como, dictar las medidas pertinentes, para la prestación de su cooperación en casos de emergencia o calamidad pública, todo conforme a la Ley de Orden Público.

ARTICULO 38. Ministerio de Relaciones Exteriores. Al Ministerio de Relaciones Exteriores le corresponde la formulación de las políticas y la aplicación del régimen jurídico relativo a las relaciones del Estado de Guatemala con otros Estados y personas o instituciones jurídicas de derecho internacional; a la representación diplomática del Estado; la nacionalidad guatemalteca; la demarcación del territorio nacional; los tratados y convenios internacionales, y los asuntos diplomáticos y consulares; para ello, cuando fuere necesario y siempre en coordinación y apoyo a otros ministerios y entidades del Estado y del sector no gubernamental, tiene a su cargo las siguientes funciones:

- a) Coordinar, analizar, apoyar y dar seguimiento a la negociación de convenios comerciales, de inversiones; de préstamos; de turismo, medio ambiente, de transporte; de comunicaciones; de ciencia y tecnología; de integración económica; de trabajo; de integración de bloques extrarregionales; de energía; de propiedad industrial e intelectual y cooperación internacional técnica y financiera; de educación y capacitación, y otros relacionados.
- b) Dirigir y coordinar las relaciones bilaterales o con organismos multilaterales de áreas señaladas en la literal a) anterior, siempre que la representación del país no corresponda por ley a otro Ministerio o entidad de Gobierno, en cuyo caso participará en apoyo al mismo.
- c) Otras relacionadas con el desarrollo económico, científico-tecnológico y ambiental y con el proceso de globalización económica.
- d) Coordinar, analizar, apoyar y dar seguimiento a la negociación de convenios de carácter político; geopolítico; de derechos humanos; sobre Belice; integración política centroamericana; acuerdos de integración o cooperación social, cultural, artística, deportivos, sobre aspectos étnicos, religiosos y lingüísticos; derecho internacional; litigios internacionales; límites y fronteras; migración; drogas; terrorismo; seguridad ciudadana; soberanía; salud, vivienda y asentamientos humanos; de población; seguimiento y apoyo a mecanismos de implementación de acuerdos derivados de conflictos, y otros relacionados.
- e) Dirigir y coordinar las relaciones bilaterales o multilaterales de carácter político, social, cultural y de las otras áreas señaladas en la literal d) anterior, siempre que la representación del país no corresponda por ley a otro Ministerio o entidad de Gobierno, en cuyo caso participará en apoyo al mismo.
- f) Otras relacionadas con el desarrollo político, social, cultural y con el proceso de globalización política.
- g) Atender lo relacionado con información y comunicaciones internacionales de carácter oficial.
- h) Estudiar y analizar el desenvolvimiento de los acontecimientos políticos, económicos, ambientales, comerciales y financieros a nivel de países, multilateral y globalmente.
- i) Preparar las propuestas de doctrinas y principios de la política exterior en sus diversos campos, así como, políticas y estrategias de acción.
- j) Programar, monitorear y evaluar las actividades sustantivas y financieras del Ministerio, de corto, mediano y largo plazo.
- k) Evaluar el desempeño del servicio exterior, sustantiva y administrativamente.
- l) Sugerir y diseñar programas de capacitación del personal del Ministerio.
- m) Otras que tiendan a facilitar la acción ágil, eficiente y eficaz del Ministerio.

ARTICULO 39. Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social le corresponde formular las políticas y hacer cumplir el régimen jurídico relativo a la salud preventiva y curativa y a las acciones de protección, promoción, recuperación y rehabilitación de la salud física y mental de los habitantes del país y a la preservación higiénica del medio ambiente; a

la orientación y coordinación de la cooperación técnica y financiera en salud y a velar por el cumplimiento de los tratados y convenios internacionales relacionados con la salud en casos de emergencias por epidemias y desastres naturales; y, a dirigir en forma descentralizada el sistema de capacitación y formación de los recursos humanos del sector salud, para ello tiene a su cargo las siguientes funciones:

- a) Formular y dar seguimiento a la política y los planes de salud pública y, administrar, descentralizadamente, los programas de promoción, prevención, rehabilitación y recuperación de la salud, propiciando a su vez la participación pública y privada en dichos procesos y nuevas formas de financiamiento y mecanismos de fiscalización social descentralizados.
- b) Proponer las normas técnicas para la prestación de servicios de salud y coordinar con el Ministerio de Comunicaciones, Transporte, Obras Públicas y Vivienda las propuestas de normas técnicas para la infraestructura del sector.
- c) Proponer la normativa de saneamiento ambiental y vigilar su aplicación.
- d) Realizar estudios y proponer las directrices para la ejecución de programas de vigilancia y control epidemiológico.
- e) Administrar en forma descentralizada el sistema de capacitación y formación de recursos humanos en el sector salud.
- f) Velar por el cumplimiento de los tratados y convenios internacionales relacionados con la salud en casos de emergencia por epidemias y desastres naturales.

ARTICULO 40. Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Corresponde al Ministerio de Trabajo y Previsión Social hacer cumplir el régimen jurídico relativo al trabajo, la formación técnica y profesional y la previsión social; para ello, tiene a su cargo las siguientes funciones:

- a) Formular la política laboral, salarial y de salud e higiene ocupacional del país.
- b) Promover y armonizar las relaciones laborales entre los empleadores y los trabajadores; prevenir los conflictos laborales e intervenir, de conformidad con la ley, en la solución extrajudicial de éstos, y propiciar el arbitraje como mecanismo de solución de conflictos laborales; todo ello, de conformidad con la ley.
- c) Estudiar, discutir y, si fuere de beneficio para el país, recomendar la ratificación y velar por el conocimiento y la aplicación de los convenios internacionales de trabajo.
- d) Aprobar los estatutos, reconocer la personalidad jurídica e inscribir a las organizaciones sindicales y asociaciones solidarias de los trabajadores no estatales y administrar lo relativo al ejercicio de sus derechos laborales.
- e) En coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, representar al Estado en los organismos internacionales relacionados con asuntos de su competencia y en los procesos de negociación de convenios internacionales sobre el trabajo, así como velar por la aplicación de los que estuvieren vigentes.
- f) Administrar, descentralizadamente, sistemas de información actualizada sobre migración, oferta y demanda en el mercado laboral, para diseñar mecanismos que faciliten la movilidad e inserción de la fuerza laboral en el mercado de trabajo.
- g) Velar por el cumplimiento de la legislación laboral en relación con la mujer, el niño y otros grupos vulnerables de trabajadores.
- h) Diseñar la política correspondiente a la capacitación técnica y profesional de los trabajadores. La ejecución de los programas de capacitación será competencia de los órganos privados y oficiales correspondientes.
- i) Formular y velar por la ejecución de la política de previsión social, propiciando el mejoramiento de los sistemas de previsión social y prevención de accidentes de trabajo.

CAPITULO V GOBIERNO DEPARTAMENTAL

ARTICULO 41. Gobernadores Departamentales. El gobierno de los departamentos está a cargo de un Gobernador, nombrado por el Presidente de la República. También habrá un gobernador suplente.

ARTICULO 42. Nombramientos y calidades. Los gobernadores departamentales titulares y suplentes serán nombrados por el Presidente de la República, tomando en consideración los candidatos propuestos por los representantes no estatales del Consejo Departamental de Desarrollo Urbano y Rural respectivo. Cuando el gobernador obtenga licencia temporal para dejar de ejercer sus funciones, asumirá el gobernador suplente; de igual forma asumirá, cuando el cargo quede vacante por cualquier causa, hasta que sea nombrado el titular, conforme al procedimiento establecido en este artículo.

Tanto el gobernador titular como el suplente deben reunir las mismas calidades de un Ministro de Estado, y en el ejercicio del cargo de gobernador gozan de las mismas inmunidades que éste, debiendo haber estado domiciliados durante los cinco años anteriores a su designación, en el departamento para el que fueren nombrados.

ARTICULO 43. Destituciones. El Presidente de la República podrá destituir de su cargo a los gobernadores, cuando a su juicio convenga al mejor servicio público.

ARTICULO 44. Jurisdicción. La competencia territorial de los gobernadores está circunscrita al del departamento a su cargo.

ARTICULO 45. Sede de la Gobernación. Los gobernadores despacharán sus asuntos oficiales en la cabecera de su respectivo departamento, o en la población del mismo que el Presidente de la República les designe.

ARTICULO 46. Dependencia administrativa. Los gobernadores departamentales dependen de la Presidencia de la República, por conducto del Ministro de Gobernación. Existe independencia de funciones entre los gobernadores y las autoridades militares, salvo las excepciones reguladas por ley.

ARTICULO 47. Atribuciones de los Gobernadores Departamentales. Además de las dispuestas por otras leyes y las contenidas en otras partes de la presente ley, corresponden a los gobernadores departamentales las siguientes atribuciones:

- Representar en su departamento, por delegación expresa, al Presidente de la República.
- Presidir el Consejo Departamental de Desarrollo Urbano y Rural.
- Velar por la efectiva ejecución del presupuesto de inversión asignado a su departamento y realizar el seguimiento y evaluación de dicha ejecución, para lo cual, el Ministerio de Finanzas Públicas deberá remitir oportunamente la información que corresponda.
- Propiciar e impulsar el pronto y eficaz cumplimiento de las políticas y acciones generales y sectoriales del Gobierno Central.
- Velar por la efectiva coordinación de las políticas de los municipios y de las entidades autónomas y descentralizadas que operen en su departamento, de acuerdo con la política general del Gobierno de la República y, en su caso, con las políticas específicas del ramo o sector que corresponda, todo ello sin menoscabo de la autonomía municipal y de conformidad con el artículo 134 literal a) de la Constitución Política de la República.
- Informar directamente y sin demora a los Ministros de Estado sobre faltas, incumplimiento de deberes u otras acciones de los funcionarios y empleados públicos que afecten la prestación de los servicios a cargo del Gobierno Central y de sus entidades descentralizadas y autónomas. Los Ministros de Estado deberán iniciar con dicho informe el expediente o la acción correspondiente de conformidad con la Ley de Servicio Civil.
- Atender cuando sea de su competencia, o canalizar a las autoridades correspondientes, los requerimientos de la población, siempre y cuando sean de beneficio comunitario.
- Nombrar y remover a funcionarios y empleados de la gobernación departamental, así como administrar sus recursos humanos, conforme a la Ley de Servicio Civil. Deberá emitir los instrumentos técnicos y normativos internos que aseguren la eficiente y eficaz administración de la gobernación departamental.
- Requerir y contratar las asesorías específicas necesarias para el mejor cumplimiento de sus funciones.
- Desempeñar las funciones del ramo del Interior que expresamente delegue en los gobernadores el Ministro de Gobernación.
- Dentro de los límites de su competencia, atender y resolver los trámites administrativos.
- Rendir informe mensual a la Presidencia de la República, por conducto del Ministerio de Gobernación, sobre las anomalías o deficiencias en el desempeño de las dependencias y entidades públicas que tienen presencia en su departamento.
- Ejercer en su departamento el control y supervisión de la Policía Nacional Civil, bajo las directrices del Ministro de Gobernación.

ARTICULO 48. Funcionamiento de las gobernaciones departamentales. Las gobernaciones departamentales funcionarán de conformidad con las disposiciones de la presente ley y las normas reglamentarias que la desarrollen. Para su funcionamiento recibirán recursos del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado.

Las dependencias y entidades públicas con sede en el departamento, deben dar el apoyo requerido por los gobernadores departamentales, dentro del ámbito de su competencia.

Las gobernaciones departamentales no pueden ejecutar programas o proyectos de inversión, ni prestar servicios públicos, salvo por delegación expresa de los Ministros de Estado, en la forma y con el financiamiento que éstos determinen.

CAPITULO VI DISPOSICIONES TRANSITORIAS

ARTICULO 49. Reglamento orgánico interno de los Ministerios de Estado. El Organismo Ejecutivo deberá elaborar y poner en vigencia el reglamento orgánico interno de cada Ministerio, en el que se deberá establecer, conforme a lo dispuesto en esta ley, su estructura interna, funciones, mecanismos de coordinación y otras disposiciones para el eficiente y eficaz cumplimiento de sus funciones.

ARTICULO 50. Reglamento orgánico interno de las Secretarías de la Presidencia. En un plazo no mayor de noventa (90) días después de entrar en vigencia esta ley, los titulares de las Secretarías de la Presidencia establecidas por los artículos 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 de la presente ley, deberán elaborar y proponer al Presidente de la República, para su aprobación, el proyecto de reglamento orgánico interno de la Secretaría a su cargo, en el que se han de establecer la estructura, organización y funciones de sus dependencias, conforme a esta ley.

ARTICULO 51. Fondos sociales. En un período no mayor de noventa (90) días, después de entrar en vigencia la presente ley, el Organismo Ejecutivo deberá enviar al Congreso de la República las iniciativas de ley para definir la estructura jurídica y de funcionamiento de todos los fondos sociales, con excepción del Fondo de Inversión Social -FIS- y de los fondos que actualmente dependen de algún Ministerio, cuya ejecución presupuestaria deberá estar incluida en la ejecución presupuestaria del Ministerio respectivo. Los fondos sociales que no dependan del Ministerio, deberán presentar anualmente al Congreso de la República su memoria de labores y deberá contener además su ejecución presupuestaria.

CAPITULO VII DISPOSICIONES FINALES

ARTICULO 52. Transitorio. Secretaría de la Presidencia para la Paz. La Secretaría de la Presidencia para la Paz tiene a su cargo las siguientes funciones:

- Coordinar todas las actividades y esfuerzos derivados de los Acuerdos de Paz que los diferentes Ministerios y entidades de Gobierno deben realizar para impulsar planes y proyectos de desarrollo y reconciliación nacional.
- Realizar las labores de seguimiento sobre el cumplimiento de los distintos compromisos adquiridos por el Gobierno de la República dentro de los diferentes acuerdos suscritos dentro del proceso de paz.
- Coordinar o concertar con entidades descentralizadas, autónomas, municipales y no gubernamentales, públicas y privadas, acciones que colaboren con los esfuerzos de desarrollo y reconciliación nacional, necesarios para el logro y consolidación de la paz.

Para ejercer el cargo de Secretario de la Presidencia para la Paz se requieren los mismos requisitos que se exigen para ser Ministro y gozará del derecho de antecesorio en la misma forma.

Cuando a criterio del Presidente de la República, la Secretaría de la Presidencia para la Paz hubiere cumplido los propósitos y finalidades para la que fue creada, la misma quedará suprimida por disposición de esta ley.

ARTICULO 53. Se reforma el artículo 18 del Código Civil, Decreto Ley 106, el cual queda así:

"ARTICULO 18. Personalidad de las asociaciones civiles. Las instituciones, los establecimientos de asistencia social y demás entidades de interés público, regulan su capacidad civil por las leyes que las hayan creado o reconocido, y las asociaciones por las reglas de su institución, cuando no hubieren sido creadas por el Estado. La personalidad jurídica de las asociaciones civiles es efecto del acto de su inscripción en el registro del municipio donde se constituyan. El acto de su inscripción no convalida las disposiciones de sus estatutos que adolezcan de nulidad o que sean anulables. La acción correspondiente podrá ejercitarse por quien tenga interés en el asunto o por la Procuraduría General de la Nación.

El Organismo Ejecutivo deberá emitir en un plazo no mayor de tres meses después de la entrada en vigencia de la presente ley, el reglamento que norme y establezca los requisitos de inscripción ante el Registro Civil."

ARTICULO 54. Derogatorias. Se derogan:

- El Decreto Número 93 del Congreso de la República, Ley del Organismo Ejecutivo y sus reformas;
- El Decreto Número 227 del Congreso de la República, Ley de Gobernación y Administración de los Departamentos de la República y sus reformas;
- El Decreto Presidencial Número 157 y Decreto Ley Número 380, relativos al Consejo Nacional de Planificación Económica;
- El Decreto Número 1117 del Congreso de la República, Ley de Creación del Ministerio de Trabajo y Previsión Social;
- El Decreto 102-70 del Congreso de la República, relativo a las atribuciones del Ministerio de Agricultura;
- El Decreto Número 106-71 del Congreso de la República, Ley del Ministerio de Finanzas Públicas;
- El Decreto Ley Número 106-83 Ley del Ministerio de Energía y Minas y sus reformas;
- Toda disposición legal que contravenga lo dispuesto por esta ley.

ARTICULO 55. Transitorio. El inciso l) del artículo 36 de la presente ley, entrará en vigencia al ser reformada la Ley de Control de Armas y Municiones, Decreto Número 39-89 del Congreso de la República.

ARTICULO 56. Vigencia. El presente decreto entrará en vigencia a los ocho días de su publicación en el diario oficial.

PASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCION, PROMULGACION Y PUBLICACION.

DADO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, A LOS TRECE DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE.

ARABELLA CASTRO QUIÑONES
PRESIDENTA

ANGEL MARIO SALAZAR MIROS
SECRETARIO

MAURICIO LEON CORADO
SECRETARIO



PALACIO NACIONAL: Guatemala, diez de diciembre de mil novecientos noventa y siete.

FUBLIYUYS Y CUYPLASE

Lois A. Flores
 LOIS ALBERTO FLORES ASTURIAS
 PRESIDENTE DE LA REPUBLICA EN FUNCIONES



Roberto A. Mendoza Rosales
 Ministro de Gobernación



MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS

Normas procedimentales sobre los Convenios Bancarios.

ACUERDO MINISTERIAL NUMERO 57-97

Guatemala, 19 de septiembre de 1997.

El Ministro de Finanzas Públicas,

CONSIDERANDO:

Que es necesario regularizar el procedimiento contenido en los Contratos de Servicio celebrados por el Ministerio de Finanzas Públicas a través de la Dirección General de Rentas Internas y la Dirección General de Aduanas con los Bancos del Sistema Nacional.

POR TANTO:

En uso de las facultades que le confieren los artículos 2º y 4º inciso 4) del Decreto No. 106-71 del Congreso de la República, Ley del Ministerio de Finanzas Públicas y con base en el artículo 11, inciso 1) del Decreto ley 2-86, Ley Orgánica del Presupuesto.

ACUERDA:

LAS NORMAS PROCEDIMENTALES SOBRE LOS CONVENIOS BANCARIOS

ARTÍCULO 1º COMISIÓN BANCARIA Y TRASLADO DE VALORES. Se autoriza a las Direcciones Generales de Rentas Internas y de Aduanas para que puedan contratar los servicios de traslado de valores y de percepción de impuestos, con los Bancos del Sistema Nacional, por lo cual podrán pagar tanto por el servicio de transferir los fondos al Banco de Guatemala como por la comisión que se establezca en los contratos respectivos.

ARTÍCULO 2º ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA. El Ministerio de Finanzas Públicas a través de la Dirección Técnica del Presupuesto, creará los Partidas Presupuestarias respectivas en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de cada Ejercicio Fiscal, para cubrir el pago por traslado de valores y las comisiones a los Bancos del Sistema Nacional por la recaudación de los impuestos.

ARTÍCULO 3º COMISIONES PAGADAS. Se aprueba la regulación de las operaciones presupuestarias y contables efectuadas hasta la presente fecha por las Direcciones Generales mencionadas en el artículo 1. de este Acuerdo Ministerial.

ARTÍCULO 4º PUBLICACIÓN. El presente acuerdo entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial.

Roberto A. Mendoza Rosales
 Ministro de Finanzas Públicas



Roberto A. Mendoza Rosales
 Ministro de Finanzas Públicas

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

Modificase en la forma que se indica, el Acuerdo Gubernativo número 73-84 del 10 de febrero de 1984.

ACUERDO GUBERNATIVO NUMERO 814-97

Palacio Nacional: Guatemala, 26 de noviembre de 1997.

El Presidente de la República,

CONSIDERANDO:

QUE DE CONFORMIDAD CON LA LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD, DECRETO NÚMERO 93-96 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, EL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS ES EL ÓRGANO DEL ESTADO RESPONSABLE DE FORMULAR Y COORDINAR LAS POLÍTICAS, PLANES DEL ESTADO, PROGRAMAS INDICATIVOS RELATIVOS AL SUBSECTOR ELÉCTRICO Y APLICAR DICHA LEY Y SU REGLAMENTO PARA DAR CUMPLIMIENTO A SUS OBLIGACIONES.

CONSIDERANDO:

QUE DE ACUERDO A LA LEY PARA EL CONTROL, USO Y APLICACIÓN DE RADIOISÓTOPOS Y RADIACIONES IONIZANTES, DECRETO LEY NÚMERO 11-88 DEL JEFE DE ESTADO, LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA NUCLEAR ES LA DEPENDENCIA COMPETENTE DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS ENCARGADA DE CONTROLAR, SUPERVISAR, FISCALIZAR Y ESTABLECER LAS CONDICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD QUE DEBEN OBSERVARSE RELACIONADAS CON LAS RADIACIONES IONIZANTES.

CONSIDERANDO:

QUE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA, COMO COORDINADOR Y ENTE SUBSIDIARIO DEL DESARROLLO NACIONAL, CONSIDERA DE URGENCIA NACIONAL LA ELECTRIFICACIÓN DEL PAÍS, CON BASE EN PLANES FORMULADOS POR EL ESTADO Y LAS MUNICIPALIDADES, EN LA CUAL PODRÁ PARTICIPAR LA INICIATIVA PRIVADA, TAL COMO SE PRECEPTUA EN EL ARTÍCULO 129 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA. ASÍ TAMBIÉN, DEBIDO AL DESARROLLO DEL PROCESO DE MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL, EL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, ESTÁ IMPLEMENTANDO MEJORAS QUE RESPONDAN A LAS NECESIDADES DEL MISMO Y QUE LAS DIRECCIONES GENERALES DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO ENERGÉTICO Y DE ENERGÍA NUCLEAR, SON ADECUADAS PARA CUMPLIR CON DICHO OBJETIVO, ES NECESARIO EMITIR LA DISPOSICIÓN LEGAL QUE DE EFECTIVIDAD A DICHO FINES.

POR TANTO:

CON BASE EN LO CONSIDERADO Y FUNDAMENTADO EN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 183 INCISO E) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA,

ACUERDA:

LAS SIGUIENTES REFORMAS AL
 ACUERDO GUBERNATIVO NUMERO 73-84,
 DE FECHA 10 DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO

ARTÍCULO 1.- SE MODIFICA EL ARTÍCULO 1 EL CUAL QUEDA DE LA SIGUIENTE MANERA: "ARTÍCULO 1. ORGANIZACIÓN DEL MINISTERIO: EL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, QUEDA INTEGRADO CON LAS SIGUIENTES DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS:

I. ADMINISTRACIÓN GENERAL:

DIRECCIÓN SUPERIOR:
 MINISTRO
 VICEMINISTRO
 DEPARTAMENTO CONSULTIVO JURÍDICO
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN
 DEPARTAMENTO COMERCIAL
 OFICINA MAYOR
 DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

DEPARTAMENTO DE REGISTRO
 DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN

II. ADMINISTRACIÓN DESCENTRALIZADA:

II.1 DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS
 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO PETROLERO
 DEPARTAMENTO DE TRANSFORMACIÓN Y DISTRIBUCIÓN
 DEPARTAMENTO DE PRECIOS Y COMPILACIÓN DE DATOS

II.2 DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA:
 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
 DEPARTAMENTO DE FOMENTO MINERO
 DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN MINERA
 DEPARTAMENTO DE CARTOGRAFÍA

II.3 DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA:
 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
 UNIDAD DE PLANIFICACIÓN, INFORMÁTICA Y AMBIENTE NÚCLEO-ENERGÉTICO
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA,
 DEPARTAMENTO DE ELECTRICIDAD
 DEPARTAMENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA NUCLEAR
 DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA
 DEPARTAMENTO DE APLICACIONES NUCLEARES

II.4 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS TÉCNICOS:
 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PERSONAL Y TRANSPORTE
 DEPARTAMENTO DE LABORATORIOS
 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS VARIOS

ARTÍCULO 2.- SE MODIFICA EL ARTÍCULO 17 EL CUAL QUEDA:

Diario de Centro América

DECANO DE LA PRENSA CENTROAMERICANA

TOMO CCLXV

8

Guatemala, lunes 11 de diciembre de 2000

8

NUMERO 54

SUMARIO

ORGANISMO LEGISLATIVO

CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA

DECRETO NUMERO 90-2000

ORGANISMO EJECUTIVO

MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS

Acuérdase trasladar a la Municipalidad de Acatenango del departamento de Chimaltenango, la Recaudación y Administración del Impuesto Unico Sobre Inmuebles de su jurisdicción, como se indica.

REGLAMENTO INTERNO DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS.

MINISTERIO DE ECONOMIA

Acuérdase conceder a la entidad MERCK PATENT GMGH, la patente para el modelo de utilidad denominado: CONFIGURACION ERGONOMICA DE PAQUETE, como se indica.

MINISTERIO DE GOBERNACION

Acuérdase reconocer la personalidad jurídica, aprobar sus bases constitutivas y principios doctrinarios de la IGLESIA DE JESUCRISTO "EVANGELIO PODER DE DIOS", como se indica.

PUBLICACIONES VARIAS

MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE,
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
ACTA NUMERO 023-2000

ANUNCIOS VARIOS

Matrimonios ♦ Constituciones de sociedad ♦ Modificaciones de sociedad ♦ Patentes de invención ♦ Registro de marcas ♦ Títulos supletorios ♦ Edictos ♦ Remates.

Morales y Morales, Sociedad Anónima, Confecciones Modernas.—Balance General al 31 de diciembre de 1999.

Morales y Morales, Sociedad Anónima, Confecciones Modernas.—Balance General al 31 de diciembre de 1998.

Opalo, S. A.—Balance General al 30 de junio de 2000.

Delmax, S. A.—Balance General al 30 de junio de 2000.

Pizza de Guatemala, S. A.—Balance General al 30 de junio de 2000.

Industria de Especies de Centroamérica, S. A.—Balance General al 30 de junio de 2000.

Comidas de Guatemala, S. A.—Balance General al 30 de junio de 2000.

Comidas Internacionales, S. A.—Balance General al 30 de junio de 2000.

Comidas, S. A.—Balance General al 30 de junio de 2000.

Cocinas de Guatemala, S. A.—Balance General al 30 de junio de 2000.

Clinica radiológica, S. A.—Balance General al 30 de junio de 1986.

Reforestadora Industrial, S. A.—Balance General al 30 de junio de 1985.

Promotora Continental, S. A.—Balance General al 30 de junio de 1986.

Agrícola La Montañesa, S. A.—Balance General al 30

ORGANISMO LEGISLATIVO

CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, DECRETO NUMERO 90-2000

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA

CONSIDERANDO:

Que el artículo 64 de la Constitución Política de la República de Guatemala declara de interés nacional la conservación y mejoramiento del patrimonio natural de la Nación.

CONSIDERANDO:

Que es obligación fundamental del Estado promover el desarrollo económico de la Nación, por lo que a la par de estimular la actividad industrial debe adoptar medidas que garanticen el equilibrio eficiente para la conservación, sostenibilidad, desarrollo, aprovechamiento y buen uso de los recursos naturales con que cuenta el país.

CONSIDERANDO:

Que de igual forma, el artículo 97 de la Constitución Política de la República establece que el Estado, las municipalidades y los habitantes del territorio nacional están obligados a propiciar el desarrollo social, económico y tecnológico que prevenga la contaminación del ambiente y mantenga el equilibrio ecológico, por lo que se deben dictar las normas necesarias para garantizar que la utilización y el aprovechamiento de la fauna, de la flora, de la tierra, del agua y otros recursos naturales renovables racionalmente, evitando su depredación, contaminación y agotamiento.

CONSIDERANDO:

Que para el cumplimiento de los mandatos constitucionales enunciados y para el efectivo logro del bien común de los guatemaltecos, a través de la promoción de un ambiente sano, se hace necesario elevar al más alto nivel de la estructura institucional del país al sector ambiental, con lo cual se garantice la adopción de un modelo de desarrollo que logre satisfactoriamente el equilibrio ecológico, sistematice la gestión ambiental, prevenga la contaminación del ambiente y permita la sostenibilidad, conservación, protección y mejoramiento de los recursos naturales, evitando su depredación y agotamiento, todo lo cual, en el actual esquema institucional ha sido difícil de alcanzar por la dispersión orgánica, la duplicidad funcional que prevalece, la ausencia de políticas ambientales en función de Estado y de una jerarquía decisoria definida, y justifica crear un ámbito institucional propio y específico representado en la figura del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales.

POR TANTO:

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 171 literal a) de la Constitución Política de la República de Guatemala.

DECRETA:

CAPITULO I

REFORMAS A LA LEY DEL ORGANISMO EJECUTIVO, DECRETO NUMERO 114-97 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA

ARTICULO 1. Se adiciona el numeral 13 al artículo 19, al cual queda así:

"13. Ministerio de Ambiente y Recursos naturales."

ARTICULO 2. Se reforma el artículo 29, el cual queda así:

"Artículo 29. Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación le corresponde atender los asuntos concernientes al régimen jurídico que rige la producción agrícola, pecuaria e hidrobiológica, esta última en lo que le ataña, así como aquellas que tienen por objeto mejorar las condiciones alimenticias de la población, la sanidad agropecuaria y el desarrollo productivo nacional. Para ello tiene a su cargo las siguientes funciones:

- a) Formular y ejecutar participativamente la política de desarrollo agropecuario, de los recursos hidrobiológicos, estos últimos en lo que le ataña, y en coordinación con el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales diseñar la política para el manejo del recurso pesquero del país, de conformidad con la ley;
- b) Proponer y velar por la aplicación de normas claras y estables en materia de actividades agrícolas, pecuarias y fitosanitarias, y de los recursos hidrobiológicos, estos últimos en lo que le corresponda, buscando la eficiencia y competitividad en los mercados y teniendo en cuenta la conservación y protección del medio ambiente;
- c) Definir en conjunto con el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales la política de ordenamiento territorial y de utilización de tierras nacionales y promover la administración descentralizada en la ejecución de esta política; deberá velar por la instauración y aplicación de un sistema de normas jurídicas que definan con claridad los derechos y responsabilidades vinculados a la posesión, uso, usufructo y, en general, la utilización de dichos bienes, mientras permanezcan bajo el dominio del Estado;
- d) Formular la política de servicios públicos agrícolas, pecuarios, fitosanitarios y de los recursos hidrobiológicos, estos últimos en lo que le ataña, y administrar descentralizadamente su ejecución;
- e) En coordinación con el Ministerio de Educación, formular la política de educación agropecuaria ambientalmente compatible, promoviendo la participación comunitaria;
- f) Diseñar, en coordinación con el Ministerio de Economía, las políticas de comercio exterior de productos agropecuarios, y de los recursos hidrobiológicos, estos últimos en lo que le ataña;
- g) Impulsar el desarrollo empresarial de las organizaciones agropecuarias, pecuarias e hidrobiológicas, estas últimas en lo que le ataña, para fomentar el desarrollo productivo y competitivo del país;
- h) Desarrollar mecanismos y procedimientos que contribuyan a la seguridad alimentaria de la población, velando por la calidad de los productos;
- i) Ampliar y fortalecer los procedimientos de disponibilidad y acceso a la información estratégica a productores, comercializadores y consumidores;
- j) Ejercer control, supervisión y vigilancia en la calidad y seguridad de la producción, importación, exportación, transporte, registro, disposición y uso de productos plaguicidas y fertilizantes, rigiéndose por estándares internacionalmente aceptados."

ARTICULO 3. Se adiciona el artículo 29 "bis", con el texto siguiente:

"Artículo 29 "bis". Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. Al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales le corresponde formular y ejecutar las políticas relativas a su ramo; cumplir y hacer que se cumpla el régimen concerniente a la conservación, protección, sostenibilidad y mejoramiento del ambiente y los recursos naturales en el país y el derecho humano a un ambiente saludable y ecológicamente equilibrado, debiendo prevenir la contaminación del ambiente, disminuir el deterioro ambiental y la pérdida del patrimonio natural. Para ello tiene a su cargo las siguientes funciones:

- a) Formular participativamente la política de conservación, protección y mejoramiento del ambiente y de los recursos naturales, y ejecutarla en conjunto con las otras autoridades con competencia legal en la materia correspondiente, respetando el marco normativo nacional e internacional vigente en el país;
- b) Formular las políticas para el mejoramiento y modernización de la administración descentralizada del sistema guatemalteco de áreas protegidas, así como para el desarrollo y conservación del patrimonio natural del país, incluyendo las áreas de reserva territorial del Estado;
- c) Formular, en coordinación con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, la política sobre la conservación de los recursos pesquero y suelo, estableciendo los principios sobre su ordenamiento, conservación y sostenibilidad, velando por su efectivo cumplimiento;
- d) En coordinación con el Consejo de Ministros, incorporar el componente ambiental en la formulación de la política económica y social del Gobierno, garantizando la inclusión de la variable ambiental y velando por el logro de un desarrollo sostenible;
- e) Diseñar, en coordinación con el Ministerio de Educación, la política nacional de educación ambiental y vigilar porque se cumpla;
- f) Ejercer las funciones normativas, de control y supervisión en materia de ambiente y recursos naturales que por ley le corresponden, velando por la seguridad humana y ambiental;
- g) Definir las normas ambientales en materia de recursos no renovables;
- h) Formular la política para el manejo del recurso hídrico en lo que corresponda a contaminación, calidad y para renovación de dicho recurso;
- i) Controlar la calidad ambiental, aprobar las evaluaciones de impacto ambiental, practicarlas en caso de riesgo ambiental y velar porque se cumplan, e imponer sanciones por su incumplimiento;
- j) Elaborar las políticas relativas al manejo de cuencas hidrográficas, zonas costeras, océanos y recursos marinos;
- k) Promover y propiciar la participación equitativa de hombres y mujeres, personas naturales o jurídicas, y de las comunidades indígenas y locales en el aprovechamiento y manejo sostenible de los recursos naturales;
- l) Elaborar y presentar anualmente el informe ambiental del Estado;
- m) Promover la conciencia pública ambiental y la adopción del criterio de precaución."

ARTICULO 4. Se reforma la literal c) del artículo 34, la cual queda así:

- "c) Cumplir las normas y especificaciones ambientales que en materia de recursos no renovables establezca el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales."

CAPITULO II

REFORMAS A LA LEY DE PROTECCION Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE, DECRETO NUMERO 68-86 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA

ARTICULO 5. Se reforma el artículo 2, el cual queda así:

"Artículo 2. La aplicación de esta ley y de sus reglamentos compete al Organismo Ejecutivo, a través del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, cuyas funciones establece la Ley del Organismo Ejecutivo."

CAPITULO III

REFORMAS A LA LEY FORESTAL, DECRETO NUMERO 101-96 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA

ARTICULO 6. Se reforman las literales a) y h) del artículo 10, las cuales quedan así:

- "a) El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, quien la preside y nombrará a su suplente.
- h) Un representante titular y su suplente designado por el Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación."

ARTICULO 7. En cualquier disposición normativa de carácter ordinario o reglamentaria en que se haga referencia al Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación como Presidente del Instituto Nacional de Bosques -INAB- deberá entenderse que se refiere al Ministro de Ambiente y Recursos Naturales.

CAPITULO IV
DISPOSICIONES FINALES Y DEROGATORIAS

ARTICULO 8. Liquidación de la Comisión Nacional del Medio Ambiente y de la Secretaría del Medio Ambiente y los Recursos Naturales de la Presidencia de la República. El patrimonio, personal técnico y presupuesto de la Comisión Nacional del Medio Ambiente y de la Secretaría del Medio Ambiente y los Recursos Naturales de la Presidencia de la República deberán integrarse al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. Para los efectos de la liquidación de la CONAMA y de la Secretaría, el Ministro de Ambiente y Recursos Naturales nombrará una Comisión Liquidadora dentro de los 30 días siguientes a la vigencia del presente decreto, teniendo un plazo máximo de 90 días para cumplir con su función.

ARTICULO 9. A partir de la vigencia del presente decreto, en toda disposición legal y administrativa que se refiera a la Comisión Nacional del Medio Ambiente y a la Secretaría del Medio Ambiente y los Recursos Naturales de la Presidencia de la República, debe entenderse que se refiere al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales.

ARTICULO 10. El Organismo Ejecutivo deberá elaborar y poner en vigencia el Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales dentro de los 120 días contados a partir de la instalación del ministerio, en el que deberá establecer su estructura interna, funciones, procedimientos de coordinación y otras disposiciones para el eficaz y eficiente cumplimiento de sus funciones.

ARTICULO 11. Disposiciones Derogatorias. Se derogan los artículos 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 y 38 de la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, Decreto Número 68-86 del Congreso de la República, y el Acuerdo Gubernativo Número 35-2000 del Presidente de la República.

ARTICULO 12. El presente decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el diario oficial.

PASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCION, PROMULGACION Y PUBLICACION.

DADO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, A LOS TREINTA DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL

JOSE EFRAIN RIOS MONTT
PRESIDENTE

CARLOS WOLTERS MONROY
SECRETARIO

CARLOS FERNANDEZ RUBIO
SECRETARIO



SANCION AL DECRETO DEL CONGRESO NUMERO 90-2000

PALACIO NACIONAL: Guatemala, ocho de diciembre del año dos mil.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

JUAN FRANCISCO REYES LOPEZ
Vicepresidente de la República en Funciones de la Presidencia



Byron Humberto Barrientos Díaz
MINISTRO DE GOBERNACION

Lic. Luis Solís Angulo C.
SECRETARIO GENERAL
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

ORGANISMO EJECUTIVO



MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS

Acuérdase trasladar a la Municipalidad de Acatenango del departamento de Chimaltenango, la Recaudación y Administración del Impuesto Unico Sobre Inmuebles de su jurisdicción, como se indica.

ACUERDO MINISTERIAL 187-2000

Guatemala, 24 de noviembre de 2000

El Ministerio de Finanzas Públicas

CONSIDERANDO:

Que el Decreto número 15-98 del Congreso de la República, Ley del Impuesto Unico Sobre Inmuebles, en sus Artículos 2 inciso d) y 14, faculta al Ministerio de Finanzas Públicas para delegar las funciones de Recaudación y Administración del relacionado Impuesto a las municipalidades del país.

CONSIDERANDO:

Que la Municipalidad del Municipio de Acatenango, del Departamento de Chimaltenango, mediante oficio sin número, de fecha 25 de octubre del 2000, ha indicado poseer la capacidad técnica y administrativa para recaudar y administrar el Impuesto en referencia.

POR TANTO:

Con fundamento en lo considerado y en cumplimiento del Artículo 119 inciso b) de la Constitución Política de la República de Guatemala y lo que para el efecto preceptúan los Artículos 4 y 27 incisos d), e) y m) del Decreto Número 114-97 del Congreso de la República, Ley del Organismo Ejecutivo.

ACUERDA:

Artículo 1. Del traslado de atribuciones en materia del Impuesto Unico Sobre Inmuebles. Trasladar a la Municipalidad de Acatenango, del Departamento de Chimaltenango, la Recaudación y Administración del Impuesto Unico Sobre Inmuebles de su jurisdicción, con los consecuentes compromisos y alcances.

Artículo 2. De la Información. La Dirección General de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles dará copia a la Municipalidad de Acatenango, Chimaltenango, de los registros catastrales, gráficos y descriptivos, matriculares y de cuenta corriente que existan en sus archivos. De igual manera, la información generada de la Recaudación del Impuesto por parte de la Municipalidad, será trasladada trimestralmente a la Dirección General de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles, para efectos estadísticos. Los costos de reproducción de la información citada, serán con cargo a la Municipalidad.

Artículo 3. De los procedimientos. La Municipalidad de Acatenango, Chimaltenango, aplicará las normas y procedimientos establecidos en la Ley del Impuesto Unico Sobre Inmuebles y Leyes conexas.

Artículo 4. De la recaudación y destino. La Municipalidad de Acatenango, cobrará el Impuesto y Multas generadas, de conformidad con lo que establecen los artículos 21, 22, 24 y 25 del Decreto número 15-98 del Congreso de la República, Ley del Impuesto Unico Sobre Inmuebles y según lo establece el artículo 2 de la misma ley, del monto de lo recaudado deberá destinar como mínimo un setenta por ciento (70%) para inversiones en servicios básicos y obras de infraestructura de interés y uso colectivo y hasta un máximo del treinta por ciento (30%) para gastos administrativos de funcionamiento.

Artículo 5. De la Administración. La Municipalidad de Acatenango, Chimaltenango, instituirá los Sistemas de Registro Matricular y de Cuenta Corriente, teniendo a su cargo la actualización y mantenimiento de los mismos en su jurisdicción.

Artículo 6. De la Vigencia y Publicación. Este Acuerdo empezará a regir el día siguiente de su Publicación en el Diario Oficial.

Comuníquese y cúmplase.

Manuel P. Mijangos C.
VICEMINISTRO DE FINANZAS PUBLICAS



Manuel P. Mijangos C.
MINISTRO DE FINANZAS PUBLICAS

REGLAMENTO INTERNO DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS.

ACUERDO MINISTERIAL No. 204-2000

Guatemala, 4 de diciembre de 2000

El Ministro de Finanzas Públicas,

CONSIDERANDO

Que, mediante Acuerdo Gubernativo número 476-2000, de fecha 10 de octubre del 2000, fue emitido el Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Finanzas Públicas, y que dentro del mismo, se instituyó la Administración General, como parte de la estructura organizacional de dicho Ministerio;

CONSIDERANDO:

Que, por disposición legal contenida en el citado Acuerdo, las unidades y dependencias administrativas de este Ministerio deberán elaborar su respectivo reglamento interno, con el objeto de establecer su estructura organizacional, así como definir las funciones de cada una de sus dependencias; y que dichos reglamentos serán aprobados mediante Acuerdo Ministerial;



Recopilación de las Leyes de la República de Guatemala

1948 - 1949

Contiene este volumen las disposiciones emitidas desde el
15 de marzo de 1948 hasta el 14 del mismo mes de 1949

COLECCIONADAS POR

MATEO MORALES URRUTIA Y ROBERTO AZURDIA ALFARO

TOMO LXVII

GUATEMALA, C. A.-1957

- a) El Capítulo V del Decreto gubernativo número 2655, se refiere a impuestos adicionales de guerra;
- b) El impuesto sobre las utilidades de las Empresas Lucrativas a que se refiere el artículo 38 del Decreto gubernativo número 2655, comprendido en el Capítulo V ya citado, es un impuesto adicional, y en consecuencia, las empresas afectadas por el mismo, además de estar obligadas al pago del impuesto ordinario sobre utilidades que pesa o ha pesado sobre todas las empresas lucrativas, deben pagar el impuesto que dicho artículo indica; y
- c) Mientras no exista cosa juzgada en resolución dictada por Tribunal competente, o no haya prescrito la acción para efectuar contrarrevisión y liquidaciones, las autoridades fiscales deben efectuar y practicar las liquidaciones respectivas, de acuerdo con la interpretación indicada, y exigir el pago del impuesto correspondiente.

Artículo 2°—Esta ley se declara de necesidad nacional y fue aprobada de conformidad con el artículo 49 de la Constitución de la República.

Artículo 3°—El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial.¹

Pase al Organismo Ejecutivo para su publicación y cumplimiento.

Dado en el Palacio del Organismo Legislativo: en Guatemala, el diecinueve de mayo de mil novecientos cuarenta y ocho, año cuarto de la Revolución.

V. M. GIORDANI,
Presidente.

ROBERTO MONZON MALICE,
Secretario.

D. A. CETINA P.,
Secretario.

Palacio Nacional: Guatemala, veintisiete de mayo de mil novecientos cuarenta y ocho.

Publiquese y cúmplase.

JUAN JOSE AREVALO.

El Ministro de Hacienda y
Crédito Público,

C. LEONIDAS ACEVEDO.

¹ Publicado en el número 60, tomo 52 del Diario Oficial del 4 de junio de 1948.

DECRETO NUMERO 512

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA
DE GUATEMALA,

CONSIDERANDO:

Que el Decreto legislativo número 1618 no concuerda en sus disposiciones con las normas que actualmente fija la Constitución de la República, la cual en su artículo 165 señala una ley especial para la organización del Ministerio Público;

CONSIDERANDO:

Que dicha ley debe dictarse teniendo en cuenta la importancia de las funciones del Ministerio Público y la necesidad de que llene debidamente su cometido, con la indispensable autonomía de funciones que le da su carácter de institución auxiliar de la justicia y de la Administración Pública;

POR TANTO,

DECRETA:

La siguiente

Ley Orgánica del Ministerio Público

CAPITULO I

Organización del Ministerio Público

Artículo 1°—El Ministerio Público es una institución auxiliar de los Tribunales y de la Administración Pública, que tiene a su cargo:¹

- 1° Ejercer la personería de la Nación conforme lo dispone el artículo 13;
- 2° Representar provisionalmente a los ausentes, menores e incapaces, mientras éstos no tengan personería legítima conforme el Código Civil y demás leyes;
- 3° Intervenir ante los Tribunales de Justicia en todos aquellos asuntos en que esté llamado a hacerlo por ministerio de la ley;
- 4° Promover las gestiones necesarias para obtener la recta y pronta administración de justicia;
- 5° Asesorar jurídicamente a la Administración Pública en todos los casos en que aquélla le consulte; y

¹ El Ministerio Público fue creado por Decretos números 57 de 17 de agosto de 1839 y 3 de agosto de 1854. Recopilación antigua de Pineda Mont, tomo I, página 192.

6° Intervenir en todos los demás negocios que las leyes determinen.

Artículo 2°—El Procurador General de la Nación es el jefe del Ministerio Público, dirige la institución y tiene a su cargo exclusivo la facultad a que se refiere el inciso 1° del artículo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 9°. En casos específicos podrá delegar dicha facultad en otros funcionarios de la institución u otorgar poderes para asuntos determinados cuando las circunstancias lo requieran.

Artículo 3°—Las funciones del Ministerio Público son autónomas, salvo en los casos en que, conforme a la ley, deba atender instrucciones especiales. El presupuesto del Ministerio Público y sus dependencias figurará en una sección especial del que corresponde al Organismo Ejecutivo y sus acuerdos de erogación serán firmados por el Presidente de la República y refrendados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Los funcionarios auxiliares del Ministerio Público dependerán administrativamente del respectivo organismo a que pertenezcan; pero en lo relativo al servicio de la institución coordinarán sus funciones bajo la dirección del Procurador General.

Artículo 4°—Son funcionarios auxiliares del Ministerio Público los fiscales y procuradores de las Salas de Apelaciones, procuradores de pobres, los abogados consultores de los Ministerios y dependencias del Organismo Ejecutivo, y los síndicos municipales.

Artículo 5°—El Procurador General y su suplente serán nombrados por el Congreso y durarán en sus funciones cuatro años coincidentes con el período judicial. Ambos deberán tener las calidades que se requieren para ser magistrados de la Corte de Apelaciones.

Artículo 6°—El Ministerio Público funcionará por medio de las siguientes secciones:

- Primera: Procuraduría;
- Segunda: Fiscalía;
- Tercera: Consultoría.

Cada una de las secciones estará a cargo inmediato de uno de los agentes del Ministerio Público, quienes se suplirán unos a otros, conforme lo determine el Procurador General, en casos de ausencia, falta temporal o impedimento.

Artículo 7°—Además de los jefes de las secciones a que se refiere el artículo anterior y de los agentes que se adscriban a las mismas, el Procurador General establecerá, conforme las circunstancias lo demanden, agentes del Ministerio Público con jurisdicción en uno o varios departamentos. Los jefes de Sección y demás agentes serán nombrados por

el Procurador General y fungirán durante el respectivo período judicial; deben tener las calidades y requisitos que se exigen para ser juez de Primera Instancia y gozan de los mismos privilegios o inmunidades que éstos. Sin embargo, el Procurador General podrá nombrar agentes departamentales que no sean abogados de los Tribunales cuando las circunstancias lo hagan necesario. En tales casos, los nombrados fungirán provisionalmente y sin sujeción al período judicial.

Artículo 8°—El secretario de la institución y empleados de la Secretaría serán de libre nombramiento y remoción del Procurador General y funcionarán adscritos a las tres secciones, conforme el Reglamento Interno del Ministerio Público.

Artículo 9°—En los casos de renuncia, remoción, suspensión definitiva o falta absoluta del Procurador General, entrará a subrogarlo el procurador suplente mientras se elija y tome posesión el titular, quien fungirá durante el resto del período constitucional.

Las faltas o ausencias temporales serán suplidas por el jefe de la Sección de Procuraduría, quien actuará también en los casos de impedimento del Procurador General.

Artículo 10.—Son causas de inhabilitación de los funcionarios del Ministerio Público para conocer en asuntos determinados las mismas que para los jueces determina la Ley Constitutiva del Organismo Judicial¹ como causales de impedimento o recusación, así como tener parentesco con el juez, magistrado o funcionario ante quien les toque ejercer su cometido. El impedimento o excusa se prueba mediante simple razón que suscribirá el respectivo funcionario, quien será subrogado por el que determine el Procurador General.

Artículo 11.—El Procurador General podrá ser removido por el Congreso por notoria mala conducta, negligencia o ineptitud, debidamente declaradas por la Corte Suprema de Justicia, y en el caso de los agentes, por el propio Procurador General, conforme a lo que dispone el artículo 50 de esta ley.

Los funcionarios del Ministerio Público no podrán ser recusados, pero sí podrá deducirseles responsabilidades si actúan contra impedimento legal.

CAPITULO II

De la Procuraduría

Artículo 12.—La Sección de Procuraduría tendrá a su cargo la personería de la Nación y la representación y defensa de las personas a que se refiere el inciso 2° del artículo 1°.

¹ Decreto gubernativo número 1862, tomo 55, y en Leyes Vigentes de Gobernación y Justicia.

REPUBLICA DE GUATEMALA

Artículo 13.—El ejercicio de la personería de la Nación comprende las siguientes funciones:¹

- 1º Representar y sostener los derechos de la Nación en todos los juicios en que fuere parte, de acuerdo con las instrucciones del Ejecutivo, y promover la oportuna ejecución de las sentencias que se dicten en ellos;
- 2º Intervenir, si así lo dispusiere el Ejecutivo y conforme a las instrucciones de éste, en los negocios en que estuviere interesada la Nación, formalizar los actos y suscribir los contratos que sean necesarios a tal fin; y
- 3º Cumplir los deberes que, en relación con esta materia, señalen otras leyes al Ministerio Público o al Procurador General de la Nación.

Artículo 14.—El Procurador General ejercerá la personería de la Nación y cuando conforme al artículo 2º la delegue en otros, éstos deberán proceder de acuerdo con las instrucciones que, en cada caso, les comunique aquél. No obstante cualquier delegación, el Procurador General podrá intervenir personalmente en los asuntos en cualquier momento. El Procurador General tendrá además en esta materia, las siguientes atribuciones específicas:

- 1º Investigar de oficio cualquier negocio en que esté interesada la Nación y dirigirse, en su caso, al Ministerio correspondiente exponiendo los hechos, sugiriendo la forma de proceder y solicitando instrucciones sobre el particular;
- 2º Recibir denuncias sobre tales negocios e investigarlas para los efectos del inciso anterior;
- 3º Rendir informe de los asuntos en que esté interviniendo, cuando se lo pida el Ejecutivo o cuando lo crea necesario, a efecto de que se le den las instrucciones pertinentes; y
- 4º Velar porque los procuradores de las salas cumplan adecuadamente con los deberes que les señala esta ley, y pedir la intervención disciplinaria de la Sala o de la Corte Suprema, cuando así no lo hagan.

Artículo 15.—Son atribuciones y deberes del jefe de la Sección de Procuraduría:

- 1º Suplir al Procurador General y desempeñar todas las funciones en los casos de falta temporal, y subrogarlo en aquellos asuntos en que se encontrare impedido;
- 2º Tener a su cuidado inmediato la adecuada tramitación de los negocios que se ventilen en la Sección y velar porque todas las gestiones se hagan precisamente dentro de los términos legales;

- 3º Cooperar con el Procurador General en el estudio de los asuntos y preparar los memoriales, exposiciones, demandas o alegatos que aquél le encomiende;
- 4º Rendir los informes que le pida el Procurador General sobre los asuntos que se estén ventilando; y
- 5º Recabar de cualquier tribunal, oficina o funcionario público, los informes, documentos y certificaciones que sean necesarios.

Artículo 16.—Cuando el Procurador General haya pedido instrucciones a algún Ministerio de Estado con relación a determinado asunto, y transcurriere el término de quince días o el que la ley señale sin haberlas obtenido, procederá a formular su pedimento, según su propio criterio y conforme a derecho.

Artículo 17.—El Ejecutivo suministrará al Procurador General las expensas indispensables que se requieran para sus actuaciones, cuando sean solicitadas por éste.

Artículo 18.—Las notificaciones que para contestación de demanda hubieren de hacerse al Procurador General de la Nación, se practicarán por medio de cédula, a la cual deberá acompañarse la copia o copias de ley. La cédula deberá ser entregada personalmente al Procurador General o al jefe de la Sección; y desde la fecha de la entrega, anotada por el notificador, comenzará a correr un lapso de quince días, a cuya terminación se considerará consumada la notificación. Sin embargo, el Procurador General puede darse por notificado en cualquier momento dentro de ese lapso.

Artículo 19.—Sin expresa autorización del correspondiente Ministerio de Estado, el Procurador General no puede absolver posiciones ni confesar demandas, pedir el sobreseimiento de los asuntos, celebrar transacciones o compromisos, o desistir de los juicios o recursos que promueva en ejercicio de la personería de la Nación. Tampoco podrá dejar de promover los recursos pertinentes contra las resoluciones desfavorables, en todo o en parte, a los intereses que represente en ejercicio de esa misma personería. Los tribunales en ningún caso podrán declarar confesa a la Nación en rebe'día del Procurador General, pero éste está en la obligación de concurrir a la diligencia de posiciones.

Artículo 20.—La representación y defensa de ausentes, menores e incapaces la ejercerá en la capital el jefe de la Sección de Procuraduría, y en los departamentos el procurador de la respectiva sala jurisdiccional. Si hubiere en el lugar agente titular del Ministerio Público, éste tendrá la representación. El jefe de la Sección de Procuraduría podrá encargar determinados casos a la gestión de los procuradores de Sala con sede en la capital.

¹ Véanse los artículos 90 y 426 del Código de Derecho Internacional Privado, Decreto legislativo número 1575, tomo 48.

Artículo 21.—La gestión del Ministerio Público en estos casos debe limitarse a proveer de representación a los ausentes, menores o incapaces; a gestionar las medidas necesarias y urgentes para la salvaguardia de sus bienes o de sus personas, así como velar en los casos de exposición o abandono de menores o incapaces para que sean debidamente amparados por las instituciones o asilos correspondientes. En ningún caso podrá contestar demandas, pero sí interponerlas.

Artículo 22.—En los departamentos donde no hubiere procuradores de salas ni titular nombrados, los síndicos municipales de las cabeceras departamentales ejercerán sin exclusividad dichas funciones.

Artículo 23.—Los procuradores de las salas y los síndicos municipales informarán a la Sección de Procuraduría de las gestiones que hagan y de su resultado.

CAPITULO III

De la Fiscalía

Artículo 24.—Corresponde a la Fiscalía:

- 1º Velar porque en los Tribunales de la República se apliquen rectamente las leyes en los procesos penales y en todos aquellos juicios en que estén interesados el Estado o el Fisco, o bien afecten al orden o al interés público o a las buenas costumbres; y, en general, por la buena marcha de la administración de justicia;
- 2º Promover, de oficio o a excitativa del Ejecutivo, acusación contra los funcionarios o empleados públicos que dieren motivo a ser enjuiciados;
- 3º Promover la acción de la justicia y de la Administración Pública en cuanto concierne al interés o al orden público, y en cualquier otro caso que le señalen las leyes;
- 4º Recibir las citaciones o notificaciones administrativas que previenen las leyes e intervenir cuando lo estime conveniente en los asuntos en que fuere citada o notificada; y
- 5º Intervenir en los recursos de amparo en la forma que determina la ley.

Artículo 25.—Son también atribuciones de la Fiscalía:

- 1º Intervenir en las causas penales de acción pública cuando la pena que corresponda imponer no sea menor de cinco años de prisión correccional, o cuando el delito afecte al Estado, al Fisco o a la Hacienda Pública, concurriendo, si necesario fuere, a la formación del sumario y cumpliendo con los deberes que le impongan las leyes;

- 2º Investigar si alguna persona se encuentra detenida o presa ilegalmente o cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad individual, o sufre vejámenes, torturas, exacciones ilegales o coacción; denunciar estos hechos para los efectos de la exhibición personal y solicitar la aplicación de las sanciones a que hubiere lugar;
- 3º Presentar querellas y formalizar acusación en representación de los menores que, habiendo sido sujetos pasivos de delitos de acción privada, no recibieren la protección de la justicia por negligencia, incuria o pobreza de sus padres o representantes legales;
- 4º Evacuar las audiencias que le confieren los Tribunales en asuntos de índole civil, en los que por mandato de la ley, deba oírse al Ministerio Público; y
- 5º Recibir las citaciones o notificaciones judiciales que previenen las leyes e intervenir, cuando lo estime conveniente, en los asuntos en que fuere citado o notificado.

Artículo 26.—Ejercen la fiscalía: el Procurador General de la Nación, el jefe de la Sección de Fiscalía, los agentes adscritos a ella, los agentes titulares departamentales, los fiscales de la Corte de Apelaciones, los síndicos municipales y los agentes especiales que en casos determinados nombrare el Procurador General de la Nación.

Artículo 27.—Son atribuciones del Procurador General de la Nación en cuanto a fiscalía:

- 1º Coordinar el armónico funcionamiento de la institución, y resolver las cuestiones que se susciten entre los funcionarios de la misma en materia de atribuciones o competencia;
- 2º Unificar la acción del Ministerio Público con la cooperación del jefe de la Sección de Fiscalía, tomar las medidas convenientes al efecto, y dar las directrices necesarias a los funcionarios de la institución;
- 3º Exigir a los funcionarios del Ministerio Público las informaciones que le permitan darse cuenta de la marcha de la administración de justicia y del desarrollo de los procesos penales y de aquellos juicios en que estén interesados el Estado, el Fisco o el orden público;
- 4º Tomar las medidas conducentes a la recta aplicación de las leyes en los juicios a que se refiere el ordinal anterior, y a la buena marcha de la administración de justicia;
- 5º Sugerir a la Presidencia del Organismo Judicial las reformas que crea convenientes introducir en la administración de justicia;
- 6º Intervenir en los juicios o procedimientos relativos a la constitucionalidad de las leyes, a los

conflictos entre ellas y a la nulidad de los actos del Poder Público; y

- 7º Corregir disciplinariamente a los agentes y empleados de la institución, así como nombrar o remover a estos últimos.

Artículo 28.—Corresponde al jefe de la Sección de Fiscalía:

- 1º Cooperar con el jefe de la institución en todas las atribuciones que señala el artículo anterior;
- 2º Velar porque la Fiscalía cumpla eficientemente con todas las atribuciones que le incumben;
- 3º Recibir las notificaciones pertinentes a la liquidación de impuestos sobre legados, herencias y donaciones, evacuar las audiencias e intervenir en la defensa de los intereses fiscales siempre que sea necesario; y
- 4º Dictaminar en asuntos de índole administrativa, cuando la ley establezca que debe oírse al Ministerio Público.

Artículo 29.—Son atribuciones y deberes de los fiscales de la Corte de Apelaciones:

- 1º Ejercer el Ministerio Público y actuar como personero de la institución ante los juzgados jurisdiccionales de su respectiva Sala en todos los casos a que se contrae el artículo 25, sin perjuicio de lo que disponen los artículos 30 y 31;
- 2º Remitir al jefe de la Sección de Fiscalía copia dentro de tercero día, de los dictámenes y pedimentos que hagan a nombre de la institución; y
- 3º Atender las instrucciones y directrices que reciban del Procurador General con el objeto de unificar la acción del Ministerio Público, y cuando no estuvieren de acuerdo con ellas expresarlo así en sus dictámenes, pero exponiendo siempre uno y otro puntos de vista.

Artículo 30.—En los departamentos que, sin ser sede de una Sala tuvieran agente titular del Ministerio Público, éste desempeñará todas las funciones que señalan los artículos 24 y 25. A la inversa, donde existiere Sala y no agente titular, el fiscal las tendrá todas a su cargo. En la capital de la República y donde concurriera asiento de una Sala y de agente titular del Ministerio Público, éste o el jefe de la Sección de Fiscalía, en su caso, tendrán las atribuciones que enumera el artículo 24, y los fiscales de Sala las que consigna el artículo 25.

Artículo 31.—En los departamentos donde no hubiere agente titular ni fiscal residente, los síndicos municipales ejercerán sin exclusividad en sus respectivas jurisdicciones los deberes que señalan

los artículos 24 y 25, salvo lo dispuesto en el inciso 4º del artículo 25 que incumbirá siempre al fiscal de la Sala jurisdiccional.

Artículo 32.—Adscritos a la Sección de Fiscalía en la capital podrán funcionar uno o varios agentes, según lo demanden las necesidades del servicio y lo provea el Presupuesto General de Gastos. Estos agentes tendrán las funciones que les asigne el Procurador General o el reglamento interno del Ministerio Público y cuando sean destacados a los departamentos en misiones especiales, tendrán todas las facultades de fiscalía que enumera esta ley, así como las que se les hayan delegado conforme el artículo 2º.

Artículo 33.—El Ministerio Público, al formular sus pedimentos, está obligado a exponer sucintamente los hechos y a proponer las cuestiones de derecho que surjan de los mismos, emitiendo el juicio que, respecto a la cuestión de que se trate, se haya formado. Concluirá formulando proposiciones claras y precisas y citando las leyes que les sirvan de fundamento.

CAPITULO IV

De la Consultoría

Artículo 34.—La institución asesorará a los Ministerios de Estado y dependencias del Organismo Ejecutivo en todos aquellos asuntos en que, sin tener intervención obligatoria, se le mande oír. Los dictámenes contendrán la opinión del Ministerio Público, sin ningún pedimento.

Artículo 35.—Ejercerán la consultoría: el Procurador General, el jefe de la Sección, los abogados consultores adscritos a los Ministerios y dependencias del Ejecutivo y cualesquiera otros abogados que llame el Procurador General para dictaminar en casos específicos.

Artículo 36.—Se considerarán como abogados consultores permanentes de la institución, todos aquellos que a cualquier título de asesoría trabajen en los Ministerios y dependencias del Ejecutivo, ya sea en oficinas jurídicas o en departamentos legales o consultivos. Se exceptúan los Consejos Técnicos, aunque estén integrados por abogados.

Artículo 37.—Los Ministerios y oficinas que tengan abogados consultores a su servicio lo harán saber al Ministerio Público para que éste los incorpore a su Sección de Consultoría, sin necesidad de acuerdo o nombramiento especial. Serán considerados como funcionarios auxiliares de la institución y devengarán los sueldos o remuneraciones que les sean asignados en el Ministerio u oficina donde trabajan y en los cuales continuarán fungiendo.

Artículo 38.—Cuando un Ministerio o dependencia del Ejecutivo requiera opinión consultiva de carác-

ter jurídico, mandará pasar el asunto de que se trate a su abogado consultor y, si no lo tuviere, a la Sección de Consultoría. En el primer caso, el abogado consultor extenderá y suscribirá su dictamen a nombre de la institución y lo pasará al visto bueno del Procurador General. En el segundo, emitirá dictamen el Procurador General, el jefe de la Sección o el abogado consultor que aquél designe. Todo dictamen deberá acompañarse de una copia firmada para el archivo del Ministerio Público y, si no fuere emitido por el Procurador General deberá llevar su visto bueno.

Artículo 39.—Cada Ministerio de Estado podrá tener por lo menos un abogado consultor a su servicio.

Artículo 40.—El Procurador General pondrá especial cuidado en la revisión de los dictámenes con el objeto de lograr la mayor uniformidad y concordancia en los diversos puntos de vista. Si alguno no mereciere su aprobación, llamará a su autor para lograr su modificación voluntaria o llegar a un acuerdo; pero si ello no se lograra, expresará al pie del dictamen las razones por las que discrepa o los puntos en que no esté conforme, indicando al propio tiempo cuál es el punto de vista de la institución.

Artículo 41.—Cuando el abogado llamado a dictaminar en un asunto tenga impedimento, el Procurador General, sin formar artículo, designará a cualquier otro o dictaminará personalmente.

Artículo 42.—El jefe de la Sección deberá colaborar con el Procurador en la revisión de los dictámenes, llevará una compilación de los mismos debidamente clasificada por ramos y pondrá especial cuidado en evitar que se emitan dictámenes contradictorios o que discrepen entre sí. Al constatar un caso semejante deberá ponerlo en inmediato conocimiento del Procurador General para que se haga la rectificación procedente.

Artículo 43.—Cuando ello sea necesario y el presupuesto de gastos lo permita, el Procurador General podrá nombrar uno o más abogados consultores permanentes adscritos a la sección.

Artículo 44.—El Procurador General podrá designar para abrir dictamen en casos particulares a cualquier abogado de los Tribunales. El así llamado no podrá excusarse, salvo que tenga impedimento; pero tendrá derecho a un honorario de diez a veinticinco quetzales por dictamen, que se le pagará con cargo a la correspondiente partida de gastos imprevistos. El Procurador General fijará la dieta, tomando en cuenta tanto la complejidad de la consulta, como la mayor o menor extensión y calidad del dictamen rendido.

Artículo 45.—Cuando se lo encargue el Congreso de la República, la Presidencia del Organismo Judicial o un Ministerio de Estado, la institución podrá

intervenir en la elaboración de proyectos de ley. Para ese efecto y de acuerdo tanto con el organismo que haya encargado el proyecto como con el Ministerio a cuyo ramo corresponda el asunto, el Procurador General podrá designar a uno o varios abogados, profesionales o técnicos en la materia de que se trate, para que hagan los estudios necesarios y elaboren el proyecto. Los honorarios deberán ser convenidos por contrato y pagarse con cargo al respectivo ramo; pero no podrán consistir en asignaciones mensuales, sino en una cantidad fija que se cubrirá conforme convenio.

CAPITULO V

Responsabilidad

Artículo 46.—El Procurador General de la Nación, funcionarios del Ministerio Público y empleados subalternos son responsables conforme a la ley, por los delitos, faltas y omisiones en que incurran durante el ejercicio de sus cargos.

Artículo 47.—El Procurador General podrá imponer las siguientes sanciones disciplinarias a los agentes, funcionarios auxiliares y empleados de la institución por las faltas en que incurran en el servicio:

- 1º Amonestación;
- 2º Multa que no exceda de veinticinco quetzales;
- 3º Suspensión del cargo o empleo hasta por quince días; y
- 4º Remoción del cargo o empleo (o pedimento de remoción cuando no dependa de él el nombramiento).

Antes de imponer alguna de las correcciones disciplinarias enumeradas, el Procurador oír a en defensa al agente o subalterno de que se trate, formando con los datos aportados un breve expediente. Las faltas que cometan los funcionarios auxiliares de la institución serán reportados por el Procurador General a la autoridad competente de que dependan, para que aquélla, a su vez, aplique la sanción o sanciones que correspondan, conforme al régimen del respectivo Organismo.

Artículo 48.—Los Tribunales, al tener conocimiento de alguna falta de los agentes, la pondrán en conocimiento del Procurador General para que éste la corrija.

Artículo 49.—Serán motivo de sanción disciplinaria los siguientes hechos u omisiones:

- 1º Faltar frecuentemente, sin causa justificada, a sus respectivas oficinas, llegar ordinariamente tarde a ellas o no permanecer en el despacho todo el tiempo prevenido por la ley o reglamento respectivo;
- 2º Demorar indebidamente el despacho de los negocios, ya sea por ineptitud o por falta de

cumplimiento de las obligaciones que les imponga la ley, o de las órdenes que, con arreglo a la misma, les dicten sus superiores;

- 3º Ejecutar hechos o incurrir en omisiones que tengan como consecuencia, traspapelar expedientes, extraviar escritos o dificultar o demorar el ejercicio de los derechos de las partes o de la institución en cualquier clase de asuntos;
- 4º Ofender o denostar a los litigantes o a cualquiera otra persona que acuda a las oficinas del Ministerio Público o a las audiencias de los Tribunales, en demanda de justicia, o a informarse del estado que guardan los asuntos;
- 5º Sacar en los casos en que la ley no lo autoriza, los expedientes y documentos fuera de las oficinas en que deban estar o de las del Ministerio Público, o revelar los asuntos reservados que allí se tramiten;
- 6º Ser negligentes en buscar las pruebas que fueren necesarias para presentar las acusaciones procedentes o para seguirlas ante los Tribunales;
- 7º Hacer acusaciones, pedimentos, formular conclusiones o rendir dictámenes que tengan como base hechos notoriamente falsos, o que no expresen fundamentos legales;
- 8º No hacer con oportunidad las promociones que conforme a la ley sean procedentes;
- 9º No interponer, en tiempo y forma, los recursos que conforme a la ley procedan, contra las sentencias y demás resoluciones judiciales, en que sea parte el Ministerio Público y no se ajusten a la ley;
10. No sujetarse los agentes a las instrucciones que reciban del Procurador General;
11. No excusarse los funcionarios del Ministerio Público en los casos en que tengan impedimento manifiesto;
12. Aceptar ofrecimientos o promesas, recibir dádivas o cualquier remuneración, por ejercer las funciones de su cargo o después de ejercerlas, aun cuando no hubiere mediado concierto;
13. Solicitar de los litigantes y demás interesados, de sus procuradores o de sus patronos, ni aun por concepto de gastos, dinero o promesas o cualquier remuneración por ejercer las funciones de su cargo; y
14. Injuriar o faltar gravemente al respeto a sus superiores jerárquicos.

Artículo 50.—Las faltas enumeradas en los nueve primeros incisos del artículo anterior, serán corregidas conforme al artículo 47, aplicándose la medida que ameriten según su gravedad y frecuen-

cia. Las prevenidas en los demás incisos se sancionarán con remoción del cargo o empleo o pedimento de remoción, sin perjuicio de las demás responsabilidades a que hubiere lugar.

CAPITULO VI

Disposiciones generales

Artículo 51.—El Procurador General de la Nación podrá pedir informes a todos los funcionarios públicos y exigirles que cooperen con él en la práctica de las diligencias que necesitare llevar a cabo en el ejercicio de sus funciones. Podrá visitar las cárceles, lugares de detención y oficinas públicas, por sí o por medio de sus agentes, y examinar cualquiera de los negocios que se cursen en las últimas. Podrá visitar también, en igual forma, las empresas particulares cuando su funcionamiento esté relacionado con el interés social.

El director de la Guardia Civil, así como el jefe de la Guardia Judicial, están obligados a cumplir las órdenes que reciban del Procurador General o de los agentes del Ministerio Público, en asuntos de su competencia.

Artículo 52.—El Ministerio Público podrá recibir declaraciones, bajo protesta, sobre las denuncias que se le presenten, y asimismo las podrá recibir en las investigaciones que practique sobre cualquier asunto en que deba intervenir.

Artículo 53.—El Procurador General de la Nación podrá en cualquier momento, exigir la comprobación de las condiciones personales determinadas por la ley para el ejercicio de un cargo, siempre que aquéllas no hubieren sido previamente calificadas.

Artículo 54.—El Procurador General de la Nación, mediante concepto fundado en pruebas, podrá pedir la remoción de todo empleado público que aparezca como inepto, negligente o afectado por otra causa que lo imposibilite para el desempeño del cargo. La petición la hará a la autoridad de quien dependa el nombramiento y ésta deberá prestar atención a su solicitud.

Artículo 55.—El Ministerio Público tendrá franquicia en los correos y telégrafos nacionales y utilizará papel común en sus escritos, informes y dictámenes, a reserva de que la parte obligada lo responga al sello de ley. Las copias certificadas y testimonios de escrituras públicas que solicite se expedirán igualmente en papel simple.

Artículo 56.—En todos los asuntos judiciales y administrativos en que el Ministerio Público intervenga, sea como parte o porque se le haya oído en cumplimiento de la ley, puede interponer los recursos ordinarios y extraordinarios que autoriza la ley. Para el efecto, deben serle notificadas las resoluciones que se dicten.

La parte contra quien litigue la Nación, que sea condenada en costas, deberá hacerlas efectivas conforme arancel y su producto ingresará al Ministerio Público para ser aprovechado en gastos generales de la institución. El secretario llevará una cuenta especial de estos fondos y las erogaciones las autorizará el Procurador General.

Artículo 57.—Los agentes del Ministerio Público, así como los funcionarios auxiliares, enviarán al Procurador General durante el mes de enero de cada año, un informe comprensivo de las labores que haya realizado y de las observaciones que estimen pertinentes para el mejor funcionamiento de la institución.

Artículo 58.—El Procurador General de la Nación presentará anualmente al Congreso de la República, en los primeros diez días de sus sesiones ordinarias, un informe sobre el funcionamiento del Ministerio Público, conteniendo además, recomendaciones respecto a modificaciones convenientes en las materias de su incumbencia.

Artículo 59.—El Procurador General formulará anualmente en la época que determine la ley, el proyecto de presupuesto de la institución, que remitirá al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para que se incluya como Sección especial del correspondiente al Organismo Ejecutivo.

Artículo 60.—El Procurador General de la Nación tendrá categoría de Ministro de Estado y gozará de los privilegios e inmunidades correspondientes.

Artículo 61.—El Procurador General y los agentes del Ministerio Público estarán impedidos:

- 1º Para desempeñar otro cargo o empleo, a excepción de los de profesor de Instrucción Primaria, o Instrucción Superior, en las escuelas normales, institutos y facultades; y
- 2º Para ser apoderados judiciales, síndicos, árbitros de derecho, agentes de negocios o asesores, y para ejercer las profesiones de notario y abogado, excepto en causa propia, de sus ascendientes, descendientes o cónyuge.

Se exceptúan de tales impedimentos a los procuradores de Sala y abogados consultores adscritos a la sección respectiva.

Artículo 62.—Las vacaciones de los funcionarios y empleados del Ministerio Público se regirán por las normas establecidas para las vacaciones de los Tribunales.

Artículo 63.—El Procurador General podrá conceder licencias a los agentes y empleados del Ministerio Público:

- 1º Sin goce de sueldo, hasta por tres meses;
- 2º Hasta por veinte días con goce de sueldo si mediaren causas justificadas, a juicio del mismo Procurador; y

- 3º Por motivos de enfermedad, con goce de sueldo hasta por dos meses y sin goce de sueldo después de este período, pero sin exceder nunca de seis meses.

Artículo 64.—Para obtener licencia con goce de sueldo por causa de enfermedad, el interesado deberá acreditar por medio de una certificación del médico que lo atienda, cuál es la enfermedad que adolece, si es precisa la separación del servicio para recobrar la salud y el tiempo que su curación requiera.

Artículo 65.—El Procurador General de la Nación dictará el reglamento interno de los servicios a su cargo.

Artículo 66.—(Transitorio.)—El actual Procurador General de la Nación y su suplente, así como los jefes de Sección y agentes titulares que se nombren al entrar en vigor esta ley, durarán en sus funciones hasta el 15 de marzo de 1949.

Todas las audiencias que actualmente prescribe la ley a la Fiscalía del Gobierno se entenderán en lo sucesivo con el Ministerio Público, pues aquella oficina queda suprimida.

Artículo 67.—La presente ley entrará en vigor diez días después de su publicación en el Diario Oficial.¹

Pase al Organismo Ejecutivo para su publicación y cumplimiento.

Dado en el Palacio del Organismo Legislativo: en Guatemala, a veinticinco de mayo de mil novecientos cuarenta y ocho, año cuarto de la Revolución.

V. M. GIORDANI,
Presidente.

D. A. CETINA P.,
Secretario.

P. MEDINA D.,
Secretario.

Palacio Nacional: Guatemala, dieciocho de junio de mil novecientos cuarenta y ocho.

Publíquese y cúmplase.

JUAN JOSE AREVALO

El Ministro de Gobernación,
F. CARRILLO MAGAÑA.

¹ Publicado el 6 de agosto de 1948.

Decreto numero 40-94

El Congreso de la República de Guatemala,

CONSIDERANDO:

Que la ley vigente que en la actualidad organiza y establece las actividades y funciones del Ministerio Público, Decreto 512 del Congreso de la República, debe ser sustituida para que se adecúe a las reformas de la Constitución Política de la República y que cumpla eficientemente con las funciones que le atribuye el Artículo 251 de dicho cuerpo legal.

CONSIDERANDO:

Que por mandato constitucional el Fiscal General de la República es el Jefe del Ministerio Público y que dicha institución debe organizarse conforme los principios de autonomía y jerarquía para que los órganos de la institución pueda cumplir con las funciones que las leyes le imputan.

CONSIDERANDO:

Que el nuevo Código Procesal Penal le asigna al Ministerio Público la función de investigar y ejercer la acción penal lo que hace necesario emitir una nueva Ley Orgánica del Ministerio Público, que refleje la nueva realidad procesal de manera que la institución pueda cumplir con las funciones que dicho cuerpo legal le confiere.

POR TANTO:

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el Artículo 171, incisos a) y b) de la Constitución Política de la República de Guatemala,

DECRETA:

Lo siguiente

LEY ORGANICA DEL MINISTERIO PUBLICO

TITULO I

CAPITULO UNICO

PRINCIPIOS BASICOS

ARTICULO 1. Definición. El Ministerio Público es una institución con funciones autónomas, promueve la persecución penal y dirige la investigación de los delitos de acción pública; además velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país.

En el ejercicio de esa función, el Ministerio Público perseguirá la realización de la justicia, y actuará con objetividad, imparcialidad y con apego al principio de legalidad, en los términos que la ley establece.

ARTICULO 2. Funciones. Son funciones del Ministerio Público, sin perjuicio de las que le atribuyen otras leyes, las siguientes:

- 1) Investigar los delitos de acción pública y promover la persecución penal ante los tribunales, según las facultades que le confieren la Constitución, las leyes de la República, y los Tratados y Convenios Internacionales.
- 2) Ejercer la acción civil en los casos previstos por la ley y asesorar a quien pretenda querrelarse por delitos de acción privada de conformidad con lo que establece el Código Procesal Penal.
- 3) Dirigir a la policía y además cuerpos de seguridad del Estado en la investigación de hechos delictivos.
- 4) Preservar el Estado de derecho y el respeto a los derechos humanos, efectuando las diligencias necesarias ante los tribunales de justicia.

ARTICULO 3. Autonomía. El Ministerio Público actuará independientemente, por propio impulso y en cumplimiento de las funciones que le atribuyen las leyes sin subordinación a ninguno de los Organismos del Estado ni autoridad alguna, salvo lo establecido en esta ley.

Anualmente tendrá una partida en el Presupuesto General de la Nación y sus recursos los administrará de manera autónoma en función a sus propios requerimientos.

ARTICULO 4. Coordinación. El Presidente de la República podrá impartir instrucciones generales al Jefe del Ministerio Público para que oriente sus funciones. Las instrucciones deberán ser públicas, impartidas por escrito y debidamente fundamentadas.

Si el Fiscal General la acepta, emitirá las instrucciones pertinentes, si la rechaza, comunicará públicamente su decisión al Presidente, explicando los fundamentos de su rechazo. En este último caso el Presidente podrá recurrir al Organismo Legislativo para que resuelva dentro de los quince días siguientes, mediante acuerdo legislativo, sobre la procedencia de la petición, en cuyo caso la resolución será obligatoria para el Ministerio Público.

El Presidente de la República podrá invitar al Fiscal General para que participe en cualquier Junta del Gabinete o de los Ministros de Estado. En este supuesto el Fiscal General estará obligado a concurrir a la junta, con voz pero sin voto.

ARTICULO 5. Unidad y Jerarquía. El Ministerio Público es único e indivisible para todo el Estado. Se organiza jerárquicamente. En la actuación de cada uno de sus funcionarios estará representado íntegramente. Para acreditar la personería de un fiscal del Ministerio Público sólo será necesaria la constancia de su cargo o, en su caso, por el mandato otorgado. Los funcionarios que asistan a un superior jerárquico obedecerán instrucciones conforme lo dispuesto por esta ley.

ARTICULO 6. Vinculación. El Ministerio Público podrá pedir la colaboración de cualquier funcionario y autoridad administrativa de los organismos del Estado y de sus entidades descentralizadas, autónomas o semiautónomas, para el cumplimiento de sus funciones, estando éstos obligados a prestarla sin demora y a proporcionar los documentos e informes que les sean requeridos.

Las autoridades, los funcionarios y los organismos requeridos por el Ministerio Público, en ejercicio de las facultades que le otorga la ley, deberán atender inexcusablemente el requerimiento dentro de los límites legales y el término establecido en el requerimiento. Igual obligación tiene el Jefe de la Contraloría de Cuentas, los controladores y la Superintendencia de Bancos.

ARTICULO 7. Tratamiento como inocente. El Ministerio Público únicamente podrá informar sobre el resultado de las investigaciones siempre que no vulnere el principio de inocencia, el derecho a la intimidad y la dignidad de las personas; además cuidará de no poner en peligro las investigaciones que se realicen.

El Ministerio Público y las autoridades bajo su dirección no podrán presentar a los medios de comunicación a detenido alguno sin autorización del juez competente.

ARTICULO 8. Respeto a la víctima. El Ministerio Público, deberá dirigir sus acciones tomando en cuenta los intereses de la víctima, a quien deberá brindar amplia asistencia y respeto. Le informará acerca del resultado de las investigaciones y notificará la resolución que posea fin al caso, aun cuando no se haya constituido como querrelante.

TITULO II

ORGANIZACION DEL MINISTERIO PUBLICO

CAPITULO I

ORGANIZACION

SECCION I

INTEGRACION

ARTICULO 9. Integración. El Ministerio Público está integrado por los órganos siguientes:

- 1) El Fiscal General de la República.
- 2) El Consejo del Ministerio Público.
- 3) Los Fiscales de Distrito y Fiscales de Sección.
- 4) Los Agentes Fiscales.
- 5) Los Auxiliares Fiscales.

SECCION II

FISCAL GENERAL DE LA REPUBLICA

ARTICULO 10. Fiscal General. El Fiscal General de la República es el Jefe del Ministerio Público y el responsable de su buen funcionamiento, su autoridad se extiende a todo el territorio nacional.

Ejercerá la acción penal pública y las atribuciones que la ley le otorga al Ministerio Público, por sí mismo o por medio de los órganos de la institución.

Convocará al Consejo del Ministerio Público cada vez que resulte necesario su asesoramiento y con el objeto de que dicho órgano cumpla con las atribuciones que le asigna esta ley.

ARTICULO 11. Funciones. Son funciones del Fiscal General de la República:

- 1) Determinar la política general de la institución y los criterios para el ejercicio de la persecución penal;
- 2) Cumplir y velar porque se cumplan los objetivos y deberes de la institución;
- 3) Remitir al Ejecutivo y al Congreso de la República el proyecto de presupuesto anual de la institución y el de sus modificaciones que estime necesarias, en la forma y plazo que establecen las leyes respectivas.
- 4) Someter a la consideración del Consejo los asuntos cuyo conocimiento le corresponda y dictaminar acerca de los mismos verbalmente o por escrito según la importancia del caso.
- 5) Efectuar, a propuesta del Consejo del Ministerio público, el nombramiento de los fiscales de distrito, fiscales de sección, agentes fiscales y auxiliares fiscales, de acuerdo a la carrera del Ministerio Público, así como conceder las licencias y aceptar las renunciaciones de los mismos.
- 6) Efectuar los nombramientos, ascensos y traslados del personal administrativo y de servicios de la institución en la forma establecida por esta ley, así como conceder las licencias y aceptar las renunciaciones de los mismos.
- 7) Impartir las instrucciones convenientes al servicio y al ejercicio de las funciones, tanto de carácter general como relativas a asuntos específicos, en los términos y alcances establecidos en la ley.
- 8) Nombrar, de entre los miembros del Ministerio Público, fiscales para asuntos especiales. También podrá nombrar como fiscal especial a uno abogado colegiado para atender un caso específico o para garantizar la independencia en el ejercicio de la función.
- 9) Organizar el trabajo del Ministerio Público y efectuar los traslados de los fiscales que crea necesarios para su mejor funcionamiento, en los términos que se establecen en esta ley.
- 10) Proponer al Consejo del Ministerio Público la división del territorio nacional por regiones para la determinación de las sedes de las fiscalías de distrito y el ámbito territorial que se les asigne, así como la creación o supresión de las fiscalías de sección.
- 11) Las demás estipuladas en la ley.

ARTICULO 12. Nombramiento. El Fiscal General de la República será nombrado por el Presidente de la República de entre una nómina de seis candidatos propuesta por una Comisión de Postulación integrada de la siguiente forma:

- El Presidente de la Corte Suprema de Justicia, quiere la preside.
- Los respectivos Decanos de las Facultades de Derecho o de Ciencias Jurídicas y Sociales de las Universidades del país;
- El Presidente de la Junta Directiva del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, y
- El Presidente del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala.

El Presidente de la Comisión de Postulación convocará, a los demás miembros, con no menos de treinta días de anticipación al vencimiento del período vigente, a efecto, de elaborar la nómina de candidatos a Fiscal General de la República. Los integrantes de la Comisión de Postulación serán responsables de elaborar la nómina y remitirla al Ejecutivo por lo menos cinco días antes del vencimiento del período para el cual fue nombrado el Fiscal General que deba entregar el cargo.

El Fiscal General de la República podrá integrar la nueva nómina de postulación, en cuyo caso el Presidente podrá nombrarlo para un nuevo período. Si coinciden en una misma persona dos calidades para integrar la comisión de postulación o si se ausenta uno de sus miembros, lo reemplazará quien deba sustituirlo en el cargo.

Cinco mil ciudadanos podrán proponer por escrito a la Comisión de postulación, a un candidato para que ésta lo incluya en la nómina de postulación que remitirá al Presidente. Si la propuesta fuere rechazada, la comisión deberá fundamentar públicamente su rechazo.

ARTICULO 13. Calidades. El Fiscal General de la República deberá ser abogado colegiado y tener las mismas calidades que se requieren para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia; asimismo gozará de las mismas preeminencias e inmunidades que corresponden a dichos Magistrados.

ARTICULO 14. Remoción. El Presidente de la República podrá remover al Fiscal General por causa justa debidamente establecida.

Se entenderá por causa justa la comisión de un delito doloso durante el ejercicio de su función, por el cual se le haya condenado en juicio y el mal desempeño de las obligaciones del cargo que esta ley establece. Se garantizará el derecho de defensa.

En caso de la comisión de un delito el Fiscal General será suspendido, previa declaración que ha lugar el antejuicio en su contra, para que se proceda conforme la ley. Si la sentencia fuere absolutoria el Fiscal General será reinstalado en su cargo; si fuere condenatoria, será destituido del mismo, sin perjuicio de las sanciones penales correspondientes.

ARTICULO 15. Sustitución. En caso de renuncia, remoción, impedimento, suspensión, falta o ausencia temporal del Fiscal General de la República, este será sustituido por el que designe el Consejo del Ministerio Público entre los fiscales de distrito. En caso de remoción o renuncia la sustitución será hasta que se realice el nombramiento del nuevo Fiscal General, quien completará el período.

ARTICULO 16. Informe Anual. El Fiscal General deberá informar anualmente a los ciudadanos sobre el resultado de su gestión. Para ello deberá publicar una memoria y además remitir un ejemplar al Presidente de la República y al Organismo Legislativo.

La memoria deberá contener:

- El resumen del trabajo realizado en el ejercicio.
- El análisis del servicio prestado, con detalle de los obstáculos y las medidas adoptadas para superarlos.
- La recopilación de las instrucciones generales dictadas por el Presidente de la República, si las hubiere, y por el Fiscal General, así también las decisiones y recomendaciones del Consejo del Ministerio Público.
- El detalle de la ejecución del presupuesto correspondiente.
- Las propuestas concretas, sobre las modificaciones o mejoras que requiere el servicio.

Una síntesis de la memoria deberá ser difundida a través de los medios de comunicación masiva.

SECCION III

CONSEJO DEL MINISTERIO PUBLICO

ARTICULO 17. Integración. El Consejo del Ministerio Público estará integrado por:

- El Fiscal General de la República quien lo presidirá;
- Tres fiscales electos en asamblea general de fiscales, de entre los fiscales distritales, de sección y los agentes fiscales;
- Tres miembros electos por el Organismo Legislativo, de entre los postulados a Fiscal General de la República.

El Consejo podrá acordar que durante el tiempo en que se reúnan, los fiscales miembros no ejercerán sus funciones, excepto respecto del Fiscal General.

ARTICULO 18. Atribuciones. Corresponde, al Consejo del Ministerio Público las siguientes funciones:

- Proponer al Fiscal General el nombramiento de los fiscales de distrito, fiscales de sección, agentes fiscales y auxiliares fiscales, de acuerdo a la carrera del ministerio público.
- Ratificar, modificar o dejar sin efecto las instrucciones generales especiales dictadas por el Fiscal General, cuando ellas fueren objetadas conforme al procedimiento previsto en esta ley, así como las de establecidas conforme al régimen disciplinario, los traslados y sustituciones.
- Acordar a propuesta del Fiscal General la división del territorio nacional, para la determinación de la sede de las fiscalías de distrito y el ámbito territorial que se les asigne; así como la creación o supresión de las secciones del Ministerio Público.

- Asesorar al Fiscal General de la República cuando él lo requiera.
- Las demás establecidas por la ley.

ARTICULO 19. Elección. El Congreso de la República, una vez nombrado el Fiscal General, elegirá a tres miembros, de entre los postulados a dicho cargo, para el período que corresponda al Fiscal General de la República. La elección deberá efectuarse dentro de los cinco días siguientes de haberse nombrado el Fiscal General.

Los fiscales del Consejo del Ministerio Público serán electos en asamblea general de fiscales, para un período de dos años, pudiendo ser reelectos.

La elección deberá efectuarse, treinta días antes de concluido el período anterior. La Asamblea General de Fiscales será convocada por el Fiscal General y se integra con los fiscales de distrito, fiscales de sección, agentes fiscales y auxiliares fiscales. Cada uno de ellos tendrá un voto.

Cada uno de los miembros del Consejo, será electo por mayoría absoluta, y la votación será para cada candidato en particular.

ARTICULO 20. Sesiones. El Consejo del Ministerio Público deberá reunirse, por lo menos, dos veces al mes. Las sesiones serán convocadas por el Fiscal General de la República o quien lo sustituya. El Secretario del Consejo será el Secretario General del Ministerio Público.

El Consejo sesionará válidamente con la asistencia de, por lo menos, cuatro de sus miembros y el funcionario que lo preside. El Fiscal General de la República está obligado a convocar a sesión extraordinaria del Consejo cuando se lo solicitaren por los menos tres miembros.

Las resoluciones serán adoptadas por mayoría absoluta de los miembros.

ARTICULO 21. Informes y opiniones. El Consejo podrá citar al Director de la Policía Nacional y a los funcionarios de los demás órganos de seguridad del Estado para que rindan informes y opiniones.

Estos funcionarios están obligados a asistir ante el llamado del Consejo. Los funcionarios que incumplan el requerimiento incurrirán en el delito de desobediencia y serán sancionados de conformidad con la ley.

También podrá invitar a los directores de los centros penitenciarios o a cualquier otra persona calificada para que participe en sus deliberaciones, con voz pero sin voto.

ARTICULO 22. Imperatividad. Todos los miembros del Consejo del Ministerio Público están obligados a concurrir a las sesiones del Consejo, salvo causa justificada presentada a los miembros del Consejo.

Cada uno de los miembros del Consejo desempeñará el cargo con independencia absoluta. Serán responsables de las resoluciones adoptadas por el Consejo, salvo que hubieren razonado en contra su voto.

ARTICULO 23. Remuneraciones. La presencia de los miembros en las sesiones del Consejo dará derecho a dietas, que serán determinadas en el reglamento respectivo.

SECCION IV

FISCALES DE DISTRITO Y DE SECCION

ARTICULO 24. Fiscales de Distrito. Los fiscales de distrito serán los Jefes del Ministerio Público en los departamentos o regiones que les fueren encomendados y los responsables del buen funcionamiento de la institución en el área respectiva.

Ejercerán la acción penal pública y las atribuciones que la ley le otorga al Ministerio Público, por sí mismos o por intermedio de los agentes fiscales y auxiliares fiscales que esta ley establece, salvo cuando el Fiscal General de la República asuma directamente esa función o la encomiende a otro funcionario conjunta o separadamente.

ARTICULO 25. Atención permanente. Los Fiscales de Distrito organizarán las oficinas de atención permanente, a cargo de un agente fiscal, para la recepción de las denuncias o prevenciones policiales. Esta oficina también deberá recibir, registrar y distribuir los expedientes y documentos que ingresen y egresen de la institución.

ARTICULO 26. Oficina de atención a la víctima. Los fiscales de distrito organizarán las oficinas de atención a la víctima para que se encargue de darle toda la información y asistencia urgente y necesaria.

ARTICULO 27. Fiscales de Sección. Los fiscales de sección serán los Jefes del Ministerio Público en las diferentes secciones que les fueren encomendadas y los responsables del buen funcionamiento de la institución en los asuntos de su competencia.

Tendrán a su cargo el ejercicio de las atribuciones que la ley le asigna a la sección a su cargo, actuarán por sí mismos o por intermedio de los agentes fiscales y auxiliares fiscales, salvo cuando el Fiscal General de la República asuma directamente esa función o la encomiende a otro fiscal, conjunta o separadamente.

ARTICULO 28. Calidades. Para ser fiscal de distrito o fiscal de sección se requiere: ser mayor de treinta y cinco años, poseer el título de abogado, ser guatemalteco de origen, y haber ejercido la profesión por cinco años o en su caso la de juez de primera instancia, agente fiscal o auxiliar fiscal por el mismo período de tiempo.

Los fiscales de distrito y fiscales de sección gozarán del derecho de antejuicio, el cual será conocido por la Corte Suprema de Justicia.

ARTICULO 29. Asesores Específicos. El Fiscal General de la República, los fiscales de distrito y fiscales de sección podrán solicitar la asesoría de expertos en entidades públicas o privadas para formar equipos interdisciplinarios de investigación para casos específicos.

También, podrán aceptar la colaboración gratuita de alguna persona, asociación de ciudadanos u organismos de derechos humanos que tengan interés en realizar una investigación específica. Estos colaboradores serán nombrados para que realicen la investigación y persecución penal que se les asigne; concluida la misma, cesarán en su función. Tendrán las mismas facultades, deberes, preeminencias e inmunidades que los agentes fiscales, pero siempre actuarán bajo la supervisión de la autoridad que los hubiere nombrado.

ARTICULO 30. Organización. Estarán a cargo de un Fiscal de Sección las siguientes:

- Fiscalía de delitos administrativos;
- Fiscalía de delitos económicos;

- 3) Fiscalía de delitos de narcoactividad;
- 4) Fiscalía de delitos contra el ambiente;
- 5) Fiscalía de asuntos constitucionales, amparos y exhibición personal;
- 6) Fiscalía de menores o de la niñez;
- 7) Fiscalía de ejecución;
- 8) Fiscalía de la mujer.

Las secciones serán competentes para atender, en todo el territorio nacional, los casos que les corresponden de acuerdo a lo establecido en esta ley. Los demás asuntos serán atendidos por los demás órganos del Ministerio Público.

El Fiscal General, previo acuerdo del Consejo del Ministerio Público podrá crear las secciones que se consideren necesarias para el buen funcionamiento del Ministerio Público.

ARTICULO 31. Fiscalía de Delitos Administrativos. Esta Fiscalía tendrá a su cargo la investigación de la conducta administrativa de los funcionarios y empleados de los órganos y entidades estatales, descentralizadas y autónomas, inclusive de los Presidentes de los Organismos del Estado. Ejercerá la persecución penal de los hechos punibles atribuidos a esas personas, interviniendo regularmente en todos los asuntos penales que tengan relación con la administración pública o en los que se lesionen intereses estatales.

ARTICULO 32. Fiscalía de Delitos Económicos. Esta Fiscalía tendrá a su cargo la investigación y el ejercicio de la acción penal en todos aquellos delitos que atentan contra la economía del país.

ARTICULO 33. Fiscalía de Delitos de Narcoactividad. Esta Fiscalía tendrá a su cargo la investigación y el ejercicio de la acción penal en todos los delitos vinculados con la producción, fabricación, uso, tenencia, tráfico y comercialización ilegal de estupefacientes.

ARTICULO 34. Fiscalía de Delitos contra el Ambiente. Esta Fiscalía tendrá a su cargo la investigación y el ejercicio de la acción penal en todos aquellos delitos cuyo nexo jurídico tutelado sea el medio ambiente.

ARTICULO 35. Fiscalía Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal. Esta Fiscalía intervendrá en los procesos de inconstitucionalidad, amparo y exhibición personal. Promoverá todas aquellas acciones que tengan por objeto velar por el estricto cumplimiento de la Constitución Política de la República y demás leyes en esta materia.

ARTICULO 36. Fiscalía de Menores o de la niñez. Esta Fiscalía tendrá a su cargo la intervención que se le confiere al Ministerio Público en el procedimiento para menores.

Contará con el asesoramiento de un gabinete interdisciplinario de especialistas en problemas de menores.

ARTICULO 37. Fiscalía de la Mujer. Esta Fiscalía tendrá a su cargo la intervención del Ministerio Público en los procesos que involucren a una o varias mujeres y que tengan relación con su condición de mujeres. Contará con la asesoría de especialistas en la materia respectiva.

ARTICULO 38. Fiscalía de Ejecución. Esta Fiscalía tendrá a su cargo la intervención ante los jueces de ejecución y deberá promover todas las acciones referidas a la ejecución de la pena y la suspensión condicional de la persecución penal.

ARTICULO 39. Reuniones Periódicas. El Fiscal General convocará a reuniones periódicas con los fiscales de distrito y fiscales de sección a fin de evaluar la marcha del servicio, dictar instrucciones, solicitar consultas o discutir asuntos.

ARTICULO 40. Dirección de Investigaciones Criminalísticas. La Dirección de Investigaciones Criminalísticas estará integrada por un cuerpo de peritos en distintas ramas científicas, dependa directamente del Fiscal General de la República.

Tendrá a su cargo el análisis y estudio de las pruebas y otros medios de convicción que conduzcan al esclarecimiento de los hechos delictivos que investiguen los órganos del Ministerio Público. Sus funciones las desarrollarán siempre bajo la conducción del fiscal a cargo del caso.

Para ocupar un cargo en la Dirección de Investigaciones Criminalísticas se deberá tener título en la disciplina correspondiente y haber ejercido la actividad por más de dos años, debiendo ser nombrados conforme concursos por oposición conforme lo establecido para la carrera del Ministerio Público.

El Ministerio Público deberá instalar el equipo necesario para el funcionamiento de los laboratorios de la Dirección de Investigaciones Criminalísticas.

Los laboratorios y equipos fijos y móviles de la policía nacional, así como su personal, estarán a disposición de los fiscales.

ARTICULO 41. Oficina de Protección de Sujetos Procesales en Materia Penal. La Oficina de Protección de Sujetos procesales la presidirá la persona que nombre el Fiscal General y tendrá a su cargo la protección de sujetos procesales de conformidad con el reglamento que deberá emitir el Fiscal General con la asesoría del Consejo del Ministerio Público.

SECCION V

AGENTES FISCALES, AUXILIARES FISCALES Y SECRETARIOS

ARTICULO 42. Agentes Fiscales. Los agentes fiscales asistirán a los fiscales de Distrito o fiscales de Sección; tendrán a su cargo el ejercicio de la acción penal pública y en su caso la privada conforme a la ley y las funciones que la ley le asigne al Ministerio Público. Ejercerán la dirección de la investigación de las causas criminales; formularán acusación o el requerimiento de sobreseimiento, clausura provisional y archivo ante el órgano jurisdiccional competente. Asimismo actuarán en el debate ante los tribunales de sentencia, podrán promover los recursos que deban tramitarse en las Salas Penales de la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema de Justicia.

ARTICULO 43. Auxiliares. Para ser agente fiscal se requiere ser mayor de treinta años, poseer el título de abogado y notario, ser guatemalteco de origen, y haber ejercido la profesión de abogado por tres años o en su caso la de juez de primera instancia, o auxiliar fiscal por el mismo período de tiempo.

Los agentes fiscales gozarán del derecho de antejuicio, el cual será conocido por las Salas de la Corte de Apelaciones.

ARTICULO 44. Fiscales Especiales. Los fiscales especiales serán contratados para casos específicos cuando sea necesario garantizar la independencia de los fiscales en la investigación y promoción de la persecución penal. Tendrán las mismas facultades, deberes y preeminencias que los fiscales de distrito o sección y actuarán con absoluta independencia en el caso que se les asigne. En el ejercicio de su función estarán sujetos únicamente a lo que establecen la Constitución Política de la República, los Tratados y Convenios Internacionales y demás leyes del país.

El Fiscal General de la República, los fiscales de distrito y fiscales de sección podrán solicitar la asesoría de expertos, de entidades públicas o privadas para formar equipos interdisciplinarios de investigación para casos específicos. También podrán solicitar la colaboración de organismos de derechos humanos en las investigaciones de delitos que afecten los derechos fundamentales de las personas.

El Fiscal General deberá proveer los fondos necesarios para este rubro.

ARTICULO 45. Auxiliares Fiscales. Los auxiliares fiscales asistirán a los fiscales de distrito, fiscales de sección y agentes fiscales, serán los encargados de efectuar la investigación preparatoria en todos los delitos de acción pública y en los delitos que requieran instancia de parte, al llenarse este requisito. Actuarán bajo la supervisión y responsabilidad del superior jerárquico. Podrán actuar únicamente en el procedimiento preparatorio.

ARTICULO 46. Calidades. Para ser auxiliar fiscal se requiere ser abogado colegiado activo y guatemalteco de origen.

TITULO III

EJERCICIO DE LA ACCION PENAL

CAPITULO I

ACTUACION PROCESAL

ARTICULO 47. Ejercicio de la Función. En el ejercicio de sus funciones los fiscales estarán sujetos únicamente a la Constitución Política de la República de Guatemala, los Tratados y Convenios Internacionales, la ley y las instrucciones dictadas por su superior jerárquico, en los términos establecidos por esta ley.

ARTICULO 48. Investigación. El fiscal a cargo de la investigación de un delito debe reunir los elementos de convicción de los hechos punibles en forma ordenada, que permita el control del superior jerárquico, de la defensa, la víctima y las partes civiles.

ARTICULO 49. Proposición de Diligencias. Todas las partes pueden proponer diligencias en cualquier momento del procedimiento preparatorio. El Ministerio Público, a través del fiscal a cargo, debe realizarlas si son pertinentes y útiles. Caso contrario debe dejar constancia de las razones de su negativa, la que puede ser revocada por el juez de primera instancia en los términos establecidos en la ley.

ARTICULO 50. Inmediación. El fiscal tiene la obligación de proponer la prueba pertinente y necesaria, y producirla en el debate. Cuidará de preservar las condiciones de inmediación de todos los sujetos procesales con los medios de convicción y hará una interpretación restrictiva de las normas de incorporación de la prueba por lectura al juicio oral.

CAPITULO II

RELACIONES CON LAS FUERZAS DE SEGURIDAD

ARTICULO 51. Dependencia y Supervisión. El Director de la Policía Nacional, las autoridades policíacas departamentales y municipales que operan en el país y cualquier otra fuerza de seguridad pública o privada, están obligadas a cumplir las órdenes que emanen de los fiscales del Ministerio Público y deberán dar cuenta de las investigaciones que efectúen.

Los funcionarios y agentes de las policías ejecutarán sus tareas bajo las órdenes y la supervisión directa del Ministerio Público. La supervisión incluirá el correcto cumplimiento de la función auxiliar de la Policía y de las demás fuerzas de seguridad cuando cumplan tareas de investigación. Los fiscales encargados de la investigación podrán impartirles instrucciones al respecto, cuidando de respetar su organización administrativa.

La policía y las demás fuerzas de seguridad no podrán realizar investigaciones por sí, salvo los casos urgentes y de prevención policial. En este caso deberán informar al Ministerio Público de las diligencias practicadas, en un plazo no mayor de veinticuatro horas, el que correrá a partir del inicio de la investigación.

El Fiscal General, los fiscales de distrito y los fiscales de sección podrán nominar, por sí o por solicitud del fiscal encargado del caso, a los funcionarios o agentes policíacos que auxiliarán en la investigación de un asunto.

ARTICULO 52. Facultad disciplinaria. Los funcionarios y agentes policíacos que infrinjan disposiciones legales o reglamentarias, que omitan o retarden la ejecución de un acto propio de sus funciones o lo cumplan negligentemente, serán sancionados por el Fiscal General o por los fiscales de distrito y fiscales de sección, a pedido del fiscal responsable del caso o por iniciativa propia, previo informe del afectado, con apercibimiento y suspensión hasta de quince días, sin perjuicio de iniciar su persecución penal. Se podrá recomendar su cesantía o sanción a la autoridad administrativa correspondiente, y en todo caso, se dará aviso a ella de las sanciones impuestas con copia de las actuaciones.

ARTICULO 53. Procedimiento. Las sanciones serán impuestas con audiencia al afectado por dos días, evacuada la audiencia, el funcionario deberá imponer la sanción correspondiente dentro de los diez días siguientes. El sancionado podrá recurrir la resolución, dentro de los dos días siguientes, ante el Fiscal General. Si el Fiscal General hubiere impuesto la sanción, el recurso será conocido por el Consejo del Ministerio Público.

TITULO IV

REGIMEN FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO

CAPITULO I

REGIMEN FINANCIERO

ARTICULO 54. Presupuesto. El proyecto de presupuesto del Ministerio Público, se enviará anualmente al Ejecutivo para su conocimiento y al Congreso de la

República para su aprobación e integración al Presupuesto General de la Nación. La ejecución del presupuesto estará sujeta a los controles y fiscalización de los órganos correspondientes del Estado, conforme lo establece el artículo 237 de la Constitución Política de la República.

Sus acuerdos globales de erogación serán firmados por el Fiscal General de la República y el Tesorero del Ministerio Público.

ARTICULO 55. *Franquetas.* El Ministerio Público gozará franquicia en los correos y telégrafos nacionales y utilizará papel común en sus escritos, informes y dictámenes. Las copias certificadas y testimonios de escrituras públicas que solicite se expedirán igualmente en papel simple.

ARTICULO 56. *Fondos propios.* El Ministerio Público cuenta con fondos propios. La parte que sea condenada en costas dentro del proceso penal deberá hacerlas efectivas conforme arancel y su producto ingresará al Ministerio Público para ser aprovechado en gastos generales de la institución; así como los comisos en dinero, moneda nacional o extranjera, incautados en los operativos, cateos y registros que realice la institución en acciones relacionadas con la narcotráfico. Con estos fondos se formará una partida especial.

CAPITULO II

REGIMEN ADMINISTRATIVO

ARTICULO 57. *Organización.* El Ministerio Público será administrado por un jefe administrativo, nombrado por el Fiscal General de la República, de quien dependerá en forma directa. Deberá tener conocimientos especiales en administración e idoneidad manifiesta para el cargo.

Realizará todas las tareas de administración y organización del Ministerio Público que le encomiende el Fiscal General de la República, así como asesorarlo en todos los problemas administrativos y financieros de la institución, contará con el personal de apoyo que sea necesario.

El jefe administrativo tendrá a su cargo el archivo general de la institución.

ARTICULO 58. *Oficina de información.* El jefe administrativo organizará una oficina que informe a la población y a los medios de comunicación sobre todos los aspectos que se relacionen con la institución y que tengan relevancia pública, debiendo respetar lo normado en el artículo 7 de esta ley.

ARTICULO 59. *Reglamentación.* El Fiscal General de la República determinará las secciones especiales de la Jefatura Administrativa y reglamentará sus funciones.

También reglamentará la carrera del personal administrativo.

TITULO V

DISPOSICIONES GENERALES

CAPITULO I

DISCIPLINA DEL SERVICIO

ARTICULO 60. El Fiscal General de la República podrá imponer a los fiscales, funcionarios, auxiliares y empleados de la institución por las faltas en que incurran en el servicio, las sanciones disciplinarias siguientes:

- 1) Amonestación verbal;
- 2) Amonestación escrita;
- 3) Suspensión del cargo o empleo hasta por quince días sin goce de sueldo; y
- 4) Remoción del cargo o empleo.

La sanción será adecuada a la naturaleza y gravedad de la falta y a los antecedentes en la función.

ARTICULO 61. *Faltas.* Serán motivo de sanción disciplinaria las siguientes hechas y omisiones:

- 1) Faltar frecuentemente, sin causa justificada, a sus respectivas oficinas, llegar habitualmente tarde a ellas o no permanecer en el despacho el tiempo dispuesto por la autoridad. Se exceptúan los casos en que por razones de trabajo deben efectuar sus funciones fuera de la oficina;
- 2) Ejecutar hechos o incurrir en omisiones que tengan como consecuencia la pérdida de actuaciones, dificultar o demorar el ejercicio de los derechos de las partes o de la institución en cualquier clase de asuntos;
- 3) Ofender a la víctima, al imputado, a los litigantes o a cualquiera otra persona que acuda a las oficinas del Ministerio Público o a las audiencias de los tribunales, en demanda de justicia, o a informarse del estado que guardan los asuntos;
- 4) Extraer, en los casos en que la ley no la autoriza, los expedientes y documentos fuera de las oficinas en que deban estar o de las del Ministerio Público, o revelar los asuntos reservados que allí se tramitan;
- 5) Ser negligentes en la búsqueda de las pruebas que fueren necesarias para la presentación de las acusaciones procedentes o para seguir las ante los tribunales;
- 6) Hacer acusaciones, pedimentos, formular conclusiones o rendir dictámenes que tengan como base hechos notoriamente falsos, o que no expresen fundamentos legales;
- 7) Omitir informar a la víctima del resultado de las investigaciones o omitir notificar la resolución del juez que ponga fin al proceso, cuando aquella no se hubiere constituido como querrelante adhesivo;
- 8) Ocultar información o dar información errónea a las partes, siempre que no se haya declarado el secreto de las actuaciones en los términos y condiciones establecidas en el Código Procesal Penal.

ARTICULO 62. *Procedimiento.* Los fiscales de distrito o de sección y los jefes de las dependencias del Ministerio Público impondrán a sus funcionarios y empleados amonestaciones, previa audiencia por dos días a los interesados para que se manifiesten al respecto y propongan pruebas, dándoles oportunidad de ejercer su derecho

de defensa. La resolución deberá ser emitida por escrito, dentro de los cinco días siguientes a la evacuación de la audiencia.

Las remociones y suspensiones serán impuestas únicamente por el Fiscal General de la República con las formalidades indicadas en el párrafo anterior.

ARTICULO 63. *Recurso.* Las sanciones impuestas serán recurribles ante el superior jerárquico dentro de los tres días de notificadas, debiendo ser resueltas dentro de los cinco días siguientes.

Contra las resoluciones del Fiscal General de la República, cabe el recurso de apelación ante el Consejo del Ministerio Público, en cuyo conocimiento no participará el Fiscal General.

En tanto no se encuentre firme la resolución, no podrá ejecutarse la sanción correspondiente.

ARTICULO 64. *Fiscal General.* Cuando el hecho sea imputable al Fiscal General de la República, el Consejo del Ministerio Público ordenará la práctica de las investigaciones pertinentes comisionando a alguno o varios de sus miembros. En este caso no participará el Fiscal General. El resultado de las mismas lo comunicará al Presidente de la República.

ARTICULO 65. *Incompatibilidades y prohibiciones.* Será incompatible con la función de miembro del Ministerio Público:

- 1) Cualquier cargo de elección popular o la postulación para el mismo;
- 2) Cualquier otro empleo o cargo público o privado remunerado, salvo la docencia universitaria, siempre que esta no perturbe el ejercicio de sus funciones;
- 3) El ejercicio de la abogacía y el notariado, excepto la defensa propia, de su cónyuge, de sus padres, de sus hijos menores o de las personas que estén bajo su guarda y custodia;
- 4) El ejercicio del comercio o la integración de órganos de administración o control de sociedades mercantiles.

CAPITULO II

INSTRUCCIONES

ARTICULO 66. *Facultad de impartir instrucciones.* Según el orden jerárquico, los miembros del Ministerio Público podrán impartir a sus subordinados las instrucciones convenientes al servicio y al ejercicio de las funciones, tanto de carácter general como las referidas a asuntos específicos.

ARTICULO 67. *Deber de obediencia.* El fiscal que reciba una instrucción concerniente al servicio y al ejercicio de sus funciones deberá cumplirla si se encuentra enmarcada dentro de la ley y atenerse a ella en sus actuaciones, sin perjuicio de manifestar su posición personal.

En los debates orales, el funcionario que asista a ellos actuará y concluirá según su criterio. Si algún superior jerárquico desea conducir el debate según su propio criterio, este deberá asistir a la audiencia.

ARTICULO 68. *Objeción.* El fiscal que reciba una instrucción que considere contraria a la ley, lo hará saber a quien emitió la instrucción, por informe fundado. Este último, si insiste en la legitimidad de la instrucción, la remitirá, dentro de las veinticuatro horas siguientes, sin efecto suspensivo, junto con la objeción, al superior jerárquico inmediato en el servicio, quien decidirá. Para ello, podrá escuchar a una junta de fiscales bajo su dirección o, en casos complejos, solicitar un dictamen al Consejo del Ministerio Público.

Cuando la instrucción objetada provenga del Fiscal General de la República, decidirá el Consejo del Ministerio Público.

Las instrucciones generales podrán ser objetadas en abstracto por los fiscales de distrito y los fiscales de sección. Los agentes fiscales y auxiliares fiscales podrán objetarlas en tanto deban aplicarse a un caso concreto. En este último caso también podrán ser objetadas por la víctima cuando sean afectadas por dicha instrucción.

ARTICULO 69. *Actos procesales sujetos a plazo o urgentes.* Cuando una instrucción objetada, general o particular, concerniera a un acto procesal sujeto a un plazo o que no admite dilación, el funcionario que reciba la instrucción la cumplirá en nombre del superior que la emitió, sin perjuicio del procedimiento previsto en el artículo anterior.

Si la instrucción objetada consiste en omitir un acto sujeto a plazo o que no admite dilación, el funcionario que la objete actuará bajo su exclusiva responsabilidad, sin perjuicio del reemplazo que se pudiere ordenar o del desistimiento de la actividad cumplida.

ARTICULO 70. *Forma.* Las instrucciones serán impartidas en forma escrita y transmitidas por cualquier vía de comunicación. En caso de peligro por la demora, las instrucciones podrán ser impartidas oralmente, por cualquier vía de comunicación y confirmadas por escrito inmediatamente.

Las instrucciones, sencillas, que sólo consistan en simples órdenes de servicio podrán ser impartidas oralmente.

ARTICULO 71. *Reemplazos y traslados.* El Fiscal General de la República, los fiscales de distrito y los fiscales de sección, respecto del personal a su cargo, podrán designar a uno o más integrantes del Ministerio Público para que actúen en un asunto determinado o en varios de ellos, reemplazándolos entre sí, formar equipos que trabajen conjuntamente o asumir directamente la conducción de un caso.

El Fiscal General, los fiscales de distrito y los fiscales de sección, dentro de su área territorial o funcional, podrán ordenar traslados por razones de servicio.

ARTICULO 72. *Impugnación.* El fiscal que hubiere sido trasladado podrá objetar la decisión ante el Consejo del Ministerio Público, en los plazos y de acuerdo al procedimiento para la imposición de sanciones disciplinarias.

El traslado del fiscal o la asunción directa de un caso por el superior jerárquico será improrrogable si el Consejo del Ministerio Público considera que obedece a razones que tiendan a apartar al fiscal de la investigación y promoción de un caso, o que se haya negado a cumplir instrucciones legales o realizadas sin las formalidades que señala la ley. La objeción también podrá ser deducida en estos términos por la víctima.

ARTICULO 73. *Apartamiento.* Son causas de inhibitoria de los fiscales para intervenir en asuntos determinados, las mismas que para los jueces determina la Ley del Organismo Judicial como causales de impedimento, excusa o recusación, así como tener

parentesco con el juez o magistrado ante quien deban ejercer su función. El impedimento o excusa se prueba mediante simple razón que sustentará el respectivo funcionamiento quien será subrogado por el que determine el Fiscal General de la República o el jefe de sección respectivo.

La víctima podrá requerir al fiscal de distrito, al fiscal de sección o al fiscal General el apartamiento del fiscal que lleva el caso cuando considere que éste no ejerce correctamente sus funciones. El requerimiento será resuelto dentro de los dos días de presentada la solicitud por decisión fundada.

En caso de que la ley establezca la obligación del apartamiento del fiscal para un caso, el superior jerárquico decidirá de acuerdo a las normas técnicas de trabajo.

ARTICULO 74. Deber de informar. Los integrantes del Ministerio Público comunicarán a su superior jerárquico inmediato los asuntos a su cargo que, por su importancia, trascendencia o complejidad, requieran un tratamiento especial indicando necesariamente las dificultades y proponiendo el modo de solucionarlas.

CAPITULO III

CARRERA DEL MINISTERIO PUBLICO

ARTICULO 75. Carrera del Ministerio Público. Los nombramientos para el área de distrito, fiscales de sección, agentes fiscales y auxiliares fiscales se regularán de acuerdo a las disposiciones que tendrán en cuenta los siguientes aspectos:

- 1) Los requisitos establecidos en esta ley para ocupar el cargo respectivo.
- 2) Los antecedentes que acrediten idoneidad especial en materias relativas al cargo y una sólida formación jurídica.
- 3) Los antecedentes relativos a la tarca profesional o en la carrera fiscal.

Para valorar estos aspectos se oirá a una audiencia de oposición, oral y pública, donde se evaluará al aspirante sobre aspectos vinculados a los principios constitucionales y la legislación vigente.

El concurso será abierto a cualquier aspirante.

ARTICULO 76. Lista de Candidatos. El Consejo del Ministerio Público convocará públicamente a concurso, al menos una vez al año, para formar la lista de candidatos a los diversos cargos del Ministerio Público.

Los requisitos para la inscripción deberán ser los mismos que se requieran para optar al cargo que el aspirante pretenda.

Los candidatos permanecerán en la lista durante dos años, a contar del momento de su incorporación a ella.

El concurso anual tiene por misión cubrir las vacantes de la lista y no se realizará cuando no se hubieren producido vacantes en ella.

ARTICULO 77. Tribunales de Concurso. El Consejo del Ministerio Público elegirá anualmente, entre una nómina de diez candidatos propuestos por la Unidad de Capacitación, un jurado integrado por cinco profesionales de reconocida notoriedad. La función de jurados se ejercerá ad honorem y es intransferible.

En caso de que alguno de los electos no acepte conformar el jurado se elegirá de entre la nómina a su reemplazante.

El jurado se encargará de evaluar a los aspirantes y una vez concluida, emitirá un dictamen en el que se indique quienes han resultado seleccionados y quienes no lo han sido. Entre los seleccionados el jurado elaborará una lista de mérito que comenzará con el que haya obtenido la mayor calificación hasta el que haya obtenido la menor. Se deberá confeccionar una lista para ocupar los puestos de fiscales de distrito, fiscales de sección, agentes fiscales y auxiliares fiscales. La lista de mérito será publicada tres veces en el término de quince días en el diario oficial.

El dictamen podrá declarar desierta una o más vacantes, que se intentarán cubrir en el próximo concurso.

Si las vacantes de la lista para un cargo quedaren desiertas en su totalidad, se llamará a un concurso extraordinario.

Cualquier persona u organización de personas, podrá impugnar la incorporación de un aspirante a la lista de mérito, dentro de los tres días de su publicación, fundado en que no cumple con las condiciones para ser nombrado en el cargo. El jurado resolverá sin recurso alguno.

ARTICULO 78. Nombramientos. Los nombramientos para cubrir cargos en el Ministerio Público se deberán realizar eligiendo, exclusivamente, a los candidatos de la lista en orden de mérito, salvo que el propio interesado solicite que se altere el orden en su perjuicio.

ARTICULO 79. Trámite y reglamento. El Consejo del Ministerio Público tendrá a su cargo toda la organización y trámite de los concursos, elaborará el reglamento respectivo y las modificaciones necesarias.

Mantendrá actualizados los expedientes de los candidatos que integran las listas respectivas.

ARTICULO 80. Incapacidades. No podrán aspirar a ingresar a la carrera del Ministerio Público:

- 1) Quienes no tengan aptitud física y psíquica suficiente, establecida por profesionales.
- 2) Quienes hayan sido inhabilitados, en forma absoluta o especial para ejercer cargos públicos o la profesión de abogado o de notario o hayan sido privados de sus derechos como ciudadanos, mientras dure la inhabilitación.

ARTICULO 81. Unidad de Capacitación. La Unidad de Capacitación estará a cargo del Consejo del Ministerio Público, quien nombrará al director y subdirector de la Unidad. Será la encargada de promover, ejecutar y organizar cursos de capacitación y especialización para los integrantes del Ministerio Público y los aspirantes a cargos en la institución, así como también asignará becas de estudio conforme concurso de oposición, de acuerdo con el reglamento que elaborará para tal efecto.

TITULO VI

CAPITULO UNICO

DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES

ARTICULO 82. Reglamento. El Fiscal General, elaborará los reglamentos correspondientes, dentro de los noventa días siguientes a la vigencia de esta ley. En el mismo término, el Consejo del Ministerio Público elaborará los reglamentos que a dicho órgano le competen.

ARTICULO 83. Presupuesto inicial. Se faculta al Presidente de la República para que formule el primer presupuesto del Ministerio Público que entrará en vigencia esta ley. Dicho presupuesto deberá ser sometido a consideración del Congreso de la República para su aprobación.

ARTICULO 84. Derechos adquiridos. Los derechos adquiridos por el personal de Ministerio Público con anterioridad a la vigencia de la presente ley, serán inalterables y servirán de base para optar a los nuevos cargos que se crearen.

ARTICULO 85. Síndicos. En los municipios del interior de la República cuando no hubieren fiscales del Ministerio Público actuarán los síndicos municipales en representación del Ministerio Público para la aplicación del criterio de oportunidad, salvo que el fiscal de distrito ejerza la función por sí mismo o designe un agente fiscal o auxiliar fiscal para que se haga cargo de los asuntos.

ARTICULO 86. Secretarías. Conforme las disposiciones administrativas internas que dicte el Fiscal General se podrán nombrar como secretarías a las personas que actualmente ocupan los cargos de oficiales y en el presupuesto deberán ser clasificados como tales.

ARTICULO 87. Fortalecimiento Institucional. El Fiscal General podrá convocar a los diferentes sectores nacionales y a la comunidad internacional con el objeto de captar recursos para la creación de un fondo nacional de cooperación destinado a la reorganización del Ministerio Público, a la tecnificación de la investigación y a la capacitación de los fiscales.

Este fondo nacional ingresará al Ministerio Público y pasará a formar parte de los fondos privados de la institución, estando sujetos a los controles fiscales establecidos en la ley.

ARTICULO 88. Convenios. El Fiscal General puede realizar convenios de cooperación con instituciones públicas o privadas nacionales o extranjeras, para la realización de investigaciones en aquellos asuntos en los que fuere necesario.

Asimismo puede realizar convenios para afectación transitoria de personal con los organismos del Estado o con entidades internacionales.

ARTICULO 89. Bufetes Populares. El Fiscal General podrá suscribir convenios con las distintas Facultades de Ciencias Jurídicas o de Derecho del país a efecto de que los estudiantes que ya hubieren cerrado pensum de estudios puedan desarrollar actividades dentro de la institución.

Por un período que no podrá exceder de dos años a partir de la vigencia de esta ley, el Fiscal General podrá nombrar a estudiantes que hubieren cerrado pensum de estudios en la carrera de abogacía y notaría para que actúen como auxiliares fiscales, los cuales tendrán los mismos deberes, facultades y preeminencias que dichos órganos de la institución, pero en todo caso serán asistidos por un Agente Fiscal. Podrán actuar en el procedimiento preparatorio, y en el interior de la República, estarán facultados para requerir la aplicación del criterio de oportunidad, la conversión de la acción y la suspensión condicional de la persecución penal.

Vencido este plazo, los estudiantes ya no podrán actuar como auxiliares fiscales, salvo que hubieren obtenido el título correspondiente y hubieren sido ratificados en el cargo.

El Fiscal General de la República, podrá ampliar el plazo fijado en este artículo pero en todo caso la ampliación del mismo no podrá exceder de los dos años.

ARTICULO 90. Disposiciones derogatorias. Se deroga el decreto No. 512 del Congreso de la República que contiene la Ley del Ministerio Público en lo concerniente a la sección de fiscalía así como los acuerdos gubernativos números 393-90 de fecha 9 de mayo de 1990, 527-90 de fecha 31 de mayo de 1990, 898-90 de fecha 21 de septiembre de 1990 y cualquier otra disposición que se oponga o limite las funciones contenidas en esta ley.

ARTICULO 91. Transitorio. Nombramiento del Fiscal General y elección del Consejo del Ministerio Público. El Fiscal General de la República deberá ser nombrado conforme las reglas y plazo establecido en la Constitución. Para el efecto, el Presidente de la comisión de postulación deberá convocar a sus miembros.

La comisión de postulación presentará al ejecutivo la nómina de candidatos al menos dos días antes del vencimiento del plazo.

La elección para integrar el primer Consejo del Ministerio Público deberá efectuarse dentro de los cuarenta y cinco días siguientes a la fecha en que tome posesión del cargo el Fiscal General de la República. A tal efecto, éste convocará a la asamblea, en la que participarán todos los fiscales en funciones. La integración del primer Consejo durará en sus funciones un año.

El actual jefe del Ministerio Público continuará con sus funciones hasta el momento en que asuma el Fiscal General que designe el Presidente de la República.

ARTICULO 92. Vigencia. La presente ley entra en vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial.

PASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU PUBLICACION Y CUMPLIMIENTO.

DADO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA A LOS TRES DIAS DEL MES DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO.


OSCAR VINICIO VILLAR ANLES
PRESIDENTE


FRANCISCO REYES IXCAMEY
SECRETARIO


EDNA ALICIA ORELLANA YDA. DE RUANO
SECRETARIO

PALACIO NACIONAL: Guatemala, doce de mayo de mil novecientos noventa y cuatro.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

DE LEON CARPIO

EL SECRETARIO GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

HECTOR J. L. LUCAS HOCOL

ORGANISMO EJECUTIVO

Presidencia de la República

Modifícase en la forma que se indica, el inciso c) del Artículo 4o. del Acuerdo Gubernativo número 682-93 del 11 de noviembre de 1993.

ACUERDO GUBERNATIVO NUMERO 225-94

Palacio Nacional: Guatemala, 12 de mayo de 1994.

El Presidente de la República,

CONSIDERANDO:

Que mediante Acuerdo Gubernativo número 682-93, de fecha once de noviembre de mil novecientos noventa y tres, se creó la Unidad Preparatoria encargada de organizar un proceso de consulta con los Pueblos Indígenas para el análisis y estudio de la creación y organización del Fondo de Desarrollo Indígena.

CONSIDERANDO:

Que en el Artículo 4o., inciso c), del citado Acuerdo Gubernativo, se estableció un plazo no mayor de seis meses a partir de la vigencia del Acuerdo Gubernativo para presentar el planteamiento concreto y completo para la creación del Fondo de Desarrollo Indígena.

FOR TANTO:

Con base en lo considerado y en lo que para el efecto preceptúan los artículos 66, 67, 68 y 69 de la Constitución Política de la República de Guatemala; y en el ejercicio de las facultades que le confiere el Artículo 183, incisos e) y m) del mismo cuerpo legal:

EN CONSEJO DE MINISTROS

ACUERDA:

Artículo 1o. Modificar el inciso c) del Artículo 4o. del Acuerdo Gubernativo número 682-93, el cual queda así:

"c. Presentar a la Presidencia de la República, dentro de un plazo que vence el 30 de junio de 1994, el planteamiento concreto y completo para la creación del Fondo de Desarrollo Indígena".

Artículo 2o. El presente Acuerdo empezará a regir el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial.



COMUNIQUESE.

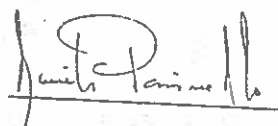
RAMIRO DE LEON CARPIO

El Vicepresidente de la República

ARTURO HERRERA ASTURIAS



GOSME ALFREDO TAY
MINISTRO DE EDUCACION


DANIEL Z. P. PRÍNCIPE M.
MINISTRO DE GOBERNACION



DR. EUGENE E. GONZALEZ S. DE T.
VICEPRESIDENTE DE LA REPUBLICA
Y A. S.


MARITZA RUIZ DE VELASCO
SECRETARIA DE RELACIONES EXTERNALES



DR. Jorge E. Góngora
Ministro de Comunicaciones,
Transporte y Obras Públicas



DR. ARTURO DEL VALLE R.
MINISTRO DE AGRICULTURA,
GANADERIA Y ALIMENTACION

EL MINISTRO DE ECONOMIA

Lic. Gladys Annabell Estrella Manilla
Ministra de Trabajo y Previsión Social

EDUARDO GONZALEZ CASTILLO

EL VICEMINISTRO DE CULTURA Y DEPORTES
ENCARGADO DEL DESPACHO

EL VICEMINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
ENCARGADO DEL DESPACHO

VITELIO IVAN BARRERA MELGAR

GUSTAVO ABOLTO CHENG BECKER

EL MINISTRO DE ENERGIA Y MINAS

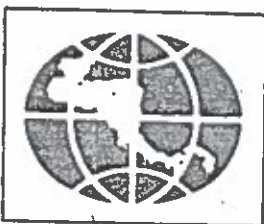


ANA ORDOÑEZ DE MOLINA
Ministra de Relaciones Exteriores

JOSE LUIS TERRON CALDERON



CONSEJO DE DEFENSA
MARIO ZEITH ENRIQUEZ MORALES
Ministro de la Defensa Nacional



Diario de Centro América

Órgano oficial de la República de Guatemala

● Tomo CCXXXV ● Decano de la Prensa Centroamericana ● Directora Carmen Escribano de León ● Guatemala, viernes 10 de febrero de 1989 ● Número 64

SUMARIO

ORGANISMO LEGISLATIVO

CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA

DECRETO NUMERO 4-89

ORGANISMO EJECUTIVO

MINISTERIO DE ECONOMIA

Aprobábase en la cantidad que se indica el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, para el período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 1989.

PUBLICACIONES VARIAS

CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD

Declárase la inconstitucionalidad del calificativo "de origen", contenido en el inciso a) artículo 11 del Reglamento de la Ley del Impuesto Único sobre inmuebles; inconstitucionalidad del párrafo 3º del artículo 15 de dicho Reglamento y, sin lugar al resto de inconstitucionalidades planteadas.

MINISTERIO DE EDUCACION

JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL

NOMINA NUMERO 2-89

NOMINA NUMERO 3-89

ANUNCIOS VARIOS

Matrimonios. — Registro de derechos de autor. — Líneas de transporte. — Constituciones de sociedad. — Modificaciones de sociedad. — Patentes de invención. — Registro de marcas. — Títulos supletorios. — Edictos. — Remates.

Empresa Comercial e Industrial Ramset de Guatemala, Sociedad Anónima.—Balance General al 30 de junio de 1979

Empresa Comercial e Industrial Ramset de Guatemala, Sociedad Anónima.—Balance General al 30 de junio de 1980.

Inmobiliaria Alcobendas, S. A.—Balance General al 31 de diciembre de 1982.

Salé, S. A., Plaza Lorenzo.—Balance General al 31 de diciembre de 1982.

ATENCION ANUNCIANTES IMPRESION SE HACE CONFORME ORIGINAL

Toda impresión en la parte legal del Diario de Centro América, se hace respetando el original.

Por lo anterior, esta Administración ruega al público tomar nota.

ORGANISMO LEGISLATIVO

CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA

DECRETO NUMERO 4-89

El Congreso de la República de Guatemala,

CONSIDERANDO:

Que la conservación, restauración y manejo de la fauna y flora silvestre de los guatemaltecos es fundamental para el logro de un desarrollo social y económico sostenido del país;

CONSIDERANDO:

Que los recursos de flora y fauna han devenido en franco deterioro, al extremo de que varias especies han desaparecido y otras corren grave riesgo de extinción;

CONSIDERANDO:

Que la Constitución Política de la República de Guatemala, en su artículo 61, declara de interés nacional la conservación, protección y mejoramiento del patrimonio natural de la Nación y que mediante una ley específica se garantizará la creación y protección de parques nacionales, reservas, los refugios naturales y la fauna y la flora que en ellos exista;

CONSIDERANDO:

Que para la adecuada conservación y mejoramiento del medio ambiente es indispensable la creación y organización de los sistemas y mecanismos que protejan la vida silvestre de la flora y fauna del país;

CONSIDERANDO:

Que la virtual ausencia de un plan nacional para la adecuada coordinación y manejo de las diversas categorías de áreas protegidas en el país, ha hecho necesaria la acción individualizada de los distintos entes que las administran,

POR TANTO,

En uso de las facultades que le confieren los artículos 157 y 171, inciso a) de la Constitución Política de la República de Guatemala,

DECRETA:

La siguiente

LEY DE AREAS PROTEGIDAS

TITULO I

PRINCIPIOS, OBJETIVOS GENERALES Y AMBITO DE APLICACION DE ESTA LEY

CAPITULO I

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES

ARTICULO 1.—Interés nacional. La vida silvestre es parte integrante del patrimonio natural de los guatemaltecos y por lo tanto, se declara de interés nacional su restauración, protección, conservación y manejo en áreas debidamente planificadas.

ARTICULO 2.—Creación del sistema guatemalteco de áreas protegidas. Se crea el Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas (SIGAP), integrado por todas las áreas protegidas y entidades que las administran, cuya organización y características establece esta Ley, a fin de lograr los objetivos de la misma en pro de la conservación, rehabilitación, mejoramiento y protección de los recursos naturales del país, particularmente de la flora y fauna silvestre.

ARTICULO 3.—Educación Ambiental. Se considera factor fundamental para el logro de los objetivos de esta ley, la participación activa de todos los habitantes

del país en esta empresa nacional, para lo cual es indispensable el desarrollo de programas educativos, formales e informales, que tiendan al reconocimiento, conservación y uso apropiado del patrimonio natural de Guatemala.

ARTICULO 4.—Coordinación. Para lograr los objetivos de esta ley se mantendrá la más estrecha vinculación y coordinación con las disposiciones de las entidades establecidas por otras leyes que persiguen objetivos similares en beneficio de la conservación y protección de los recursos naturales y culturales del país.

CAPITULO II

DE LOS OBJETIVOS DE ESTA LEY

ARTICULO 5.—Objetivos Generales. Los objetivos generales de la Ley de Áreas Protegidas son:

- Asegurar el funcionamiento óptimo de los procesos ecológicos esenciales y de los sistemas naturales vitales para beneficio de todos los guatemaltecos.
- Lograr la conservación de la diversidad genética de flora y fauna silvestre del país.
- Alcanzar la capacidad de una utilización sostenida de las especies y ecosistemas en todo el territorio nacional.
- Defender y preservar el patrimonio natural de la nación.
- Establecer las áreas protegidas necesarias en el territorio nacional, con carácter de utilidad pública e interés social.

CAPITULO III

AMBITO DE APLICACION DE LA LEY

ARTICULO 6.—Aplicación. La presente ley es de aplicación general en todo el territorio de la República y para efectos de la mejor atención de las necesidades locales y regionales en las materias de su competencia, los Consejos de Desarrollo coadyuvarán en el planeamiento general, estudio, proposición, programación y desarrollo de las áreas protegidas declaradas y por declarar, dentro del ámbito de la respectiva región.

TITULO II

DE LA CONSERVACION DE LA FLORA Y FAUNA SILVESTRE Y DE SU HABITAT

CAPITULO I

DE LA CONFORMACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS

ARTICULO 7.—Áreas protegidas. Son áreas protegidas, incluidas sus respectivas zonas de amortiguamiento, las que tienen por objeto la conservación, el manejo racional y la restauración de la flora y fauna silvestre, recursos conexos y sus interacciones naturales y culturales, que tengan alta significación por su función o sus valores genéticos, históricos, escénicos, recreativos, arqueológicos y protectores, de tal manera de preservar el estado natural de las comunidades bióticas, de los fenómenos geomorfológicos únicos, de las fuentes y suministros de agua, de las cuencas críticas de los ríos, de las zonas protectoras de los suelos agrícolas, de tal modo de mantener opciones de desarrollo sostenible.

ARTICULO 8.—Categorías de manejo. Las áreas protegidas para su óptima administración y manejo se clasifican en: parques nacionales, biotopos, reservas de la biosfera, reservas de uso múltiple, reservas forestales, reservas biológicas, manantiales, reservas de recursos, monumentos naturales, monumentos culturales, rutas y vías escénicas, parques marinos, parques regionales, parques históricos, refugios de vida silvestre, áreas naturales recreativas, reservas naturales privadas y otras que se establezcan en el futuro con fines similares, las cuales integran el Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas, creado dentro de esta misma ley, independientemente de la entidad, persona individual o jurídica que las administre.

ARTICULO 9. Fondos propiedad de la nación. Las reservas territoriales y fincas inscritas propiedad de la nación que reúnan características adecuadas para ello, deberán dedicarse preferentemente a objetivos de conservación bajo manejo.

ARTICULO 10. Áreas en propiedad privada. Cuando una área de propiedad privada haya sido declarada protegida, o sea susceptible de ser declarada como tal, el propietario mantendrá plenamente sus derechos sobre la misma y la manejará de acuerdo a las normas y reglamentaciones aplicables al Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas.

ARTICULO 11. Estudio de áreas protegidas. La declaratoria oficial de un área protegida, de cualquier naturaleza que sea, debe fundamentarse en un estudio técnico que analice preferentemente las características y condiciones físicas, sociales, económicas, culturales y ambientales en general que prevalecen en la zona propuesta, así como los efectos de su creación para la vida integral de su población. Dicho estudio que seguirá los lineamientos establecidos en el reglamento de esta ley adaptados al tipo de área protegida que se pretende establecer, estará a cargo de la "Unidad de Estudios y Planeamiento" de la Secretaría Ejecutiva que se establece en esta misma ley. Este estudio lo puede elaborar una entidad privada, pero sujeto a su evaluación por dicha unidad.

ARTICULO 12. Procedimiento general para la declaratoria. En base a las propuestas que se reciban en el Consejo Nacional que crea esta misma ley, o en las que surjan de su propia iniciativa, el Consejo dispondrá de la realización del estudio señalado en el artículo anterior, en base a una evaluación preliminar sobre la justificación de la propuesta de mérito. Si las conclusiones del estudio técnico hacen recomendable la creación legal del área protegida, el Organismo Ejecutivo propondrá la iniciativa de ley al Organismo Legislativo, para su creación y legalización correspondiente. Una vez emitido el Decreto respectivo, la Secretaría Ejecutiva dispondrá lo conveniente para su aplicación inmediata y su adecuada programación, administración, financiamiento y control.

ARTICULO 13. Fuentes de agua. Como programa prioritario del "SIGAP", se crea el Subsistema de Conservación de los Bosques Pluviales, de tal manera de asegurar un suministro de agua constante y de aceptable calidad para la comunidad guatemalteca. Dentro de él podrá haber reservas naturales privadas.

ARTICULO 14. Administración de reservas naturales privadas. Las personas individuales o jurídicas podrán administrar áreas protegidas de su propiedad directamente o por mandato, cuando cumplan los requisitos establecidos en esta ley, sus reglamentos y demás disposiciones del Consejo Nacional de Áreas Protegidas.

ARTICULO 15. Recuperación de las actuales áreas protegidas. Se declara de urgencia y necesidad nacional la recuperación de las áreas protegidas existentes ya declaradas legalmente.

ARTICULO 16. Zona de amortiguamiento. Se establece zona de amortiguamiento alrededor de todas las áreas protegidas existentes o de las que se creen en el futuro, consistente en la superficie territorial que protege el funcionamiento adecuado del área protegida.

ARTICULO 17. Áreas protegidas fronterizas. En las áreas protegidas fronterizas se promoverá la celebración de convenios con el país o países vecinos a efecto de lograr medidas protectoras concordantes entre estos países.

CAPITULO II

DEL MANEJO DE LAS AREAS PROTEGIDAS

ARTICULO 18. Planes maestros y operativos. El manejo de cada una de las áreas protegidas del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas, SIGAP, estará definido por su respectivo plan maestro, el cual es traducido a planes operativos anuales, los cuales serán elaborados por el ente ejecutor del área, o la persona individual o jurídica que la administra. Todos los planes maestros y operativos deben ser aprobados por el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP).

ARTICULO 19. Concesiones. El CONAP podrá dar en arrendamiento u otorgar concesiones de aprovechamiento en las áreas protegidas bajo su administración, siempre y cuando el plan maestro respectivo lo establezca y lo permita claramente, debiendo suscribirse los correspondientes contratos de concesión.

ARTICULO 20. Actividades dentro de las áreas protegidas. Las empresas públicas o privadas que tengan actualmente, o que en el futuro desarrollen instalaciones o actividades comerciales, industriales, turísticas, pesqueras, forestales, agropecuarias, experimentales, o de transporte dentro del perímetro de las áreas protegidas, celebrarán de mutuo acuerdo con el Consejo, un contrato en el que se establecerán las condiciones y normas de operación, determinadas por un estudio de impacto ambiental, presentado por el interesado y evaluado por el CONAP y, bajo las cuales dichas empresas funcionarán, siempre y cuando su actividad sea compatible con los usos previstos en el plan maestro de la unidad de conservación de que se trate.

ARTICULO 21. Impacto ambiental de rutas. Cuando por cualquier razón las áreas protegidas tengan o deba construirse caminos, ya sea para el transporte interno del área protegida o para transporte de uso general, éstos deben ser construidos solamente si se logra un estudio de impacto ambiental favorable, presentado por el ente o empresa interesada en la construcción y

aprobado por la Comisión Nacional del Medio Ambiente y por el CONAP. Cuando la construcción sea realizada por un concesionario, éste será el responsable de su construcción, modificaciones y mantenimiento por, al menos, el tiempo que dure la concesión, salvo si en el contrato se especifica lo contrario. En el caso de las áreas públicas, las rutas serán construidas y mantenidas por el Ministerio de Comunicaciones Transporte y Obras Públicas.

ARTICULO 22. Asentamientos. Las personas individuales o jurídicas que se encuentren asentadas dentro de las áreas protegidas, o las que se creen en el futuro, deberán adecuar su permanencia en las mismas, a las condiciones y normas de operación, usos y zonificación de la unidad de que se trate, procurando su plena incorporación al manejo programado de la misma.

CAPITULO III

CONSERVACION DE LA FLORA Y FAUNA SILVESTRE

ARTICULO 23. Flora y fauna amenazadas. Se considera de urgencia y necesidad nacional el rescate de las especies de flora y fauna en peligro de extinción, de las amenazadas y la protección de las endémicas.

ARTICULO 24. Listados de especies amenazadas. El Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) elaborará anualmente los listados de especies de fauna y flora silvestre de Guatemala, amenazadas de extinción, así como de las endémicas y de aquellas especies que no teniendo el estatus indicado antes, requieran autorización para su aprovechamiento y comercialización. Las modificaciones, adiciones, eliminaciones, reservas o cambios se publicarán en el Diario Oficial.

ARTICULO 25. Convenio internacional. Los listados de especies de flora y fauna de los apéndices I y II del Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestres, Decreto 63-79 del Congreso de la República, según sean aprobados por las partes contratantes se considerarán oficiales para Guatemala, salvo reserva expresa de la autoridad administrativa guatemalteca del convenio. Las modificaciones, adiciones, eliminaciones, reservas o cambios se publicarán en el Diario Oficial.

ARTICULO 26. Exportación de especies amenazadas. Se prohíbe la libre exportación y comercialización de las especies silvestres de flora y fauna amenazadas de extinción extraídas de la naturaleza. Sólo se podrán exportar, llenando los requisitos de ley, aquellos ejemplares que hayan sido reproducidos por personas individuales o jurídicas autorizadas en condiciones controladas y a partir de la segunda generación. En este caso también será aplicable lo prescrito en el convenio citado en el artículo anterior.

ARTICULO 27. Regulación de especies amenazadas. Se prohíbe la recolección, captura, caza, pesca, transporte, intercambio, comercio y exportación de las especies de fauna y flora en peligro de extinción, de acuerdo a los listados del CONAP, salvo que por razones de sobrevivencia, rescate o salvaguarda de la especie, científicamente comprobado, sea necesaria alguna de estas funciones. En este caso también son aplicables las regulaciones del convenio referido en el artículo 25 de esta ley.

ARTICULO 28. Vedas. El Consejo Nacional de Áreas Protegidas establecerá las vedas, continental e insular, en todo el territorio nacional. Si lo considera necesario lo hará conjuntamente con instituciones públicas y privadas. El reglamento indicará el procedimiento a seguir.

ARTICULO 29. Centro de rescate. Se crea el Centro de Investigación y Rescate, de Flora y Fauna Silvestre, el cual funcionará como un programa permanente del CONAP, al que se le proveerá adecuadamente de los recursos técnicos y financieros que amerite.

ARTICULO 30. Introducción de plantas y animales. Se prohíbe introducir libremente especies exógenas a los ecosistemas que se encuentran bajo régimen de protección. Para realizarlas deberá contarse con la aprobación del CONAP, el está preestablecido en el plan maestro y en plan operativo vigente. Igualmente, la introducción de peces exóticos a cuerpos de agua natural, por cualquier entidad del Estado o privada, requiere el visto bueno del CONAP. El ganado cimarrón que por cualquier causa se encuentre dentro de las áreas protegidas, quedará sometido a las disposiciones de manejo de la unidad de conservación que corresponda.

CAPITULO IV

INCENTIVOS FISCALES A LA CONSERVACION DEL PATRIMONIO NATURAL DE GUATEMALA

ARTICULO 31. Exención del impuesto territorial. Quienes dediquen sus propiedades para reservas naturales privadas estarán exentos del 10 por ciento del impuesto territorial de la finca o porción que dediquen a tales fines. Para ello deberán contar con informe favorable anual de la Secretaría Ejecutiva del CONAP.

ARTICULO 32. Exención del impuesto sobre la renta. Las personas individuales o jurídicas privadas que se dediquen directamente a las actividades de investigación, fomento y desarrollo de áreas protegidas, por las cuales obtengan ingresos gravables, podrán deducir de su pago anual del impuesto sobre la renta, hasta el equivalente del 50% del mismo. La exención anterior es adicional a las otorgadas por otras leyes específicas.

TITULO III

DEL APROVECHAMIENTO RACIONAL DE LA FLORA Y FAUNA SILVESTRE

CAPITULO I

APROVECHAMIENTO DE LA FLORA Y FAUNA SILVESTRE

ARTICULO 33. Aprovechamiento. Para los fines de esta ley se entiende por aprovechamiento de la flora y fauna cualquier acción de búsqueda, recolecta, extracción, reproducción, captura o muerte de ejemplares de plantas o animales silvestres, según sea el caso.

ARTICULO 34. Espiritu de la ley. Las normas y disposiciones que se emitan en relación al aprovechamiento de la flora y fauna deberán basarse en los principios fundamentales contenidos en el Título I de la presente ley.

ARTICULO 35. Autorización. Para el aprovechamiento de productos de la vida silvestre protegidos por esta ley, sus reglamentos y leyes conexas, el interesado deberá contar con la autorización correspondiente, extendida por el CONAP.

ARTICULO 36. Aprovechamientos especiales. En los aprovechamientos forestales, legalmente autorizados por DIGEBOS, se podrá hacer colecta de plantas y animales, siempre que previamente se obtenga el permiso del CONAP. La DIGEBOS y el CONAP mantendrán una coordinación estrecha y permanente respecto a estas actividades.

ARTICULO 37. Derechos de caza. Los habitantes del país, nacionales o extranjeros que deseen capturar o cazar animales, deberán obtener la licencia respectiva y cumplir con los requisitos establecidos por la ley.

ARTICULO 38. Excepciones. Una licencia para el aprovechamiento de la fauna o la flora del país, no autoriza al tenedor a realizar tales actividades en áreas no indicadas o en complejidades particulares.

CAPITULO II

DE LA CAZA Y PESCA DEPORTIVA

ARTICULO 39. Zonas de caza. Anualmente el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) establecerá los periodos, lugares geográficos, artes, armas y demás requisitos para efectuar la caza y la pesca deportiva.

ARTICULO 40. Áreas privadas de caza. El CONAP podrá autorizar áreas privadas de caza, siempre que cumpla los requisitos establecidos en el reglamento. La temporada, volumen de cosecha y demás requisitos para la caza serán autorizados anualmente por el mismo. El Consejo Nacional podrá establecer áreas de caza conjuntamente con el sector privado.

ARTICULO 41. Portación de armas. Una licencia de caza no faculta a su tenedor nominal para portar arma contundente, blanca o de fuego; ya que ello implica una autorización especial de la autoridad competente.

ARTICULO 42. Armas prohibidas. Se prohíbe la caza y pesca portiva con artes o armas no aprobadas por el CONAP.

ARTICULO 43. Vigencia de las licencias. Las licencias de caza y pesca serán válidas únicamente para el periodo que se indica, el cual no podrá ser mayor que la época oficial anual establecida para ello. Una vez utilizadas o que hayan caducado, las licencias deberán ser devueltas inmediatamente.

ARTICULO 44. Valor de las licencias de caza y pesca. El valor de las licencias de caza o de pesca será lo establecido con unidad, anualmente por el CONAP. Una sola licencia podrá cubrir grupo familiar de hasta 3 personas.

ARTICULO 45. Derechos por ejemplar a cazar. Además del pago de la licencia, el cazador pagará, al momento de recibir la licencia, los derechos que establezca el CONAP, por cada ejemplar especie que desee cazar.

ARTICULO 46. Exoneraciones. Las licencias de caza y pesca con fines de investigación o subsistencia, así como el pago por ejemplar obtenido, son exoneradas de pago.

CAPITULO III

DISPOSICIONES ESPECIALES

ARTICULO 47. Autorización para investigación. El Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP), autorizará o generará las investigaciones de todo tipo y categoría que se realicen en áreas protegidas, de acuerdo a las normas que se establezcan.

ARTICULO 48. Caza en áreas protegidas. Es terminantemente prohibido cazar o recolectar dentro de las áreas protegidas del SIGAP y en las zonas de amortiguamiento de las mismas, excepto si el plan maestro y operativo vigente lo permiten y si la licencia para tal actividad así lo expresa.

ARTICULO 49. Cuotas de exportación permitidas. La exportación de animales silvestres cazados que no estén en los listados de especies amenazadas pero que si estén en listados de las especies protegidas, podrá hacerse por cuotas anuales o mensuales, cumpliendo con los requisitos establecidos por el Consejo Nacional de Áreas Protegidas en la respectiva reglamentación.

ARTICULO 50. Importación de vida silvestre. La importación de flora y fauna silvestre requiere aprobación expresa. Los convenios internacionales y el reglamento de la ley normarán lo concerniente a esta materia.

ARTICULO 51. Control de embarques de vida silvestre. La Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional de Áreas Protegidas, sin podersele imputar responsabilidad alguna, podrá retener embarques de productos de la vida silvestre, tanto originados en Guatemala como aquellos en tránsito, en cualquier fase de su envío o traslado, cuando considere que se trata de comercio ilegal o se infrinjan las disposiciones de esta ley y sus reglamentos.

ARTICULO 52. Normas para el uso de la vida silvestre. Las personas individuales o jurídicas que regularmente se dediquen o deseen realizar actividades de corte, recolecta, caza, captura, transporte, tenencia comercial, intercambio, investigación o comercialización de plantas o animales silvestres, vivos o muertos, partes o derivados de los mismos, deberán contar con la autorización expresa del Consejo Nacional de Áreas Protegidas. El reglamento indicará los requisitos para cada caso.

ARTICULO 53. Reproducción de plantas y animales silvestres. Toda persona individual o jurídica que, con fines comerciales o acumulativos, se dedique a la reproducción de animales o plantas silvestres, deberá cumplir con los requisitos establecidos en esta ley, leyes conexas y con las normas y disposiciones que emita el CONAP.

ARTICULO 54. Regencia para la reproducción de vida silvestre. Las empresas que se dediquen a la reproducción y comercialización de plantas o animales silvestres deberán contar con la regencia de un profesional especializado en la materia.

ARTICULO 55. Resguardo de los recursos naturales. Quienes posean concesiones de aprovechamiento de recursos naturales en regiones silvestres, aunque no estén bajo régimen de protección, tienen la obligación de evitar el uso de recursos no autorizados dentro del Área de la concesión, por sus propios empleados, dependientes, concesionarios y personas ajenas. También, deben restaurar aquellas asociaciones o ecosistemas que fueron evidentemente transformados directa o indirectamente, así como limpiar y devolver la calidad de los medios que hubiesen contaminado.

ARTICULO 56. Colecciones. Los zoológicos, las colecciones particulares de fauna, de circo, de museos y las de entidades de investigación están sujetas a las regulaciones del CONAP.

ARTICULO 57. Organismos no gubernamentales. Las agrupaciones no gubernamentales conservacionistas de la naturaleza, integrantes del SIGAP, podrán ser agentes representantes y ejecutivos del Consejo Nacional de Áreas Protegidas, CONAP, para lo cual deberá mediar un convenio específico.

ARTICULO 58. Turismo. El Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT), el Instituto de Antropología e Historia y el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, se coordinarán estrechamente a través de sus respectivas direcciones, para compatibilizar y optimizar el desarrollo de las áreas protegidas y la conservación del paisaje y los recursos naturales y culturales con el desarrollo de la actividad turística.

TITULO IV

DEL ORGANO DE DIRECCION Y ENCARGADO DE LA APLICACION

DE ESTA LEY

CAPITULO I

DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS Y SU SECRETARIA EJECUTIVA

ARTICULO 59. Creación del consejo nacional de áreas protegidas. Se crea el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, con personalidad jurídica que depende directamente de la Presidencia de la República, cuya denominación abreviada en esta ley es "CONAP" o simplemente el Consejo, como el órgano máximo de dirección y coordinación del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas (SIGAP) creado por esta misma ley, con jurisdicción en todo el territorio nacional, sus costas marítimas y su espacio aéreo. Tendrá autonomía funcional y su presupuesto estará integrado por una asignación anual del Estado y el producto de las donaciones específicas particulares, países amigos, organismos y entidades internacionales.

ARTICULO 60. Secretaría ejecutiva del CONAP. Para la ejecución de sus decisiones de política y la realización de sus programas de acción, el CONAP contará con una Secretaría

necesarias para el buen manejo de los asuntos técnicos y administrativos del Consejo, incluyendo por lo menos los departamentos de:

- a. Investigación, estudios y planeamiento.
- b. Ejecución, desarrollo y control.
- c. Departamento administrativo.

ARTICULO 61. Sede, delegación y duración. El CONAP tendrá su sede principal en la ciudad de Guatemala, podrá establecer dependencias y delegaciones en el interior de la República y su duración es de tiempo indefinido.

ARTICULO 62. Fines del CONAP. Los fines principales del Consejo Nacional de Areas Protegidas son los siguientes:

- a. Promover la conservación y el mejoramiento del patrimonio natural de Guatemala.
- b. Organizar, dirigir y desarrollar el Sistema Guatemalteco de Areas Protegidas, SIGAP.
- c. Planificar y conducir una estrategia nacional para la conservación de los recursos naturales renovables de Guatemala.
- d. Coordinar la administración de los recursos de flora y fauna silvestres de la nación, a través de sus respectivos órganos ejecutores.

CAPITULO II

ORGANIZACION Y ATRIBUCIONES

ARTICULO 63. Integración. Para cumplir sus fines y objetivos, el Consejo Nacional de Areas Protegidas estará integrado por los representantes de las entidades siguientes:

- a. Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA).
- b. Dirección General de Bosques y Vida Silvestre (DIGEBOS).
- c. Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT).
- d. Instituto Nacional de Antropología e Historia (IDAEH).
- e. Centro de Estudios Conservacionistas (CECON/USAC).
- f. Instituto Nacional de Transformación Agraria (INTA).
- g. Oficina de Control de Areas de Reserva de la Nación (OCREN).
- h. Asociación Nacional de Municipalidades (ANAM).
- i. Asociación de "Amigos del Bosque".
- j. Consejo Técnico de Educación.
- k. Asociación "Defensores de la Naturaleza".
- l. Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural.
- m. Un delegado del Comité de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF).
- n. Un delegado de las asociaciones no gubernamentales conservacionistas de la naturaleza que se creen en el futuro y registradas en el CONAP.

ARTICULO 64. Presidencia. La presidencia del CONAP será desempeñada por el Coordinador Nacional del Medio Ambiente, quien, en caso de emergencia, delegará sus funciones en uno de los miembros del Consejo que él estime conveniente.

ARTICULO 65. Secretaría del CONAP. La Secretaría del Consejo será desempeñada por el Secretario Ejecutivo del Sistema, quien participará en las sesiones del CONAP con voz pero sin voto.

ARTICULO 66. Representaciones en el CONAP. Las entidades integrantes del Consejo Nacional de Areas Protegidas estarán representadas, con un titular y un suplente, por sus respectivas autoridades o expertos, designados por la autoridad máxima de cada institución, por un periodo mínimo de dos años prorrogables, por otro periodo, a juicio de cada entidad.

ARTICULO 67. Reuniones y decisiones. El CONAP se reunirá ordinariamente dos veces por mes y en forma extraordinaria cuando lo considere conveniente o su presidente lo estime necesario. La toma de decisiones la hará por mayoría absoluta de votos de sus miembros asistentes, cuyo quórum lo componen por lo menos los dos tercios de sus integrantes.

ARTICULO 68. Asistencia a sesiones. Los miembros del Consejo asistirán y atenderán las sesiones ordinarias y extraordinarias del mismo, en forma ad-honorem.

ARTICULO 69. Atribuciones del CONAP. Las atribuciones del Consejo Nacional de Areas Protegidas son:

- a. Elaborar la política y la estrategia de conservación del

b. Elaborar los reglamentos y aprobar las normas de funcionamiento del Sistema Guatemalteco de Areas Protegidas (SIGAP).

c. Aprobar sus planes y programas de trabajo.

d. Aprobar la organización administrativa y técnica de sus dependencias, a propuesta del secretario ejecutivo.

e. Aprobar la contratación, promoción y remoción de los asesores y empleados del Consejo, tomando en consideración las propuestas del secretario ejecutivo.

f. Aprobar los dictámenes de convenios y contratos con entidades o empresas internacionales.

g. Aprobar su presupuesto anual de ingresos y egresos.

h. Aprobar la suscripción de contratos con personas individuales o jurídicas.

i. Aprobar anualmente la memoria de labores y la liquidación de su presupuesto.

j. Aprobar las erogaciones mayores de diez mil (10,000) quetzales.

k. Aprobar los planes maestro y operativos de las áreas protegidas del SIGAP.

l. Emitir las disposiciones y resoluciones que emanen de la aplicación de la presente ley y sus reglamentos.

ll. Aprobar la suscripción de concesiones de aprovechamiento y manejo en las áreas protegidas del SIGAP.

m. Mantener estrecha coordinación e intercomunicación entre las entidades integrantes del SIGAP, en especial con la Comisión Nacional del Medio Ambiente.

n. Servir de órgano asesor a la Presidencia de la República y a todas las entidades estatales que requieran de sus servicios en materia de conservación y protección de los recursos naturales del país.

ñ. Todas aquellas atribuciones que sean necesarias para el buen funcionamiento del Sistema Guatemalteco de Areas Protegidas (SIGAP).

ARTICULO 70. Atribuciones del secretario ejecutivo. El Secretario Ejecutivo como autoridad administrativa y ejecutiva, tendrá las atribuciones siguientes:

a. Dirigir las actividades técnico-administrativas de la Secretaría Ejecutiva del CONAP.

b. Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias y proponer la agenda a tratar, de común acuerdo con el presidente del consejo.

c. Participar en las sesiones del CONAP en calidad de Secretario.

d. Hacer aplicables las políticas, estrategias y directrices aprobadas por el CONAP.

e. Ejecutar las resoluciones y disposiciones que emita el CONAP.

f. Proponer todos aquellos asuntos que deba conocer el Consejo.

g. Ser el medio de comunicación entre toda la organización del Consejo y de los usuarios de sus servicios.

h. Autorizar los contratos de concesión, de aprovechamiento y/o manejo de áreas protegidas del SIGAP, aprobados por el Consejo.

i. Rendir al Consejo los informes que le sean requeridos o los que de oficio deba rendir.

j. Activar el avance de todos los planes, programas y proyectos del CONAP.

k. Evaluar las diferentes dependencias y las unidades del Sistema Guatemalteco de Areas Protegidas, SIGAP, con el fin de lograr la óptima armonización en el uso de los recursos.

l. Aprobar gastos hasta por un monto de diez mil (10,000.00) quetzales bajo su propia responsabilidad.

m. Proponer los reglamentos que requiera el funcionamiento del Consejo y las dependencias de la secretaria ejecutiva.

n. Proponer al Consejo el nombramiento, la contratación y la promoción o remoción de los asesores o empleados del CONAP.

ñ. Realizar la administración, supervisión y superación técnica del personal.

o. Firmar los contratos y convenios autorizados por el Consejo.

p. Otorgar las licencias y permisos de aprovechamiento de la vida silvestre.

q. Evaluar y supervisar el funcionamiento de los programas, planes y actividades del CONAP.

f. Todas aquellas atribuciones que sean compatibles y atribuibles a su cargo.

ARTICULO 71. Calidades del secretario ejecutivo. Para ser Secretario Ejecutivo se requiere reunir las siguientes calidades:

- Ser guatemalteco.
- Ser profesional universitario con el grado mínimo de licenciado en una de las ramas afines a las Áreas protegidas y a la vida silvestre.
- Tener experiencia comprobable como profesional graduado en el Área de conservación y manejo de áreas protegidas y conservación de vida silvestre, por lo menos cinco años.
- Estar en el goce de sus derechos civiles.
- Ser del estado seglar.

ARTICULO 72. Representación del secretario ejecutivo. El Secretario Ejecutivo tendrá la representación legal del Consejo Nacional de Áreas Protegidas, CONAP.

ARTICULO 73. Autoridad del CITES. El Secretario Ejecutivo representa la autoridad administrativa del convenio CITES. Está facultado para designar las autoridades científicas que considere pertinente y los mecanismos que mejoren el funcionamiento del convenio.

ARTICULO 74. Ausencia. En caso de incapacidad, impedimento o ausencia temporal del Secretario Ejecutivo, hará sus veces uno de los jefes de dependencia designados por él mismo o, si no hubiere designación expresa, el director de administración.

CAPITULO III

OTRAS RESPONSABILIDADES Y ACTIVIDADES DEL CONAP

ARTICULO 75. Registros. El CONAP establecerá los registros necesarios que propendan a la conservación, aprovechamiento racional y buena administración de los recursos de vida silvestre y áreas protegidas, incluyendo los siguientes:

- Registro de áreas de conservación del SIGAP.
- Registro de fauna silvestre de la nación.
- Registro de personas individuales o jurídicas que se dediquen a cualesquiera de las actividades siguientes: Curtiembre de pieles, taxidermia, comercio de animales y plantas silvestres, cazadores profesionales, peletería de animales silvestres, investigación de flora y fauna silvestre.
- Registro de fauna silvestre exótica.

El reglamento de esta ley determinará los requisitos y las normas operativas aplicables a cada uno de los registros mencionados.

ARTICULO 76. Emisión de licencias. La emisión de licencias de aprovechamiento, caza, pesca deportiva, transporte, tenencia comercial, manejo, exportación y comercialización de productos de flora y fauna silvestre, corresponde al Consejo Nacional de Áreas Protegidas. Toda licencia o permiso que extienda el CONAP se considera personal e intransferible.

ARTICULO 77. Formación de recursos humanos. El CONAP organizará un programa permanente de formación y capacitación de los recursos humanos especializados en el manejo, conservación y control de la flora y fauna silvestre, aprovechando para el efecto, además de los propios recursos, todas aquellas posibilidades de adiestramiento y asistencia que brinden instituciones técnicas nacionales o internacionales, gubernamentales o no. Especial atención recibirá el adiestramiento y selección de los Guardarecursos, quienes atenderán directamente las labores de control y vigilancia en el campo.

ARTICULO 78. Inspecciones. Directivos y funcionarios del CONAP y la Secretaría Ejecutiva, están facultados para realizar inspecciones en las distintas áreas del SIGAP, así como en las instalaciones agroindustriales y comerciales que manejan productos de la vida silvestre, siempre que estén debidamente acreditados para el desempeño de esta función y procedan de conformidad con lo que establezca el respectivo reglamento y las leyes de la materia.

ARTICULO 79. Régimen de personal. La contratación del personal técnico y administrativo que laborará en el Consejo y sus dependencias ejecutivas, se hará conforme a las regulaciones establecidas por la Oficina Nacional de Servicio Civil, satisfaciendo los requerimientos de especialización que demanden los diversos puestos de la entidad.

CAPITULO IV

REGIMEN ECONOMICO-FINANCIERO DEL CONAP

ARTICULO 80. Presupuesto. El CONAP y su Secretaría Ejecutiva integrarán su presupuesto anual en base esencialmente a las asignaciones ordinarias y extraordinarias que se fijen en el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado; y además, con la constitución de recursos privativos provenientes de:

- Los ingresos que perciba por cualquier donación, en efectivo o especie.
- Los títulos o valores que adquiera por cualquier concepto.
- Los bienes que le sean transferidos por las dependencias del Estado o sus instituciones descentralizadas y autónomas.
- Los bienes que adquiera por cualquier título.
- Las donaciones de bienes inmuebles bajo cualquier concepto.
- Todas las unidades de conservación del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas (SIGAP) que no tengan carácter privado, o pertenezcan a otras instituciones estatales.
- El producto financiero de las actividades organizadas directamente por el CONAP y sus dependencias técnico-administrativas.
- Otros no especificados aquí y que no contravengan la legislación guatemalteca vigente.

TITULO V

DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES

CAPITULO I

FALTAS Y DELITOS

ARTICULO 81. De las faltas. Las faltas en materia de vida silvestre y áreas protegidas, serán sancionadas en la forma siguiente:

- Será sancionado con multa de veinticinco a quinientos quetzales quien cortare, recolectare, transportare, intercambiare o comercializare ejemplares vivos o muertos, partes o derivados de especies de flora y fauna silvestre no autorizados en la licencia o permiso respectivos, además se procederá al comiso de las armas, vehículos, herramientas o equipo utilizado en la comisión de la infracción, así como en el objeto de la falta.
- Será sancionado con una multa de veinticinco a quinientos quetzales, quien se negare a devolver una licencia ya prescrita, sin justificar su retención.

ARTICULO 82. Acciones ilícitas. Son acciones ilícitas en materia de Áreas protegidas y vida silvestre, las siguientes:

- Cortar, recolectar, pescar o cazar dentro de cualquier área protegida, debidamente declarada.
- Cortar, recolectar, cazar, transportar, intercambiar o comercializar ejemplares vivos o muertos, partes o derivados de productos de flora y fauna, sin la autorización correspondiente.
- Oponerse a las inspecciones solicitadas o que se realizaren de oficio por empleados o funcionarios del Consejo Nacional de Áreas Protegidas y Vida Silvestre, CONAP, debidamente autorizados además de las penas que correspondan conforme el Código Penal se sancionarán con el comiso de las armas, vehículos, equipo o herramientas y objeto del delito a los infractores de esta ley.

ARTICULO 83. Sanciones a empresas. Cuando las infracciones establecidas en este capítulo fueren cometidas por alguna empresa autorizada para operar con productos de flora y fauna silvestre, ésta será sancionada con el doble de la multa, la primera vez, y si reincide, con el cierre de la empresa.

ARTICULO 84. Destino de los bienes decomisados. Todos los productos de flora y fauna silvestre que sean objeto de la comisión de un delito o falta, de los contemplados en esta ley y el Código Penal, serán depositados inmediatamente en los Centros de Recuperación del CONAP, para su cuidado y recuperación los bienes perecederos, susceptibles de ser aprovechados serán enviados por el juez al CONAP, para que éste los envíe a los instituciones de beneficio social.

ARTICULO 85. Gestión inicial. Toda persona que se considere afectada por hechos contra la vida silvestre y áreas protegidas, podrá recurrir al CONAP, a efecto que se investigue

ARTICULO 86. Colaboración de los trabajadores del Estado. Los empleados y funcionarios al servicio del Estado, están obligados a colaborar, dentro de sus posibilidades, con el Consejo Nacional de Areas Protegidas y Vida Silvestre, para el mejor logro de los fines y objetivos de la presente ley.

ARTICULO 87. Impugnación de resoluciones. Contra las resoluciones emitidas por el Consejo Nacional de Areas Protegidas, procede el Recurso de Revocatoria, del cual conocerá el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Dicho recurso se tramitará conforme lo establecido en la Ley de lo Contencioso Administrativo.

TITULO VI

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

CAPITULO I

DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE AREAS PROTEGIDAS

ARTICULO 88. Áreas legalmente declaradas. Todas aquellas áreas protegidas que a la fecha de emisión de la presente ley, estuvieron legalmente establecidas mediante decreto legislativo, decreto ley o acuerdo gubernativo y se encuentren vigentes, tienen el pleno reconocimiento de esta ley y constituyen bases fundamentales en la creación y composición del SIGAP, quien procederá a inscribir las en el registro respectivo, según el artículo 75 de esta ley.

ARTICULO 89. Áreas sin declaratoria legal. Las áreas protegidas bajo manejo que no han sido legalmente declaradas, pero que sin embargo, se encuentran en alguna fase de estudio para su aprobación legal, se declaran oficialmente establecidas por esta ley.

Las nuevas áreas protegidas son las siguientes:

- a. Biotopo, para la Conservación del Quetzal "Mario Dary Rivera", localizado en el municipio de Purulhá, Baja Verapaz.
- b. Biotopo Cerro Cahui, ubicado en el departamento de El Petén.
- c. Biotopo para la Conservación del Manatí, Chocón-Machacas, situado en el departamento de Izabal.
- d. Biotopo Laguna del Tigre-Río Escondido, ubicado al Noroeste del departamento de El Petén.
- e. Biotopo de San Miguel La Palotada, localizado al Norte del departamento de El Petén.
- f. Biotopo Naachtún-Dos Lagunas, ubicado al Norte del departamento de El Petén, límite con México.

ARTICULO 90. Áreas de protección especial. Se declaran áreas de protección especial las siguientes:

1. Manchón-Huamuchal, localizada en la costa sur, de los departamentos de Retalhuleu y San Marcos.
2. Volcán Atitlán, situado en la boca costa de los departamentos de Sololá y Suchitepéquez.
3. Yolnabáj, ubicada en el departamento de Huehuetenango.
4. Los Cuchumatanes, que se localizan en los departamentos de Huehuetenango y Quiché.
5. El Cabá, situada en el departamento de El Quiché.
6. Laguna Lachuá, localizada al Noroeste del departamento de Alta Verapaz.
7. Xacaxá, ubicada en el departamento de Chimaltenango.
8. Sierra de las Minas, que se localiza en parte de los departamentos de Baja Verapaz, El Progreso, Alta Verapaz, Izabal y Zacapa.
9. Sierra Caral, situada en el departamento de Izabal.
10. Montaña Espíritu Santo, localizada al Oriente del departamento de Izabal.
11. Cumbre Alta, ubicada entre los departamentos de Izabal y Zacapa.
12. Reserva Ecológica Cerro San Gil, situada en el departamento de Izabal.

13. Sierra de Santa Cruz, que se localiza en el departamento de Izabal.
14. Refugio de Vida Silvestre Bocas del Polochic, situada en el departamento de Izabal.
15. Chocón-Machacas-El Golfete, área localizada en el departamento de Izabal.
16. Punta de Manabique, situada al Noreste del departamento de Izabal.
17. Río Sarstún, en el norte del departamento de Izabal.
18. Sierra Chinajá, localizada al Norte del departamento de Alta Verapaz.
19. Ampliación del Parque Nacional Tikal, el Zotz, ubicada en el municipio de Flores, del departamento de El Petén.
20. Río Chiquibul, que recorre los municipios de Dolores, Poptún y San Luis, en el departamento de El Petén.
21. Reserva Ecológica El Pino de Poptún, situada en el departamento de El Petén.
22. Machaquilá, situada en los municipios de Dolores, Poptún y Sayaxché del departamento de El Petén.
23. Parque Nacional Sierra del Lacandón, en el municipio La Libertad del departamento de El Petén.
24. Parque Nacional Laguna del Tigre, localizado en el municipio de San Andrés del departamento de El Petén.
25. Parque Nacional Mirador-Río Azul, ubicado en los municipios de Melchor de Mencos, Flores, San José y San Andrés, del departamento de El Petén.
26. Refugio de Vida Silvestre y Monumento Cultural Altar de Sacrificios, Laguna Ixchoché, que se localiza en los municipios de La Libertad, y Sayaxché, del departamento de El Petén.
27. Ampliación del Parque Nacional Yaxjá-Yaloch, situado en el municipio Melchor de Mencos, del departamento de El Petén.
28. Laguna de Petexbatún, ubicada en el municipio de Sayaxché, del departamento de El Petén.
29. Laguna Perdida, que se localiza en el Departamento de El Petén.
30. Lagunas del Río Salinas, en el municipio de Sayaxché, del departamento de El Petén.
31. Reserva Ecológica Sabana del Sos, situada en el municipio La Libertad, del departamento de El Petén.
32. Reserva de uso Múltiple Uaxactún-Carmelita, que se ubica en parte de los municipios de Melchor de Mencos, San José, Flores y San Andrés, del departamento de El Petén.
33. Áreas de uso Múltiple San Rafael Pixcayá, localizada en el departamento de Chimaltenango.
34. Monumento Natural Semuc-Champey, ubicado en el departamento de Alta Verapaz.
35. Cumbre de María Tecón, situada en el departamento de Totonicapán.
36. Reserva de la Biosfera Fraternidad, que se localiza en el departamento de Chiquimula.
37. Laguna de Guija, situada en el Este del departamento de Jutiapa.
38. San Isidro Cafetales, Cumbre de Chiramay, localizada en el departamento de Chiquimula.
39. Volcán de Ipala, situado en el municipio de Ipala del departamento de Chiquimula.
40. Valle de la Arada, que se encuentra en el departamento de Chiquimula.
41. Laguna de Ayarsa, localizada en el departamento de Santa Rosa.
42. Reservas Ecológicas y Monumentos Naturales constituidos por los conos volcánicos del país.

Leguna Chico-Choc, localizada en el municipio de San Cristobal, Verapaz, departamento de Alta Verapaz.

Sitio Arqueológico Abaj Tokalo, situado en el municipio del Asintal del departamento de Retalhuleu.

Estas áreas, previa delimitación geográfica, categoría, manejo y zona de amortiguamiento se presentarán para su declaración de áreas protegidas, conforme lo señala el artículo 2 de la presente ley.

CAPITULO II

DISPOSICIONES FINALES Y DEROGATORIAS

ARTICULO 91. Organización e instalación del CONAP. El Ministerio de Finanzas Públicas asignará los fondos destinados a los trabajos de organización, instalación e inicio de labores del Consejo Nacional de Areas Protegidas y sus dependencias técnico-administrativas. La primera convocatoria de integración e inicio formal de operaciones del CONAP, estará a cargo del Coordinador Nacional del Medio Ambiente.

ARTICULO 92. Actualización de autorizaciones. Quienes se hayan dedicado a realizar cualesquiera de las actividades relacionadas con las áreas protegidas y vida silvestre reguladas en esta ley, deberán actualizar sus autorizaciones, licencias y permisos ante las autoridades del CONAP, dentro de los primeros sesenta días hábiles de haber entrado en vigencia la presente ley. En cuanto a las solicitudes de nuevas autorizaciones, podrán presentarse tan pronto entre en vigencia el reglamento de esta ley.

ARTICULO 93. Reglamento. El reglamento general de la presente ley, deberá ser emitido dentro de los noventa días hábiles siguientes a la publicación de la presente ley.

ARTICULO 94. Derogatoria. Quedan derogadas todas las leyes disposiciones que se opongan a la presente ley, al entrar en vigencia la misma.

ARTICULO 95. Vigencia. La presente Ley entrará en vigencia tres días después de su publicación en el Diario Oficial.

PASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU PUBLICACION Y CUMPLIMIENTO.

DADO EN EL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, LOS DIEZ DIAS DEL MES DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS.

ALFONSO ALONSO BARILLAS,
Presidente.

LEONEL BROLO CAMPOS,
Secretario.

CARLOS ENRIQUE CHAVARRIA PEREZ,
Secretario.

PALACIO NACIONAL: Guatemala, siete de febrero de mil novecientos ochenta y nueve.

Publíquese y cúmplase.

CEREZO AREVALO.

El Secretario General de la
Presidencia de la República,
LUIS FELIPE POLO LEMUS.

ORGANISMO EJECUTIVO

MINISTERIO DE ECONOMIA

Apruébase en la cantidad que se indica el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, para el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 1989.

ACUERDO GUBERNATIVO NUMERO 1158-88

Palacio Nacional: Guatemala, 6 de diciembre de 1988.

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA.

CONSIDERANDO:

Que el Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala ha presentado a consideración del Organismo Ejecutivo su Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal 1989, solicitando la aprobación correspondiente.

CONSIDERANDO:

Que el Proyecto a que se refiere el considerando anterior, ha sido analizado y ajustado a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, según Dictamen Número 2670 emitido por la Dirección Técnica del Presupuesto y aprobado por el Ministerio de Finanzas Públicas.

POR TANTO,

En ejercicio de la función que le confiere la Constitución Política de la República de Guatemala en el Artículo 183, inciso e) y lo prescrito en el Decreto Ley Número 2-86, Ley Orgánica del Presupuesto Artículo 25,

EN CONSEJO DE MINISTROS,

ACUERDA:

ARTICULO 1o. Aprobar el Presupuesto de Ingresos del Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, para el periodo comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, el cual asciende a la cantidad de Q 118 070 250.00 (CIENTO DIECIOCHO MILLONES SETENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA QUETZALES EXACTOS), distribuidos de la siguiente forma:

CODIGO	CONCEPTO	ASIGNADO 1989
1.00.0.000.00	INGRESOS CORRIENTES	49 363 150
1.30.0.000.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	48 203 150
1.40.0.000.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	1 160 000
2.00.0.000.00	INGRESOS DE CAPITAL	68 707 100
2.10.0.000.00	VENTA DE ACTIVOS Y COMPENSA- CIONES	4 707 100
2.20.0.000.00	REEMBOLSOS DE PRESTAMOS Y AN- TICIPOS	51 000 000
2.90.0.000.00	OTROS INGRESOS DE CAPITAL	13 000 000
TOTAL:		118 070 250

ARTICULO 2o. Aprobar el Presupuesto de Egresos del Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, para el periodo indicado en el Artículo anterior, en la cantidad de Q 118 070 250.00 (CIENTO DIECIOCHO MILLONES SETENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA QUETZALES EXACTOS), distribuidos por Objeto Especifico del Gasto, en la siguiente forma:

RESUMEN POR OBJETO ESPECIFICO DEL GASTO

GRUPO Y RENGLON	CONCEPTO	ASIGNADO 1989
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS		118 070 250
FUNCIONAMIENTO:		47 140 240
0	SERVICIOS PERSONALES	8 136 062
011	Personal Permanente en el Interior	5 689 810
021	Personal Supernumerario	408 800
022	Personal por Contrato	67 690
023	Interinatos por Licencia	523 434
033	Derechos Escalafonarios	613 508
034	Tiempo Extraordinario	282 600
051	Dietas al Personal de Juntas Directivas	
	Ayudantes o Consultivos	125 320
061	Representación en el Interior	12 000
079	Otras Remuneraciones por Servicios	
	Técnicos y Profesionales	10 500
082	Comisiones a Recaudadores Ambulantes	50 000
083	Comisiones a Agentes Colocadores de Pólizas	340 000
091	Servicios Profesionales No Clasificados	12 400
1	SERVICIOS NO PERSONALES	86 500
111	Correos	100
113	Teléfono	

que amenace la vida, salud, seguridad y bienestar del ser humano, ante la autoridad más cercana o sus agentes, quienes de inmediato deberán dar parte de la denuncia a la autoridad correspondiente.

CAPITULO VI

DISPOSICIONES TRANSITORIAS, DEROGATORIAS Y FINALES

ARTICULO 22. Integración del Consejo Nacional y su Junta Directiva. El Consejo a que se refiere el artículo 7 de la presente ley, quedará integrado treinta días después de su puesta en vigencia.

ARTICULO 23. Destino del CONE. Conjuntamente con la vigencia de la presente ley, el Comité Nacional de Emergencia -CONE- y su personal, se transformará en la Junta y Secretaría Ejecutiva, para la Reducción de Desastres, la cual se regirá por el reglamento del CONE, en tanto se emita el reglamento de la presente ley.

ARTICULO 24. Se deroga toda disposición que se oponga o contravenga lo establecido en esta ley.

ARTICULO 25. El presente decreto entrará en vigencia un día después de su publicación en el diario oficial.

PASE AL ORGANISMO EJECUTIVO, PARA SU SANCION, PROMULGACION Y PUBLICACION.

DADO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, A LOS SIETE DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS.

CARLOS ALBERTO GARCIA REGAS
PRESIDENTE

ENRIQUE ALEJOS CLOSE
SECRETARIO

FRAN OLIVA MURALLS
SECRETARIO

PALACIO NACIONAL: Guatemala, Nueve de noviembre de Mil Novecientos noventa y seis.

UNIQUESE Y CUMPLASE

ARZU IRICORY

DECRETO NUMERO 110-96

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA

CONSIDERANDO:

Que la conservación, restauración y manejo de la diversidad biológica que posee Guatemala es fundamental para el logro de un desarrollo sostenible, tanto social como económico, ya que la misma ha devenido en franco deterioro, al extremo de que varias especies han desaparecido y otras corren grave riesgo de extinción.

CONSIDERANDO:

Que el 10 de enero de 1989 fue aprobada la Ley de Areas Protegidas, que tiene como objetivos generales asegurar el funcionamiento óptimo de los procesos ecológicos esenciales y de los sistemas naturales vitales para beneficio de todos los guatemaltecos, lograr la conservación de la diversidad genética de la flora y fauna silvestre, alcanzar la capacidad de una utilización sostenida de las especies y ecosistemas en todo el territorio nacional, defender y preservar el patrimonio natural de la Nación y establecer las áreas protegidas necesarias en el territorio nacional.

CONSIDERANDO:

Que después de siete años de vigencia de la ley citada, se determina la necesidad de modificarla, específicamente en el aspecto administrativo, que la hagan funcional y aplicable, con el fin de que la administración de las áreas protegidas responda a las condiciones actuales y futuras.

CONSIDERANDO:

Que el artículo 97 de la Constitución Política de la República establece que "se dictaran todas las normas necesarias para garantizar que la utilización y el aprovechamiento de la flora, de la fauna, de la tierra y del agua, se realicen racionalmente, evitando su depredación".

POR TANTO

En ejercicio de las atribuciones que le confiere la literal a) del artículo 171 de la Constitución Política de la República de Guatemala.

DECRETA:

Las siguientes

REFORMAS AL DECRETO NUMERO 4-89 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, "LEY DE AREAS PROTEGIDAS"

ARTICULO 1. Se reforma el Artículo 1, el cual queda así:

"ARTICULO 1. Interés Nacional. La diversidad biológica, es parte integral del patrimonio natural de los guatemaltecos y por lo tanto, se declara de interés nacional su conservación por medio de áreas protegidas debidamente declaradas y administradas".

ARTICULO 2. Se reforma el Artículo 2, el cual queda así:

"ARTICULO 2. Creación del Sistema Guatemalteco de Areas Protegidas. Se crea el Sistema Guatemalteco de Areas Protegidas (SIGAP), integrado por todas las áreas protegidas y entidades que la administran, cuya organización y características establece esta ley, a fin de lograr los objetivos de la misma en pro de la conservación, rehabilitación, mejoramiento y protección de los recursos naturales del país, y la diversidad biológica".

ARTICULO 3. Se reforma el Artículo 5, el cual queda así:

"ARTICULO 5. Objetivos Generales. Los objetivos de la Ley de Areas Protegidas son:

- a) Asegurar el funcionamiento óptimo de los procesos ecológicos esenciales y de los sistemas naturales vitales para el beneficio de todos los guatemaltecos.
- b) Lograr la conservación de la diversidad biológica del país.
- c) Alcanzar la capacidad de una utilización sostenida de las especies y ecosistemas en todo el territorio nacional.
- d) Defender y preservar el patrimonio natural de la Nación.
- e) Establecer las áreas protegidas necesarias en el territorio nacional, con carácter de utilidad pública e interés social.

ARTICULO 4. Se reforma el Artículo 6, el cual queda así:

"ARTICULO 6. Aplicación. La presente ley es de aplicación general en todo el territorio de la República y para efectos de la mejor atención de las necesidades locales y regionales en las materias de su competencia, los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural y las Municipalidades coadyuvarán en la identificación, estudio, proposición y desarrollo de áreas protegidas, dentro del ámbito de su respectiva región".

ARTICULO 5. Se reforma el artículo 9, el cual queda así:

"ARTICULO 9. Fondos propiedad de la Nación. Las reservas territoriales y fincas inscritas propiedad de la Nación, que reúnan características adecuadas para ello, deberán dedicarse preferiblemente a objetivos de conservación bajo manejo. La Oficina de Control de Reservas de la Nación, -OCREN-, dará prioridad a la administración conservacionista de los bosques lacustres y marinos y riberas de ríos".

ARTICULO 6. Se reforma el artículo 11, el cual queda así:

"ARTICULO 11. Estudios de Areas Protegidas. La declaratoria oficial de un área protegida, de cualquier naturaleza que sea, debe fundamentarse en un estudio técnico aprobado por CONAP, que analice perfectamente las características y condiciones físicas, sociales, económicas, culturales y ambientales en general que prevalecen en la zona propuesta, así como los

efectos de su creación para la vida integral de su población. Dicho estudio seguirá los lineamientos establecidos en el reglamento de esta ley y podrá ser realizado por profesionales con formación en el área ambiental o ciencias afines, activos en los respectivos colegios profesionales."

ARTICULO 7. Se reforma el Artículo 12, el cual queda así:

"ARTICULO 12. Procedimiento general para la declaratoria. En base a las propuestas que se reciban en el Consejo Nacional de Areas Protegidas que crea esta misma ley, o en las que surjan de su propia iniciativa, el Consejo dispondrá de la realización del estudio señalado en el artículo anterior, en base a una evaluación preliminar sobre la justificación de la propuesta de mérito. Si las conclusiones del estudio técnico hacen recomendable la creación legal del área protegida se propondrá la iniciativa de ley al Organismo Legislativo para su creación y legislación correspondiente. Una vez emitido el decreto respectivo, la Secretaría Ejecutiva del CONAP dispondrá lo conveniente para su aplicación inmediata y su adecuada programación, administración, financiamiento y control."

ARTICULO 8. Se reforma el Artículo 18, el cual queda así:

"ARTICULO 18. Planes Maestros y Operativos. El manejo de cada una de las áreas protegidas del Sistema Guatemalteco de Areas Protegidas, -SIGAP-, estará definido por su respectivo plan maestro, el cual será compartimentalizado en detallado, a planes operativos anuales, los cuales serán elaborados por el ente ejecutor del área, o la persona individual o jurídica que la administra. Todos los planes maestros y operativos deben ser registrados, aprobados y supervisados por la Secretaría Ejecutiva del CONAP para verificar que se cumple con los propósitos de conservación de esta ley. El CONAP tomará las acciones legales pertinentes en caso contrario."

ARTICULO 9. Se reforma el Artículo 20, el cual queda así:

ARTICULO 20. Actividades dentro de las Areas Protegidas. Las empresas públicas o privadas que tengan actualmente, o que en el futuro desarrollen instalaciones o actividades comerciales, industriales, turísticas, pesqueras, forestales, agropecuarias, experimentales o de transporte dentro del perímetro de las áreas protegidas, celebrarán de mutuo acuerdo con el CONAP, un contrato en el que se establecerán las condiciones y normas de operación, determinadas por un estudio de impacto ambiental, presentado por el interesado al Consejo Nacional de Areas Protegidas, el cual, con su opinión lo remitirá a la Comisión Nacional del Medio Ambiente para su evaluación, siempre y cuando su actividad sea compatible con los usos previstos en el plan maestro de la unidad de conservación de que se trate."

ARTICULO 10. Se reforma el Artículo 22, el cual queda así:

"ARTICULO 22. Asentamientos. Las personas individuales o jurídicas que se encuentran asentadas dentro de las áreas protegidas o en las que en el futuro obtengan su declaratoria legal, deberán adecuar su permanencia en las mismas, a las condiciones y normas de operación, usos y zonificación de la unidad de que se trate, procurando su plena incorporación al manejo programado de la misma."

ARTICULO 11. Se reforma el Artículo 31, el cual queda así:

"ARTICULO 31. Exención del Impuesto Territorial. Quienes dediquen sus propiedades para reservas naturales privadas estarán exentos del pago del impuesto territorial de la finca o porción que dediquen a tales fines, lo cual tendrá vigencia indefinida, siempre y cuando la Secretaría Ejecutiva del CONAP emita dictamen favorable anual."

ARTICULO 12. Se reforma el Artículo 60, el cual queda así:

"ARTICULO 60. Secretaría Ejecutiva del CONAP. Para la ejecución de sus decisiones de política y la realización de sus programas de acción, el CONAP contará con una Secretaría Ejecutiva, cuyo titular será designado por el Presidente de la República. La Secretaría estará integrada con las dependencias necesarias para el buen manejo de los asuntos técnicos y administrativos del Consejo, incluyendo por lo menos los departamentos de:

- Planteamiento, Estudios y Proyectos.
- Vida Silvestre y Manejo Forestal.
- Gerencia de Unidades de Conservación.
- Departamento Administrativo."

ARTICULO 13. Se reforma el Artículo 61, el cual queda así:

"ARTICULO 61. Sede, delegación y duración. El CONAP tendrá su sede principal en la ciudad de Guatemala y podrá establecer oficinas regionales en el interior de la República, para coordinar directa y en forma descentralizada, el Sistema Guatemalteco de Areas Protegidas por medio de regiones."

ARTICULO 14. Se reforma el Artículo 62, el cual queda así:

"ARTICULO 62. Fines del CONAP. Los fines principales del Consejo Nacional de Areas Protegidas son los siguientes:

- Propiciar y fomentar la conservación y el mejoramiento del patrimonio natural de Guatemala.
- Organizar, dirigir y desarrollar el Sistema Guatemalteco de Areas Protegidas, SIGAP."

- Planificar, conducir y difundir la Estrategia Nacional de Conservación de la Diversidad Biológica y los Recursos Naturales Renovables de Guatemala.
- Coordinar la administración de los recursos de flora y fauna silvestre y de la diversidad biológica de la Nación, por medio de sus respectivos órganos ejecutores.
- Planificar y coordinar la aplicación de las disposiciones en materia de conservación de la diversidad biológica contenidos en los instrumentos internacionales ratificados por Guatemala.
- Constituir un fondo nacional para la conservación de la naturaleza, nutrido con recursos financieros provenientes de cooperación interna y externa."

ARTICULO 15. Se reforma el Artículo 63, el cual queda así:

"ARTICULO 63. Integración. Para cumplir sus fines y objetivos el Consejo Nacional de Areas Protegidas estará integrado por los representantes de las entidades siguientes:

- Comisión Nacional del Medio Ambiente, CONAMA,
- Centro de Estudios Conservacionistas, CECON/USAC,
- Instituto Nacional de Antropología e Historia, IDAEH,
- Un delegado de las organizaciones no gubernamentales, relacionadas con los recursos naturales y el medio ambiente, registradas en CONAP,
- La Asociación Nacional de Municipalidades, ANAM,
- Instituto Guatemalteco de Turismo, INGUAT,
- Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, MAGA.

ARTICULO 16. Se reforma el Artículo 67, el cual queda así:

"ARTICULO 67. Reuniones y decisiones. El Consejo Nacional de Areas Protegidas se reunirá ordinariamente cada quince días y en forma extraordinaria cuando lo considere conveniente o su Presidente lo estime necesario. La toma de decisiones la hará por mayoría de votos de sus miembros asistentes, cuyo quórum lo componen cuatro de sus integrantes. En caso de empate en las votaciones, quien presida la sesión tendrá derecho a doble voto."

ARTICULO 17. Se reforma el Artículo 68, el cual queda así:

"ARTICULO 68. Asistencia a sesiones. Los miembros del Consejo Nacional de Areas Protegidas asistirán y atenderán las sesiones ordinarias y extraordinarias del mismo, para lo cual la Secretaría Ejecutiva del CONAP definirá, presupuestará y proveerá las dietas correspondientes."

ARTICULO 18. Se reforma el Artículo 69, el cual queda así:

"ARTICULO 69. Atribuciones del CONAP. Las atribuciones del Consejo Nacional de Areas Protegidas son:

- Formular las políticas y estrategias de conservación, protección y mejoramiento del patrimonio natural de la Nación por medio del Sistema Guatemalteco de Areas Protegidas (SIGAP).
- Aprobar los reglamentos y las normas de funcionamiento del Sistema Guatemalteco de Areas Protegidas (SIGAP).
- Aprobar los dictámenes de convenios y contratos con entidades internacionales.
- Aprobar su plan estratégico institucional, sus planes y programas anuales de trabajo y su presupuesto anual.
- Aprobar la memoria anual de labores y la liquidación de su presupuesto anual.
- Aprobar la suscripción de concesiones de aprovechamiento y manejo de las áreas protegidas del SIGAP y velar porque se cumplan las normas contenidas en los reglamentos establecidos para tal efecto.
- Mantener estrecha coordinación e intercomunicación entre las entidades integrantes del SIGAP, en especial, con la Comisión Nacional del Medio Ambiente.
- Servir de órgano asesor de la Presidencia de la República y de todas las entidades estatales en materia de conservación, protección y uso de los recursos naturales del país, en especial, dentro de las áreas protegidas.
- Aquellas funciones que sean necesarias para el buen desarrollo y funcionamiento del Sistema Guatemalteco de Areas Protegidas (SIGAP)."

ARTICULO 19. Se reforma el Artículo 70, el cual queda así:

"ARTICULO 70. Atribuciones del Secretario Ejecutivo. La Secretaría Ejecutiva como autoridad administrativa y ejecutiva tendrá las siguientes atribuciones:

- a) Dirigir las actividades técnicas y administrativas del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas y del CONAP
- b) Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias y proponer la agenda a tratar, de común acuerdo con el Presidente del Consejo
- c) Participar en las sesiones del Consejo en calidad de Secretario con voz y sin voto
- d) Hacer aplicar las políticas, estrategias y directrices aprobadas por el Consejo y ejecutar las resoluciones y disposiciones que éste emita
- e) Presentar al Consejo los informes que le sean requeridos así como aquellos que sean necesarios por razón del cargo
- f) Evaluar de oficio las diferentes dependencias y el personal del CONAP, y las diferentes áreas del SIGAP
- g) Desarrollar un sistema de informática del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas, dentro del CONAP, sobre biodiversidad y áreas protegidas de Guatemala.
- h) Aprobar los gastos administrativos del CONAP, siguiéndose los procedimientos y normas establecidos en la Ley de Compras y Contrataciones u otra regulación vigente en la materia
- i) Proponer los reglamentos que se requieren para el buen funcionamiento del CONAP y las dependencias de la Secretaría Ejecutiva y del SIGAP

ARTICULO 20. Se reforma el Artículo 71, el cual queda así:

"ARTICULO 71. Calidades del Secretario Ejecutivo. Para ser Secretario Ejecutivo se requiere reunir las siguientes calidades:

- a) Ser guatemalteco.
- b) Ser profesional universitario con el grado mínimo de Licenciado.
- c) Tener especialización en administración de Áreas Protegidas o experiencia demostrable en manejo de áreas protegidas y conservación de vida silvestre, por lo menos de tres años
- d) Estar en el goce de sus derechos civiles.
- e) Ser del estado seglar"

ARTICULO 21. Se reforma el Artículo 74, el cual queda así:

"ARTICULO 74. Atribuciones del Subsecretario Ejecutivo. El Secretario Ejecutivo estará asistido por el Subsecretario quien será nombrado por el Secretario Ejecutivo, y tendrá las mismas calidades de éste, con funciones específicas determinadas en el reglamento de esta ley. En caso de incapacidad, impedimento o ausencia temporal del Secretario, hará sus veces el Subsecretario"

ARTICULO 22. Se reforma el Artículo 75, el cual queda así:

"ARTICULO 75. Registros. El CONAP establecerá los registros necesarios que propendan de la conservación, aprovechamiento racional y buena administración de los recursos de vida silvestre y áreas protegidas, incluyendo los siguientes:

- a) Registro de áreas de conservación del SIGAP
- b) Registro de fauna silvestre de la Nación.
- c) Registro de personas individuales o jurídicas que se dediquen a cualquiera de las actividades siguientes: curtiembre de pieles, taxidermia, comercio de animales y plantas silvestres, cazadores profesionales, peletería de animales silvestres, investigación de flora y fauna silvestre
- d) Registro de fauna silvestre exótica
- e) Registro de áreas protegidas privadas
- f) Todos aquellos que a juicio del CONAP sean necesarios

El reglamento de esta ley determinará los requisitos y las normas operativas aplicables a cada uno de los registros mencionados"

ARTICULO 23. Se reforma el Artículo 80, el cual queda así:

"ARTICULO 80. Presupuesto del CONAP. El CONAP y su Secretaría Ejecutiva integran su presupuesto anual en base esencialmente a las asignaciones ordinarias y extraordinarias que se fijen en el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado, y aquellos recursos generados por concepto de las disposiciones legales que por su naturaleza le correspondan, además con la constitución de recursos privativos provenientes de:

- a) Los ingresos que perciba por cualquier donación en efectivo o en especie
- b) Los títulos o valores que adquiera por cualquier concepto
- c) Los bienes que sean transferidos por las dependencias del Estado o sus instituciones descentralizadas o autónomas

- d) Los bienes que adquiera por cualquier título
- e) Las donaciones de bienes inmuebles bajo cualquier concepto
- f) Ingresos generados por las unidades de conservación del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas, -SIGAP-, que no tengan carácter privado, o pertenezcan a otras instituciones del Estado
- g) El producto financiero de las actividades organizadas directamente por la Secretaría Ejecutiva del CONAP y sus dependencias técnico-administrativas.
- h) Otros no especificados en el presente artículo y que no contravengan la legislación guatemalteca vigente"

ARTICULO 24. Se reforma el Artículo 81, el cual queda así:

"ARTICULO 81. De las faltas. Las faltas en materia de vida silvestre y áreas protegidas, serán sancionadas en la forma siguiente:

- a) Será sancionado con multa de cien a mil quetzales, quien se negare a devolver una licencia otorgada por el CONAP, ya prescrita, sin justificar su retención.
- b) Será sancionado con multa de quinientos a tres mil quetzales quien se oponga a las inspecciones solicitadas o las que se realicen de oficio por parte de empleados o funcionarios del Consejo Nacional de Áreas Protegidas, -CONAP-, debidamente autorizados"

ARTICULO 25. Se crea el artículo 81bis, el cual queda así:

"ARTICULO 81bis. Atentado contra el Patrimonio Natural y Cultural de la Nación. Quien sin contar con la licencia otorgada por autoridad competente, cortare, recolectare ejemplares vivos o muertos, partes o derivados de especies de flora y fauna silvestre, así como quien transportare, intercambiare, comercializare o exportare piezas arqueológicas o derivados de éstas, será sancionado con prisión de cinco a diez años y multa de diez mil a veinte mil quetzales

Serán sancionadas con igual pena aquellas personas que, contando con la autorización correspondiente se extralimitaren o abusaren de los límites permitidos en la misma"

ARTICULO 26. Se reforma el Artículo 82, el cual queda así:

"ARTICULO 82. Tráfico ilegal de flora y fauna. Será sancionado con prisión de cinco a diez años y multa de diez mil a veinte mil quetzales, quien ilegalmente transporte, intercambie, comercialice o exporte ejemplares vivos o muertos, partes o derivados de productos de flora y fauna silvestre amenazadas de extinción así como de las endémicas y de aquellas especies consideradas dentro de los listados de especies amenazadas en peligro de extinción publicados por el CONAP"

ARTICULO 27. Se crea el Artículo 82bis, el cual queda así:

"ARTICULO 82bis. Usurpación a Áreas Protegidas. Comete delito de usurpación a áreas protegidas quien con fines de apoderamiento, aprovechamiento o enriquecimiento ilícito, promovere, facilitare o invadiere tierras ubicadas dentro de áreas protegidas debidamente declaradas. El responsable de este delito será sancionado con prisión de cuatro a ocho años y multa de tres mil a seis mil quetzales"

ARTICULO 28. Se crea el Artículo 83bis, el cual queda así:

"ARTICULO 83bis. Multas. Las multas que se impongan, en la aplicación de la presente ley, ingresarán a los fondos privativos del CONAP, en una cuenta especial, como disponibilidad privativa destinada a programas de formación y capacitación de los recursos humanos especializados en el manejo, conservación y control de áreas protegidas"

ARTICULO 29. Se reforma el Artículo 84, el cual queda así:

"ARTICULO 84. Bienes decomisados. Todos los productos de flora y fauna silvestre, que sean objeto de la comisión de un delito de los contemplados en esta ley y el Código Penal, serán depositados inmediatamente en el CONAP; los bienes perecederos susceptibles de ser aprovechados, podrá el CONAP utilizarlos directamente cuando fuere necesario o bien enviarlos a las instituciones que estime conveniente. De igual manera se procederá con las armas, vehículos, herramientas o equipo utilizado en la comisión de un delito, así como en el objeto de la falta, establecidos en la presente ley"

ARTICULO 30. Se reforma el Artículo 87, el cual queda así:

"ARTICULO 87. Impugnación de resoluciones. Contra las resoluciones definitivas que dicte la Secretaría Ejecutiva podrá interponerse el recurso de revocatoria ante el propio funcionario, quien con su informe, elevará lo actuado al Consejo Nacional de Áreas Protegidas, el cual confirmará o revocará la providencia recurrida, debiendo resolver dentro del término de ley.

Si se tratare de resoluciones originarias del Consejo Nacional de Áreas Protegidas, podrá interponerse el recurso de reposición ante el propio Consejo, el que se reunirá de manera extraordinaria para conocer el recurso interpuesto. Transcurrido un mes sin que se haya dictado la correspondiente resolución, se tendrá por resuelto desfavorablemente y por agotada la vía administrativa, para el efecto de usar el recurso de lo Contencioso-Administrativo"

ARTICULO 31. Se reforma el Artículo 89, el cual queda así:

"ARTICULO 89. Las áreas protegidas bajo manejo que no han sido legalmente declaradas, o su declaratoria no está contenida en alguna ley, pero que sin embargo se encuentran protegidas y manejadas, o se encuentran en fases terminales de estudio para su declaratoria legal, se declaran oficialmente establecidas por esta ley.

Son áreas protegidas las siguientes:

- a) Biotopo para la conservación del Quetzal "Mario Dary Rivera", localizado en Punuhá, Baja Verapaz.
- b) Biotopo Cerro Cahui, localizado en el departamento de Petén.
- c) Biotopo para la conservación del Manatí, Chocón Machacas, localizado en el departamento de Izabal.
- d) Biotopo Laguna del Tigre-Río Escondido, localizada al noroeste del departamento de Petén.
- e) Biotopo el Zotz, San Miguel la Palotada, ubicado al norte del departamento de Petén.
- f) Biotopo Naachtún Dos Lagunas, localizado al norte del departamento de Petén, límite con México.
- g) Parque Nacional Laguna Lachú, localizado en Alta Verapaz."

ARTICULO 92. Se reforma el Artículo 90, el cual queda así:

"ARTICULO 90. Áreas de protección especial. Se declaran áreas de protección para la conservación, los siguientes sitios o regiones en el interior del país:

- 1 Yolnabaj, ubicada en el departamento de Huehuetenango
- 2 Cuchumatanes, que se localizan en los departamentos de Huehuetenango y Quiché.
- 3 El Cabá, situado en el departamento de Quiché
- 4 Manchón-Huamuchal, localizada en la costa sur de los departamentos de Retalhuleu y San Marcos
- 5 Boca Costa de los volcanes del suroccidente del país
- 6 Sierra Aral, situada en el departamento de Izabal
- 7 Reserva Ecológica Cerro San Gil, situada en el departamento de Izabal
- 8 Punta de Manabique, situada al norte del departamento de Izabal
- 9 Sierra de Santa Cruz, localizada en el departamento de Izabal
- 10 Montaña Espíritu Santo, localizada al oriente del departamento de Izabal
- 11 Sierra Chinajá, localizada al norte del departamento de Alta Verapaz.
- 12 Reserva Ecológica El Pino de Poptún, situada en el departamento de Petén.
- 13 Ampliación del Parque Nacional Yaxá-Yalooh, situado en el municipio de Melchor de Mencos, del departamento de Petén.
- 14 Refugio de Vida Silvestre y Monumento Cultural Altar de los Sacrificios, Laguna Ixcoché, que se localiza en los municipios de La Libertad y Sayaxché, del departamento de Petén
- 15 Monumento Natural Semuc-Champay, ubicada en el departamento de Alta Verapaz
- 16 Cumbre de María Tecún, situada en el departamento de Totonicapán
- 17 Volcán de Ipala, situado en el municipio de Ipala, departamento de Chiquimula.
- 18 Reserva de la Biosfera Fraternidad, que se localiza en el departamento de Chiquimula
- 19 Río Sarstún, en el norte del departamento de Izabal
- 20 Montañas de Tecpán, ubicadas en el departamento de Chimaltenango.
- 21 Sabanas de San Francisco
- 22 Reservas Ecológicas y Monumentos Naturales constituidos en los conos volcánicos del país
- 23 Xacaxá, ubicada en el departamento de Chimaltenango
- 24 Cumbre Alta, ubicada entre los departamentos de Izabal y Zacapa.
- 25 Río Chiquibul, que recorre los municipios de Dolores, Poptún y Sayaxché del departamento de Petén
- 26 Laguna Perdida, que se localiza en el departamento de Petén

- 27 Laguna del Río Salinas, localizada en el municipio de Sayaxché del departamento de Petén
- 28 Reserva Ecológica Sabana del Sos, situada en el municipio de La Libertad, del departamento de Petén
- 29 Área de Uso Múltiple de San Rafael Privaya, localizada en el departamento de Chimaltenango
- 30 Laguna de Guija, situada en el este del departamento de Jutiapa
- 31 San Isidro Cafetales, Cumbre de Chiramay, localizada en el departamento de Chiquimula
- 32 Valle de La Arada, que se encuentra en el departamento de Chiquimula.
- 33 Laguna de Ayarza, localizada en el departamento de Santa Rosa
- 34 Laguna Chic-Choc, localizada en el municipio de San Cristóbal Verapaz, departamento de Alta Verapaz.
- 35 Sitio Arqueológico Abaj-Takalic, situado en el municipio del Asintal del departamento de Retalhuleu.
- 36 Parque nacional Mirador Río Azul, ubicado en los municipios de Melchor de Mencos, Flores, San José y San Andrés del departamento de Petén.
- 37 Reserva de Uso Múltiple Uaxactún-Carmelita, que se ubica en parte de los municipios de Melchor de Mencos, San José, Flores y San Andrés, del departamento de Petén
- 38 Otros sitios que contribuyan a la formación de corredores biológicos entre estas áreas

Estas áreas, previo estudio, delimitación geográfica y asignación de categoría de manejo, se presentarán para su declaratoria de áreas protegidas, conforme lo señala el artículo 12 de la presente ley"

ARTICULO 33. Reglamento. El reglamento general de la Ley de Áreas Protegidas deberá ser actualizado conforme las disposiciones emitidas en el presente decreto, dentro de los 90 días siguientes a la publicación del mismo, así como estudiado y modificado, en base a cambios aprobados por otras leyes, dentro de los noventa días siguientes a la entrada en vigencia de las mismas.

ARTICULO 34. Urgencia Nacional. Se declara de urgencia nacional la declaratoria de las siguientes áreas, como protegidas:

- 1 Reserva Ecológica Cerro San Gil, situado en el departamento de Izabal
- 2 Manchón-Huamuchal, situado en la costa sur, en los departamentos de Retalhuleu y San Marcos
- 3 Punta de Manabique, en el departamento de Izabal
- 4 Cerro Alux, situado en el departamento de Guatemala

ARTICULO 35. Vigencia. El presente decreto entrará en vigencia el día de su publicación en el diario oficial.

PASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN.

DADO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, A LOS SIETE DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS.

CARLOS ALBERTO GARCIA REGAS
PRESIDENTE

ENRIQUE ALEJOS CLOSE
SECRETARIO

EPHRAIM OLIVERA MORALES
SECRETARIO



PALACIO NACIONAL: Guatemala, nueve de Diciembre de mil novecientos noventa y seis.



PUBLICARSE Y CUMPLASE
ARZU TRICOMEN

EN MI NOMBRE
SECRETARIO

SECRETARIO
EN MI NOMBRE
SECRETARIO



PALACIO NACIONAL: Guatemala, veintinueve de noviembre de mil novecientos noventa y seis.



PUBLICARSE Y CUMPLASE
ARZU TRICOMEN

SECRETARIO

DECRETO NUMERO 118-96

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA

CONSIDERANDO:

Que el Decreto Número 38-71 del Congreso de la Republica, norma de manera general los procedimientos para la adjudicación de tierras y otros aspectos relacionados con la territorialidad del Departamento de El Petén.

CONSIDERANDO:

Que cada beneficiario de la adjudicación de tierras debe esperar en la actualidad veinte años para que se le brinde el título definitivo de propiedad de su terreno y así abandonar la tutela del Instituto Nacional de Transformación Agraria.

CONSIDERANDO:

Que es indispensable proporcionar a los adjudicatarios de estas parcelas ubicadas en el Departamento de El Petén, la disposición legal que en derecho corresponde, para que obtengan el título definitivo de propiedad en el menor tiempo posible y que igualmente provea la seguridad jurídica que a su vez genere confianza en sus habitantes hacia el desarrollo integral del departamento y su incorporación legal en su totalidad.

POR TANTO:

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el Artículo 171 inciso a) de la Constitución Política de la Republica de Guatemala.

DECRETA.

Las siguientes:

REFORMAS AL DECRETO NUMERO 38-71 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA REFORMADO POR EL DECRETO NUMERO 48-72

DECRETO NUMERO 112-96

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA

CONSIDERANDO:

Que la razón de haberse creado el Acuerdo Gubernamental de fecha 12 de febrero de 1968, era el proteger el hábitat arboreal del Pato Poc.

CONSIDERANDO:

Que lamentablemente el Pato Poc, en la actualidad es una especie ya extinguida en el Lago de Atitlán.

CONSIDERANDO:

Que ha desaparecido la causa que motivó la veda temporal anual de corte de tui en Santiago Atitlán.

CONSIDERANDO:

Que es conveniente y necesario dejar sin efecto el Acuerdo anteriormente mencionado.

POR TANTO

En ejercicio de las atribuciones que le confiere la literal a) del artículo 171 de la Constitución Política de la Republica de Guatemala.

DECRETA:

ARTICULO 1. Se deroga el Acuerdo Gubernativo de fecha 12 de febrero de 1968, el cual prohibe el corte de Tui durante algunos meses del año.

ARTICULO 2. Las comunidades alrededor del Lago de Atitlán deberán trabajar en la conservación, protección y aprovechamiento del Tui, durante los doce meses del año.

ARTICULO 3. El control de la conservación protección y aprovechamiento del Tui estará a cargo del Comité Pro-seguridad y Desarrollo de Santiago Atitlán en conjunto con los comités que desarrollen sus actividades en comunidades situadas en las riberas del Lago de Atitlán y las municipalidades respectivas, lo cual será coordinado por la Gobernación Departamental de Solot.

ARTICULO 4. El presente decreto entrará en vigencia a los ocho días de su publicación en el diario oficial.

PALACIO NACIONAL: Guatemala, veintinueve de noviembre de mil novecientos noventa y seis.

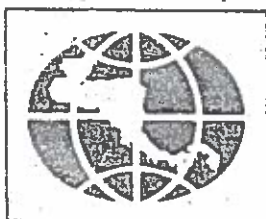


CARLOS ALBERTO GARCIA REGAS

PRESIDENTE

PASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN,
PROMULGACION Y PUBLICACION
ARZU TRICOMEN

DADO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO EJECUTIVO EN LA CIUDAD DE GUATEMALA A LOS CATORCE DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS.



Diario de Centro América

Órgano oficial de la República de Guatemala

TOMO CCXXXIX

DECANO DE LA PRENSA CENTROAMERICANA

GUATEMALA, LUNES 27 DE AGOSTO DE 1990

NUMERO 51

Director Julio Santos

Administradora: Alma Liliana García

SUMARIO

ORGANISMO EJECUTIVO

MINISTERIO DE GOBERNACION

Apruébase el funcionamiento de la "Fundación para el Desarrollo Integral de la Familia" (FUNDADEIFA); y reconócese su personalidad jurídica.

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Reglamento de la Ley de Areas Protegidas.

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Reglamento General del Ministerio de Desarrollo Urbano y Rural.

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

Declárase época de veda para la captura de todo espécimen por cualquier medio en aguas de los esteros en ambos litorales del país, por el período que se indica.

ANUNCIOS VARIOS

Matrimonios. — Líneas de transportes. — Constituciones de sociedad. — Modificaciones de sociedad. — Registro de marcas. — Títulos supletorios. — Edictos. — Remates.

Banco Promotor, S. A. — Balance General Condensado al 31 de julio de 1990.

ORGANISMO EJECUTIVO

MINISTERIO DE GOBERNACION

Apruébase el funcionamiento de la "Fundación para el Desarrollo Integral de la Familia" (FUNDADEIFA); y reconócese su personalidad jurídica.

ACUERDO GUBERNATIVO NUMERO 706-90

Palacio Nacional: Guatemala, 7 de agosto de 1990.

El Presidente de la República,

CONSIDERANDO:

Que la "Fundación para el Desarrollo Integral de la Familia" (FUNDADEIFA), ha sido constituida de conformidad con la ley, por lo que es procedente aprobar su funcionamiento y reconocer su personalidad jurídica.

POR TANTO,

En ejercicio de las funciones que le confiere el artículo 183, inciso e) de la Constitución Política de la República de Guatemala, y con fundamento en el artículo 15, inciso 2º, 20 y 31 del Código Civil,

ACUERDA:

ARTICULO 1º.—Aprobar el funcionamiento de la "Fundación para el Desarrollo Integral de la Familia" (FUNDADEIFA), la que se registrará por las normas contenidas en la escritura pública número 15 de fecha 8 de junio de 1990, autorizada por la notario Sandra Elizabeth González Alarcón.

ARTICULO 2º.—Reconocer la personalidad jurídica de la Fundación indicada en el artículo anterior.

ARTICULO 3º.—El Ministerio Público debe vigilar porque los bienes de la Fundación se empleen conforme a su destino.

ARTICULO 4º.—El presente acuerdo empezará a regir a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial.

Comuníquese.

MARCO VINICIO CEREZO AREVALO.

El Ministro de Gobernación,
CARLOS AUGUSTO MORALES VILLATORO.

3147—27—Agosto

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Reglamento de la Ley de Areas Protegidas.

ACUERDO GUBERNATIVO Nº 759-90

Palacio Nacional: Guatemala, 22 de agosto de 1990.

El Presidente de la República,

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto número 4-89 del Congreso de la República, se emitió la Ley de Areas Protegidas, en la que se declara de interés nacional la restauración, protección, conservación y el manejo del patrimonio natural de los guatemaltecos;

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 93 de la mencionada Ley, debe emitirse el Reglamento General de la misma para lograr su efectiva aplicación,

POR TANTO,

En ejercicio de las facultades que le confiere el inciso e) del artículo 183 de la Constitución Política de la República de Guatemala,

ACUERDA

el siguiente

REGlamento DE LA LEY DE AREAS PROTEGIDAS

GLOSARIO

Para los efectos de la Ley de Areas Protegidas y este Reglamento se entiende por:

APROVECHAMIENTO DE FAUNA Y FLORA SILVESTRE: Es el uso sostenido que se hace de la vida silvestre, pudiendo ser con fines de subsistencia, comerciales, deportivos, de investigación, exhibición y/o educación, así como afición.

AREAS PROTEGIDAS LEGALMENTE DECLARADAS: Son aquellas áreas declaradas como protegidas por medio de un Decreto del Congreso de la República.

ARRENDAMIENTO: Contrato en que dos partes se obligan recíprocamente, la una a conceder el uso o goce de una cosa y la otra a pagar por este uso o goce, un precio determinado en dinero.

ASENTAMIENTOS HUMANOS: Se entenderá como la radicación de un determinado conglomerado demográfico, con el conjunto de sus sistemas de convivencia, en un área físicamente localizada, considerando dentro de la misma los elementos naturales y las obras materiales que la integran.

CENTRO DE RESCATE: Es un área destinada a albergar y recuperar, preferentemente para devolver a sus sitios de origen, especies silvestres que por decomiso, donaciones u otras situaciones eventuales deben ser manejadas por el tiempo estrictamente necesario en estas condiciones.

CIMARRON: Son especies domésticas de animales que accidental o deliberadamente son introducidas en la naturaleza y que se comportan como animales silvestres.

CITES: Son las siglas que identifican al Convenio Internacional para el Comercio de las Especies de Fauna y Flora Silvestres Amenazadas de Extinción.

CONCESION: Acción y efecto de conceder, de dar, otorgar, hacer merced y gracia de una cosa, específicamente cuando éste se refiere a un servicio público. La concesión es un acto de derecho público, mediante el cual el Estado delega en una persona o en una em-

presa particular una parte de su autoridad y de sus atribuciones para la prestación de un servicio de utilidad general.

CONDICIONES CONTROLADAS: Es un medio manipulado por el hombre con el propósito de producir especímenes seleccionados, con límites físicos definidos, para ordenar y regular su reproducción, que tiene como característica el alojamiento artificial y tratamiento especializado, incluyendo el marcaje, registro en al menos alguna fase anual y que requiere servicios técnicos y profesionales especializados.

CONSERVACION: La gestión de la utilización de la biósfera por el ser humano, de tal suerte que produzca el mayor y sostenido beneficio para las generaciones actuales, pero manteniendo la calidad de los recursos y su potencialidad para satisfacer las necesidades y las aspiraciones de las generaciones futuras.

COSTAS MARITIMAS: Es la extensión litoral y marítima que corresponde al país según el Derecho Internacional reconocido por Guatemala (actualmente 200 millas).

DESARROLLO SOSTENIBLE O SUSTENTABLE: Se le considera como una modalidad del desarrollo económico que postula la utilización de los recursos para la satisfacción de las necesidades de las actuales y futuras generaciones de la población, mediante la maximización de la eficiencia funcional de los ecosistemas a largo plazo, empleando una tecnología adecuada a este fin y la plena utilización de las potencialidades humanas dentro de un esquema institucional que permita la participación de la población en las decisiones fundamentales.

ECOSISTEMA: La unidad funcional básica de interacción de los organismos vivos entre sí (incluyendo al hombre) con los elementos no vivos y el ambiente, en un espacio y tiempo determinados.

EFFECTO AMBIENTAL: Se define como la modificación neta (positiva o negativa) de la calidad del medio ambiente, incluidos los ecosistemas de que depende el hombre.

ENDEMICOS: Son especies silvestres que habitan únicamente en una localidad específica.

ESPECIE: Es el conjunto de individuos aislados genéticamente que se reproducen libremente con descendencia fértil.

ESPECIE NATIVA: Es toda aquella especie que reside en el país en forma natural, de forma permanente o transitoria, para completar su ciclo de vida.

EXÓGENO: Debe entenderse como exótico o toda especie no nativa del país.

FAUNA SILVESTRE: Son las especies de animales que subsisten sujetas a los procesos de selección natural, cuyas poblaciones se desarrollan libremente en la naturaleza, incluyendo sus poblaciones menores que se encuentran bajo control del hombre (se excluye a los domésticos).

FLORA SILVESTRE: Son todas aquellas especies vegetales que subsisten sujetas a los procesos de selección natural y que se desarrollan libremente en la naturaleza, incluyendo los especímenes de estas especies que se encuentran bajo el control del hombre.

HABITAT: Es la parte del medio ambiente, que ocupa una o varias especies en donde los individuos vivos realizan intercambios entre sí y con los factores abióticos en un espacio y tiempo determinado.

IMPACTO AMBIENTAL: Acción o actividad que produce una alteración en el medio o en algunos de los componentes del medio.

MANEJO: Serie de estrategias tácticas y técnicas que ejecutan las políticas y objetivos de las áreas protegidas y no protegidas, o de poblaciones o ecosistemas en general, con fines de conservación.

POBLACION: Grupo de individuos afines capaces de entrecruzarse. Una población local se ubica en un área geográfica relativamente pequeña y por su facilidad de entrecruzamiento constituye la unidad evolutiva básica.

RECURSOS NATURALES: Los elementos naturales susceptibles a ser aprovechado en beneficio del hombre se les clasifica en renovables, que pueden ser conservados o renovados continuamente mediante su explotación racional (tierra agrícola, agua, bosques, fauna), y no renovables, que son aquellos cuya explotación conlleva su extinción (minerales, energéticos de origen mineral).

RESTAURACION: Es el manejo de las poblaciones o ecosistemas, orientado a recuperar un equilibrio estable y sus procesos naturales.

SUCESION ECOLOGICA: Es el proceso ordenado de los cambios de la comunidad: estos son direccionales, y por lo tanto, predecibles. Resulta de la modificación del ambiente físico por la comunidad misma. Culmina en el establecimiento de un ecosistema tan estable como sea biológicamente posible en el lugar en cuestión.

USO SOSTENIDO: Es el uso de los recursos naturales renovables en forma continua e indefinida, sin menoscabo de los mismos en calidad y cantidad.

VEDA: Es la prohibición temporal que regula el aprovechamiento de la vida silvestre.

VIDA SILVESTRE: Son todas aquellas especies de flora y fauna que se desarrollan natural y libremente en la naturaleza.

ZONIFICACION: División de la unidad en sectores que tengan un tipo de manejo homogéneo, estableciendo sus normas de utilización.

TITULO I

CAPITULO UNICO

DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 1. Comprensión del Reglamento. Para la mejor comprensión del presente Reglamento, deberá entenderse por SIGAP el Sistema Guatemalteco de Areas Protegidas; por CONAP, El Consejo Nacional de Areas Protegidas; por DIGEBOS la Dirección General de Bosques y Vida Silvestre y por "la Ley", la Ley de Areas Protegidas (decreto 4-89), términos que se usarán en el transcurso de su articulado.

ARTICULO 2. Desarrollo de Programas Educativos. Para el cumplimiento de los objetivos de la Ley, el Consejo Técnico de Educación del Ministerio de Educación Pública, conjuntamente con la Secretaría Ejecutiva del CONAP, deberá proponer los cambios que deben hacerse en los programas educativos, a efecto de que en los diferentes niveles de enseñanza de los centros educativos oficiales y privados de la República, se brinde los conocimientos necesarios para que los educandos adquieran conciencia sobre la necesidad de conservar, proteger y aprovechar sosteniblemente el patrimonio natural de Guatemala.

ARTICULO 3. Política Nacional. El Consejo Nacional de Areas Protegidas (CONAP), como órgano ejecutor de la Ley de Areas Protegidas, implementará con exclusividad la Política Nacional sobre áreas protegidas. En consecuencia, todas las entidades públicas y privadas que persigan objetivos similares, deberán realizar sus actividades en consonancia con la misma.

ARTICULO 4. Estudios Regionales. Los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural brindarán al CONAP, la colaboración necesaria para el estudio, inventario y manejo de los recursos naturales y cultural de su respectiva región, a efecto de llevar a cabo programas relacionados con las áreas protegidas.

ARTICULO 5. Bosques Pluviales. Con el objeto de conservar y proteger los bosques pluviales para ayudar a asegurar el suministro de agua a toda la comunidad guatemalteca, el CONAP determinará su mejor uso; buscará su protección y dará prioridad al establecimiento de áreas protegidas públicas y privadas que contengan dichos bosques. Para el efecto deberá gestionar la elaboración de un inventario de los mismos.

ARTICULO 6. Patrimonio Cultural. Todo lo que se refiera al manejo y conservación del patrimonio cultural en áreas protegidas se regirá por la legislación y las regulaciones vigentes para la materia.

TITULO II

CAPITULO I

CATEGORIAS DE MANEJO DE LAS AREAS PROTEGIDAS

ARTICULO 7. Zonificación y Disposiciones de Uso. Cada área protegida podrá ser zonificada para su mejor manejo; adicionalmente a lo descrito para cada categoría de manejo, el CONAP podrá emitir disposiciones específicas sobre los usos permitidos, restringidos y prohibidos en cada una de estas.

ARTICULO 8. Categorías de Manejo: Conforme este reglamento las categorías de manejo de las áreas protegidas son las siguientes:

Categorías Tipo I: PARQUE NACIONAL
RESERVA BIOLÓGICA

Áreas relativamente extensas, esencialmente intocadas por la actividad humana, que contienen ecosistemas, rasgos o especies de flora y fauna de valor científico y/o maravillas escénicas de interés nacional o internacional, en la cual los procesos ecológicos y evolutivos han podido seguir su curso espontáneo con un mínimo de interferencia. Estos procesos pueden inculir algunos acontecimientos que alteran los ecosistemas tales como los incendios debidos a causas naturales, brotes de

plagas o enfermedades, tempestades y otros; pero excluyen necesariamente los disturbios de cualquier índole causados por el hombre. Pueden ofrecer atractivos para visitantes y tener capacidad para un uso recreativo en forma controlada. En estas áreas está prohibido cortar, extraer o destruir cualquier espécimen de flora silvestre y cazar, capturar o realizar cualquier acto que lesione la vida o la integridad de la fauna silvestre, excepto por motivos técnicos de manejo que sean necesarios para asegurar su conservación. En todo caso solo lo podrán hacer las autoridades administradoras del área con la debida autorización, no será permitida la introducción de especies exóticas. No podrán constituirse servidumbres a favor de particulares en terrenos con estas categorías de manejo. Es prohibida la explotación y la explotación minera. Además no se permitirán asentamientos humanos, excepto los que sean necesarios para la investigación y administración del área. Los terrenos deberán ser preferentemente de propiedad estatal o municipal. En el caso de propiedades particulares que pudiesen encontrarse dentro de los límites de estas áreas legalmente declaradas, el CONAP, dará prioridad a la adquisición de los mismos por parte del Estado o por organizaciones guatemaltecas sin fines de lucro dedicados a la conservación de la naturaleza.

Objetivos del manejo:

Protección, conservación y mantenimiento de los procesos naturales y la diversidad biológica en un estado inalterado, de tal manera que el área este disponible para estudios e investigación científica, monitoreo del medio ambiente, educación y turismo ecológico limitado. El área debe perpetuar un estado natural, muestras representativas de regiones fisiográficas, comunidades bióticas y recursos genéticos.

Criterios de selección y manejo

Áreas terrestres o acuáticas relativamente grandes que contienen muestras representativas de las principales regiones naturales, rasgos o escenarios donde las especies de plantas y animales, sitios geomorfológicos y habitats son de especial interés científico educacional y recreativo. Contienen uno o varios ecosistemas completos, materialmente inalterados por la explotación y ocupación humana. El recurso es manejado en un estado natural o casi natural y desarrollado de modo que pueda sostener actividades de educación en forma controlada. En el área los visitantes tienen acceso al lugar bajo condiciones especiales, para propósitos de inspiración educacional, cultural y recreacional. En muchos casos contendrán ecosistemas o formas de vida extremadamente vulnerables y zonas de biodiversidad, o bien serán importantes para la conservación de recursos genéticos.

Categorías Tipo II:

BIOTOPO PROTEGIDO
MONUMENTO NATURAL
MONUMENTO CULTURAL
PARQUE HISTÓRICO

Son áreas que por lo general contienen uno o pocos rasgos naturales sobresalientes, vestigios arqueológicos, históricos u otros rasgos de importancia nacional e internacional y no contienen necesariamente un ecosistema completo. La amplitud del área dependerá del tamaño de los rasgos naturales, ruinas o estructuras que se desea conservar y que se necesita para asegurar la protección y manejo adecuado de los valores naturales y/o culturales. El área tiene potencialidades para educación y turismo limitado, así como para la recreación limitada y rústica.

Objetivos de manejo:

Los objetivos de manejo son la protección y conservación de los valores naturales y culturales y dentro de los límites congruentes con lo anterior, proveer de oportunidades de recreo, educación ambiental e investigación científica, turismo controlado y recreación limitada y rústica.

Criterios de selección y manejo:

Aunque los lugares correspondientes a esta categoría de manejo puedan presentar un interés desde el punto de vista del esparcimiento y el turismo, su gestión deberá asegurar un mínimo impacto humano en los recursos y ambiente. La protección e integración adecuada de las áreas naturales y culturales más importantes del país constituye un paso imprescindible si se desea cultivar en los ciudadanos un sentimiento de orgullo e identificación de nuestro patrimonio.

Categorías Tipo III

AREA DE USO MULTIPLE
MANANTIAL
RESERVA FORESTAL
REFUGIO DE VIDA SILVESTRE

Son áreas relativamente grandes, generalmente con una cubierta de bosques. Pueden contener zonas apropiadas para la producción sostenible de productos forestales, agua, forraje, flora y fauna silvestre, sin afectar negativa y permanentemente los diversos ecosistemas dentro del área. Son áreas que pueden haber sufrido alteración por intervención del hombre, pero aún conservan una buena porción del paisaje natural. Estarán generalmente sometidas a un control, en función de las presiones que se ejerzan sobre ellas. Estas áreas contendrán terrenos públicos de preferencia, pero podrán contener terrenos de propiedad privada.

Objetivos de manejo:

Proveer una producción sostenida de agua, madera, flora y fauna silvestre (incluyendo peces), pastos o productos marinos. La conservación de la naturaleza podría estar orientada principalmente al soporte de las actividades económicas, (aunque podrían designarse zonas específicas dentro de las áreas para lograr objetivos de conservación más estricta) o bien la conservación podría ser un objetivo primario en sí mismo, dando siempre importancia a los objetivos económicos y sociales. Se dará importancia a la educación ambiental y forestal, así como a la recreación orientada a la naturaleza.

Criterios para selección y manejo:

La principal premisa para estas áreas es que serán manejadas para mantener a perpetuidad la productividad general de las áreas y sus recursos, contribuyendo más

físicamente al desarrollo, sobre la base de un rendimiento continuo. Un requisito son los programas de planificación que aseguren que el área sea manejada en base a un aprovechamiento sostenido. Mientras no se tenga una adecuada planificación

que garantice la sostenibilidad del uso de los recursos, no deberá ocurrir ningún tipo de aprovechamiento, salvo el aprovechamiento tradicional efectuado por la población autóctona, en forma limitada para llenar necesidades locales. A través de una zonificación apropiada se puede dar protección específica adicional a áreas significativas. Se admiten actividades en las que el público pueda disfrutar de la vida silvestre respetando los ecosistemas. Los manantiales son sitios necesarios para el suministro de agua, ocupando una posición importante, como áreas de estudio, que no guardan proporción con su tamaño y número, incluyendo siempre una cabecera de la cuenca hidrográfica.

Categorías Tipo IV AREA RECREATIVA NATURAL PARQUE REGIONAL RUTAS Y VIAS ESCENICAS

Son áreas donde es necesario adoptar medidas de protección para conservar los rasgos naturales, sean comunidades bióticas y/o especies silvestres, pero con énfasis en su uso para fines educativos y recreativos. Generalmente poseen cualidades escénicas y cuentan con grandes atractivos para la recreación pública al aire libre, pudiendo ajustarse a un uso intensivo. En la mayoría de los casos, las áreas por lo general son poco vulnerables y fácilmente accesibles por los medios de transporte público. La alteración y modificación del paisaje son permisibles, buscando siempre conservar un paisaje lo más natural posible, tratando de minimizar el impacto en los recursos y el ambiente. Pueden ser de propiedad pública o privada. En el caso de los parques regionales usualmente serán de propiedad municipal, pudiendo incluir terrenos bajo otro régimen de propiedad.

Objetivos de manejo

Los objetivos generales de manejo son la recreación al aire libre y educación, mantenimiento de una porción o de la totalidad del camino, sendero, canal o río y de su panorama en un estado natural o seminatural, calidad del paisaje y prevención de la degradación de los recursos naturales.

Criterios de selección y manejo:

Se fomentarán los programas de información, interpretación y educación ambiental. Los aspectos de más interés serán la información acerca de las condiciones de recreación propias del área y los programas educativos sobre actividades que se practican en ella. Es deseable el mantenimiento de las asociaciones bióticas existentes y de la diversidad ecológica del área. Debe intentarse utilizar factores naturales autorreguladores cuando estos no perjudiquen las especies o comunidades que se quiere proteger y no entren en conflicto con los objetivos del área. En cuanto a las rutas y vías escénicas, el criterio de selección y manejo es bastante amplio, debido a la gran variedad de paisajes seminaturales y culturales. Para ello se ha dividido en

dos tipos de espacios: Aquellos cuyos paisajes tienen calidades estéticas especiales, resultado de la interacción entre el hombre y la naturaleza, y aquellos que son fundamentalmente zonas naturales aprovechadas de manera intensiva por el hombre para fines turísticos y de esparcimiento.

Categoría Tipo V: RESERVA NATURAL PRIVADA

Son áreas propiedad de personas individuales o jurídicas particulares, que los propietarios destinen voluntariamente y durante el tiempo que estimen, a la conservación y protección de hábitats para flora y fauna así como de comunidades bióticas o rasgos del ambiente. En ellas se garantizará la conservación, estabilidad o supervivencia de ciertas especies de plantas y animales, a través de la protección de hábitats críticos, poblaciones reproductivas y áreas de alimentación o reproducción. Para el establecimiento de reservas naturales privadas se procederá de acuerdo con lo expresado en el artículo del presente reglamento. Estas reservas contarán con el respaldo y el reconocimiento pleno del Estado para la protección de la integridad del terreno y de sus recursos.

Objetivos de manejo:

asegurar las condiciones naturales requeridas para proteger especies de significancia, grupos de especies, comunidades bióticas o rasgos físicos del ambiente y rasgos culturales en terrenos de propiedad privada.

Criterios de selección y manejo:

El propósito primario de esta categoría de manejo sería la protección de la naturaleza. En casos muy excepcionales, la producción de recursos renovables aprovechables podría jugar un papel secundario en el manejo de un área. El tamaño del área dependerá de la propuesta del propietario, quien mantendrá plenamente sus derechos sobre la misma y estará encargado de su manejo. Estas áreas podrían ser relativamente pequeñas, consistentes de sitios de anidación, pantanos, lagos, estuarios, bosques, pastizales, sitios de desove de peces o áreas de pastoreo para mamíferos marinos.

Categoría Tipo VI. RESERVA DE LA BIOSFERA

Las reservas de la Biosfera son áreas de importancia mundial en términos de sus recursos naturales y culturales. Son lo suficientemente extensas para constituir unidades de conservación eficaces que permitan la coexistencia armoniosa de diferentes modalidades de conservación, uso y aprovechamiento sostenible de los recursos. Estas reservas tienen un valor particular, por ser modelo o patrones para medir los cambios de la biosfera como un todo, a largo plazo. Deberán ser objeto de una protección jurídica a largo plazo. Internamente Guatemala podrá denominar con el nombre de Reserva de la Biosfera algunas áreas, sin embargo todas las áreas designadas con esta categoría deberán proponerse para su reconocimiento mundial, previo cumplimiento de los requisitos correspondientes, ante el Comité Internacional de Coordinación del Programa sobre el Hombre y la Biosfera de UNESCO.

Objetivos de manejo:

Los principales objetivos de manejo de estas áreas serán el dar oportunidad de diferentes modalidades de utilización de la tierra y demás recursos naturales, tanto el uso y aprovechamiento sostenible de recursos naturales del área, con énfasis en las actividades tradicionales y actividades humanas estables, así como la conservación de núcleos de conservación más estricta. Proveen oportunidades para la investigación ecológica, particularmente estudios básicos, ya sea en ambientes naturales o alterados. Son sitios importantes para el monitoreo ambiental. Proveen facilidades para la educación ambiental y capacitación, así como para el turismo y recreación controlados y orientados hacia la naturaleza.

Criterios de manejo y selección:

Cada reserva contendrá terrenos con diferentes tipos de ecosistemas y usos humanos, y para su mejor manejo orienta su manejo a través de la siguiente zonificación:

a) Zona natural o núcleo:

Los objetivos primordiales de las áreas núcleo de la Reserva son: La preservación del ambiente natural, conservación de la diversidad biológica y de los sitios arqueológicos, investigaciones científicas, educación conservacionista y turismo ecológico y cultural muy restringido y controlado. En estas áreas es prohibido cazar, capturar y realizar cualquier acto que distorba o lesione la vida o integridad de la fauna silvestre, así como cortar, extraer o destruir cualquier espécimen de flora silvestre, excepto por motivos técnicos de manejo que sean necesarios para asegurar su conservación. En todo caso solo podrán hacerlo las autoridades administradoras del área con la debida autorización. Además no se permitirán asentamientos humanos, excepto los que sean necesarios para la investigación y administración del área. Los terrenos serán fundamentalmente de propiedad estatal y/o municipal. El CONAP dará prioridad a la adquisición por parte del Estado o por organizaciones guatemaltecas sin fines de lucro dedicadas a la conservación de la naturaleza, de aquellos terrenos de propiedad particular que pudiesen estar dentro de las áreas núcleo.

b) Zonas modificables:

Se permite la modificación del ambiente natural solo para propósitos científicos o educativos. No se permitirán aquellas actividades científicas que en forma significativa pongan en peligro la perpetuación de los recursos naturales de la reserva o le causen daño. Solo se permitirá la infraestructura mínima que facilite la protección, la investigación y la educación ambiental. Se permitirá la reintroducción de especies cuya existencia previa en el área se ha comprobado científicamente, si no causa efectos negativos al hábitat o especies actuales. El acceso a los visitantes en esta

área se permitirá a menos que el rasgo o sitio sea tan frágil que su uso por parte de los visitantes ponga en peligro la conservación. Se estimularán los programas de interpretación y de educación ambiental.

c) Zonas de uso múltiple o sostenible, de recuperación y cultural

Los objetivos primordiales de estas áreas serán el amortiguamiento de las áreas núcleo y el uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, sin afectar negativa y permanentemente sus diversos ecosistemas. Se permitirán las obras de restauración ambiental y las actividades humanas estables y sostenibles. Todas estas actividades deben estar bajo control científico. Mientras no se apruebe el Plan Maestro, no se podrán desarrollar actividades de uso y extracción de recursos, salvo el aprovechamiento tradicional efectuado por la población autóctona, en forma limitada, para satisfacer necesidades locales. Una vez vencido el plazo de otorgamiento de las concesiones vigentes, éstas estarán sujetas al Plan Maestro.

CAPITULO II

CONFORMACION, ESTABLECIMIENTO Y DECLARATORIA DE LAS AREAS PROTEGIDAS

ARTICULO 9. Conservación de Áreas Nacionales. El CONAP deberá gestionar la recopilación de información acerca de las reservas territoriales del Estado y fincas inscritas propiedad de la Nación, con el fin de establecer aquellas áreas que por sus características y estudios técnicos previos deben ser protegidas y sometidas a conservación bajo manejo. Si éstas se encuentran dentro de los límites de un área protegida legalmente declarada, pasarán a ser manejadas por la entidad a cargo de la administración de la misma.

ARTICULO 10. Áreas sin Declaratoria Legal. Las áreas ubicadas en terrenos nacionales que de hecho hayan sido manejadas como áreas protegidas, sin que legalmente exista su declaratoria, deberán continuar bajo la administración de la entidad pública o privada que las tuviere bajo sus responsabilidades. Estas áreas deberán ser incorporadas al SIGAP, debiendo cumplir con el efecto con los requisitos que establece la Ley y el presente Reglamento. La Secretaría Ejecutiva del CONAP deberá levantar un inventario de las mismas, recabando información sobre las condiciones en que se encuentran y del avance de los estudios y trámites realizados, a fin de completarlos para lograr su pronta declaratoria legal.

ARTICULO 11. Requisitos del Estudio Técnico para la Declaratoria Legal. La propuesta de declaratoria legal de un área protegida, se fundamentará en el estudio técnico al que se refiere el artículo 12 de la Ley. La Secretaría Ejecutiva del CONAP elaborará una guía específica para la elaboración de estos estudios, cuyos requisitos mínimos serán los siguientes:

- Identificación y calidad técnica de la persona o entidad responsable que elaboró el estudio.
- Objetivos que se pretenden alcanzar al ser declarada como área protegida.
- Nombre y demarcación concreta de la ubicación del área que se pretende declarar, expresando sus límites en coordenadas, utilizando para el efecto hojas cartográficas.
- Análisis técnico de las características biofísicas y socioculturales que prevalecen en el área propuesta.

- e) Descripción de la importancia del área indicando sus características más valiosas, los recursos naturales y culturales preeminentes, su valor paisajístico, especies de flora y fauna, así como aquellas especies endémicas amenazadas de extinción.
- f) Indicación de los asentamientos humanos y sus actividades.
- g) Descripción del régimen de tenencia de la tierra.
- h) Descripción del uso de los recursos naturales.
- i) Indicación de la categoría de manejo, la justificación para ello, así como la entidad que quedará encargada de su administración.
- j) Delimitación y extensión de la zona de amortiguamiento, así como indicación de sus usos actuales y los deseables una vez declarada el área.

ARTICULO 12. Zona de Amortiguamiento. Toda área protegida, deberá tener su respectiva zona de amortiguamiento, en la cual se evitarán actividades que la afecten negativamente. La delimitación y extensión de esta zona, así como las actividades que se podrán efectuar en ella, se establecerán de acuerdo con las características particulares de cada área y se describirán en el Plan Maestro. Recibirán atención inmediata y prioritaria los programas de educación ambiental y uso sostenible de recursos, que se permitan.

ARTICULO 13. Áreas ya Declaradas Legalmente. La Secretaría Ejecutiva del CONAP elaborará el inventario de las áreas protegidas legalmente declaradas con anterioridad a la vigencia de la Ley, con el objeto de proceder a su inscripción. El Plan Maestro y los Planes Operativos deberán ser elaborados por la entidad encargada de su administración. Cualquier duda acerca de la responsabilidad administrativa de las entidades encargadas del manejo de dichas áreas será aclarada por el Consejo.

ARTICULO 14. Recuperación de Áreas ya Declaradas. La entidad o persona individual o jurídica que tenga bajo su administración una o más áreas protegidas declaradas legalmente, que no estén recibiendo la protección y el manejo que requieren, deberá recuperarlas para su manejo e inscripción en los registros respectivos. Además deberá proceder de inmediato a elaborar los planes para su manejo, que deberán ser aprobados por el CONAP. De no estar en la posibilidad de realizar lo anteriormente mencionado, se podrá presentar el caso al CONAP, quien establecerá otra persona individual o jurídica que maneje el área.

ARTICULO 15. Establecimiento Parques Regionales. Para establecer Parques Regionales que estén ubicados en terrenos municipales, únicamente se requerirá de la resolución del Consejo Municipal correspondiente así como la identificación exacta del terreno, a fin de inscribirlos en los registros del CONAP. Para lograr la declaratoria legal de éste Parque por parte del Congreso de la República, se deberá seguir el procedimiento y cumplir los requisitos que se establecen en la Ley y el presente Reglamento.

ARTICULO 16. Establecimiento de Reservas Naturales Privadas. Para establecer Reservas Naturales Privadas que puedan gozar del pleno reconocimiento legal y del incentivo fiscal al cual se refiere el artículo 31 de la Ley, los únicos requisitos serán:

- a) Que contenga ecosistemas silvestres no afectados significativamente por la actividad humana.
- b) Que el terreno se encuentre libre de gravámenes
- c) Que el interesado presente toda la documentación requerida que compruebe la propiedad del terreno.
- d) Que el interesado presente un mapa de escala 1:50,000 de la finca o porción de la misma que se quiera conservar
- e) Ser aprobados por el CONAP
- f) Ser inscritos en el registro de Reservas Naturales Privadas.

Para el efecto el CONAP elaborará un instructivo de requisitos y un formato de inscripción. Sin embargo, a requerimiento expreso del dueño o poseedor del área, el CONAP, podrá gestionar ante el Congreso de la República, su declaratoria legal.

CAPITULO III

DEL MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS

ARTICULO 17. Manejo de Áreas Protegidas. El manejo de las áreas protegidas legalmente declaradas podrá ser efectuado, de acuerdo a su categoría de manejo, directamente a través de su Secretaría Ejecutiva o ser confiado, mediante suscripción de un convenio u otro mecanismo legal, a otras entidades nacionales públicas o privadas sin fines de lucro. La persona individual o jurídica a quien se le confiere el manejo y administración de un área protegida, deberá tomarla bajo su control inmediato.

ARTICULO 18. Manejo de Terrenos Particulares en Áreas Protegidas Legalmente Declaradas. En áreas protegidas legalmente declaradas en las cuales existan terrenos de propiedad particular, serán los dueños o poseedores de los mismos los que se encarguen de su manejo de acuerdo a las normas y reglamentaciones aplicables al Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas, o podrán delegar esta responsabilidad en la persona individual o jurídica que estimen conveniente. El CONAP velará por que el manejo se realice en forma integral y coordinada de acuerdo con el Plan Maestro.

ARTICULO 19. Proyectos de Particulares. Los particulares que posean propiedades o de echos dentro áreas protegidas legalmente declaradas podrán desarrollar proyectos de servicio público acordes con los fines del área protegida y con la zonificación que en los planes respectivos se haya asignado al área protegida. Para tal efecto deberá contar previo inicio de cualquier proyecto, con la autorización expresa del CONAP, quien fijará las condiciones para su ejecución y mantenimiento de acuerdo a los objetivos del área.

ARTICULO 20. Informes de los Administradores. La entidad, persona individual o jurídica encargada del manejo de un área protegida legalmente declarada, deberá enviar al CONAP un informe anual, en el mes de febrero de cada año, sobre las

actividades principales del plan operativo aprobado, desarrolladas en dicha área; además deberá rendir los informes que el CONAP como su Secretaría Ejecutiva le solicitaren.

ARTICULO 21. Control y Vigilancia. El control, la vigilancia y la protección de las áreas protegidas públicas y privadas, así como de los recursos de vida silvestre dentro y fuera de las áreas protegidas, estará a cargo de los empleados del CONAP y de otros Guarda Recursos reconocidos por el CONAP. Para el efecto éstos tendrán el carácter de autoridades y como tales tendrán plena potestad para efectuar decomisos, presentar partes, detener, conducir y consignar a los tribunales a los infractores, así como otras funciones inherentes a su cargo.

ARTICULO 22. Plan Maestro. Cada ente ejecutor o administrador de un área protegida ya declarada deberá elaborar o mandar a elaborar y presentar al CONAP su respectivo plan maestro, en un término no mayor de 12 meses después de haber tomado la responsabilidad del manejo del área. El plan maestro deberá ser actualizado y aprobado por el CONAP cada cinco años. Los lineamientos para la elaboración del plan maestro estarán dados por el instructivo elaborado para el efecto por el CONAP.

ARTICULO 23. Planes Operativos. El primer plan operativo anual para el año calendario vigente deberá ser presentado por el ente ejecutor o administrador, 30 días hábiles después de haber tomado la responsabilidad del manejo del área. Los posteriores planes operativos deberán presentarse al CONAP para su aprobación al menos sesenta días antes del vencimiento del plan que estuviera vigente.

ARTICULO 24. Asentamientos. En el caso de las áreas protegidas de conservación estricta que tienen las siguientes categorías de manejo: Parque Nacional, Reserva Biológica y las Áreas Núcleo de la Reserva de la Biosfera, no se permitirán nuevos asentamientos humanos, excepto los que sean necesarios para la administración e investigación del área. Si en la actualidad existen asentamientos en dichas áreas se buscarán los mecanismos para lograr hacerlos compatibles con el manejo del área. Si estas condiciones no se dieran, se gestionará la reubicación de dichos pobladores. En el caso de las categorías de manejo restantes, si es factible la existencia de asentamientos. En todo caso el área utilizada y ocupada por dichos asentamientos

no podrá ampliarse, siendo esto aplicable a las áreas protegidas de cualquier categoría de manejo. Con el fin de que las personas ya asentadas dentro de un área protegida adecuen su convivencia a los objetivos de dicha área, el ente administrador o encargado del manejo emitirá las disposiciones específicas a que debe ceñirse en cada caso los habitantes de la misma, disposiciones que se describirán ampliamente en el Plan Maestro.

ARTICULO 25. Actividades Ganaderas o Agrícolas. En las áreas protegidas que al momento de su recuperación o establecimiento se registren actividades ganaderas o agrícolas se procederá de la siguiente manera: En las áreas con categoría de manejo Parque Nacional, Reserva Biológica o Áreas Núcleo de Reserva de la Biosfera, esta actividad podrá mantenerse por el máximo de un año, después de la declaratoria legal del área, sin ampliar las áreas, salvo los casos previstos en el artículo anterior. En las áreas declaradas bajo las demás categorías de manejo así como en las zonas de amortiguamiento, podrá el o los propietarios de la misma seguir realizando tales actividades, siempre y cuando estas actividades se mantengan dentro de un uso sostenible de los recursos.

ARTICULO 26. Investigación. Para autorizar un proyecto de investigación de recursos naturales en áreas protegidas legalmente declaradas del país, las personas o entidades nacionales y extranjeras que deseen realizar dichas investigaciones, deberán cumplir con una guía específica que proporcionará la Secretaría Ejecutiva del CONAP, cuyos datos y requisitos mínimos serán los siguientes:

- a) Identificación completa de los investigadores participantes
- b) Nacionalidad
- c) Nombre y datos de la institución
- d) Institución Contraparte Nacional (para extranjeros)
- e) Anuencia expresa de la entidad que tiene bajo su adscripción el manejo del área.
- f) Título de la investigación y descripción de la misma.
- g) Período de tiempo
- h) Si quiere hacer colecciones, indicar objetivo, lugar, taxones, cantidad, forma de coleccionar, período de tiempo, destino de la colección
- i) Fecha estimada de publicación del trabajo.

Condiciones Mínimas:

a) Cualquier investigador u entidad que obtenga permiso de investigación en Áreas protegidas queda obligado a depositar en la Secretaría Ejecutiva del CONAP 3 copias del trabajo realizado, inmediatamente después de ser publicado. En caso que el original no esté escrito en idioma español, deberá adjuntarse una traducción a este idioma.

b) Dependiendo de la magnitud de la investigación y a criterio del CONAP, la persona o entidad solicitante suscribirá un contrato administrativo con el CONAP o con la entidad encargada del manejo del área protegida en cuestión.

c) El solicitante deberá pagar la tarifa correspondiente, con base en los listado de montos aplicables tomando en cuenta el área que utilizará, la infraestructura y equipo del área que utilizará y tipo de investigación. Dichos montos serán establecidos y actualizados periódicamente por el CONAP a propuesta de su Secretaría Ejecutiva. De no establecerse un listado nuevo, regirá el vigente anteriormente.

d) En el caso de personas o entidades extranjeras, éstas deberán tener el reconocimiento de una entidad o institución de prestigio nacional, para lo cual el CONAP, deberá tener un registro. En todo caso para poder autorizar estas actividades, no deben estar prohibidas por los planes maestro y operativo de las áreas protegidas correspondientes.

Si la Investigación tuviera como resultado hallazgos que puedan patentarse o comercializarse, estos derechos y beneficios serán compartidos conforme al convenio suscrito y en ningún caso serán menores del cincuenta por ciento (50% por ciento).

TITULO III

CAPITULO I

CONCESIONES

ARTICULO 27. Aprobación. Para la suscripción de concesiones en las áreas protegidas legalmente declaradas del SIGAP, se requerirá la aprobación del CONAP, debiéndose cumplir con las normas de uso determinados por la categoría de manejo y los planes aprobados.

ARTICULO 28. Areas bajo la Administración del CONAP. En las áreas protegidas legalmente declaradas que estén bajo su administración, ubicadas en terrenos nacionales, el CONAP, podrá otorgar concesiones, siempre y cuando la categoría de manejo del área y su plan maestro permita y establezca claramente las actividades previstas.

CAPITULO II

CONCESIONES DE MANEJO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS

ARTICULO 29. Concesiones de Servicios Públicos. Los servicios públicos que pueden ser objeto de concesión son los inherentes al turismo, recreación, educación y desarrollo científico, entre ellos la instalación y manejo de hoteles, alojamientos, centros de recreo, servicios complementarios y similares.

ARTICULO 30. Requisitos. Todo proyecto o instalación objeto de concesión en áreas protegidas legalmente declaradas deberá cumplir con los siguientes requisitos:

- 1) Ubicar la zona del área protegida donde el uso es permitido y así esté previsto en su plan maestro.
- 2) Estar abiertos al público sin restricciones, señalando las normas que deben ser respetadas en el área.
- 3) Armonizar con la belleza del paisaje y ajustarse a la tipología y volumetría arquitectónica de la zona.
- 4) Tener servicios sanitarios y cumplir con todas las normas de salubridad pública.
- 5) Cumplir con la legislación y normas ambientales.
- 6) Contar con las condiciones mínimas para un buen nivel en la calidad del servicio ofrecido.
- 7) Presentar estudio de impacto ambiental y cumplir las medidas preventivas, correctivas y mitigantes derivadas del mismo.

ARTICULO 31. Concesionarios. Puede ser concesionario toda persona individual o jurídica guatemalteca capacitada técnicamente en el área de que se trate preferiblemente de reconocida trayectoria conservacionista.

ARTICULO 32. Procedimiento. Para el otorgamiento de concesiones de servicios públicos el CONAP convocará a licitación pública por medio de una publicación en el Diario Oficial. Dicha publicación indicará claramente de qué servicio se trata, las bases de licitación pública, el lugar, fecha y hora para proporcionarles mayor información, el lugar, fecha y hora para recibir ofertas de licitación pública y los criterios de calificación.

ARTICULO 33. Comisión de Licitación. Para el proceso de licitación se constituye una comisión de licitaciones integrada por tres personas, así: el Secretario Ejecutivo o su delegado, quien la presidirá, el Jefe de la Sección de Areas Protegidas, el Asesor Jurídico y el Jefe del Departamento Administrativo del CONAP.

ARTICULO 34. Contenido del Contrato. El Contrato de concesión deberá contener como mínimo, la siguiente información.

- 1 Descripción del servicio del que se trata
- 2 Descripción de la zona del área protegida que podrá ser utilizada para los fines de la concesión, así como de los otros bienes públicos que incluirá la misma.
- 3 Proyecto de obras a ser ejecutado por el concesionario, si fuere el caso.
- 4 Plan de administración y manejo del área afectada por la concesión, de acuerdo con el servicio a prestar.
- 5 Plan de Mantenimiento del servicio y de las obras. Régimen de reparaciones de maquinarias, equipos y obras, si fuere el caso.
- 6 Normas para la suspensión o modificación del servicio
- 7 Normas que deben establecerse a los usuarios sus derechos y obligaciones.
- 8 Definición de las responsabilidades de control, vigilancia y fiscalización.
- 9 Establecimiento de fianzas, garantías y seguros de responsabilidad civil y otros que se consideren necesarios según el objeto de la concesión.
- 10 Causas de la rescisión del contrato y sus consecuencias. Cláusula de rescisión de pleno derecho a favor de la Nacional en caso de incumplimiento de las obligaciones contractuales o de las reglamentarias del área protegida. Igualmente se establecerá el régimen de rescisión o modificación de las condiciones del contrato por causas de utilidad pública.
- 11 Prohibición de ceder o traspasar en todo o en parte la concesión sin la autorización del CONAP.
- 12 Plazo para la puesta en marcha del servicio y duración de la concesión, que en ningún caso podrá ser mayor de 10 años.
- 13 Obligaciones y derechos del concesionario propios de las características del servicio que prestará.
- 14 Procedimiento para determinar cuáles de los bienes afectados a la concesión serán revertidos a la nación al finalizar la misma.

15. Cualquier otra norma que tienda a garantizar el mejor uso del Área Protegida y el mayor beneficio del público.

ARTICULO 35. Suscripción. El Secretario Ejecutivo del CONAP suscribirá el contrato correspondiente, previa aprobación del mismo por el Consejo.

ARTICULO 36. Inspección y Control. El CONAP tendrá las más amplias facultades de inspección y control de la concesión, pudiendo, en caso de incumplimiento que afecte al interés público, tomar a su cargo pero a costa del concesionario, la prestación del servicio. Para ello podrá utilizar personal propio si dispusiere de él, o contratarlo previa calificación de la situación como urgente y autorización del CONAP.

CAPITULO III

CONCESIONES DE APROVECHAMIENTO Y MANEJO DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES

ARTICULO 37. Concesiones. Para el otorgamiento de concesiones de aprovechamiento y manejo de flora silvestre, de recursos forestales, de forestación o reforestación en áreas protegidas legalmente declaradas que estén bajo su administración, el CONAP, buscará la asesoría técnica de una entidad estatal o privada adecuada para identificar, sectorizar o contratar el avalúo de los recursos susceptibles a tal actividad.

ARTICULO 38. Supervisión Técnica. En lo que se refiere la supervisión técnica del manejo y aprovechamiento forestal en las concesiones, el CONAP decidirá para cada caso si la realizará con personal de la Secretaría Ejecutiva o la delegará mediante un convenio en una entidad pública o contratará una entidad privada para el efecto.

ARTICULO 39. Convocatoria. La licitación a la que convocará el CONAP las áreas identificadas, sectorizadas y valuadas, será por medio de una publicación en el Diario Oficial. Dicha publicación indicará el lugar, día y hora para recibir ofertas e incluirá las bases de la licitación pública y los criterios de calificación.

ARTICULO 40. Condiciones y Procedimientos. La respectiva licitación pública indicará el plazo, el precio y demás condiciones que constarán en el contrato respectivo. Los procedimientos y requisitos que se seguirá para la licitación serán los que estipula este reglamento, así como los que sean aplicables, contenidos en la ley forestal (Decreto 70-89) y su reglamento.

ARTICULO 41. Comisión. El Secretario Ejecutivo del CONAP integrará una comisión de cuatro personas, así: El Secretario Ejecutivo o su delegado, un Abogado y el Jefe del Departamento Administrativo del CONAP, así como un representante de DIGEBOS.

ARTICULO 42. Formalización del Contrato. Previo a la formalización del Contrato de concesión, el proyecto será presentado al Consejo, el cual, tomando en cuenta las recomendaciones de su Secretaría Ejecutiva, resolverá sobre el mismo.

ARTICULO 43. Ingresos. Todos los ingresos provenientes de la concesión, así como el cobro de las fianzas y demás pagos ingresarán al fondo privativo del CONAP.

ARTICULO 44. Inscripción y Control. El CONAP tendrá las más amplias facultades de inspección, supervisión y control de la concesión y evaluará periódicamente las actividades y el manejo en las áreas de aprovechamiento y el cumplimiento de las condiciones contractuales y en caso de incumplimiento se procederá de acuerdo a lo establecido por la Legislación vigente aplicable así como por el decreto 70-89 del Congreso de la República.

CAPITULO IV

ARRENDAMIENTOS

ARTICULO 45. Arrendamientos. Dentro de las áreas protegidas legalmente declaradas ubicados en terrenos nacionales que se encuentren bajo la administración de la Secretaría Ejecutiva del CONAP, ésta podrá otorgar en arrendamiento extensiones de terreno e instalaciones, siempre y cuando las actividades para las cuales se otorga el arrendamiento sean compatibles con la categoría de manejo y el plan maestro del área. En todo caso el arrendatario se someterá a las normas de uso que establezca el CONAP. La formalización de estos arrendamientos se hará mediante la suscripción de un contrato administrativo. Los pagos provenientes de dichos arrendamientos ingresarán al fondo privativo del CONAP.

ARTICULO 46. Arrendamientos en Reservas de la Nación. Cuando un terreno objeto de solicitud de arrendamiento esté ubicado en lo que la Constitución Política de la República, artículo 122, designa como Reserva de la Nación, dentro de un área protegida legalmente declarada, el otorgamiento del arrendamiento se hará de acuerdo con lo establecido por el Decreto 11-80 del Congreso de la República y el Acuerdo Gubernativo Número 171-89 de fecha 16 de marzo de 1989, previo dictamen favorable expreso del CONAP.

TITULO IV

CAPITULO I

APROVECHAMIENTO DE VIDA SILVESTRE

ARTICULO 47. Caza, Captura, Corte y Recolecta. La Caza, la captura, el corte y la recolecta de especímenes, partes y derivados de flora y de fauna silvestre, quedan sujetos a la obtención de licencia expedida por la Secretaría Ejecutiva del CONAP.

Cuando alguna de estas actividades se pretenda realizar en un área protegida, deberá contar con la anuencia de la entidad que administra la misma y haber sido aprobada en forma expresa en los planes maestros y operativos correspondientes.

ARTICULO 48. Requisitos de Solicitud. Quien desee aprovechar flora y fauna silvestre en la forma establecida en el artículo 33 de la Ley, deberá presentar ante la Secretaría Ejecutiva del CONAP una solicitud que llene los requisitos siguientes:

- Acreditar con certificación expedida por el Registro de la Propiedad dentro de los tres meses precedentes, el derecho de propiedad, posesión o usufructo que le asiste sobre el inmueble el cual se pretende efectuar el aprovechamiento. Aquellas propiedades cuya inscripción no sea en el Registro de la Propiedad, deberá presentar constancia de propiedad a la autoridad competente a satisfacción del CONAP.
- Acreditar el consentimiento expreso de todas las personas individuales o jurídicas que por cualquier causa, tuvieran inscritos a su favor derechos sobre el inmueble.
- Adjuntar inventario de la o las especies motivo de la solicitud cuyo contenido podrá ser comprobado por la Secretaría Ejecutiva del CONAP.
- Presentar el plan de manejo a que serán sometidas las especies de flora y fauna que se pretenden aprovechar. Tanto el inventario como plan de manejo a que aluden los incisos anteriores deberán ser elaborados por un profesional afín o por un técnico especialista calificado y aceptado por la Secretaría Ejecutiva del CONAP.
- Propuesta del Profesional o especialista calificado registrado en el CONAP, que se hará cargo de la ejecución del plan de manejo.

ARTICULO 49. Garantía. La Secretaría Ejecutiva del CONAP establecerá las especies de fauna y flora silvestre de la Nación, cuya autorización de captura, recolección o aprovechamiento estará sujeta a la constitución de una fianza de cumplimiento o en su defecto garantía hipotecaria o prendaria o depósito monetario aceptado por la Secretaría Ejecutiva. Este monto será calculado tomando en consideración daños ecológicos y los costos de restablecimiento de las especies y de reparación de daños a los recursos naturales que llegaren a causarse.

ARTICULO 50. Aprobación de Solicitudes de Aprovechamiento en Áreas Protegidas Legalmente Declaradas. La Secretaría Ejecutiva del CONAP comprobará si la solicitud de aprovechamiento presentada corresponde a áreas protegidas legalmente declaradas; si éste fuere el caso y las actividades previstas estuvieran permitidas por la categoría de manejo y aceptables por lo dispuesto en el Plan Maestro del área, la solicitud podrá ser aprobada. Queda entendido que en áreas declaradas como Parques Nacionales, Biotopos, Reservas Biológicas y Áreas Núcleo de las Reservas de la Biosfera no podrá haber ninguna actividad de aprovechamiento extractivo.

ARTICULO 51. Suspensión de Licencia. Toda contravención a lo dispuesto en las licencias de aprovechamiento autorizados o en el Plan Maestro aprobado de áreas protegidas legalmente declaradas; dará motivo a la suspensión de la misma por un período no menor de tres meses ni mayor de seis; después del cual, y habiendo analizado las causas que motivaron la suspensión, y dependiendo del resultado de dicho análisis, el CONAP podrá acordar nuevas condiciones para poder ejercer los derechos de la licencia o su cancelación definitiva, debiendo en este último caso establecer el plazo dentro del cual al infractor le será denegada nueva autorización dentro de la misma o diferente área protegida. Este plazo no podrá ser menor de cinco, ni mayor de diez años. El control del aprovechamiento será ejercido por la entidad administradora del área, bajo la supervisión del CONAP.

ARTICULO 52. Delimitación de Competencias. El otorgamiento de licencias de aprovechamiento forestal en áreas no protegidas compete con exclusividad a DIGEBOS, mientras que la autorización en áreas protegidas compete al CONAP. Copia de los planes de manejo forestal aprobados por DIGEBOS que contemplen la posibilidad de colecta, de plantas y animales silvestres, deberá ser sometida por el interesado para su aprobación a la Secretaría Ejecutiva del CONAP, quien resolverá lo que considere conveniente.

ARTICULO 53. Unificación de Procedimientos. Con el objeto de evitar un trato diferente a los usuarios de DIGEBOS y CONAP, ambas instituciones en forma coordinada procederán a unificar permanentemente los sistemas, procedimientos, criterios, valores de fianzas, registros, requisitos y demás actividades conexas en cuanto a las autorizaciones de licencias de aprovechamiento forestal.

CAPITULO II

CAZA Y PESCA DEPORTIVA

ARTICULO 54. Zonas de Caza y Pesca Deportiva. Anualmente el CONAP deberá emitir un acuerdo en el que se establezca los periodos, lugares geográficos, artes, armas y demás requisitos para efectuar la caza y la pesca deportiva. Dicho acuerdo deberá ser publicado con treinta (30) días de anticipación a la fecha inicial de su vigencia en el Diario Oficial y otro particular de los de mayor circulación.

ARTICULO 55. Caza en Áreas Protegidas. Cuando los planes Maestro y Operativo de un área protegida permita en forma expresa, la Secretaría Ejecutiva del CONAP podrá autorizarla de acuerdo a las regulaciones vigentes y previo dictamen favorable de la persona individual o jurídica encargada del manejo de la misma y especificando especies, cuotas, artes y armas.

ARTICULO 56. Áreas Privadas de Caza. Para poder establecer un área privada de caza, ésta deberá ser autorizada previa recomendación de los técnicos de la Secretaría Ejecutiva del CONAP, la cual resolverá en base a una solicitud cuyos requisitos mínimos además de los señalados en los incisos a, b, c, del artículo 31 de este reglamento deberá indicar el tiempo, las armas y artes a utilizar y la delimitación cartográfica del área que se pretende dedicar a la caza. La Secretaría Ejecutiva del CONAP elaborará un instructivo para el efecto.

ARTICULO 57. Vedas. La Secretaría Ejecutiva del CONAP elaborará en base a ciclos reproductivos, poblaciones y distribución, el calendario cinegético que incluirá vedas y cuotas de las especies sujetas a caza. Este será presentado al Congreso de la República para su aprobación.

ARTICULO 58. Prohibición. No se otorgará autorizaciones de caza en el tiempo de veda. Para fines científicos, la Secretaría Ejecutiva del CONAP establecerá lo que estime conveniente.

ARTICULO 59. Listado de Especies. El CONAP deberá gestionar la realización de los estudios para mantener en forma actualizada los listados de especies de flora y fauna nacionales amenazadas de extinción, y que por lo tanto tienen limitación parcial o total de aprovechamiento o cacería y, de acuerdo con las regulaciones de la Ley de Áreas Protegidas y leyes conexas.

ARTICULO 60. El Valor de las Licencias. El CONAP acordará anualmente y a propuesta de su Secretaría Ejecutiva, el valor de las licencias de caza y pesca, tomando en cuenta el tipo de actividad, las especies a cazar o pescar, así como el incremento o decremento registrado en el inventario de dichas especies. De no establecerse un listado nuevo, regirá el vigente anteriormente. Las personas individuales o jurídicas que se dediquen al aprovechamiento de flora y fauna silvestres y sus derivados, deberán pagar un valor en base a lo aprovechado

conforme a los listados y tarifas que para el efecto aprobará el CONAP, a propuesta de su Secretaría Ejecutiva. Dichos pagos ingresarán al fondo privativo del CONAP. La tarifa de pagos para las licencias aparecerá publicado en el Diario Oficial.

ARTICULO 61. Exoneraciones. Las exoneraciones de pago de licencias de caza y pesca con fines de investigación y subsistencia quedan sujetas a las siguientes condiciones:

- Que la persona individual o jurídica sea de reconocido prestigio en el campo de la investigación científica.
- Que la persona interesada se encuentre inscrita como investigador en los registros del CONAP.

En el caso de subsistencia, la municipalidad respectiva debe dar fé de la necesidad del interesado, reservándose la Secretaría Ejecutiva del CONAP, el derecho de comprobar la veracidad de dicha constancia.

CAPITULO III

REPRODUCCION DE VIDA SILVESTRE BAJO CONDICIONES CONTROLADAS

ARTICULO 62. Reproducción de Plantas y Animales Silvestres. Toda persona individual o jurídica que desee dedicarse legalmente a actividades de reproducción bajo control de especies de flora y fauna silvestres, deberá estar inscrita en los registros del CONAP. Para poder ser inscrita y poder obtener la autorización de operación de granjas u otras instalaciones de reproducción, deberá presentar a la Secretaría Ejecutiva del CONAP y a satisfacción de ésta, una solicitud que contendrá como mínimo con la siguiente información:

- Nombre y datos de identificación personal de la persona individual o jurídica solicitante.
 - Finalidad de la actividad.
 - Indicación de las especies a reproducir.
 - Métodos y técnicas a desarrollar.
 - Registro interno de reproducción.
 - Plan general de actividades por ciclo de reproducción.
 - Ubicación de la granja e indicación del tiempo que se pretende para su funcionamiento.
 - Descripción del tipo de instalaciones e infraestructura.
 - Listado del personal profesional y técnico de la granja.
 - Destino de la producción a obtener e indicación de las acciones conexas a desarrollarse.
 - Datos de identificación personal y de acreditación del regente.
 - Cronograma anual propuesto de las actividades de la granja.
- Queda entendido que independientemente de la mencionada inscripción, para el transporte y comercialización y exportación deberá contar con autorización expresa expedida por la Secretaría Ejecutiva del CONAP.

ARTICULO 63. Inspección. Todo reproductor autorizado quedará obligado a permitir que las autoridades del CONAP puedan comprobar "IN SITU" la reproducción que desarrollan.

ARTICULO 64. Garantía de Reproducción. Con la finalidad de garantizar la continuidad de las operaciones de las granjas de reproducción autorizadas y evitar el saqueo y depredación de los recursos, el propietario o representante legal de la granja presentará, cuando la Secretaría Ejecutiva del CONAP lo considere necesario y previo al inicio de las operaciones, fianza o garantía hipotecaria o prendaria o de depósito monetario a favor del CONAP, de las plantas y animales colectados o capturados para el inicio de las actividades de la granja.

ARTICULO 65. Regencia. Las personas que se dediquen a la regencia de granjas de reproducción de vida silvestre, deberán ser profesionales o técnicos especializados en la materia, aceptados por la Secretaría Ejecutiva del CONAP.

CAPITULO IV

DEL TRANSPORTE Y COMERCIALIZACION

ARTICULO 66. Transporte. Quien se dedique a transportar especímenes, partes o derivados de vida silvestre, deberá portar para cada envío una guía de transporte expedida por la Secretaría Ejecutiva del CONAP o sus delegaciones regionales a costa del interesado.

ARTICULO 67. Guía de Transporte. La Guía de transporte es el documento oficial que acredita el origen legal de especímenes, partes o derivados de la vida silvestre. La guía de transporte deberá reunir los siguientes requisitos:

- a) Extenderse en papel de seguridad, impreso en series de diez mil (10,000) unidades, identificando cada serie con una letra del abecedario.
- b) Indicar el tiempo de vigencia cuyo plazo no podrá ser menor de tres ni mayor de diez días.
- c) Contener la descripción clara de la documentación legal de origen de la cual es consecuencia y forma parte.
- d) Las cantidades y volúmenes autorizados se especificarán en letras y números.
- e) Indicar el nombre científico así como el nombre común de los especímenes, partes o derivados.
- f) Indicar la procedencia y destino.
- g) Tanto el original como las copias deberán ser firmadas por el Secretario Ejecutivo del CONAP, la persona que lo sustituya o los delegados regionales.

ARTICULO 68. Permisos de Exportación Comercial y Comercialización.

Para otorgar permisos de exportación comercial y/o comercialización de especies de flora y fauna silvestres se requerirá lo siguiente:

- a) Estar formalmente inscritos en los registros del CONAP.

Para los productos que hayan sido extraídos de la naturaleza, se debe contar con informe favorable emitido por un técnico del CONAP en un plazo acorde a la naturaleza de cada uno de los productos a exportar, en el cual se demuestre que el aprovechamiento ha ocurrido bajo un plan de manejo autorizado.

Para los especímenes provenientes de granjas de reproducción debidamente registradas en el CONAP, el regente de la granja deberá firmar para cada embarque y a manera de declaración jurada, los certificados de origen que garantizan que los especímenes partes o derivados de los mismos son producidos en dicha granja.

ARTICULO 69. Licencias de Exportación. Las licencias de exportación de productos de flora y fauna silvestres deberán contar, previo a su emisión, con un permiso expedido por la Secretaría Ejecutiva del CONAP y seguir el trámite que establecen las leyes nacionales de exportación.

ARTICULO 70. Listado de Especies Exportables. Anualmente, durante el mes de noviembre, la Secretaría Ejecutiva del CONAP elaborará los listados de las especies de flora y fauna silvestres susceptibles de ser exportadas; y determinará en la resolución respectiva las cuotas anuales de exportación las cuales podrán ser primadas totalmente cuando considere que la especie experimenta grados de amenaza creciente. Las especies no consideradas en dichos listados anuales, serán sometidas al CONAP, quien resolverá sobre el particular.

ARTICULO 71. Cuotas de Exportación. La(s) cuota(s) anuales de exportación deberán distribuirse entre los exportadores registrados, no pudiéndose autorizar cuotas o permisos de exportación a nuevos solicitantes, sin antes haber satisfecho los pedidos de exportadores que los hayan requerido con anterioridad.

ARTICULO 72. Especies Exógenas. Quien desee introducir al país especies exógenas de flora y fauna, deberá solicitar previamente autorización al CONAP. Si la introducción fuera hecha para el campo, ésta deberá estar acompañada del estudio de impacto ecológico que demuestre la factibilidad de lo solicitado.

ARTICULO 73. Importación. Previo a emitir resolución favorable para poder portar especies, partes y derivados de vida silvestre, la Secretaría Ejecutiva del CONAP deberá comprobar que el interesado cumpla con lo expresado en el artículo anterior, posea permiso expedido por autoridad administrativa del país de origen y que la misma cumpla con los requisitos de sanidad exigibles por Guatemala para cada caso específico.

ARTICULO 74. Control de Embarque. Los embarques de especímenes partes y derivados de vida silvestre, ya sea que se encuentren en tránsito, que sean destinados a la exportación o provengan de importación, podrán ser retenidos por la Secretaría Ejecutiva del CONAP, por un plazo mínimo de cinco días, cuando existieren indicios de que los mismos son ilegales; durante ese plazo deberá comprobarse la legalidad de la documentación y del producto objeto de embarque. Si se comprobare la legalidad de la documentación y del producto objeto del embarque, se permitirá que el mismo continúe hacia su destino. Si hubiere indicios de la ilegalidad de la

documentación y del producto objeto del embarque, se pondrá en conocimiento de las autoridades correspondientes, quienes procederán de conformidad con lo que determine la Ley. En el caso de productos pericederos y animales se deberán tomar las medidas para evitar el daño a los mismos.

TITULO V

CAPITULO I

INCENTIVOS FISCALES

ARTICULO 75. Exención del Impuesto Unico sobre inmuebles. Para que las personas individuales o jurídicas privadas, puedan gozar del incentivo fiscal a que se refiere la ley en su artículo 31, deben llenar los siguientes requisitos:

- a) Contar con la aprobación e inscripción por parte del CONAP de la finca o porción de la misma como Reserva Natural Privada.
- b) Contar con el dictamen favorable de la Secretaría Ejecutiva del CONAP basado en la documentación solicitada y en la comprobación de campo para constatar que la finca o porción de la misma efectivamente fue dedicada como Reserva Natural Privada.

ARTICULO 76. Certificados para la Exención del Impuesto Unico sobre inmuebles. La Secretaría Ejecutiva del CONAP extenderá los certificados a las personas que llenen los requisitos a que se refiere el artículo anterior. Estos contendrán como mínimo la siguiente información:

- a) Identificación de la persona individual o jurídica propietaria del inmueble dedicado como Reserva Natural Privada.
- b) Identificación y extensión de la(s), o porción de la(s) misma(s), que se dedican a Reserva Natural Privada, incluyendo matrícula fiscal que la(s) ampara.
- c) Indicación del periodo comprobado en el cual el propietario o poseedor, ha dedicado la finca a reserva natural privada.

ARTICULO 77. Requisitos para Certificados: Todo certificado deberá extenderse a costa del interesado en papel sellado del valor que la ley establece, debiéndose solicitar a CONAP, como mínimo, cuarenta y cinco (45) días hábiles previos a su presentación ante el Ministerio de Finanzas Públicas quien considerará si procede la exoneración.

ARTICULO 78. Exención del Impuesto sobre la Renta. Para que las personas individuales o jurídicas privadas puedan gozar del incentivo fiscal a que se refiere la ley en su artículo 32, las mismas deben llenar los siguientes requisitos:

- a) Estar inscritos y reconocidos por el CONAP para desarrollar tales actividades, mediante la aprobación de un proyecto de trabajo presentado.
- b) Presentar a la Secretaría Ejecutiva del CONAP, declaración jurada de ingresos gravados del ejercicio fiscal correspondiente.

ARTICULO 79. Certificado de Exención del Impuesto sobre la Renta. El certificado de exención del impuesto sobre la renta deberá contener los datos siguientes:

- a) Indicación de la persona individual o jurídica a quien se concede la exención y su número de Identificación tributaria.
- b) Periodo Fiscal a que corresponden los ingresos gravados que son motivo de exención.
- c) Monto del ingreso total anual que se pretende exonerar de pago, hasta el cincuenta por ciento (50%) del impuesto, de acuerdo a la declaración jurada presentada por el interesado.

TITULO VI

CAPITULO I ADMINISTRACION

ARTICULO 80. Regionalización del CONAP. El Consejo Nacional de Areas Protegidas CONAP, podrá establecer dependencias y delegaciones en el interior de la República, debiéndose acomodar a las disposiciones legales que estén vigentes sobre la regionalización del país.

ARTICULO 81. Cumplimiento de Fines. Para dar cumplimiento a su fines, la Secretaría Ejecutiva del CONAP deberá elaborar anualmente un programa de coordinación con todas las entidades integrantes del Consejo; el cual deberá ser traducido a proyecto y atribuciones institucionales concretas, asignadas individual o conjuntamente a dichas entidades, a efecto de que se lleven a cabo bajo su dirección. Las entidades responsables de cada proyecto deberán informar semestralmente al CONAP sobre el avance y situación general de los mismos.

ARTICULO 82. Evaluación. La Secretaría Ejecutiva del CONAP hará una evaluación anual de los proyectos en ejecución o ejecutados durante el año calendario precedente que hubieren sido asignados de conformidad con el programa de coordinación que alude al artículo anterior. Esta evaluación determinará las políticas y estrategias que tiendan a la conservación del patrimonio natural de la nación.

ARTICULO 83. Asesores de Representantes. Los representantes de las entidades integrantes del Consejo, cuando concurren a las sesiones del mismo, podrán hacerse acompañar de asesores, a expensas de las entidades que consideren conveniente.

ARTICULO 84. Participación de Asesores. Los asesores o expertos que concurren a las sesiones asesorando a los respectivos representantes del CONAP, podrán participar en las deliberaciones del mismo con voz pero sin voto.

ARTICULO 85. Acreditaciones. La autoridad máxima de cada entidad designará a sus representantes al CONAP por medio de un acuerdo o resolución que deberá notificarse a la Secretaría Ejecutiva para la acreditación correspondiente.

ARTICULO 86. Sustituciones. A juicio de la autoridad máxima de la entidad representada, puede sustituir a su o sus representantes, debiendo en todo caso, proceder en la forma indicada en el artículo anterior. Si un miembro del CONAP no asiste regularmente a las sesiones, el CONAP deberá llamarle la atención y en caso de persistir la situación se solicitará su sustitución.

ARTICULO 87. Fé Pública. El Secretario Ejecutivo del CONAP deberá levantar el acta de cada sesión celebrada y como depositario de la fe pública administrativa deberá certificar el contenido de las mismas a quienes lo soliciten.

ARTICULO 88. Asistente. Sobre las actuaciones del Secretario Ejecutivo dará fe la persona que le asiste administrativamente.

ARTICULO 89. Normas del SIGAP. Corresponde al CONAP, aprobar las normas de organización y funcionamiento del Sistema Guatemalteco de Areas Protegidas, las cuales deberán ser elaboradas por la Secretaría Ejecutiva del mismo.

ARTICULO 90. Normas del CONAP. El CONAP aprobará todas las normas internas de organización, funcionamiento y manuales operativos que le fueren sometidos a su conocimiento por la Secretaría Ejecutiva del mismo.

ARTICULO 91. Autoridades Científicas. El Secretario Ejecutivo podrá hacer los nombramientos de las Autoridades Científicas del Convenio CITES, asimismo podrá designar una autoridad en las regiones que estime conveniente.

CAPITULO II

REGISTROS

ARTICULO 92. Registros. El Secretario Ejecutivo, además de los registros mencionados en la ley y este reglamento podrá proponer ante el CONAP la creación de cualquier registro que estime conveniente, conservándolos bajo su administración y custodia.

ARTICULO 93. Registro de Areas Protegidas. El registro de las áreas protegidas del SIGAP se llevará en libros especiales. A cada área protegida corresponderá un número y un folio, y en él quedarán asentados, como mínimo los siguientes datos:

- Nombre del área
- Fecha de emisión e indicación del instrumento jurídico por medio del cual se declara el área como protegida.
- Delimitación del área protegida de conformidad con el instrumento jurídico de creación.
- Indicación de la categoría de Manejo del Área.
- Resumen descriptivo de sus características.
- Indicación de la entidad encargada de administrarla.

Al margen, deberá asentarse todas las modificaciones que sufre el área por disposiciones legales posteriores a la fecha de su inscripción.

ARTICULO 94. Registros de Flora y Fauna Silvestre Nacional. El registro de flora y fauna silvestres comprenderá las especies protegidas o amenazadas de extinción comprendidas en el convenio CITES y el listado nacional según lo indicado en el artículo 23 de este Reglamento; se llevará en libros especiales separados, empleando un folio para cada especie en el que deberá asentarse como mínimo los siguientes datos:

- Nombre científico
- Nombres comunes
- Familia a que pertenece

ARTICULO 95. Registro de Personas. El registro de personas individuales o jurídicas a que alude el inciso c) del artículo 75 de la ley, deberá cumplir como mínimo con los requisitos siguientes:

- Se llevará un libro especial por cada actividad
- Se destinará un folio para cada persona
- En cada folio deberá asentarse el nombre de la persona debidamente autorizada para ejercer la actividad de que se trate.
- Indicación de la edad, nacionalidad, profesión u oficio, domicilio y número de cédula o documento de identificación.
- Indicación de la dirección para recibir notificaciones.

ARTICULO 96. Registro de Fauna Silvestre Exótica. Para llevar este registro, deberá cumplirse lo establecido en el artículo 70 de este reglamento, debiendo indicarse también el país de procedencia, así como el origen de las especies.

CAPITULO III

TARIFAS

ARTICULO 97. Establecimiento de Tarifas. El CONAP establecerá, actualizará periódicamente y publicará en el Diario Oficial, el listado con las tarifas para el aprovechamiento de flora y fauna silvestres, investigación, caza y pesca deportiva, concesiones, arrendamientos, pagos de admisión a áreas protegidas y demás pagos

determinados por el CONAP, para cada una de las actividades, cada uno de los recursos de vida silvestre y cada una de las áreas protegidas que estén bajo su administración. El producto de dichos pagos ingresará al fondo privativo del CONAP. En el caso del aprovechamiento de productos y sub-productos de flora y fauna silvestre, mientras no se establezcan tarifas nuevas, regirán las vigentes anteriormente, aún aquellas aplicadas por las entidades encargadas antes de la emisión del decreto 4-89 y el presente reglamento.

TITULO VII

CAPITULO I

FALTAS Y ACCIONES ILICITAS

ARTICULO 98. Conocimiento de delitos y faltas. Todos los delitos y faltas en materia de áreas protegidas y vida silvestre, deberán ser sometidas a conocimiento de las respectivas autoridades judiciales para la sanción correspondiente.

CAPITULO II

DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS

ARTICULO 99. Areas de Protección Especial. Se consideran áreas de protección especial las señaladas en el artículo 90 de la Ley, por sus valores biológicos, geomorfológicos, escénicos, que representan una muestra de las diferentes ecosistemas naturales del país, y algunos sitios de importancia por sus invaluables características arqueológicas, históricas, o de generación de bienes y servicios indispensables para contribuir a garantizar el desarrollo sostenible del país. La Secretaría Ejecutiva del CONAP, deberá proceder a elaborar o gestionar la elaboración de su estudio técnico a efecto de lograr, si el estudio lo determina procedente, su declaratoria oficial, de acuerdo al procedimiento establecido en la ley y el presente Reglamento.

ARTICULO 100. Imprevistos. Los aspectos no previstos en el presente reglamento serán sometidos a consideración del CONAP, quien resolverá lo procedente.


ARTICULO 101. Reglamento de Personal. La Secretaría Ejecutiva presentará al Consejo para su aprobación su Reglamento Interno de personal en un término de noventa (90) días hábiles después de publicado este Reglamento, el cual establecerá la relación de la institución con sus laborantes.

ARTICULO 102. Requisitos para las nuevas áreas. La entidad que maneja las áreas a que se refiere el artículo 89 de la Ley, deberá proceder a buscar su inscripción en los registros del SIGAP en el CONAP.


ARTICULO 103. Revisión y Actualización. El presente reglamento podrá ser revisado y actualizado por el Ejecutivo a sugerencia de la Secretaría Ejecutiva del CONAP, y previa aprobación del CONAP.

ARTICULO 104. Vigencia. El presente Reglamento entrará en vigencia el mismo día de su publicación en el Diario Oficial.

COMUNIQUESE


 MARCO VINICIO CEREZO AREVALO
 PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

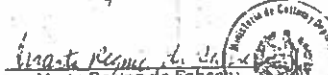
El Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación

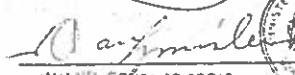

 Ing. Agr. Mario Alberto Gaitán
 VICEMINISTRO DE AGRICULTURA Y ALIMENTACION
 ENCARGADO DEL DESPACHO

El Ministro de Educación


 Prof. Alfonso Sierra Samayoa
 VICEMINISTRO DE EDUCACION
 ENCARGADO DEL DESPACHO

El Ministro de Gobernación


 Marta Regina de Falsen
 MINISTRA DE CULTURA Y DEPORTES


 MANUEL GONZALEZ RODAS
 VICEMINISTRO DE GOBERNACION
 ENCARGADO DEL DESPACHO

El Ministro de Finanzas Públicas


 JUAN FRANCISCO PINTO G.
 MINISTRO DE FINANZAS PUBLICAS

Reglamento general de tribunales

DECRETO NUMERO 1568

JORGE UBICO,

Presidente de la República,

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con lo dispuesto por la Asamblea Nacional Legislativa en los Decretos Números 1928 y 2007, la Corte Suprema de Justicia ha dado cuenta con el proyecto de Reglamento de tribunales que formuló, y correspondiendo al Ejecutivo reglamentar las leyes para asegurar y facilitar su ejecución;

POR TANTO:

En uso de las facultades que le confiere el inciso 17 del artículo 77 de la Constitución de la República,

DECRETA:

El siguiente:

REGLAMENTO GENERAL DE TRIBUNALES

TITULO I

De la Corte Suprema de Justicia

CAPITULO I

Del Presidente

Artículo 1. Las Atribuciones reglamentarias del Presidente del Organismo Judicial y de la Corte Suprema de Justicia, son las siguientes:

1. Mandar que se Compulse testimonio de las escrituras que existen en el Archivo General de Protocolos;
2. Dar la dirección correspondiente a los suplicatorios que se dirijan al exterior o se reciban de él, para ser diligenciados en los Tribunales de la República;
3. Pedir informes a las autoridades del orden judicial y recabar cuantos datos crea conducentes para el ejercicio de las atribuciones que la ley le confiere;
4. Informarse con frecuencia de la mancha del Departamento de Estadística, dictando las disposiciones que considere oportunas para su mejor eficiencia;
5. Procurar enriquecimiento de la Biblioteca del Organismo Judicial, con las obras jurídicas más modernas que se vayan publicando;
6. Convocar a la Corte a sesiones extraordinarias, en el caso prescrito por el **Artículo 10**;
7. Presidir las audiencias ordinarias y extraordinarias, dirigir los debates y poner las cuestiones a votación, de conformidad con lo estipulado en el **Artículo 12**;
8. Designar, en los Departamentos en donde hubiere varios Jueces de Primera Instancia a los que deban ejecutar los trabajos siguientes:
 - I. Inspeccionar el Registro de la Propiedad Inmueble y Registro Civil;
 - II. Revisiones ordinarias y extraordinarias de los Protocolos de los notarios. Esta designación se hará cada, año en los primeros quince días del mes de enero;
9. Designar al Magistrado ponente en cada asunto que entre a la vista, de conformidad con el **Artículo 4**;

Reglamento general de tribunales

10. Llevar un Registro de Abogados y Notarios y publicar todos los años en la "Gaceta de los Tribunales", una nómina de los Abogados y Notarios hábiles;
11. Informar mensualmente a la Rectoría de la Universidad Nacional respecto a la asistencia de los pasantes a los Tribunales de Justicia;
12. Exigir a los Jueces el parte diario de movimiento de reos;
13. Llevar, con toda escrupulosidad, las hojas de servicio de los funcionarios de justicia;
14. Tener a su Cargo los edificios que ocupen los tribunales, dictando las medidas adecuadas a su conservación e higiene y a la distribución de las oficinas judiciales en sus diversos departamentos para cuyo efecto, los edificios, sus conserjerías, servidumbre y mobiliario estarán bajo sus órdenes;
15. Nombrar a los empleados de los servicios que estén bajo su inmediata dependencia, que son los siguientes: Tesorero de Fondos de Justicia y personal de la Tesorería, Bibliotecario, personal, de la Oficina de Estadística, Archivero de Tribunales y empleados del Archivo, Conserjes y sirvientes de todos los edificios judiciales ubicados en la capital, portero, sirvientes y chofer de la Presidencia;
16. Acordar las erogaciones de la Tesorería de Fondos de Justicia y las que sean a cargo de la Partida de Gastos Extraordinarios del ramo.

CAPITULO II De los Magistrados

Artículo 2. Los Magistrados redactarán las ponencias de los asuntos civiles y criminales que estén en estado de resolverse.

Artículo 3. Cada asunto será objeto de una ponencia, para su discusión, modificación o aprobación.

Artículo 4. Magistrado ponente será designado por el Presidente del Tribunal al entrar a la vista el juicio o proceso. Esta designación deberá hacerse procurándose la mayor equidad en la distribución de trabajo.

Artículo 5. Las ponencias deberán presentarse el día de la vista o dentro de los ocho días siguientes. Cualquiera de los Magistrados tendrá derecho a exigir la resolución dentro de este término.

Artículo 6. Al Magistrado ponente se le entregarán todas las actuaciones respectivas, para su estudio.

Artículo 7. Para el ejercicio de las facultades que a la Corte le confiere el artículo 2. Decreto Legislativo Número 2007 (*Reformas a la Ley Constitutiva del Organismo Judicial*), cada uno de los Magistrados podrá hacer proposiciones por escrito, las que deberán resolverse admitiéndolas o denegándolas, según acuerde la mayoría.

CAPITULO III De las resoluciones de la Corte

Artículo 8. Para la resolución de los asuntos que sean de la competencia del Tribunal, o de las cuestiones de índole administrativa que le sean sometidas, la Corte se reunirá en audiencias ordinarias y extraordinarias.

Artículo 9. Las audiencias ordinarias se verificarán el jueves de cada semana, comenzando a las diez y prolongándose por el tiempo que sea necesario para resolver los asuntos que se presenten. Si no fueren suficientes las horas de la mañana, se continuará por la tarde y si aún así no bastare, se reanudara la audiencia el día siguiente.

Artículo 10. Las audiencias extraordinarias serán convocadas por el Presidente, cuando algún asunto urgente lo exija.

Artículo 11. Las audiencias se celebrarán en el salón respectivo, a puerta cerrada, salvo si se tratare de vista pública, en cuyo caso se llenará las formalidades respectivas.

¹ El Decreto Legislativo Número 2007 fue subrogado por la Ley Constitutiva del Organismo Judicial.

Reglamento general de tribunales

Artículo 12. Corresponde al Presidente presidir las audiencias ordinarias y extraordinarias, salvo cuando se trate de asuntos en que no pudiese conocer y así lo hubiese declarado el Tribunal; dirigir los debates y poner las cuestiones a votación cuando estuvieren suficientemente discutidas.

Artículo 13. Los Magistrados darán cuenta con sus ponencias en orden inverso al número de orden que les corresponda. El ponente leerá su proyecto, fijando si fuere el caso, las cuestiones que hayan de debatirse y las proposiciones sobre las cuales deba recaer la votación.

Artículo 14. En todo caso los autos así como la ponencia presentada, estarán a disposición de los Magistrados para su estudio personal.

Artículo 15. El ponente dará todas las explicaciones que se le pidan relativas al asunto que se estudie y deberá acatar el acuerdo de la mayoría, tanto en lo relativo al fondo como en lo que se refiere a la forma y redacción.

TITULO II De las Salas de la Corte de Apelaciones CAPITULO I Del Presidente

Artículo 16. De conformidad con lo dispuesto en la Ley Constitutiva del Organismo Judicial, cada Sala será presidida por el Magistrado correspondiente que se elija en primer lugar.

Artículo 17. Corresponde al Presidente de Sala, fuera de las demás atribuciones legales, las siguientes:

1. Presidir el respectivo Tribunal en todos los actos oficiales;
2. Abrir y cerrar las sesiones ordinarias del Tribunal y convocarlo a las extraordinarias cuando fuere necesario;
3. Fijar el orden en que deban verse los asuntos sujetos al conocimiento del Tribunal;
4. Mantener el orden de la Sala, amonestando a cualquiera persona que lo perturbare y aun haciéndola salir en caso necesario;
5. Distribuir por iguales partes, entre él y los Magistrados Vocales, los asuntos que estén para resolverse;
6. Dirigir los debates y poner a votación las materias discutidas;
7. Oír las quejas de las partes acerca del retraso que padezcan sus negocios y tomar las disposiciones pertinentes;
8. Velar por la asistencia puntual de los empleados y por el exacto cumplimiento de las obligaciones que les corresponda;
9. Reprimir con energía cualquier falta o abuso que cometieren los empleados, imponiendo las sanciones correspondientes o dando cuenta a la Sala si no fuere de su competencia.

CAPITULO II De los Magistrados Vocales y de las resoluciones del Tribunal

Artículo 18. Los asuntos civiles y criminales que se encuentren en estado de resolverse serán distribuidos por iguales partes entre los tres Magistrados, debiendo disponer la misma Sala si el reparto debe hacerse por sorteo o por el orden en que se reciban. La tramitación corresponde al Presidente.

Artículo 19. Los Magistrados podrán llevar expedientes a sus casas para estudiarlos, dejando, firmado el conocimiento respectivo. Cuando algún Magistrado se retire con licencia, devolverá antes todas las causas que tenga en su poder.

Artículo 20. El Magistrado ponente deberá presentar su proyecto el día de la vista o dentro de los ocho días siguientes, a fin de que, por lo menos, se notifique la parte resolutive dentro de dicho término.

Artículo 21. La Sala señalará los días y horas en que se verifiquen las sesiones ordinarias del Tribunal.

Reglamento general de tribunales

Artículo 22. El día y hora fijados se reunirán en el lugar respectivo los tres Magistrados. El Presidente declarará abierta la audiencia y los Magistrados por su orden inverso, darán cuenta con los asuntos que tuvieren en estudio. El Magistrado ponente dará lectura a su proyecto, el cual deberá estar ajustado a lo que dispone el artículo 233 de la Ley Constitutiva del Organismo Judicial, dando toda clase de explicaciones y aclaraciones que se le pidan concernientes al caso, fijando en definitiva las cuestiones sobre que haya de versar la discusión y votación.

Artículo 23. Cualquiera de los Magistrados puede pedir que se suspenda una discusión para continuarla al día siguiente. En todo caso, los autos y la ponencia deberán quedar a disposición de los Magistrados, para que puedan estudiarlos personalmente y proponer las modificaciones de fondo y forma que estimaren legales.

Artículo 24. Si la ponencia fuere aceptada no podrá variarse sino por acuerdo de los mismos votantes pero podrá autorizarse al Presidente o a alguno de los Magistrados para que verifique la corrección gramatical o de estilo.

Artículo 25. Si el proyecto de resolución no fuere aceptado por la mayoría y el ponente no llegare a ponerse de acuerdo con ella entregará los autos para que otro Magistrado designado por el Presidente, redacte la nueva ponencia.

Artículo 26. El Fiscal y Procurador deberán asistir a las vistas cuando fueren citados por el Presidente, pero una vez desempeñado su cometido deberán retirarse para dejar al Tribunal en libertad de acción. ²

Artículo 27. Cuando se tratare de vistas en Corte Marcial, deberán ser citados oportunamente los Vocales Militares por atento Oficio, quienes estarán presentes en la sesión y no podrán retirarse hasta que este se declare cerrada.

Artículo 28. Si el día de la vista estuviere desintegrado el Tribunal por cualquiera causa imprevista, se procederá a organizarlo como corresponde; si volviere el propietario y no se hubiere proferido el fallo, se resolverá sin necesidad de nueva vista, con el Magistrado que integrare el día de la resolución.

Artículo 29. Los Magistrados pueden presentar proposiciones sobre asuntos de índole administrativa que se refieran a su propia Sala, y exigir su resolución. El voto de la mayoría se cumplirá emitiéndose el acuerdo respectivo.

CAPITULO III De los Fiscales ³

Artículo 30. Los Fiscales son los representantes del Ministerio Público en lo judicial, cerca de los Tribunales superiores y ejercerán la defensa de los intereses públicos que les estén encomendados en la forma que determinan las leyes sustantivas y procesivas.

² Véase Decreto presidencial No. 585 en anotación hecha al capítulo VI de la Ley Constitutiva del Organismo Judicial en este tomo.

³ Véase Decreto presidencial No. 585 en anotación hecha al capítulo VI de la Ley Constitutiva del Organismo Judicial en este tomo.

Reglamento general de tribunales

Artículo 31. Cuando hubiere acusador en las causas criminales, se oirá tanto a este como al Fiscal de la Sala; pero las notificaciones, con excepción de la providencia en que se mande oír al primero, se harán solamente al Fiscal.

Artículo 32. Son obligaciones de los Fiscales:

- a) Contestar dentro del término de ley, los traslados que les fueren conferidos;
- b) Emitir dictamen en los asuntos en que fueren oídos, debiendo previamente hacer un estudio detenido del caso, para sentar las Conclusiones legales que corresponden;
- c) Solicitar la Práctica de cualquier diligencia probatoria que estimen necesaria;
- d) Concurrir a la vista de los negocios, de su Sala, cuando fueren citados;
- e) Interponer el recurso de casación en los casos en que legalmente proceda;
- f) Hacer los cortes de caja de la Tesorería de Fondos de Justicia, cuando fueren designados por la Corte Suprema, ciñéndose para el efecto a lo que sobre el particular dispone este Reglamento.

CAPITULO IV De los Procuradores

(Suprimido por Decreto Presidencial No. 585, véase anotación hecha al capítulo III de esta misma ley.)

TITULO III De los Jueces de primera Instancia

Artículo 38. Los Jueces de 1a. Instancia deberán cerciorarse personalmente del funcionamiento de sus dependencias, de la atención que los empleados presten al público y del modo cómo cumplen sus respectivas obligaciones, procediendo a corregir en el acto cualquier falta o deficiencia que notaren.

Artículo 39. En la organización del trabajo se comprenderá al que corresponda a los pasantes, reglamentándolo para tal efecto.

Artículo 40. En las órdenes de captura que libren, estarán obligados a consignar el mayor numero de datos que hagan posible la identificación de las personas sujetas a captura.

Artículo 42. Están obligados a estudiar y resolver personalmente los asuntos. Los empleados podrán hacer proyectos de resoluciones en vía de práctica, siempre que al hacerlo no descuiden las obligaciones que les son propias.

Artículo 42. Al practicar la visita mensual en las cárceles de las cabeceras, levantarán el acta respectiva, la cual contendrá por lo menos: las quejas que expusieren los detenidos, ya sean en cuanto al trámite de sus procesos, o bien acerca del trato que sufrieren en la detención, haciendo constar las anomalías que observaren por sí mismos. De dicha acta enviarán copias a la Presidencia del Organismo Judicial y a la Sala respectiva, así como de las disposiciones que hayan dictado con tal motivo.

Artículo 43. Los Jueces que tengan a su Cargo la visita a los Registros Civiles y de la Propiedad Inmueble, levantarán una acta en que conste el estado en que se encuentran el trabajo de las oficinas, si los libros están llevados conforme a la ley y con la escrupulosidad y atención que deben prestárseles, apuntando las deficiencias y los acuerdos y disposiciones que dictaren para evitarlas. De estas actas también remitirán copia a la Presidencia del Organismo Judicial.

Artículo 44. Los estados mensuales que están obligados a remitir a la Sala jurisdiccional, deberán contener, con la debida separación, los datos siguientes:

- a) Fecha en que se inició la causa;
- b) Nombres y apellidos, edad, estado civil, origen, domicilio, oficio, si sabe o no leer y escribir;
- c) Delito;
- d) Fecha del auto de prisión, excarcelación y plenario, en su caso;
- e) Fecha de la última diligencia. De este cuadro se enviará un duplicado al Departamento de Estadística Judicial.

Reglamento general de tribunales

Artículo 45. Están obligados- a comprobar personalmente los datos que remitan al Departamento de Estadística Judicial, y en particular las tarjetas que sobre identificación y auto de prisión de reos deben enviar, y de que se haga dentro de los plazos que para el efecto les sean fijados.

Artículo 46. Los Jueces de 1a. Instancia que tengan a su cargo los ramos civil y criminal los llevarán separadamente, designando a los empleados que deban atender cada uno.

Artículo 47. Las disposiciones de este Título comprenden también a los Comandantes de Armas en su Carácter de Jueces Militares. ¹

Artículo 48. Los Jueces Suplentes deberán comunicar a la Presidencia del Organismo Judicial, el lugar de su residencia y cualquier cambio que efectuaren, aun con carácter accidental.

TITULO IV De los Jueces Menores

Artículo 49. Los Jueces Menores tendrán en sus respectivos Juzgados las mismas atribuciones que este Reglamento confiere a los de Primera Instancia en cuanto les sean aplicables.

Artículo 50. Llevarán separadamente los ramos civil y penal, designando a los empleados que deban atender a cada uno.

Artículo 51. Como Jueces de instrucción no deberán limitarse a cumplir las formalidades legales de la pesquisa, sino pondrán de su parte todo empeño y habilidad, en la investigación de los hechos.

TITULO V De los Secretarios de los Tribunales CAPITULO I Disposiciones generales

Artículo 52. El nombramiento de Secretario de cualquiera de los Tribunales de Justicia deberá recaer en persona que reúna además de los requisitos legales, las cualidades de competencia, actividad y, probidad reconocidas. El Tribunal Superior respectivo a quien corresponda aprobar el nombramiento, podrá seguir las averiguaciones que estimare oportunas para el efecto.

Artículo 53. Las obligaciones de los Secretarios son:

1. Permanecer en la oficina durante las horas de despacho y acudir fuera de ellas cuando fuere necesario o llamado por el jefe del Tribunal;
2. Distribuir el trabajo a sus subalternos y cuidar de-que se ejecute bien y con la prontitud debida;
3. Entregar diariamente a los notificadores las diligencias o resoluciones que deban notificarse personalmente a los litigantes; y recibir al día siguiente las ya notificadas. La entrega debe hacerla constar en un libro de conocimientos, con especificación de la hora. En la cancelación de la partida debe hacer constar el motivo por qué ha dejado de hacerse alguna notificación el día de que se trata;
4. Hacer que se lleven, bajo su dirección, los libros de asistencia de empleados, de pasantes, de recepción de escritos y documentos, de notificaciones de receptores, de inventarios, de actas, de conocimientos y los demás que prescriban otros artículos de este Reglamento y los reglamentos interiores;
5. Recibir los escritos y documentos que les presenten, dándoles entrada simultáneamente en el libro respectivo y rechazar los que no estén en el papel que corresponde o no se acompañe copia o copias en los casos exigidos por la ley;

¹ Los Comandantes de Armas fueron substituidos por los Jefes de Zonas Militares. Ver artículos 1. Dto. Número 166 del Congreso.

Reglamento general de tribunales

6. Poner y suscribir al pie de los escritos una razón que contenga la fecha y hora de la entrega, el nombre y apellidos de la persona que la haga y el número de copias que presente. Dará también en el mismo acto, si se le pidiere, recibo del escrito y de las copias, que contendrá los datos expresados;
7. Tomar nota en el Libro de Recepción de Escritos de los que le fueren presentados, y con sus respectivos antecedentes que le serán entregados por los oficiales, dar cuenta al Presidente de Tribunal o Juez, en la misma audiencia;
8. Redactar o hacer que se redacten las actas, declaraciones y de más diligencias que deba autorizar;
9. Cuidar de que los expedientes se vayan formando por orden de fecha, debidamente foliados;
10. Llevar con la debida exactitud la cuenta comprobada de los gastos de oficina;
11. Hacer mensualmente el cómputo de las entradas y salidas y el número de los juicios en estado de fallar;
12. Velar por la puntual asistencia de los empleados a las horas reglamentarias y que cada uno cumpla estrictamente sus obligaciones, revisando personalmente los escritorios de los oficiales para cerciorarse de que no les quedan escritos o actuaciones que debieran devolver;
13. Poner a disposición de los litigantes y de sus Abogados los juicios que soliciten para que, sin sacarlos de la oficina, tomen las copias o datos que necesiten, cuidando para el efecto de que los interesados no se obstaculicen cuando corran términos comunes, para cuyo efecto podrán señalar a cada uno días y horas diferentes, según las circunstancias, dando cuenta al Presidente del Tribunal o Juez, de cualquier dificultad, para que sea resuelta en el momento;
14. Atender cortésmente a toda persona que acuda al Tribunal en asuntos del servicio, exigiendo a los oficiales que presten inmediata atención al público, y obligarles a que se despachen en el mismo momento en que se presenten, a las personas que procedan de otros lugares;
15. Coleccionar el Diario Oficial y la "Gaceta de los Tribunales" para empastarlos y ponerlos al servicio del Juzgado o de la Sala;
16. Guardar los útiles de escritorio y suministrarlos para el servicio de la Oficina;
17. Conservar en su poder el sello del Tribunal, guardándolo en lugar seguro y no permitirlo a otros empleados, salvo que lo usaren en su presencia; y, bajo ningún concepto a particulares.

Artículo 54. El Secretario es el órgano de comunicación con el público; si el asunto por que se le preguntare no lo tuviere a su vista o no fuere de su conocimiento, ordenará al empleado respectivo que se lo presente para dar los datos que se le pidan, o indicará al preguntante cual es el empleado que puede contestarle.

CAPITULO II

Del Secretario de la Corte Suprema de Justicia

Artículo 55. El Secretario es el Jefe de la Secretaría y de todas las dependencias subalternas de la Presidencia del Organismo Judicial y Corte Suprema de Justicia, teniendo la dirección e inspección de sus trabajos, sin perjuicio de sus atribuciones propias de los jefes de sección que existen y de los que en lo sucesivo se crearen.

Artículo 56. (*Artículo 1. del Decreto Presidencial No. 548 del 22 de febrero de 1956*). Son obligaciones especiales del Secretario:

1. Llevar el Protocolo de la Corte Suprema de Justicia, registrando en él los documentos que hayan obtenido el pase respectivo. Dicho registro podrá hacerse transcribiendo los documentos referidos o protocolando la certificación notarial de éstos que debe acompañarse con el original, cuando ésta sea la forma de registro que se solicite, en cuyo caso el Secretario que lleva el Protocolo deberá atenerse a lo dispuesto por el Código de Notariado;
2. Tener a su cargo los libros de registro de abogados de los Tribunales y notarios; y los demás que en el Reglamento Interior se especifican, los que serán llevados por oficiales que en el mismo se designan;
3. Dar curso a las providencias que dictare el Presidente de la Corte, cuidando de que se devuelvan inmediatamente a los Tribunales que corresponda los juicios y procesos, con sus respectivas ejecutorias;
4. Recibir y clasificar la correspondencia dando cuenta de su contenido al Presidente; y

Reglamento general de tribunales

5. Visitar constantemente las dependencias de Presidencia y Corte Suprema de Justicia para cerciorarse de su buen funciona miento, cuidar de que en esas oficinas la asistencia sea puntual y estar así capacitado para cumplir lo preceptuado por el artículo siguiente.

Artículo 57. El Secretario bajo su responsabilidad dará cuenta, al Presidente de las faltas, impuntualidades o abusos de los empleados, inmediatamente que tenga conocimiento de lo ocurrido, para que se imponga la sanción correspondiente.

Artículo 58. En ausencia del Secretario asumirá sus funciones el Oficial Mayor de la Corte, debiendo autorizar el despacho, uno de los Secretarios de' Sala, salvo cuando aquél fuere Notario.

CAPITULO III De los Secretarios de las Salas de Apelaciones

Artículo 59. Son obligaciones especiales de los Secretarios de las Salas:

1. Remitir a la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia los juicios y procesos que les fueren pedidos en la forma que corresponde;
2. Remitir a los Juzgados de 1a. Instancia y Comandancias de Armas, inmediatamente que pase el término legal, los asuntos que deban devolverse, con su respectiva ejecutoria;⁵
3. Poner al margen de las resoluciones que se hubieren dictado por mayoría, una razón en que conste el nombre de los Magistrados que hubieren votado en contra o razonado su voto;
4. Certificar el voto en contra o razonado y agregarlo a la pieza respectiva, cuidando de que se transcriba asimismo en la ejecutoria;
5. Tener a su cargo y responsabilidad su correspondiente archivo y en tal virtud llevar un inventario, con las separaciones que sean necesarias;
6. Llevar un libro de conocimientos de los asuntos que pasaren al Procurador y dar parte al Presidente de la Sala si transcurriere el término legal sin que fueren devueltos;
7. Hacer que se lleven bajo su dirección los libros: siguientes: de Votos de los Magistrados, de Acuerdos y Autos Acordados, de Protestas, de Conocimientos del Fiscal y Procurador y los 'demás que sean necesarios y que se establezcan en el Reglamento Interior o por acuerdo de la Sala;
8. Llevar la estadística de las resoluciones dictadas por su respectivo tribunal y remitirla cada mes al Departamento de Estadística Judicial;
9. Exigir mensualmente la estadística de las resoluciones dictadas durante el mes anterior por los Tribunales sometidos a la jurisdicción de la Sala.

Artículo 60. Los Secretarios de las Salas, así como el de la Corte Suprema de Justicia, son los órganos de comunicación con los Jueces de la. Instancia, Comandantes de Armas,⁶ Administradores de Rentas y demás autoridades de igual o inferior categoría.

⁵ Véase la anotación hecha al artículo 47 de este mismo Reglamento.

⁶ Véase la anotación hecha al artículo 47 de este mismo Reglamento

Reglamento general de tribunales

CAPITULO IV

De los Secretarios de los Juzgados de Primera Instancia y Juzgados Menores

Artículo 61. Son obligaciones especiales:

1. Tener a su cargo y responsabilidad el archivo del Juzgado y llevar un inventario con las separaciones necesarias cuidando además, que estén debidamente arreglados y ordenados los expedientes y papeles del Tribunal;
2. Enviar los juicios y procesos fenecidos al Archivo General de los Tribunales, haciendo la anotación correspondiente en el inventario;
3. Llevar la estadística de los juicios con expresión de los nombres de los litigantes, objeto del juicio, resoluciones que recaigan, fecha de éstas, fecha de entrada o conocimiento del juicio y numero que le corresponda en el inventario;
4. Autorizar los despachos, exhortos, diligencias autos y toda clase de resoluciones que se expidan, practiquen o dicten por el Juez
5. Asentar en los expedientes las razones que exprese la Ley o el Juez les ordene;
6. Asistir a las diligencias de prueba que debe recibir el Juez, de acuerdo con los Códigos de Enjuiciamiento;
7. Expedir las copias autorizadas que la ley determine o deban darse a las partes en virtud de decreto judicial;
8. Cuidar de que los expedientes sean debidamente foliados al agregarse cada una de las hojas, sellando por sí mismo, las actuaciones, oficios y demás documentos que lo requieran, y rubricando aquellas;
9. Guardar en el secreto del Juzgado las posiciones, pliegos escritos de repreguntas, o documentos que ordene el Juez;
10. Proporcionar a los interesados los expedientes en los que fueren parte y que soliciten para informarse del estado de los mismos para tomar apuntes, o para cualquier otro efecto legal, siempre que eso sea en su presencia y sin extraer las actuaciones de la Oficina;
11. Entregar a las partes, previo conocimiento, los expedientes en los casos en que lo disponga la ley;
12. Ordenar y vigilar que se despache sin demora la correspondencia del Juzgado;
13. Desempeñar todas las demás funciones que la ley determine y las que señale el Reglamento Interior.

CAPITULO V

De los Oficiales

Artículo 62. Los tribunales tendrán el número de oficiales que señale el Presupuesto General de la Nación, llamándoseles 1o., 2o., 3o., etcétera, todos de igual categoría, cada uno de los cuales desempeñará los trabajos que le señale el Reglamento Interior.

Artículo 63. En la Corte Suprema de Justicia, habrá un Oficial Mayor, de categoría superior a los demás Oficiales que tendrá las obligaciones que le asigna el Reglamento Interior.

Artículo 64. En el nombramiento de Oficiales, tendrán presentes los requisitos que se dejan mencionados en el **Artículo 235** de este Reglamento.

Artículo 65. No podrán encomendar a otro de los Oficiales ninguno de sus trabajos, a no ser con autorización del Secretario, y en ningún caso distraer a los notificadores con obligaciones que no los correspondan.

Artículo 66. Los empleados de las Salas están obligadas a cumplimentar los trabajos urgentes que les ordenare cualquiera de los Magistrados en cuyo despacho sirvan, no obstante disposiciones de régimen interior que les señalen especialmente sus atribuciones.

Artículo 67. Están obligados:

1. A llevar los libros del Tribunal, según lo disponga el Reglamento Interior;
2. A llevar personalmente los procesos que se les encomienden, guardándolos bajo su responsabilidad y conservando de ellos el correspondiente inventario;

Reglamento general de tribunales

3. A auxiliar al Secretario en todas los trabajos que sean de su incumbencia, en la forma que determina el Reglamento Interior.

Artículo 68. Cuando alguno de los Oficiales faltare al despacho, será substituido por cualquiera de los otros que designe el Secretario, y en ningún caso podrá ser causa de retraso o suspensión de alguna de las diligencias u operaciones que estuvieren a cargo del ausente.

CAPITULO VI De los Notificadores

Artículo 69. Para ser notificador, se necesita ser mayor de edad, saber escribir con propiedad y estar en el goce de los derechos de ciudadano.

Artículo 70. Los Tribunales bajo su responsabilidad, comprobarán que las personas a quienes nombren Notificadores, reúnan a los requisitos legales, las cualidades de actividad, competencia y honorabilidad.

Artículo 71. Debe hallarse la persona que obtenga ese empleo, bien impuesta de la manera de hacerse las notificaciones, embargos, requerimientos, desahucios, etcétera, según lo dispone el Código respectivo. A este efecto el Secretario del Tribunal podrá sujetarla a las pruebas de aptitud que crea convenientes.

Artículo 72. El Juez o la Sala serán responsables de las faltas que el Notificador nombrado por ellos cometa por ineptitud en el desempeño de su cargo.

Artículo 73. Son obligaciones de los Notificadores:

- a) Asistir los días hábiles a la Oficina y permanecer en ella durante las horas de trabajo, todo el tiempo que no sea necesario para las notificaciones que deban hacerse fuera de la Oficina;
- b) Recibir del Secretario todos los días, bajo conocimiento, las actuaciones que deban notificarse personalmente; y devolverlas al día siguiente, salvo cuando esto no fuere posible, porque la notificación deba hacerse por exhorto, por despacho, o por cualquier otro motivo que no dependa del Notificador;
- c) Extender los exhortos o despachos, procurar que se autoricen pronto, y remitirlos en seguida a su destino. Si no hubiere papel sellado se escribirán en papel común que se repondrá a costa del interesado, como lo prescribe la ley;
- d) Hacer las cédulas de notificación en los casos que corresponda;
- e) Hacer las notificaciones personales y practicar las diligencias de embargos, requerimientos, desahucios y otras propias de su carga, que decretaren los jueces, devolviendo el despacho con las actas debidamente autorizadas o con las razones respectivas si no se hubieren verificado.

Artículo 74. El conocimiento que firmen los Notificadores en el libro especial que para el efecto debe llevarse en cada Secretaría, contendrá:

1. La fecha y hora en que reciben el despacho para notificarlo;
2. La fecha y hora en que lo devuelven diligenciado.

La forma de llevar los libros de Notificadores se detallará en los reglamentos interiores de cada Tribunal.

CAPITULO VII De los Comisarios

Artículo 75. El Comisario cuidará los muebles y útiles, se encargará del aseo y hará los servicios necesarios del Tribunal, tanto de mensajero como de los demás que se ofrezcan, siempre con conocimiento del Secretario, debiendo guardar en todos los casos la reserva debida.

Artículo 76. Deberá concurrir todos los días hábiles media hora antes, por lo menos, de las horas en que principie el trabajo, para verificar el aseo de las Oficinas. La impuntualidad se castigará por el Jefe de la oficina con una multa que no exceda de UN QUETZAL y si se repitiere por tres veces, sin causa que la justifique, será motivo de remoción.

Artículo 77. En las Salas residentes fuera de la capital, los oficios del Comisario serán desempeñados por el Ecónomo Conserje.

Reglamento general de tribunales

Artículo 78. El Comisario acompañará a los Notificadores, como testigo de asistencia, cuando fuere necesario.

CAPITULO VIII De los Conserjes

Artículo 79. El cuidado y vigilancia de los edificios que ocupen los Tribunales y de los muebles y útiles de las Oficinas respectivas estarán directamente a cargo de los Conserjes, nombrados, los de esta capital, por el Presidente del Organismo Judicial; y los de las salas residentes fuera de la capital, por los Presidentes del Tribunal respectivo.

Artículo 80. Los Conserjes llevarán un inventario detallado de todos los muebles y útiles existentes en los edificios cuidarán de su conservación y buen estado de servicio y no permitirán que se extraiga de ellos, por ningún medio, sin orden escrita del Presidente.

Artículo 81. El aseo y limpieza de los edificios deberá hacerse todos los días, antes de la hora en que comiencen las labores de las Oficinas radicadas en ellos.

Artículo 82. Los Jefes de las Oficinas radicadas en los edificios de la capital presentarán al Presidente del Organismo Judicial cualquier queja que hubiere respecto a los Servicios encomendados a los Conserjes.

Artículo 83. Las obligaciones de los demás empleados subalternos se especificarán en los Reglamentos Interiores.

TITULO VI Dependencias de la Presidencia del Organismo Judicial CAPITULO I Del Archivo General de Protocolos de Notarios

Artículo 84. En el edificio de la Corte Suprema de Justicia, o en el que designe el Presidente del Organismo Judicial, siempre que reúna las condiciones de seguridad necesarias, se conservará el Archivo General de Protocolos de los Notarios que se encuentren en algunos de los casos que enseguida se mencionan:

- a) Fallecidos;
- b) Siendo puestos que les inhabiliten para el ejercicio de su profesión;
- c) Ausentes de la República;
- d) Con auto de prisión;
- e) Declarados en estado de interdicción;
- f) Los que voluntariamente depositen sus protocolos.

Artículo 85. También se conservarán en dicho Archivo:

- 1) Los registros de legalizaciones de firmas de los Notarios que se encuentren en alguno de los casos anteriores,
- 2) Los testimonios de los índices anuales de los protocolos y del Registro de Auténtica que deben remitir los Notarios;
- 3) Los avisos de legalizaciones de firmas que deben dar los notarios;
- 4) Los registros de mandatos y compañías;
- 5) Las copias simples de todos los actos o contratos notariales; las cuales deberán coleccionarse como protocolos para ser empastados en los dos primeros meses de cada año;
- 6) Los sellos de los Notarios fallecidos.

Artículo 86. El Archivo es público; el Archivero deberá permitir, sin cobro alguno, a toda persona que lo solicite, la vista dentro del local del Archivo, de cualquier escritura o documento que en el mismo se encuentren y que tome los datos y notas que necesite; pero si se tratare de testamentos de personas no fallecidas, sólo podrán ser exhibidos a los otorgantes, comprobada su identidad, y al Notario autorizante.

Reglamento general de tribunales

Artículo 87. Por ningún motivo se extraerá protocolo alguno del Archivo, a no ser que sean recogidos por los Notarios que hubieren autorizado sus escrituras, y para ello con previa autorización escrita de la Presidente del Organismo Judicial.

Artículo 88. Las autorizaciones a que se refiere el artículo anterior, deberán copiarse en el libro de salida, formándose un legajo que permita su mejor conservación y fácil búsqueda de datos.

Artículo 89. Corresponde al Archivero:

- 1) Llevar los libros de entrada y salida en los que anotará los protocolos, por orden alfabético;
- 2) Llevar los libros correspondientes al registro de mandatos y compañías;⁷
- 3) Cuidar de la conservación de los protocolos y documentos depositados en el Archivo, siendo responsable si por su culpa sufrieren deterioro, dando parte inmediatamente de cualquier peligro que amenazare la buena conservación de los libros y documentos.

Artículo 90. Si el Archivero fuere el mismo Secretario de la Corte Suprema, se designará a uno de los Oficiales para que atienda personalmente el Archivo.⁸

CAPITULO II Del Archivo General de Tribunales

Artículo 91. El Presidente dictará respecto de esta Oficina las medidas que estime convenientes para su conservación organización y buen funcionamiento, la cual estará a cargo de un empleado, que se denominará Archivero General de Tribunales.

Artículo 92. Se depositarán en el Archivo:

- 1) Los expedientes concluidos del orden civil y criminal;
- 2) Cualesquiera otros documentos que, conforme a la ley, deban conservarse en dicha Oficina.

Artículo 93. Habrá en el Archivo un departamento para el Ramo Civil y otro para el Ramo Penal, conteniendo ambas las separaciones que sean necesarias.

Artículo 94. Los Tribunales remitirán al Archivo los expedientes respectivos. Para su resguardo llevarán un libro en el cual harán constar, en forma de inventario, los expedientes que contenga cada remisión y al pie de este inventario pondrá el Jefe del Archivo su recibo correspondiente.

Artículo 95. Los expedientes y documentos entregados al Archivo, serán anotados en un libro general de entradas y en los libros de inventarios que deberán llevarse por orden alfabético asentándose en ellos los datos necesarios para facilitar la búsqueda de cualquier expediente o documentos archivados; se les marcará con el sello de la Oficina y arreglados convenientemente para que no sufran deterioros, se clasificarán según el departamento a que correspondan, y se depositarán en la sección respectiva.

Artículo 96. Por ningún concepto se extraerá expediente alguno del Archivo, a no ser por orden escrita de la autoridad que lo haya remitido a la Oficina, de quien legalmente los substituya, o de cualquier otro competente, insertando en el oficio respectivo la determinación que motiva el pedimento. La orden se colocará en el lugar que ocupe el expediente solicitado, y el conocimiento de salida de éste será suscrito por persona legalmente autorizada que lo reciba.

Artículo 97. El Jefe del Archivo puede expedir mediante decreto de la Presidencia, copia autorizada de los documentos o expedientes que están depositados en dicha oficina.

Artículo 98. El Archivero estará obligado:

- a) A permanecer en el Archivo todos los días hábiles, durante las horas reglamentarias;
- b) A mantener en perfecto orden y en su respectivo lugar, todos los juicios, expedientes, libros y documentos;

⁷ Es el Departamento Monetario y Bancario.

⁸ Véase Título XI Código de Notariado, Decreto Número 314 del Congreso.

Reglamento general de tribunales

- c) A formar inventario alfabético de los expedientes en tantos libros cuantos fueren necesarios, para su debida separación;
- d) A prestar inmediata atención a cualquier persona que acudiere a su oficina, facilitándole personalmente el expediente que solicitare o dándole los datos que pidiere.

CAPITULO III De la Tesorería de los Fondos de Justicia PARRAFO I Disposiciones Generales

Artículo 99. La Tesorería de Fondos de Justicia es una dependencia inmediata de la Presidencia del Organismo Judicial y funciona con sujeción a los Preceptos de este Reglamento.

Artículo 100. Estará a cargo del Tesorero de Fondos de Justicia, quién deberá tener especiales conocimientos de contabilidad. Su nombramiento y el de los demás empleados que sean necesarios, se hará por el Presidente, debiendo constar en el papel sellado que corresponde.

Artículo 101. El Tesorero, antes de entrar al desempeño de su cargo, deberá caucionar su responsabilidad ante el Presidente del Organismo Judicial, en la misma forma que prescribe la ley para los que manejan fondos públicos.

Artículo 102. Las cuentas de la Tesorería deberán constar en cinco libros principales: Diario, Mayor, Inventario, Balances y Caja y en los auxiliares que sean necesarios.

Artículo 103. Los libros principales deberán estar empastados, foliados y autorizados por el Presidente del Organismo Judicial por medio de una razón que se consignará en la primera hoja de cada libro, y por la Dirección General de Cuentas: los libros auxiliares serán autorizados solamente por el Presidente.

Artículo 104. Los fondos de la Tesorería son de dos clases:

- 1) Fondos, propios, o sean las cantidades que ingresan a la Tesorería y que, en virtud de lo dispuesto por la ley, pasan a ser del organismo Judicial;
- 2) Fondos ajenos, o sean los que ingresan a la Tesorería en calidad de depósito.

Artículo 105. Las cuentas de fondos propios se denominarán: Ingresos Extraordinarios, Gastos Generales, Conmutas, Multas por recusaciones, Conmutas por libertad condicional, Multas no especificadas y las demás que se hagan indispensables.

Artículo 106. Las cuentas de Fondos ajenos se titularán: Depósitos, por causas, Cauciones, Consignaciones y todas las que sean necesarias.

Artículo 107. Se llevará, además, un libro especial de registro, fuera de la contabilidad, que se denominará de "Depósitos Especiales", para los objetos sin valor determinado o monedas extranjeras, que ingresen de orden judicial solamente para su guarda.

Artículo 108. El Tesorero, para recibir cualquier cantidad de dinero u objeto, necesita orden de remisión de autoridad competente.

Artículo 109. Para devolver los fondos ajenos necesita, asimismo, orden escrita de la misma autoridad que la hubiere remitido o del Tribunal a donde hubiese pasado el asunto, de conformidad con la ley.

Artículo 110. En ningún caso podrá tomarse de los fondos ajenos para hacer pagos por cuenta de fondos propios.

Artículo 111. Los pagos de Fondos Propios los hará el Tesorero previo el "Páguese" de la Presidencia y registro de la Secretaría y cada fin de mes remitirá el detalle de los pagos efectuados con ese requisito para que, por medio de un acuerdo, sean legalizados.

Artículo 112. El Tesorero no podrá aceptar en pago cheques, pagarés, ni documentos de ninguna clase, siendo responsable en caso contrario.

Artículo 113. Por toda suma de dinero recibida, el Tesorero deberá entregar el recibo correspondiente al enterante. Para este efecto, se llevarán talonarios de recibos, por duplicado los cuales serán remitidos para su

Reglamento general de tribunales

autorización y registro antes de ponerlos en uso, a la Dirección General de Cuentas. Si procediere de otro modo, el Tesorero será responsable conforme a la ley.

Artículo 114. Se abrirá una cuenta en el Banco Central debiendo los cheques que para el retiro de fondos se extiendan ser firmados por el Presidente y Tesorero.

Artículo 115. El Tesorero deberá hacer cada fin de mes Balance de comprobación de Sumas y Saldos, y cada fin de año Balance General.

Artículo 116. El Tesorero remitirá, mensualmente al Presidente, un cuadro del estado de las cuentas el día último de cada mes, sacado del Balance de Saldos.

PÁRRAFO II Nomenclatura de Cuentas

Artículo 117. Las cuentas de Fondos propios son las que siguen:

- 1) Ingresos extraordinarios. Fondos que ingresan de orden de un Tribunal, sin estar comprendidos en ningún otro ingreso determinado;
- 2) Gastos Generales. Las erogaciones que hace la Tesorería con las formalidades que prescribe este Reglamento.
- 3) Conmutas. Son las cantidades que pagan los reos para obtener su libertad, cuando el Tribunal sentenciador ha declarado conmutable la pena en todo o en parte; y no pasan de tres quetzales diarios;
- 4) Multas por papel. Son las impuestas a los litigantes que deben suministrar el papel sellado en un juicio y no lo verificaren; multa es de diez centavos de quetzal por cada hoja, aparte de la reposición del papel y la que corresponde al Fisco;
- 5) Multas por casaciones. Son las cantidades en efectivo que pagan los litigantes, que habiendo interpuesto recurso de casación en asunto civil es desestimado, multa que el Tribunal impone entre veinticinco a trescientos quetzales según la importancia del asunto;
- 6) Caucciones hechas efectivas. Las cantidades que, depositadas por los reos o sus fiadores para lograr su excarcelación provisional, quedan a favor de los Fondos de Justicia por resolución del Juez de la causa, en los casos que la ley determina;
- 7) Multas por recusaciones. Son las multas entre veinte y treinta quetzales, impuestas por el Tribunal respectivo al litigante que, habiendo recusado a un funcionario judicial, le hubiere sido desestimada la recusación;
- 8) Conmutas por libertad condicional. Las cantidades que enteran los reos, cuando se les concede libertad condicional, le cual es declarada por la Corte Suprema, y varían entre diez centavos y tres quetzales diarios. Estos fondos están destinados exclusivamente al mejoramiento de las cárceles;
9. Multas no especificadas. Las impuestas a los Jueces Menores y a los registradores por los Jueces de 1a. Instancia; las impuestas a los Notarios por defectos encontrados en sus protocolos; las impuestas a los litigantes y Abogados por presentar escritos injuriosos e irrespetuosos, y en general, todas las demás no comprendidas en las multas determinadas;
- 9) Cuotas de Notarios. Dos quetzales que deberá pagar cada Notario antes de abrir su protocolo;⁹
- 10) Archivo General de Protocolos. Cincuenta por ciento de los honorarios que percibe el Archivo General de Protocolos por los testimonios de escrituras que extienda;

Artículo 118. Las cuentas de Fondos ajenos se forman de la manera siguiente:

- 1) Depósitos por causas. Con los valores que remiten los Jueces, procedentes de comisos, o recogidos a las víctimas;
- 2) Caucciones. Con las cantidades que depositan los reos o sus fiadores, para obtener su excarcelación provisional;

⁹ Véase el artículo 11 del Código de Notariado, Decreto No. 314 del Congreso.

Reglamento general de tribunales

- 3) Consignaciones. Con las cantidades que las personas deudoras depositan ante Juez competente y que éste remite a la Tesorería a su orden y a favor de tercera persona.

PARRAFO II Corte de Caja

Artículo 119. El Corte de Caja se practicará por uno de los Fiscales de las Salas de Apelaciones residentes en esta capital, designado por la Corte Suprema.

Artículo 120. Los Cortes de Caja se harán cada mes, el día que el Presidente del Organismo Judicial lo estime conveniente.

Artículo 121. El Fiscal comprobará si el saldo está correcto numéricamente en el libro y si éste concuerda con el existente en Caja.

Artículo 122. Comprobado que el saldo arrojado por la Caja está exacto numéricamente, podrá examinar los asientos en los libros y los comprobantes para demostrar la exactitud de las cuentas.

Artículo 123. Para estos Cortes de Caja se levantará una acta que deberán suscribir el Fiscal y el Tesorero y de la cual deberá el primero remitir copia a la Presidencia. El Fiscal firmará la última partida del libro de Caja, haciendo constar que el saldo lo encontró conforme, y la fecha del Corte.

Artículo 124. Si el saldo de Caja no está representado solamente en efectivo, sino en documentos pendientes de descargo, el Fiscal los examinará uno por uno, para cerciorarse de que se encuentran con todas las formalidades legales; las sumas que éstos arrojen, agregadas a la existencia en efectivo, comprobarán si el total está de acuerdo con el saldo que acuse el libro de Caja.

Artículo 125. Todos los documentos de cargo deberán encontrarse registrados por la Secretaría y con el "Páguese" del Presidente, debiendo ser rechazados los que carezcan de estas formalidades.

Artículo 126. Si el documento no estuviere con las debidas autorizaciones, el Fiscal ordenara al Tesorero que lo legalice, fijándole para el efecto, un término improrrogable de ocho días.

Artículo 127. Vencido el término, si la legalización no se hubiere verificado; o si faltare dinero al verificar el Corte el Fiscal dará cuenta inmediatamente al Presidente para que el Tesorero quede suspenso de su empleo; y se inicie la acción que corresponde.

Artículo 128. En los casos del artículo anterior y mientras se haga nueva designación, Secretario se hará cargo de la Tesorería.

PARRAFO IV Revisión de Cuentas

Artículo 129. La revisión de cuentas, como lo establece la Ley Constitutiva del Organismo Judicial, debe hacerse por el Tribunal de Cuentas, mensualmente.

Artículo 130. El Presidente del Tribunal de Cuentas designará un Contador para que verifique la revisión, comunicando el nombramiento al Presidente del Organismo Judicial.

Artículo 131. El contador nombrado se constituirá en la Tesorería de Fondos de Justicia y comprobando su nombramiento practicará la revisión, entregándosela para el efecto los libros, comprobantes y demás documentos que la operación requiera.

Artículo 132. Las cuentas se hallaren arregladas y conformes, el Presidente del Organismo Judicial, procederá a fenecerlas la ley prescribe, en vista del informe que de el glosador del Tribunal provisionalmente, y definitivamente si fuere anual en la forma que de Cuentas

Artículo 133. Si la cuenta no estuviere arreglada el Contador hará las observaciones que fueren procedentes, explicando separadamente, en un documento que se denominará pliego de reparos, los defectos: que notare en cada partida.

Artículo 134. Formalizado el pliego de reparos, se enviará una copia al Presidente del Organismo Judicial y otra al Tesorero, señalándole término a este para que conteste los reparos.

Reglamento general de tribunales

Artículo 135. La contestación al pliego de reparos los hará el Tesorero al Presidente del Organismo Judicial quien procederá en vista de las razones aducidas y documentos que se acompañen a resolver desvaneciendo o confirmando los reparos hechos por el Contador de Glosa.

Artículo 136. El Tesorero podrá pedir antes de resolver la práctica de las diligencias que estime convenientes para el esclarecimiento de los hechos.

Artículo 137. Por oscuridad o deficiencia de la resolución podrá interponerse, dentro de veinticuatro horas de notificada aclaración y ampliación, que serán resueltas por el mismo Presidente del Organismo Judicial.

Artículo 138. El Presidente enviará copia al Tribunal de Cuentas para su conocimiento, de las resoluciones que dicte, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 136 y 139 de este Reglamento.

Artículo 139. Los finiquitos de cuentas de la Tesorería los expedirá el Presidente del Organismo Judicial.

CAPITULO IV Del Departamento de Estadística

Artículo 140. El Departamento de Estadística Judicial, tendrá un Jefe, que será por ahora, el Oficial Mayor de la Corte Suprema y el número de Oficiales que sean necesarios.

Artículo 141. El Secretario de la Corte Suprema será el órgano de comunicación con los Tribunales en los asuntos relacionados con la Estadística.

Artículo 142. En un plazo no mayor de quince días, a contar de la fecha en que se reciban las tarjetas de identificación que envíen éstos Tribunales, deberán tener formados sus dactilogramas y estar éstos y dichas tarjetas, colocadas en los archivos especiales que para ese objeto se encuentran en la Oficina.

Artículo 143. En archivo independiente del de la secretaría de la Corte Suprema, se guardarán los libros y demás documentos que merezcan custodia especial, el cual estará bajo la responsabilidad del Oficial que para tal efecto se designe en el Reglamento Interior.

Artículo 144. En los primeros diez días de cada-mes, se formarán los cuadros que contengan, del mes anterior, los datos siguientes:

- a) Autos de prisión motivados en la República, con expresión del Tribunal y delitos;
- b) Número de resoluciones dictadas por la Corte Suprema, y Tribunales de 1a. y 2a. Instancia;
- c) Número de las ponencias que hubieren hecho cada uno de los Magistrados que integran las Salas de la Corte de Apelaciones con designación del nombre de ponente; y
- d) Funcionarios y empleados del Organismo Judicial;

Artículo 145. El quince de enero de cada año se formará un cuadro de comparación de-autos de prisión motivados en los últimos dos años anteriores.

Artículo 146. La Oficina suministrará a los Tribunales los formularios, tarjetas y demás efectos que estime conveniente para la mejor realización de su objetivo.

Artículo 147. La oficina llevará, además, el Registro de Pasantes, en la forma que se expresa en el Título IX de este Reglamento.

CAPITULO V De la Biblioteca

Artículo 148. La Biblioteca del Organismo Judicial deberá ocupar un departamento especial en el edificio en que resida la corte Suprema.

Artículo 149. La Biblioteca estará al servicio público pero de preferencia al de la Corte Suprema, Salas de Apelaciones y Juzgados.

Artículo 150. La Biblioteca estará abierta todos los días hábiles, de las ocho a las doce y de las catorce a las dieciocho horas.

Artículo 151. Solamente a los Magistrados y Jueces les será permitido extraer de la Biblioteca algún libro o documento, bajo, recibo firmado y por un término que no exceda de diez días.

Reglamento general de tribunales

Artículo 152. El servicio de la Biblioteca estará a cargo de un bibliotecario, a quien corresponde:

- 1) Formar un inventario alfabético, por nombres de autores de todos los libros y documentos de la Biblioteca y un inventario general de muebles y útiles del servicio de la misma;
- 2) Ordenar las obras de la Biblioteca y formar un catálogo clasificado de ellas, entregando copia de él al Presidente y al Director de la "Gaceta de los Tribunales" para su publicación;
- 3) Formar cada semestre, listas de las obras por empastar y entregárselas al Secretario de la Corte Suprema, con presupuesto del costo de encuadernación;
- 4) Conservar en buen estado los libros y documentos así como los muebles y útiles, dando cuenta al Presidente del Organismo Judicial de los desperfectos que sufran; y,
- 5) Llevar una estadística de asistencia de lectores.

CAPITULO VI De la "Gaceta de los Tribunales"

Artículo 153. La "Gaceta de los Tribunales" fundada por acuerdo gubernativo de 22 de febrero de 1881, es el periódico oficial del Organismo Judicial de la República, y continuará publicándose por lo menos, cada tres meses.

Artículo 154. En el periódico deberán publicarse;

- 1) Las sentencias ejecutoriadas en materia civil y criminal, dándose preferencia a las que decidan puntos de mayor interés jurídico;
- 2) Los trabajos que se remitan sobre cuestiones jurídicas siempre que se juzguen por la Presidencia, dignos de publicarse;
- 3) Las disposiciones de índole administrativa de la Presidencia y de la Corte Suprema de Justicia; acuerdos de erogaciones cuadros estadísticos, nóminas de Abogados y Notarios Públicos hábiles y cualquiera otras cuestiones de interés general que ordene el Presidente;
- 4) El voto de los Magistrados que no hubieren opinado como la mayoría; o las razones especiales que algún Magistrado de la mayoría haya tenido para formar sentencia y que no se hubiere expresado en ella;
- 5) Los fallos del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que remita aquel despacho;
- 6) Las inscripciones e inhabilitaciones de Abogados y Notarios.

Artículo 155. La suscripción del periódico será la que fije el Presidente del Organismo Judicial, quien podrá disponer que se reparta gratuitamente a los Tribunales de 1a. y 2a. Instancia y Abogados inscritos.

Artículo 156. La Gaceta procurará ensanchar el canje que sirve a publicaciones de carácter jurídico.

Artículo 157. Los gastos de publicación y porte se erogarán por medio de acuerdo de la Presidencia.

Artículo 158. El Director del periódico será el Oficial Mayor de la Corte Suprema de Justicia, quien dependerá inmediatamente del Presidente, a cuyo cargo deberá estar la mencionada publicación.

TITULO VII De los Abogados y Notarios

(Por medio del artículo 14 del Decreto Gubernativo Número 2374, fueron derogados los artículos 159 al 170 inclusive, de este Reglamento).

Artículo 171. (Art. 5. Dto. Gub. No. 2303). Para ser inscrito como Abogado de los Tribunales de la República en el Registro que se lleva en la Corte Suprema de Justicia, deberá presentarse el título de Abogado y Notario, expedido en debida forma por la Universidad Nacional, y cuando se trate de Abogados y Notarios incorporados, la certificación del acuerdo gubernativo de incorporación.

Artículo 172. (Art. 6. Dto. Gub. No. 2303). Verificada la inscripción, el Secretario lo comunicará a los Tribunales de Primera y Segunda Instancia de la República por medio de oficios que deberá firmar y sellar con su sello registrado el facultativo inscrito para darlo a conocer; el Presidente del Organismo Judicial le entregará el diploma que lo acredite como tal, extendido en la forma siguiente:

Reglamento general de tribunales

EL PRESIDENTE DEL ORGANISMO JUDICIAL

POR TANTO:

El licenciado don..... ha llenado los requisitos que establecen los Decretos Gubernativos Números 1568 y 2291.

POR CUANTO:

Declara hábil al expresado Licenciado don para el ejercicio de la profesión y manda que se le reconozca y tenga como Abogado de los Tribunales, de la República.
Dado en la ciudad de Guatemala, a los.....días del mes, de de mil novecientos

(f).....
Presidente.

(f).....
Secretario.

Artículo 173. El Registro de Abogados de los Tribunales se llevará en un libro especial, del cual se destinará una página para cada inscripción y deberá contener, con las separaciones debidas los datos que signen: Número de orden, nombres y apellidos que usa el Abogado inscrito, firma del Abogado y sello que usará en el ejercicio de su profesión En esta página se harán constar las inhabilitaciones; cargos desempeñados y motivo de su separación.

Artículo 174. El Oficial encargado de este libro hará las anotaciones relativas a suspensión y rehabilitación, inmediatamente que le sea ordenado por el Secretario, en virtud de comunicación que sobre el particular reciba de autoridad competente.

Artículo 175. Si se tratare de inhabilitación por auto de prisión o sentencia, el Secretario lo comunicará en el acto a los Tribunales para los efectos consiguientes. E la misma forma procederá al recibirse la orden de rehabilitación.

Artículo 176. Los Abogados inscritos gozarán en los Tribunales de todas las consideraciones que les son debidas como colaboradores de la acción de la justicia, pero deberán ser los primeros en el cumplimiento de las leyes y en el respeto a las autoridades.

Artículo 177. Para la defensa de los procesados en los Juzgados de lo Criminal de este departamento, la Secretaría de la Corte Suprema distribuirá en el mes de enero de cada año el total de Abogados inscritos en tres nóminas. Estas listas se formarán en orden inverso al de su inscripción y la Corte Suprema acordará la nómina de Abogados que quede bajo la jurisdicción de cada Tribunal.

Artículo 178. Los Jueces de lo Criminal se sujetarán a la lista anterior que les correspondiere para la designación de defensores de oficio, la que harán por riguroso turno, llevándose para el efecto un libro, que podrá ser consultado por los mismos Abogados, en caso de reclamo.

Artículo 179. Si mediare excusa legal del defensor nombrado, se designará al que le siga, destinándose al anterior para otra defensa.

Artículo 180. En el primer escrito o gestión que se haga ante los Tribunales, siendo obligatorio el auxilio del Abogado, se indicara el nombre del Abogado director y sólo con firma de éste se aceptarán los escritos. Si cambiare la persona del director, deberá manifestarse nuevamente.

Artículo 181. Todos los escritos dirigidos a los Tribunales respaldados con firma de Abogado, deberán llevar también el sello de éste, para que se les dé curso.

Artículo 182. (Suprimido por el artículo 14 del Decreto Gubernativo Número 2374).

Reglamento general de tribunales

Artículo 183. Puede sugerirse la tramitación en el mismo expediente que se forme para el examen de Abogado y en tal caso se completarán los registros que no sean comunes.

Artículo 184. *(Suprimido por el artículo 14 del Decreto Gubernativo Número 2374).*

Artículo 185. *(Suprimido por el artículo 14 del Decreto Gubernativo Número 2374).*

Artículo 186. La circular que se gire a los Tribunales y Oficinas que corresponda, para la autorización e inhabilitación podrá ser la misma que la de Abogado.

Artículo 187. El examen de Ahogado o Notario causará diez quetzales por derechos, que deberá pagar el sustentante en la Tesorería de Fondos de Justicia, quedando la mitad a favor de esta Oficina y la otra mitad para honorarios de los examinadores.

TITULO VIII De las Vistas Públicas

Artículo 188. Cuando haya de celebrarse vista pública en el Salón de la Corte Suprema de Justicia, el Secretario del mismo Tribunal ordenará y dirigirá el arreglo conveniente del local, designando los lugares para los Abogados contendientes sus Secretarios procesados y sus custodias; Taquígrafos, representantes de la prensa y particulares. Dispondrá, asimismo, que los porteros de la Corte Suprema se presenten uniformados a ocupar el puesto que se les señale para cualquier servicio que ocurriere.

Artículo 189. Si la vista fuere efectuada por otro Tribunal en la Sala de Vistas de la Corte Suprema de Justicia, deberá ponerse en conocimiento del Secretario un día antes, por lo menos. Para que ordene el arreglo y aseo del salón.

Artículo 190. El día y la hora señalados se constituirá el Tribunal en la Sala de Vistas Públicas, o en el lugar que esté destinado para el efecto.

Artículo 191. Las vistas de Primera Instancia de causas criminales se desarrollarán en la forma siguiente:

- 1) El Juez declarará abierta la audiencia y ordenará al Secretario que dé lectura a los principales pasajes de la causa ya señalados de antemano y los que las partes soliciten, siempre que, a juicio del Juez, fueren conducentes;
- 2) A continuación el Juez concederá la palabra al Abogado de la parte acusadora, quién ocupará la tribuna de la izquierda;
- 3) Se concederá, en seguida; la palabra al Abogado de la defensa quien ocupará la tribuna de la derecha;
- 4) Si solicitaren la palabra el acusador y el reo, se les otorgará después de sus respectivos abogados;
- 5) El Juez declarará terminada la audiencia y se levantará el acta respectiva, que se agregará a la causa

Artículo 192. Si fuere parte el Ministerio Público, se le concederá la palabra al Abogado que lo represente, antes del Abogado de la acusación o de la defensa, según el caso.

Artículo 193. La vista pública en Segunda Instancia se verificará dándose lectura, únicamente, a las partes principales de la sentencia, y enseguida se concederá La palabra, además de las personas mencionadas, al Fiscal y al Procurador de la Sala, en el orden que les corresponde.

Artículo 194. En casación se dará lectura al escrito de introducción del recurso, consideración y parte resolutive del fallo de Segunda Instancia, concediéndose la palabra; en primer lugar, al recurrente.

Artículo 195. La vista pública en juicios civiles se llevará a cabo en la misma forma expresada en los artículos anteriores.

Artículo 196. Es facultativo del Tribunal, acceder a la lectura de pasajes del juicio, cuando las partes lo soliciten.

Artículo 197. El funcionario que presida la vista no permitirá:

- a) Que el orador se aparte del asunto, con desviaciones innecesarias, que, sin relación con las cuestiones planteadas, prolonguen indebidamente el acto;
- b) Que el orador profiera frases o palabras injuriosas, irrespetuosas, o que, de cualquier modo, desprestigien a la autoridad contra quien vayan dirigidas;
- c) Que el orador dirija palabras injuriosas a alguna persona;

Reglamento general de tribunales

- d) Que los concurrentes interrumpan el discurso o el acto, de cualquier manera;
- e) Que el que esté haciendo uso de la palabra sea interrumpido por su contraparte o por cualquiera otra persona.

Artículo 198. En los casos de los incisos a), b) y c), el Presidente llamará la atención del orador para que guarde el espeto del caso; si no obediere le hará una segunda prevención y a la tercera vez le retirará el uso de la palabra.

Artículo 199. Si ocurrieren los casos de los incisos d) y e), el Presidente ordenará el silencio; si persistiere el desorden, hará salir de la sala a los provocadores; y si se promoviere algún desorden o escándalo colectivo cerrará, inmediatamente, la audiencia.

Artículo 200. Las versiones taquigráficas que fueren tomadas durante la audiencia serán traducidas por el taquígrafo y entregadas al Secretario, para que, queden agregadas al expediente.

TITULO IX

De los Pasantes de los Tribunales

Artículo 201. Los Tribunales de esta capital llevarán un libro que se llamará "Libro de Pasantes", en donde se hará la inscripción de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales que deban hacer su práctica judicial quienes para el efecto, presentarán la matrícula del año que cursen.

Artículo 202. El "Libro de Pasantes" lo llevará, personalmente, el Secretario, bajo su responsabilidad y hará la inscripción anotando los datos siguientes.

- a) Nombre y apellidos del pasante;
- b) Nacionalidad;
- c) Año de estudio que curse;
- d) Tribunales donde haya efectuarse su práctica anterior, conforme a certificación, que deberá presentar;
- e) Horas en que asistirá; y,
- f) Fecha de la inscripción.

Artículo 203. Para la inscripción, el Pasante deberá presentar constancia de haber hecho la pasantía inmediata anterior que corresponda.

Artículo 204. La pasantía deberá efectuarse de manera sucesiva y en el orden que establece la ley, que es el siguiente:

Juzgado de paz	6 meses
Tribunales Militares	6 meses
Juzgados de Primera Instancia de lo Criminal	12 meses
Juzgados de Primera Instancia de lo Civil	12 meses
Corten de Apelaciones	6 meses
Bufete de Abogados	6 meses
Total	48 meses

Artículo 205. A En de que los Pasantes logren mayor aprovechamiento y que sus trabajos reporten utilidad al servicio público se procurará en los Juzgados de Primera Instancia que la práctica sea gradual y ordenada, pudiendo dividirse en períodos de igual número de meses, formándose grupos de los Pasantes para los respectivos períodos y distribuyéndose las labores según el grado de aprovechamiento de cada sección, de conformidad con lo que dispone el Reglamento Interior.

Artículo 206. Los Pasantes están obligados a acatar todas las disposiciones de este Reglamento y del Reglamento Interior del Tribunal donde trabajaren; para cumplir con los trabajos de la Oficina que les ordenaren el Juez o el Secretario.

Reglamento general de tribunales

Artículo 201. Diariamente el Secretario anotará las faltas de asistencia, trasladando cada mes el total al "Libro de Pasantes". El Jefe, tomando en cuenta el informe del Secretario calificará la conducta, aplicación y aprovechamiento de cada uno y enviará un cuadro conteniendo estos datos del mes anterior a la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia, que, a su vez, lo enviará al Departamento de Estadística, para que tome nota en el Libro General de Pasantes.

Artículo 208. El Departamento de Estadística llevará un Libro General y los Auxiliares que sean necesarios, a fin de que cada grado de pasantía conste por separado en columnas separadas.

Artículo 209. El Libro General de Pasantes deberá contener:

- 1) Nombre y apellidos del Pasante;
- 2) Fecha de inscripción;
- 3) Tribunal que lo inscribió;
- 4) Número de faltas de asistencia cada mes;
- 5) Calificaciones mensuales en conducta, aplicación y aprovechamiento.

Artículo 210. Cuando se reciba aviso de haberse cancelado alguna inscripción, la Oficina procederá a verificar el cómputo de tiempo de fallas y calificaciones, anotándolo en columnas separadas.

Artículo 211. Respecto a los Pasantes de los bufetes, los Abogados, bajo cuya dirección se encuentren, están obligados a proceder en igual forma que los Tribunales, siéndoles aplicables las disposiciones de este Capítulo.

Artículo 212. Será cancelada la inscripción:

- 1) Si el Pasante inscrito completare veinte faltas de asistencia sin motivo debidamente justificado;
- 2) Si cometiere alguna falta grave en el Tribunal;
- 3) Si su conducta en general fuere censurable e inconveniente su permanencia en el Despacho, según decisión del Juez o de la Sala.

Artículo 213. La cancelación será acordada por el Juez o la Sala, debiendo comunicarse lo resuelto a la Secretaría de la Corte Suprema para los efectos consiguientes.

Artículo 214. Cada práctica terminada da derecho al Pasante para solicitar de la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia el certificado respectivo, el cual le servirá para su inscripción en el ejercicio siguiente y para comprobar su práctica en el expediente de su examen de Abogado de los Tribunales.

Artículo 215. No se tomará en cuenta como abono de tiempo el mes que hubiere sido calificado con notas malas.

Artículo 216. Los secretarios de los tribunales que por complacencia o por cualquiera otra causa, dieren datos inexactos de los Pasantes o de su conducta, aplicación y aprovechamiento, serán inmediatamente destituidos de sus puestos, sin perjuicio de la responsabilidad penal si procediere. La destitución deberá acordarla el Juez o la Sala en su caso, o la Corte Suprema si aquellos no la hicieren.

Artículo 217. Las pasantías en los Juzgados departamentales quedan sujetas a las disposiciones de este Capítulo.

Artículo 218. La pasantía en contravención a lo dispuesto en este Capítulo no será tomada en cuenta al hacer la liquidación de tiempo a que se refiere el artículo 165 de este Reglamento.

TITULO X Faltas Oficiales

Artículo 219. Para la aplicación de las facultades disciplinarias que la Ley Constitutiva del Organismo Judicial otorga a las Salas de la Corte de Apelaciones, se tendrán como faltas oficiales de los Jueces, entre otras, las siguientes:

- 1) Dictar resoluciones o trámites notoriamente innecesarios, que sólo tiendan a dilatar el procedimiento;
- 2) No presidir las audiencias de recepción de pruebas, las juntas y demás diligencias para las cuales la ley determine su intervención;
- 3) Señalar, sin motivo, para la celebración de las vistas o audiencia, un día lejano, cuando se pueda designar otro más próximo,

Reglamento general de tribunales

- 4) No concurrir, sin causa justificada, al desempeño de sus labores oficiales, durante las horas reglamentarias;
- 5) Dedicar a los empleados de su dependencia al desempeño de labores extrañas a las funciones oficiales que se demarcan en los Reglamentos Interiores.

Artículo 220. Comprobada la falta y atendiendo a su gravedad, la Sala, de oficio, impondrá al Juez la sanción que estime más equitativa al caso, de las contenidas en los incisos 1., 2. y 3. del artículo 16 de la Ley Constitutiva del Organismo Judicial.

Artículo 221. Los Jueces de Primera Instancia ejercerán sobre los Jueces Menores las mismas facultades disciplinarias en los casos expresados en el artículo anterior y además:

- 1) Cuando las primeras diligencias adolecieren de defectos o deficiencias que perjudiquen la investigación de los hechos;
- 2) Cuando no den cuenta dentro del término legal de las causas que se iniciaren en sus respectivos despachos;
- 3) Cuando estando de turno no acudieren inmediatamente que se les dé parte, al lugar de los sucesos, a instruir las primeras averiguaciones.

Artículo 222. Las faltas oficiales en que incurran los Jueces Menores serán castigadas por el Juez de Primera Instancia que corresponda, la primera vez con apercibimiento hecho por escrito, y la segunda y siguientes con multa que no exceda de diez quetzales.

Artículo 223. Además de los casos de incumplimiento, se tendrán como faltas oficiales las siguientes, por parte de los Secretarios.

- 1) No dar cuenta dentro del término de ley, con los escritos que presenten las partes;
- 2) No diligenciar las resoluciones judiciales dentro de veinticuatro horas siguientes a aquellas en que deban surtir sus efectos;
- 3) No dar cuenta al Juez o al Presidente de la Sala con las faltas u omisiones que personalmente hubiere notado en los empleados o que se le denuncien por el público, verbalmente o por escrito.
- 4) No entregar a los Notificadores el despacho que deban notificar dentro del término legal;
- 5) No hacer a las partes las notificaciones personales en los casos en que ellos deban hacerlo;
- 6) Disimular las faltas de asistencia de los empleados o permitir que lleguen tarde a la Oficina.

Artículo 224. Son faltas oficiales de los empleados en general:

- 1) No concurrir a las horas reglamentarias, con puntualidad, al desempeño de sus labores;
- 2) No atender oportunamente y con la debida corrección, a los, Abogados, litigantes y público en general;
- 3) No mostrar a las partes, sin causa justificada, inmediatamente que lo soliciten, los expedientes o asuntos que necesiten;
- 4) Ocuparse en atenciones que no les corresponda, de conformidad con el Reglamento Interior, con perjuicio del desempeño de sus propios trabajos;
- 5) No despachar, oportunamente, los oficios o evacuar las diligencias que sean de su resorte;
- 6) Las demás faltas que expresa el Reglamento Interior.

Artículo 225. (Artículo 1. del Decreto No. 384 del Presidente de la República, del 25 de agosto de 1955). Los jefes de los tribunales castigarán las faltas oficiales, la primera vez con amonestación por escrito y la segunda con la destitución del reincidente. Los jueces que no cumplan con imponer estas sanciones serán separados de sus cargos.¹⁰

Artículo 226. Si el hecho que motive la destitución de un empleado o Pasante diere lugar a responsabilidad criminal, se hará la consignación al Tribunal que corresponda.

Artículo 227. Los Jueces y Presidentes de sala están obligados a reprimir cualquier falta que cometieren los empleados subalternos, imponiendo las sanciones que correspondan; y si no lo hicieren serán responsables ante el Tribunal respectivo.

¹⁰ Véase artículo 57 del Reglamento Interior de las Oficinas de la Presidencia y Corte Suprema de Justicia.

Reglamento general de tribunales

TITULO XI Disposiciones Generales

Artículo 228. Los Tribunales y dependencias del Organismo Judicial trabajarán cuarenta y seis horas, fijándose las horas de labor, en los climas fríos y templados, de las ocho a las doce y de las catorce a las diez y ocho horas todos los días hábiles, exceptuando los sábados en que el despacho será de las ocho a las doce y de las catorce a las diez y seis horas.

En los climas cálidos, el despacho será de las siete a las doce y de las quince a las diez y ocho, exceptuándose, asimismo, los sábados que trabajarán de las siete a las trece horas. ¹¹

Artículo 229. La comunicación relativa a algún feriado extraordinario que el Gobierno acuerde la hará el Secretario de la Corte Suprema al Jefe del Tribunal, para que disponga el turno si fuere necesario.

Artículo 230. Durante las vacaciones oficiales, los empleados deberán efectuar el turno que se les designe en el acuerdo que sobre el particular dicten los Jefes de los Despachos.

Artículo 231. Los turnos los harán de preferencia los empleados estudiantes, para compensar en esta forma el tiempo que durante las horas hábiles, se les Concede para asistir a sus clases.

Artículo 232. Todos los funcionarios y empleados deberán asistir a sus oficinas; a las horas de labor. Los miembros de los Tribunales colegiados asistirán puntualmente a las sesiones o vistas privadas y públicas, no pudiendo desintegrarlos sin motivo legal, mientras no se termine.

Artículo 233. Para controlar la asistencia de los empleados a las horas de entrada, los Secretarios llevarán, personalmente un libro de asistencia en el que deberá firmar, teniéndose como ausente al que no hubiere firmado. El libro deberá ser retirado y guardado por los propios Secretarios, quince minutos después de la hora y se castigará cada ausencia con una multa equivalente a medio día de sueldo. Podrá usarse otro sistema de control que dé el mismo resultado.

Artículo 234. Los Tribunales organizarán su planta de empleados con personas- honorables, aptas y activas; cualquier nombramiento aislado lo harán por escalafón, a fin de que el que ingrese ocupe el último lugar dentro de la misma categoría.

Artículo 235. Para la provisión de plazas vacantes procurarán adoptar el sistema de oposición; y cuando se tratare de llenar la vacante de Secretario, serán preferidos, en iguales condiciones, los Oficiales en orden numérico.

Artículo 236. Ningún nombramiento podrá recaer en individual que sean parientes de alguno de los Magistrados, Juez, Secretario o empleados que sirvan en el mismo Tribunal. La denuncia que se hiciere a la Corte Suprema respecto a la contravención de este artículo, dará motivo a que se acuerde la destitución del nombrado y se aplique la sanción correspondiente al funcionario responsable.

Artículo 237. Ningún empleado podrá servir de experto, procurador ni apoderado judicial, bajo pena de destitución. Los Pasantes no servirán estos cargos en asuntos o procesos que se ventilen en los tribunales donde trabajan. ¹²

Artículo 238. Todo el personal está obligado a guardar secreto de los asuntos que se estuvieren tramitando en el Tribunal. La revelación de cualquier dato perjudicial a alguna de las partes o al Tribunal mismo será considerada como falta grave.

Artículo 239. La protesta de ley que deberán prestar los Magistrados y Fiscales antes de tomar posesión de sus cargos, deberán hacerla ante el Presidente del Organismo Judicial, pero este funcionario podrá delegar su

¹¹ Los días sábados se trabaja hasta las doce horas, en todos los climas.

¹² Artículo 211 de la Ley Constitutiva del Organismo Judicial.

Reglamento general de tribunales

representación en el Presidente de la Sala a que pertenezcan los nombrados para que la reciba, siempre que no les fuere posible trasladarse a la capital con ese objeto.

Artículo 240. La protesta la hará el funcionario electo recitando la fórmula contenida en el artículo 123 de la Ley Constitutiva del Organismo Judicial y levantándose enseguida el acta del caso.

Artículo 241. Los Jueces de Primera Instancia protestarán el cumplimiento de sus deberes ante el Presidente del Organismo Judicial o ante la Sala respectiva si aquel funcionario así lo dispusiere.

Artículo 242. Los Jueces Menores protestarán ante el Juez de Primera Instancia de su departamento; y los de la capital ante el Juez Disciplinario.

Artículo 243. Los empleados de cada Tribunal protestarán ante el Jefe del Despacho en que fueren a prestar sus servicios.

Artículo 244. Las llaves de las respectivas oficinas estarán bajo la responsabilidad del Jefe del Tribunal, quien podrá confiarlas al Conserje o Comisario, para que verifique el aseo y arreglo antes de la hora en que den principio las labores.

Artículo 245. *(Derogado por el acuerdo Gubernativo que literalmente dice)*

PALACIO NACIONAL: Guatemala, 30 de septiembre de 1955.

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

CONSIDERANDO:

Que el uso arbitrario e inmoderado que se ha venido haciendo por funcionarios y empleados públicos de divisas con los colores nacionales da margen a la comisión de abusos o simulación de autoridad, por lo que se hace necesario reglamentar, convenientemente, tal

POR TANTO,

ACUERDA:

Artículo 1. Se establece una divisa, que consistirá en un disco de oro, con los colores del pabellón Nacional en medio para que sirva de distintivo a los siguientes funcionarios:

- 1) Presidentes de los Organismos Legislativo, Ejecutivo y Judicial;
- 2) Ministros de Estado, Secretarios de la Presidencia de la República y Consejeros de Estado;
- 3) Magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
- 4) Subsecretarios de los Ministerios de Estado y de las Secretarías de la Presidencia de la República y Magistrados de la Corte de Apelaciones;
- 5) Procurador General de la Nación; Gobernadores departamentales y Jueces de 1a. Instancia.

Artículo 2. La divisa de los Presidentes de los Organismos Legislativo, Ejecutivo, y Judicial, será de veintitrés milímetros de diámetro ocupado totalmente, en forma vertical, por los colores del pabellón Nacional, llevando al centro el escudo de armas de la Nación, y, alrededor del, mismo, la designación de su alto cargo.

Artículo 3. La divisa de los diputados del Organismo Legislativo será de veintiún milímetros de diámetro, llevará al centro los colores del Pabellón Nacional, en forma horizontal y, alrededor, la designación de su cargo.

Artículo 4. La divisa de los Ministros de Estado, Secretarios de la Presidencia de la República y Consejeros de Estado, será de veintiún milímetros de diámetro, llevando al centro en forma de escudo triangular, los colores del Pabellón Nacional y, alrededor del mismo, la designación de su cargo.

La divisa de los Subsecretarios de los Ministerios de Estado y de las Secretarías de la Presidencia de la República y Procurador

General de la Nación, es igual a la que en el artículo siguiente se establece para los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

Reglamento general de tribunales

Artículo 5. La divisa de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, será de veintiún milímetros de diámetro llevando al centro, en forma de círculo los colores del Pabellón Nacional y, alrededor del mismo, la designación del cargo.

Con la diferencia del diámetro, que será de diecinueve milímetros, la divisa de los Magistrados de las Salas de Apelaciones, Jueces de Primera Instancia y Gobernadores departamentales es idéntica a la descrita en este artículo.

Artículo 6. Queda prohibido el uso de divisas, con los colores nacionales, iguales o similares a las que este acuerdo establece para los funcionarios no comprendidos en el artículo 1. del presente acuerdo, bajo pena de destituirlos de sus cargos en caso de contravención. Si los contraventores fueren empleados públicos o particulares, se les sancionará de conformidad con el Código Penal.

Artículo 7. Para los funcionarios no comprendidos en el artículo 1. de este acuerdo se establece una divisa consistente en un disco de oro, de dieciséis milímetros de diámetro, con expresión del cargo que desempeñen.

Artículo 8. Los jefes de dependencias velarán por el inmediato y efectivo cumplimiento de este acuerdo, que entrara en vigor el mismo día de su publicación en el Diario Oficial.

Artículo 9. Se derogan las disposiciones que se hayan emitido al respecto y que se opongan al contenido de los artículos que anteceden.

COMUNIQUESE.

CASTILLO ARMAS

MIGUEL ORTIZ PASSARELLI
El Ministro de Gobernación

Artículo 246. La disposición de las Oficinas en los respectivos edificios es exclusiva del Presidente del Organismo Judicial no pudiéndose llevar a cabo ninguna modificación sin su autorización escrita.

Artículo 247. El mismo funcionario es el único asimismo que puede acordar modificaciones o permutas, en los muebles o útiles y ordenar su traslado de una a otra Oficina cuando así lo juzgue conveniente.

Artículo 248. La Presidencia podrá ordenar que se compruebe la existencia de las cosas que consten en el inventario y el estado en que se encuentren; y tanto en el caso que falten o estén destruidas por culpa evidente del encargado de su custodia como si hubiere contravenido a lo dispuesto en los dos artículos anteriores, será responsable de su valor el Jefe del Despacho.¹³

Artículo 249. En las festividades nacionales o cuando el caso o requiera, en que deba izarse el Pabellón Nacional el Secretario de la Corte Suprema en esta capital y los Jefes de los Despachos en los lugares en donde el Organismo Judicial tenga edificios exclusivos darán, con la oportunidad debida, las órdenes convenientes para la izada de la Bandera en las horas reglamentarias.

Artículo 250. En las solemnidades, recepciones, toma de posesión etcétera, el Oficial Mayor de la Corte Suprema se encargará de preparar con la anticipación debida el ceremonial del caso sometiéndolo a la aprobación del, Presidente; organizará un servicio especial de protocolo y pondrá en ejecución el desarrollo de los puntos que hubieren sido acordados.

TITULO XII

Disposiciones Transitorias

Artículo 251. Mientras permanezca el Archivo de Tribunales en el mismo edificio de los Juzgados de Primera Instancia del ramo civil, de esta capital, estará bajo la inmediata dependencia del Juez Tercero de Primera

¹³ Véase Decreto Legislativo Número 647.

Reglamento general de tribunales

Instancia, quien cuidará de la puntual asistencia y demás obligaciones del Archivero, como empleado anexo a su Despacho.

Artículo 252. Entretanto que no se establezca en el Presupuesto la plaza de Taquígrafo, quedará al arbitrio de las partes en las vistas públicas hacer que se tomen los alegatos de los Abogados o litigantes, pagándolos por su cuenta.

Artículo 253. La practica de los Pasantes ya efectuada se comunicará a la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia, dentro del término de tres meses, para que hagan las anotaciones correspondientes en el Libro General de Pasantes: la que corresponda a períodos no iniciados se sujetará a lo dispuesto en este Reglamento, teniéndose como buena la que hubiere hecho anteriormente.

Artículo 254. La revisión de las cuentas de la Tesorería de Fondos de Justicia por el tiempo transcurrido desde el 1. de julio de 1933 hasta el 15 de septiembre próximo entrante, se hará sin las formalidades que para lo sucesivo prescribe este Reglamento; y el finiquito lo extenderá el Presidente del Organismo Judicial.

Artículo 255. El presente Decreto entrará en vigor el quince de septiembre próximo entrante así como los Reglamentos Interiores de los Tribunales.

Dado en la Casa del Gobierno: en Guatemala, a los treinta y un días del mes de agosto de mil novecientos treinta y cuatro.

Cúmplase y publíquese.

JORGE UBICO.

GMO. S. DE TEJADA.

El Secretario de Estado en el Despacho de Gobernación y Justicia,

Reglamento General de Tribunales

ACUERDO NÚMERO 36-2004

LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CONSIDERANDO:

Que el Reglamento General de Tribunales (Decreto Gubernativo número 1568, emitido el 31 de agosto de 1934) se ha desactualizado debido al tiempo transcurrido y a que la estructura e integración del Organismo Judicial ha variado como consecuencia de disposiciones constitucionales posteriores, y por la modificación y promulgación de nuevas leyes que regulan la función de los jueces y auxiliares judiciales.

CONSIDERANDO:

Que, además, es necesario unificar en un nuevo Reglamento General de Tribunales los preceptos aun vigentes del Decreto Gubernativo 1568, los que se encuentran dispersos en diferentes acuerdos emitidos por la Corte Suprema de Justicia, así como nuevas disposiciones, a fin de armonizar esta normativa con la nueva legislación vigente en la República y mejorar la función tribunalicia.

POR TANTO:

Con base en las disposiciones de los artículos 203, 205, 210, 211, 214, 217, 218, 220, 221 y 222 de la Constitución Política de la República de Guatemala, y en ejercicio de las atribuciones que le confiere el inciso f) del artículo 54 de la Ley del Organismo Judicial.

ACUERDA:

El siguiente

REGLAMENTO GENERAL DE TRIBUNALES

TÍTULO I **TRIBUNALES COLEGIADOS**

CAPÍTULO I **CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Y SUS CÁMARAS**

ARTÍCULO 1.- La Corte Suprema de Justicia y sus Cámaras tendrán las atribuciones administrativas y jurisdiccionales que le señala la Constitución Política de la República, la ley y este reglamento.

ARTÍCULO 2.- La Corte y sus cámaras se reunirán en sesiones ordinarias y extraordinarias, para la resolución de los asuntos que sean de su competencia.

ARTÍCULO 3.- La Corte en pleno se reunirá ordinariamente, por lo menos, una vez a la semana, el día y hora que sea convocada por el Presidente.

ARTÍCULO 4.- Las Cámaras de la Corte, se reunirán en sesión ordinaria, por lo menos una vez a la semana, a convocatoria de los Presidentes de las mismas.

ARTÍCULO 5.- Las sesiones extraordinarias serán convocadas por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia o por el Presidente de cada Cámara, cuando algún asunto urgente lo haga necesario.

ARTÍCULO 6.- A menos que la Corte o sus cámaras dispongan lo contrario, las sesiones se celebrarán privadamente en el salón destinado para el efecto.

ARTÍCULO 7.- Los magistrados darán cuenta con sus ponencias, en orden inverso al de su elección. El ponente leerá su proyecto, el cual será puesto a discusión por el Presidente, y una vez agotada la misma, pondrá a votación la resolución. Los Magistrados votarán en el mismo orden que se indica en este artículo.

ARTÍCULO 8.- Si alguno de los que forman el Tribunal expresare que necesita estudiar con más detenimiento el asunto que se va a fallar y pidiere que se suspenda la discusión, el Presidente lo acordará así y señalará un plazo que no exceda de tres días para que continúe el debate y se dicte oportunamente el fallo.

ARTÍCULO 9.- El ponente dará las explicaciones que le fueren pedidas, relativas al asunto que se discuta, y acatará el acuerdo de la mayoría en cuanto a la forma y redacción de la resolución.

ARTÍCULO 10.- Las resoluciones de la Corte en pleno y las de sus Cámaras serán firmadas por todos los magistrados que hayan integrado el tribunal, aunque

todas las regulaciones relativas al orden y disciplina de los tribunales. Los pasantes están obligados a guardar secreto o discreción respecto de los asuntos que se estuvieren tramitando en el tribunal a donde estuvieren asignados, siendo legalmente responsables por la revelación de cualquier dato perjudicial a alguna de las partes o interesados, o al tribunal mismo.

ARTÍCULO 69. Salvo disposiciones legales en lo que atañe a oficiales intérpretes o traductores de idiomas nacionales o extranjeros, ningún auxiliar judicial podrá servir de experto. Los pasantes no podrán servir los cargos de experto o procurador en asuntos o procesos que se ventilen en los tribunales donde estén asignados.

ARTÍCULO 70. Los auxiliares judiciales están obligados a poner en conocimiento del Presidente del Tribunal o del juez, las causas que en ellos concurren y que pudieran justificar su excusa en el proceso en estos casos se deberá tomar en cuenta, en lo aplicable, lo establecido en el título IV capítulo II de la Ley del Organismo Judicial.

ARTÍCULO 71. En los casos que sea necesaria la intervención de expertos, intérpretes o traductores de idiomas nacionales o extranjeros, será requisito que, previamente, sean protestados de conformidad con la ley.

ARTÍCULO 72. Los magistrados, jueces, auxiliares judiciales, y demás funcionarios o empleados del Organismo Judicial deben desempeñar sus funciones ajustándose a las Normas Éticas del Organismo Judicial, contenidas en el Acuerdo 7-2001 de la Corte Suprema de Justicia, las cuales son de observancia obligatoria en lo que fuere aplicable a cada uno de ellos.

ARTÍCULO 73. Los órganos establecidos en la Ley de la Carrera Judicial y Ley de Servicio Civil del Organismo Judicial deben, dentro de su respectiva competencia, velar por el estricto cumplimiento de las Normas Éticas del Organismo Judicial, y, en su caso, aplicar las sanciones pertinentes a los infractores, de conformidad con dichas leyes.

ARTÍCULO 74. Se derogan los acuerdos 277-69, 35-86, 46-86 y 14-92 de la Corte Suprema de Justicia; así como todas las disposiciones de carácter reglamentario que se opongan o estén comprendidas dentro de lo establecido en el presente acuerdo.

ARTÍCULO 75.— Este reglamento entrará en vigencia treinta días después de su publicación íntegra en el Diario de Centro América, Órgano Oficial de la República.

Dado en el Palacio de Justicia, en la Ciudad de Guatemala, a once días del mes de agosto del año dos mil cuatro.

COMUNÍQUESE

Lic. Alfonso Carrillo Castillo
PRESIDENTE DEL ORGANISMO JUDICIAL
Y DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

José Rolando Quesada Fernández
MAGISTRADO VOCAL PRIMERO
DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Otto Marroquín Guerra
MAGISTRADO VOCAL TERCERO
DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Amanda Ramírez Ortiz de Arias
MAGISTRADO VOCAL QUINTO
DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Carlos Alfonso Alvarez-Lobos Villatoro
MAGISTRADO VOCAL SEXTO
DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Hugo Leonel Maul Figueroa
MAGISTRADO VOCAL SÉPTIMO
DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Marieliz Lucero Sibley
MAGISTRADO VOCAL OCTAVO
DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Dr. Carlos Esteban Larios Ochaita
MAGISTRADO VOCAL IX
DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Edgardo Daniel Barreda Valenzuela
MAGISTRADO VOCAL DECIMO
DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Napoleón Gutiérrez Vargas
MAGISTRADO VOCAL UNDÉCIMO
DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Gerardo Alberto Hurtado Flores

**MAGISTRADO VOCAL DUODÉCIMO
DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA**

**Hilario Roderico Pineda Sánchez
MAGISTRADO VOCAL DECIMO TERCERO
DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA**

**Rolando Segura Grajeda
MAGISTRADO**

**Dr. Víctor Manuel Rivera Wöltke
SECRETARIO
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA**

DECRETO NÚMERO 48-99**EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA****CONSIDERANDO:**

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 210 de la Constitución Política de la República, las relaciones laborales de los funcionarios y empleados del Organismo Judicial se normarán por su Ley de Servicio Civil.

CONSIDERANDO:

Que además de las normas que garanticen el adecuado y eficiente desempeño de todo el personal al servicio del Organismo Judicial, es necesario dictar las disposiciones de carácter económico, social y laboral, que complementen las establecidas en la Ley de la Carrera Judicial.

CONSIDERANDO:

Que una de las grandes debilidades estructurales del Estado guatemalteco residen en el sistema de administración de justicia, que es uno de los servicios públicos esenciales; que su reforma y modernización deben dirigirse a impedir que éste genere y encubra un sistema de impunidad y corrupción y, al mismo tiempo, se revierta la ineficacia, se garantice el libre acceso a la justicia, la imparcialidad en su aplicación la independencia judicial, la autoridad ética, la probidad del sistema en su conjunto y su modernización.

CONSIDERANDO:

Que la consolidación de un verdadero Estado de Derecho, el fortalecimiento democrático de las instituciones y las necesidades del desarrollo requieren de un sistema de justicia que proporcione estabilidad, credibilidad y confianza en las instituciones y en las leyes.

POR TANTO:

En ejercicio de las atribuciones que el confiere el artículo 171 literal a) y con fundamento en los artículos 205, 209 y 210 todos de la Constitución Política de la República de Guatemala.

DECRETA:

La siguiente:

LEY DE SERVICIO CIVIL DEL ORGANISMO JUDICIAL**TÍTULO I****DISPOSICIONES GENERALES****CAPÍTULO I****PRECEPTOS FUNDAMENTALES**

ARTICULO 1. Objetivo y ámbito material de aplicación de la ley. La presente ley regula las relaciones laborales entre el Organismo Judicial y sus empleados y funcionarios. Es también aplicable a los jueces y magistrados en lo que corresponda, de conformidad con las disposiciones de la Ley de Carrera Judicial.

El servicio civil del Organismo Judicial es de carácter público y esencial y será ejercido por las autoridades, empleados y funcionarios con responsabilidad y transparencia.

ARTICULO 2. Creación del Sistema del Servicio Civil del Organismo Judicial. Se crea el sistema de carrera para el personal auxiliar y los trabajadores administrativos y técnicos del Organismo Judicial.

ARTICULO 3. Sistema de carreras. La carrera de auxiliar judicial, trabajador administrativo y técnico, requieren de sistema de selección, promoción, evaluación del desempeño, capacitación y régimen disciplinario.

ARTICULO 4. Sistema de oposición. Por sistema de oposición se entiende el procedimiento selectivo consistente en una serie de ejercicios en que los aspirantes a un puesto de trabajo muestran su respectiva competencia y superan las pruebas respectivas.

Se establece el sistema de oposición, mediante el cual toda persona tiene derecho a optar a los cargos a que se refiere esta ley. Los nombramientos deberán hacerse únicamente sobre la base de la preparación, experiencia, capacidad y honradez. A los cargos mencionados en el artículo 13 de esta ley no le es aplicable lo dispuesto en este artículo.

ARTICULO 5. Sistema de clasificación de puestos y salarios. Por sistema de clasificación de puestos y salarios se entiende el mecanismo que proporciona los criterios técnicos, procedimientos, parámetros, metodología e instrumentos generales para la clasificación de los puestos y salarios de los empleados judiciales, conforme a los artículos 14 y 40 de la presente ley.

Se establece el sistema de clasificación de puestos y salarios mediante el cual, todo trabajo realizado en igualdad de condiciones, eficiencia y antigüedad, debe ser remunerado en forma igualitaria.

ARTICULO 6. Categorías de empleados judiciales. Para los efectos de esta ley, los empleados judiciales se dividen en dos categorías:

- a) Auxiliares Judiciales.
- b) Trabajadores administrativos y técnicos.

ARTICULO 7. Auxiliares Judiciales. Son auxiliares judiciales:

- a) Secretarios de tribunales.
- b) Oficiales.
- c) Notificadores.
- d) Comisarios.

ARTICULO 8. Trabajadores administrativos y técnicos. Son trabajadores administrativos y técnicos quienes, sin estar contemplados en el artículo anterior, desempeñan labores de apoyo técnico o administrativo a la función judicial.

CAPITULO II

ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO CIVIL

ARTICULO 9. Organo superior. La administración superior del Servicio Civil corresponde con exclusividad al Presidente de la Corte Suprema de Justicia y del Organismo Judicial, quien lo ejercerá de conformidad con lo dispuesto en esta ley y en la Ley del Organismo Judicial.

ARTICULO 10. Administración. Para los efectos de la administración del servicio civil se crea el Sistema de Recursos Humanos que comprende la administración de personal, la clasificación de

puestos y la administración de los salarios y otros servicios complementarios.

ARTICULO 11. Regímenes de Servicio. Para los efectos de la aplicación de esta ley y atendiendo al procedimiento de selección, nombramiento, evaluación de desempeño, ascenso y remoción, se utilizará únicamente cualesquiera de los regímenes siguientes, según sean los puestos de que se trate:

- a) Puestos del régimen del servicio de oposición.
- b) Puestos del régimen del servicio de libre nombramiento y remoción.

ARTICULO 12. Régimen de oposición. El régimen de oposición se refiere al procedimiento para el nombramiento en puestos con funciones permanentes que aparezcan señalados como tales, específicamente, en el Manual de Clasificación y Evaluación de Puestos y Salarios del Organismo Judicial.

ARTICULO 13. Régimen de libre nombramiento y remoción. Se incluye dentro del régimen de libre nombramiento y remoción los puestos de apoyo logístico directo al Presidente del Organismo Judicial y Magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Los puestos deberán estar contemplados en el sistema de clasificación de puestos y salarios que regula el artículo 5 de esta ley. Estos servicios en ningún caso formarán parte de la carrera administrativa.

ARTICULO 14. Clasificación y evaluación de puestos. Todos los puestos del Organismo Judicial deben ordenarse en un Manual de Clasificación y Evaluación, que tome en cuenta la responsabilidad asignada al puesto y los requerimientos que éste exige del empleado, en cuanto a conocimiento preparación, experiencia, aptitud, rendimiento y capacidad. Cada puesto deberá asignarse a un grupo ocupacional y a una categoría salarial. El reglamento definirá los grupos ocupacionales.

ARTICULO 15. Derechos adquiridos. Los cambios de régimen y clasificación no afectan los derechos adquiridos, salvo los que expresamente se limiten en esta ley.

TITULO II

DE LAS CARRERAS

CAPITULO I

INGRESOS Y ASCENSOS AL ORGANISMO JUDICIAL

ARTICULO 16. Requisitos de ingreso al régimen de oposición. Toda persona tiene derecho de solicitar su ingreso al régimen de oposición. Para ingresar a la carrera de auxiliar judicial, trabajador administrativo y técnico se requiere estar en el pleno goce de sus derechos civiles y políticos y además:

- a) Tener condiciones de salud que le permita ejercitar idóneamente el cargo.
- b) Llenar los requisitos correspondientes al puesto, establecidos en el Manual de Clasificación y Evaluación de Puestos y Salarios.
- c) Ser de reconocida honorabilidad.
- d) Superar las pruebas, exámenes y concursos que establezca esta ley y su reglamento.
- e) Tener la calidad de elegible.
- f) Aprobar el programa de inducción que se establezca.

- g) No haber sido condenado en sentencia ejecutoriada dentro de los diez (10) años anteriores a su nombramiento por cualesquiera de los siguientes delitos: malversación, defraudación, contrabando, falsedad, falsificación, robo, estafa, prevaricato, cohecho, exacciones ilegales, violación de secretos.
- h) Cualquier otro requisito que se establezca en el reglamento de esta ley.

ARTICULO 17. Convocatoria. Para ocupar los puestos comprendidos en el servicio de oposición deberá seguirse una política de convocatoria abierta, que tenga por objeto reclutar mediante una divulgación adecuada a los mejores candidatos. El concurso de oposición comprenderá tantas plazas como vacantes existan en la fecha de la convocatoria y el número adicional que se considere razonable para cubrir las que puedan producirse mientras se realizan las pruebas.

ARTICULO 18. Oposición pública. A los puestos del Organismo Judicial, podrá optar toda persona que reúna los requisitos establecidos en esta ley. Para garantizar la idoneidad en la selección, deberán organizarse concursos de oposición pública y de credenciales. Las pruebas podrán ser:

- a) Orales.
- b) Escritas.
- c) Prácticas.

ARTICULO 19. Elegibles. Se considerarán elegibles únicamente a quienes llenen los requisitos de ingreso y superen las pruebas respectivas.

ARTICULO 20. Registro de elegibles. Con los candidatos que se consideren elegibles se formará un registro. Le corresponde al Sistema de Recursos Humanos, colocarlos en riguroso orden descendente de calificaciones.

Quando sea requerido por la autoridad nominadora, el Sistema de Recursos Humanos remitirá la lista, en el respectivo orden descendente, de los diez candidatos que obtuvieron las mejores calificaciones, cuando el número de candidatos así lo posibilite.

ARTICULO 21. Inducción al servicio. Se establece el programa de inducción obligatorio para el personal de primer ingreso.

ARTICULO 22. Sistema de capacitación. Se establece un sistema de capacitación y actualización para los empleados y funcionarios judiciales, el cual deberá ser permanente y obligatorio.

ARTICULO 23. Sistema de evaluación del desempeño. Se establece un sistema obligatorio de evaluación del desempeño de los empleados judiciales, que consiste en la calificación justa y objetiva de sus servicios con el objeto de determinar su eficiencia y rendimiento laboral. Esta evaluación se deberá realizar al menos una vez al año.

Los resultados de la evaluación se tomarán en cuenta para los ascensos, traslados, incrementos salariales, cursos de capacitación y remociones.

ARTICULO 24. Ascenso. Se considera ascenso el procedimiento por el cual el empleado pasa a desempeñar un puesto de grado o categoría superior de acuerdo al grupo ocupacional al que pertenece.

ARTICULO 25. Sistema de ascensos. Los empleados y funcionarios judiciales que manifiesten interés en un ascenso y llenen todos los requisitos del puesto deberán someterse a un concurso de oposición, el cual tomará en cuenta la formación y actualización académica, la capacidad técnica, la evaluación del desempeño, la experiencia y la antigüedad.

Quando el número de candidatos así lo posibilite, el Sistema de Recursos Humanos remitirá la

lista, en el respectivo orden descendente, de los diez candidatos que obtuvieron las mejores calificaciones, los que serán incluidos en su orden en la lista de elegibles que será propuesta al jefe inmediato de la plaza vacante, quien recomendará ante la autoridad nominadora a la persona que considere más idónea para el cargo.

CAPITULO II

AUTORIDAD NOMINADORA

ARTICULO 26. Autoridad nominadora. Para efectos de esta ley, la Corte Suprema de Justicia es la autoridad nominadora para los puestos contemplados en el sistema de Carrera de Auxiliar Judicial y el Presidente del Organismo Judicial lo es para los puestos contemplados en el sistema de Carrera de Trabajador Administrativo y Técnico.

ARTICULO 27. Atribuciones de la autoridad nominadora. Compete a la autoridad nominadora nombrar y remover a los empleados y funcionarios judiciales. Para tales efectos, la respectiva autoridad nominadora actuará por conducto de los órganos administrativos correspondientes.

ARTICULO 28. Prohibiciones de la autoridad nominadora. Además de las contenidas en otras leyes a la autoridad nominadora le está prohibido:

- a) Nombrar, dentro de los grados de ley, a los parientes del Presidente del Organismo Judicial o de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, en los puestos de Jefes de Unidades Administrativas.
- b) Nombrar o promover a un trabajador sin que existe la respectiva vacante o cargos disponible, conforme lo establezca el Manual de Clasificación y Evaluación de Puestos y Salarios, o bien cuando se trate de un nombramiento del servicio por oposición, cuando el aspirante no haya participado en el concurso de oposición o no haya resultado entre los diez mejores candidatos.
- c) Despedir sin justa causa justificada, y sin utilizar el debido proceso, a los empleados y funcionarios judiciales.
- d) Nombrar o permitir que trabajen cónyuges o parientes dentro de los grados de ley, en una misma unidad judicial o administrativa.

CAPITULO III

NOMBRAMIENTOS, ASCENSOS, TRASLADOS Y PERMUTAS

ARTICULO. 29. Clases de nombramiento. Se podrán emitir tres clases de nombramientos:

- a) Regular u ordinario.
- b) Provisional.
- c) Interino.

ARTICULO 30. Nombramiento regular u ordinario. Nombramiento regular u ordinario es el que acuerda la autoridad nominadora después de cumplir con los requisitos establecidos en esta ley, tomando en cuenta el régimen a que corresponda el puesto.

Si se tratare de un puesto del régimen de oposición, la autoridad nominadora deberá requerir al Sistema de Recursos Humanos, cuando el número de candidatos así lo posibilite y en el respectivo orden descendente, la lista de los diez candidatos que obtengan las mejores calificaciones, los que serán incluidos en la lista de elegibles que será propuesta al jefe inmediato de la plaza, quien recomendará ante la autoridad nominadora a la persona que considere más idónea para el cargo.

Si se tratare de un puesto comprendido en el régimen de libre nombramiento y remoción, deberán satisfacerse, como mínimo, los requisitos a que se refieren las literales a), b) y c) del artículo 16 de esta ley.

ARTICULO 31. Nombramiento provisional. Por inexistencia o insuficiencia de aspirantes elegibles en el registro respectivo o por urgente necesidad en el servicio, podrá emitirse un nombramiento provisional, el cual tendrá una duración máxima de seis meses.

La persona que se seleccione deberá satisfacer los requisitos a que se refieren las literales a), b) y c) del artículo 16 de esta ley.

ARTICULO 32. Nombramiento interino. Por ausencia temporal del titular, la autoridad nominadora podrá emitir un nombramiento con carácter interino. La persona que desempeñe el interinato podrá ser seleccionada entre el personal en servicio, lo que no constituirá ascenso; o bien, podrá ser seleccionada dentro del registro de elegibles. En ambos casos, el interinato no podrá ser mayor de seis meses.

Los períodos durante los cuales se ocupen cargos en forma interina no se computarán con fines de la Carrera Administrativa Judicial.

ARTICULO 33. Efecto del nombramiento. El nombramiento de los empleados y funcionarios judiciales surtirá efecto desde la toma de posesión del cargo, en cuya oportunidad deberá levantarse el acta de rigor.

ARTICULO 34. Traslado. Por traslado se entiende el acto por el cual, un empleado o funcionario pasa a desempeñar otro puesto de igual categoría y salario, de acuerdo al grupo ocupacional al que pertenece.

ARTICULO 35. Clases de traslado. El traslado procede por:

- a) Razones de conveniencia del servicio, calificadas mediante resolución motivada del Sistema de Recursos Humanos previa audiencia al empleado judicial y compensación económica de los gastos del traslado, si los hubiere.
- b) Solicitud del interesado, cuando tenga causa justificada y obtenga opinión favorable del Sistema de Recurso Humanos.

En ningún caso se considerará traslado la asignación y cumplimiento de comisiones específicas.

ARTICULO 36. Permuta. La permuta es el acto voluntario mediante el cual empleados o funcionarios que ocupan cargos de igual categoría y salario dentro del mismo grupo ocupacional intercambian sus respectivos puestos.

Para que la permuta surta efectos deberá ser aprobada por la autoridad nominadora, a solicitud de los interesados y con la anuencia de los jefes inmediatos, siempre que no afecte el buen funcionamiento del servicio.

TITULO III

DERECHOS, DEBERES Y PROHIBIONES

CAPITULO I

DERECHOS

ARTICULO 37. Derechos. Son derechos de los empleados y funcionarios del Organismo Judicial, además de los que establecen la Constitución política de la República, los convenios internacionales ratificados por Guatemala, y otras leyes ordinarias, los siguientes:

- a) A no ser removidos de sus cargos sino por las causas y en la forma

establecida en la Constitución Política y las leyes.

- b) Devengar un salario digno y justo de acuerdo a su puesto y categoría, que tienda a dignificar la función judicial y a mantener altos niveles de eficiencia en la misma, así como los demás beneficios y compensaciones de carácter económico y social que correspondan.
- c) Participar de los programas y actividades de bienestar social y beneficiarse de los mismos.
- d) Optar a becas de estudios superiores, recibir cursos de capacitación y perfeccionamiento en el desempeño de sus funciones.
- e) Participar en el sistema de oposición para ascender dentro de su carrera, optando a servicios de mayor categoría y salario.
- f) Conocer el resultado de las evaluaciones periódicas de su desempeño, orientadas a la mejora en su eficiencia y eficacia en el puesto.
- g) Disfrutar de un período anual de vacaciones, aguinaldo, descanso pre y post natal, período de lactancia, los asuetos que la ley establezca y otros que determine el reglamento.
- h) Obtener permisos y licencias en la forma establecida por esta ley y sus reglamentos.
- i) Asociarse libremente para cualesquiera fines legítimos.
- j) Impugnar las resoluciones en los casos de imposición de sanciones disciplinarias.
- k) Ser reinstalado en el puesto o recibir la indemnización correspondiente en caso de despido sin causa justificada.
- l) Recibir la pensión de jubilación que determine la ley.
- m) Los contenidos en el Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo.

CAPITULO II

DEBERES

ARTICULO 38. Deberes. Son deberes de los empleados y funcionarios del Organismo Judicial.

- a) Cumplir y desempeñar con eficiencia y eficacia las obligaciones inherentes a sus puestos.
- b) Cumplir con prontitud e imparcialidad los asuntos de su competencia.
- c) Actuar con responsabilidad y guardar absoluta reserva en los asuntos que por su naturaleza, o en virtud de leyes, reglamentos o instrucciones específicas, así lo requieran.
- d) Atender con respeto y cortesía al público en general, a los funcionarios judiciales, personal subalterno, compañeros de trabajo, litigantes, abogados y personas interesadas en los juicios y diligencias que se ventilen en el tribunal.
- e) Participar en los cursos de capacitación y actualización profesional que programe la autoridad administrativa.

- f) Observar estrictamente el horario de trabajo establecido.
- g) Enmarcar su conducta dentro de los cánones éticos y legales.
- h) Cumplir con los demás deberes que ésta y otras leyes le señalen, así como con los señalados en los reglamentos, circulares, acuerdos y demás instrucciones de la Corte Suprema de Justicia y del Organismo Judicial.

CAPITULO III

PROHIBICIONES

ARTICULO 39. Prohibiciones. Además de lo establecido en otras leyes y reglamentos queda prohibido a los empleados y funcionarios del Organismo Judicial:

- a) Realizar propaganda de índole política o religiosa durante la jornada de trabajo y en el lugar del mismo, u obligar o propiciar a que otros la hagan.
- b) Solicitar o recaudar directa o indirectamente contribuciones, suscripciones o cotizaciones de otros trabajadores, salvo las excepciones que establezca la ley.
- c) Desempeñar simultáneamente empleos o cargos públicos remunerados, ejercer cualquier otro empleo incompatible con su horario de trabajo, así como ocupar cargos directivos en entidades políticas.
- d) Dedicarse dentro de la jornada de trabajo a actividades ajenas al cargo que desempeñan.

TITULO IV

REGIMEN DE SALARIOS Y PRESTACIONES, JORNADAS Y DESCANSOS

CAPITULO I

REGIMEN DE SALARIOS Y PRESTACIONES

ARTICULO 40. Política salarial. Corresponde a la Presidencia del Organismo Judicial aprobar la política salarial con base en los estudios anuales y recomendaciones técnicas que oportunamente realice el Sistema de Recursos Humanos y de acuerdo a las posibilidades financieras del Organismo Judicial.

ARTICULO 41. Sistema de remuneración. El sistema de remuneración comprende los salarios, beneficios diferenciales y cualquier otra prestación de carácter pecuniario que reciban los empleados y funcionarios por sus servicios en el desempeño de sus cargos. El sistema que se establezca deberá tener escalas generales de salarios, con montos mínimos y máximos. Cada puesto deberá ser asignado a la categoría salarial correspondiente, según el sistema de clasificación y evaluación que se adopte.

ARTICULO 42. Dietas. Las retribuciones que se reciban por concepto de dietas no se consideran como salario. Sin embargo, es requisito indispensable que el trabajo así remunerado, se desempeñe en asuntos del Organismo Judicial de tal forma, que no interfiera con la jornada de trabajo del puesto respectivo.

ARTICULO 43. Protección del salario. Sobre los salarios no podrán efectuarse más descuentos o embargos que los autorizados por la ley.

ARTICULO 44. Forma de pago. Para los efectos del pago, los salarios están sujetos a las siguientes normas:

- a) El pago debe hacerse por períodos mensuales vencidos. En casos especiales, el Presidente del Organismo Judicial podrá acordar formas diferentes, de acuerdo a las necesidades y posibilidades del Organismo.
- b) Todo pago podrá hacerse en efectivo, por medio de cheque, depósito bancario o cualquier otro sistema que se establezca.
- c) Los pagos deberán hacerse al empleado o funcionario, su representante legal o persona debidamente autorizada.

ARTICULO 45. Fondo de Pensiones. El Organismo Judicial podrá considerar la constitución de un sistema de retiro o fondo de pensiones con la contribución de sus empleados y funcionarios, siempre y cuando las condiciones financieras del Organismo Judicial y la ley lo permita.

CAPITULO II

HORARIOS Y JORNADAS DE TRABAJO

ARTICULO 46. Horarios y jornadas. El Presidente del Organismo Judicial establecerá el horario y las jornadas ordinarias de trabajo de los Tribunales y demás dependencias, de acuerdo a las necesidades del servicio, las características de la región y las jornadas de trabajo que se determinen.

ARTICULO 47. Jornada extraordinaria. Las horas de trabajo efectivo realizado fuera de los límites señalados conforme esta ley, se consideran extraordinarias y están sujetas a las siguientes normas:

- a) Dan derecho al empleado a que se le retribuyan como tales.
- b) Los jueces, magistrados y jefes de dependencias, están obligados a justificar las razones que obliguen a trabajar en horas extraordinarias y de ser posible, distribuirán las labores para evitar el tiempo de servicio extraordinario.
- c) No se considera tiempo extraordinario, según calificación del jefe inmediato, el que se utilice en subsanar errores imputables al propio empleado, en reponer tiempo perdido o falta de actividad que le sean imputables.

El régimen de la jornada extraordinaria quedará establecido en el reglamento respectivo.

CAPITULO III

DESCANSOS

ARTICULO 48. Asuetos. Son días de asueto con goce de salario los que establezcan las leyes. El Presidente del Organismo Judicial podrá acordar días de descanso con goce de sueldo, por razones extraordinarias, tomando en cuenta las necesidades del servicio.

ARTICULO 49. Vacaciones. Los funcionarios y empleados judiciales deben gozar sin interrupciones de su período de vacaciones y sólo están obligados a dividirlos en dos partes como máximo, cuando se trate de labores de índole especial que no permitan una ausencia prolongada.

Las vacaciones no son acumulables de año en año con el objeto de disfrutar posteriormente de un período mayor.

ARTICULO 50. Fijación de vacaciones y turnos. Es facultad del Presidente del Organismo Judicial, por conducto del Sistema de Recursos Humanos, organizar los turnos para el goce del período vacacional de los funcionarios y empleados judiciales. A tal efecto, establecerán turnos durante las vacaciones y días de asueto remunerados para garantizar la continuidad de los servicios esenciales de justicia.

ARTICULO 51. Licencias. Se considera licencia todo permiso que se conceda al funcionario o empleado judicial para ausentarse temporalmente del puesto. El Sistema de Recursos Humanos proveerá el sustituto, que deberá estar debidamente calificado a manera de continuar con una adecuada prestación del servicio.

ARTICULO 52. Clasificación de licencias. Los empleados y funcionarios del Organismo Judicial tienen derecho a licencias con o sin goce de salario, de conformidad con las siguientes normas, las que se establezcan en el reglamento respectivo y las contenidas en otras leyes especiales:

- a) Licencias ordinarias con goce de salario, que se conceden:
 - i. Por enfermedad, maternidad o accidente;
 - ii. Para realizar estudios, recibir adiestramiento, seminarios, conferencias, hacer investigaciones o atender invitaciones, siempre que se relacionen con las funciones del puesto que se desempeña y que la actividad que se realice o en la cual se participe, sea de interés para el Organismo Judicial;
 - iii. Licencias por motivos de carácter familiar;
 - 1. Cinco días hábiles en caso de fallecimiento del padre, madre, cónyuge o conviviente e hijos del empleado.
 - 2. Tres días hábiles en caso del fallecimiento de un hermano del empleado.
 - 3. Ocho días hábiles en caso de matrimonio del empleado.
 - 4. Tres días hábiles en caso de alumbramiento de la esposa o conviviente del empleado.
 - 5. Tres días hábiles en caso de hospitalización por enfermedad grave del cónyuge o conviviente e hijos del empleado.
 - 6. Dos días hábiles en caso de hospitalización por enfermedad grave de los padres del empleado.
 - iv. Licencias por estudios:
 - 1. Por un mes para sustentar Examen Técnico Profesional Privado o Ejercicio Profesional Supervisado, por dos veces.
 - 2. Por dos días hábiles para sustentar Examen Público o de Graduación.
 - 3. Por el tiempo que dure la asistencia del empleado a becas en representación del Organismo Judicial.
- b) Licencias ordinarias, sin goce de salario;
- c) Licencias especiales, con o sin goce de salario.

Los funcionarios y empleados judiciales que gocen de tales licencias deben comprobar plenamente la causa o motivo que las originó. En todo caso, las licencias que se otorguen a los empleados y funcionarios no pueden exceder del plazo máximo que establece la Ley Orgánica del Presupuesto y su Reglamento.

ARTICULO 53. Autoridades que conceden las licencias. Las licencias de los funcionarios y empleados judiciales se conceden por conducto del sistema de Recursos Humanos. Por motivos especiales, debidamente justificados, el jefe inmediato podrá conceder licencias hasta por cinco días hábiles, debiendo informar inmediatamente a la autoridad que corresponda del Sistema de Recursos Humanos.

TITULO V

REGIMEN DISCIPLINARIO

CAPITULO I

FALTAS Y SANCIONES

ARTICULO 54. Faltas. Constituyen faltas las acciones u omisiones en que incurran los empleados y funcionarios judiciales previstas en esta ley y sancionadas como tales.

La responsabilidad disciplinaria es independiente de la responsabilidad penal y civil que se determine conforme a la legislación ordinaria.

ARTICULO 55. Clasificación de las faltas. Las faltas, según su gravedad, pueden ser:

- a) Leves,
- b) Graves, y
- c) Gravísimas.

ARTICULO 56. Faltas leves. Son faltas leves:

- a) La inobservancia del horario de trabajo sin causa justificada.
- b) La falta del respeto debido hacia los funcionarios judiciales, público en general, compañeros y subalternos en el desempeño del cargo, representantes de órganos auxiliares de la administración de justicia, miembros del Ministerio Público, del Instituto de la Defensa Pública Penal y Abogados.
- c) La falta de acatamiento de las disposiciones administrativas internas del Organismo Judicial.
- d) La negligencia en el cumplimiento de los deberes propios de su cargo, establecidos en esta ley.

ARTICULO 57. Faltas graves. Son faltas graves:

- a) Abandonar total o parcialmente las tareas propias del desempeño del cargo.
- b) Incurrir en retrasos y descuidos injustificados en la tramitación de los procesos.
- c) No guardar discreción debida en los asuntos que conoce por razón de su cargo.
- d) La conducta y los tratos manifiestamente discriminatorios en el ejercicio del cargo.
- e) La falta de acatamiento de las disposiciones contenidas en los reglamentos, acuerdos y resoluciones que dicte la Presidencia del Organismo

Judicial.

- f) Ocultar a las partes documentos o información de naturaleza pública.
- g) Ausencia injustificada a sus labores por un día.
- h) Asistir a sus labores en estado de ebriedad o bajo el efecto de estupefacientes o en cualquier otra condición anormal análoga.
- i) La tercera falta leve que se cometa dentro de un período de un año, cuando las dos primeras hayan sido sancionadas.

ARTICULO 58. Faltas gravísimas. Son faltas gravísimas:

- a) Solicitar o aceptar favores, préstamos, regalías o dádivas a las partes, a sus abogados o a sus procuradores.
- b) Desempeñar simultáneamente empleos o cargos públicos remunerados, ejercer cualquier otro empleo incompatible con su horario de trabajo y ejercer o desempeñar cargos directivos en entidades políticas.
- c) Interferir en el ejercicio de las funciones de los otros organismos del Estado, sus agentes o representantes o permitir la interferencia de cualquier organismo, institución o persona en el Organismo Judicial.
- d) Ocultar información que implique prohibición para el desempeño del cargo o abstenerse de informar una causal sobreviniente.
- e) Faltar injustificadamente al trabajo sin permiso de la autoridad correspondiente o sin causa justificada, durante dos días laborales completos y consecutivos o durante seis medios días laborales en un mismo mes calendario.
- f) Portar armas durante la jornada de trabajo y en el ejercicio de sus funciones salvo los casos especiales autorizados, por la autoridad administrativa del Organismo Judicial.
- g) Abandonar el trabajo en horas de labor sin causa justificada o sin licencia de la autoridad correspondiente.
- h) Cometer cualquier acto de coacción, especialmente aquellos de índole sexual o laboral.
- i) La tercera falta grave que se cometa dentro del lapso de un año, cuando las dos primeras hayan sido sancionadas.

ARTICULO 59. Sanciones. Las faltas cometidas por los empleados y funcionarios judiciales, se sancionarán en la forma siguiente:

- a) Falta leves: amonestación verbal o escrita.
- b) Faltas graves: suspensión hasta por 20 días, sin goce de salario.
- c) Faltas gravísimas: suspensión hasta por 45 días, sin goce de salario o destitución.

ARTICULO 60. Amonestación. La amonestación consiste en la llamada de atención, verbal o escrita que se hace al empleado o funcionario judicial por una autoridad superior. En cualesquiera de los dos casos, debe dejarse constancia en el registro personal respectivo.

ARTICULO 61. Suspensión. La suspensión sin goce de salario consiste en la separación temporal del empleado o funcionario judicial del ejercicio de su cargo. Podrá acordarse hasta por un máximo de tres meses en un año, debiendo quedar constancia en el registro personal respectivo. Procederá también en los casos en que el empleado o funcionario se encuentre privado de su libertad, durante el tiempo que ésta se mantenga. Cuando el empleado o funcionario recobre su libertad, será reinstalado en su puesto, si lo solicita, dentro de un término de dos días contado a partir de la fecha en que obtenga su libertad, siempre que el agraviado no fuese el Organismo Judicial.

ARTICULO 62. Destitución. La destitución consiste en la separación definitiva del empleado o funcionario judicial del cargo que desempeña.

ARTICULO 63. Prescripción. Las acciones y derechos provenientes de esta ley y su reglamento, prescriben en la siguiente forma:

- a) Las acciones disciplinarias que se pueden iniciar por faltas cometidas, prescriben en el plazo de tres meses a contar desde la comisión de la falta.
- b) La acción para iniciar el procedimiento de despido prescribe a los 30 días de que se tuvo conocimiento de la falta por la autoridad nominadora;
- c) El nombramiento o contratación de los funcionarios y empleados judiciales, prescriben en el término de 10 días desde el momento en que el empleado o funcionario debió tomar posesión del cargo y ésta no se realizó.
- d) En los demás casos de las acciones o derechos provenientes de esta ley, la prescripción es de tres meses.

ARTICULO 64. Interrupción de la prescripción. Los plazos establecidos en el artículo anterior se interrumpen por la presentación de demanda o gestión escrita ante autoridad competente.

CAPITULO II

PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO

ARTICULO 65. Sanciones disciplinarias. Las sanciones disciplinarias previstas en la presente ley serán impuestas por la unidad correspondiente del Sistema de Recursos Humanos del Organismo Judicial, salvo en el caso de la sanción de destitución, que deberá ser impuesta por la autoridad nominadora.

ARTICULO 66. Denuncia. Toda persona que tenga conocimiento de que un empleado o funcionario judicial, con ocasión de sus funciones o con motivo de ellas, ha cometido una falta, podrá denunciarlo por escrito o verbalmente, con expresión del hecho y de las circunstancias de que tuviere conocimiento.

La denuncia podrá plantearse ante la autoridad nominadora, su delegado o ante cualquier autoridad judicial. Estos últimos deberán remitir inmediatamente la denuncia al Sistema de Recursos Humanos. El proceso disciplinario se podrá iniciar de y tramitar de oficio en todas las etapas de éste.

ARTICULO 67. Partes. Las personas directamente perjudicadas por faltas disciplinarias cometidas por un empleado o funcionario judicial, tendrán la calidad de parte en el procedimiento disciplinario.

Todos los empleados o funcionarios judiciales tienen derecho a ser citados y oídos cuando sean objeto de denuncia y a ser notificados de las decisiones que tome la autoridad nominadora o su delegado.

ARTICULO 68. Trámite. Recibida la denuncia la autoridad nominadora por medio del Sistema de Recursos Humanos, decidirá si la admite o no para su trámite. Contra la resolución no admitiéndola a trámite, la parte agraviada podrá interponer, dentro del plazo de tres días siguientes

a su notificación, recurso de revisión.

Si le diere trámite, citará a las partes a una audiencia en un plazo que no exceda de quince días, previniéndolas a presentar sus pruebas en la misma. Si lo estimare necesario, ordenará que la Auditoría o la Supervisión General de Tribunales, según se trate de trabajadores o funcionarios administrativos o auxiliares judiciales, practique la investigación correspondiente.

ARTICULO 69. Audiencia. La autoridad administrativa, por medio del Sistema de Recursos Humanos, deberá citar al denunciado bajo apercibimiento de continuar el trámite en su rebeldía si dejare de comparecer sin justa causa. En las audiencias podrán estar presentes, además del agraviado, el empleado, su defensor si lo tuviere; los testigos y peritos y el Auditor o Supervisor de Tribunales que corresponda.

Si al inicio de la audiencia el empleado judicial aceptare haber cometido la falta, resolverá sin más trámite.

Si no se diere este supuesto, se continuará con el desarrollo de la audiencia, dando la palabra a las partes involucradas y recibiendo los medios de prueba que las mismas aporten o que se hayan acordado de oficio.

La autoridad nominadora o la unidad correspondiente del Sistema de Recursos Humanos, pronunciará su resolución dentro del término de tres días después de realizada la audiencia y notificará lo resuelto para anotarlo en el registro personal del empleado.

ARTICULO 70. Duración del procedimiento. El procedimiento disciplinario descrito deberá realizarse en un período de tres meses, contados desde que hubiere llegado la denuncia ante las autoridades administrativas. Transcurrido dicho plazo se archivarán las actuaciones, sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales que se deduzcan del procedimiento administrativo.

En los casos en que se trate de procedimientos disciplinarios que tienen prevista la sanción de destitución, el plazo del procedimiento podrá ser prorrogado por tres meses más.

ARTICULO 71. Certificación de lo conducente. Si del procedimiento disciplinario resultaron indicios de responsabilidad penal, la autoridad administrativa lo hará constar y certificará lo conducente al Ministerio Público.

TITULO VI

MEDIOS DE IMPUGNACION

CAPITULO UNICO

ARTICULO 72. Medios de Impugnación. Las resoluciones administrativas pueden ser impugnadas por los siguientes medios:

a. Revisión:

1. Contra las resoluciones administrativas derivadas de los sistemas de evaluación de desempeño y capacitación;
2. Contra las resoluciones que no admiten para su trámite la denuncia de una falta administrativa;
3. Contra las resoluciones que impongan sanción de amonestación;
4. Contra las resoluciones que definan situaciones sobre traslados o permutas.

b. Revocatoria, contra las resoluciones que impongan sanción de suspensión o destitución.

c. Apelación.

ARTICULO 73. Revisión. La solicitud de revisión se presentará ante la autoridad administrativa, dentro del plazo de tres días siguientes a la notificación de la resolución respectiva, quien resolverá dentro del plazo de cinco días. Contra esta resolución no cabe recurso alguno.

ARTICULO 74. Revocatoria. El interesado podrá interponer revocatoria contra la resolución final de la autoridad administrativa ante autoridad superior que corresponda. La impugnación deberá interponerse dentro del plazo de los tres días siguientes, contados a partir del momento en que el empleado fue notificado de la resolución respectiva.

ARTICULO 75. Trámite. Para resolver la revocatoria, la autoridad administrativa superior mandará oír, en una sola audiencia, al Sistema de Recursos Humanos y al interesado, resolviendo en un plazo no mayor de cinco días.

ARTICULO 76. Apelación. De lo resuelto en la revocatoria por suspensión, conocerá en apelación la cámara respectiva de la Corte Suprema de Justicia, que resolverá sin más trámite, confirmando, revocando, modificando o anulando.

De lo resuelto en la revocatoria por destitución conocerá la Corte Suprema de Justicia.

Contra lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia no cabe recurso alguno.

TITULO VII**TERMINACION DE LA RELACION LABORAL****CAPITULO UNICO****CAUSAS PARA LA TERMINACION DE LA RELACION LABORAL**

ARTICULO 77. Causas de terminación de la relación laboral. La relación laboral termina por:

- a) Incapacidad para el desempeño del cargo legalmente declarada.
- b) Jubilación.
- c) Destitución.
- d) Renuncia.
- e) Muerte.

ARTICULO 78. Facultad del empleado para dar por terminada la relación laboral. Los empleados y funcionarios judiciales podrán dar por terminada la relación laboral, sin responsabilidad de su parte:

- a) Por traslado a un puesto de menor categoría y salario, salvo cuando fuere consecuencia de un ascenso o de un aumento de salario que tuvo carácter temporal o por haber solicitado o aceptado voluntariamente el mismo.
- b) Por alterarse, sin su consentimiento, las condiciones de trabajo.
- c) Por renuncia, que debe presentarse ante la autoridad nominadora con quince días de anticipación, por lo menos.

TITULO VIII

DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS**CAPITULO UNICO**

ARTICULO 79. Integración. Los casos no previstos en esta ley, se resolverán aplicando los preceptos fundamentales de la misma, las leyes ordinarias, los pactos colectivos de condiciones de trabajo, los principios generales del Derecho, la equidad y la doctrina sobre administración de personal en el servicio público.

ARTICULO 80. Reglamentación. El presidente del Organismo Judicial emitirá, en un plazo máximo de seis meses, los reglamentos administrativos y los manuales que sean necesarios para la aplicación de la presente ley.

ARTICULO 81. Situación de los empleados Judiciales del servicio de oposición. En el plazo de tres años contados a partir de la vigencia de la presente ley, los empleados judiciales en servicio que ocupen cargos contemplados en el régimen de oposición, para continuar en el mismo, deberán cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 16 de esta ley.

El Presidente del Organismo Judicial ordenará la realización de actividades de capacitación y actualización para los empleados judiciales, a efecto de que éstos cumplan con los requisitos mencionados.

ARTICULO 82. Epígrafes. Los epígrafes que preceden a cada uno de los artículos de la presente ley, no tienen validez interpretativa y no deben ser citados con respecto al contenido y alcance de la misma.

ARTICULO 83. Derogatorias. Quedan derogadas todas las normas que contravengan lo dispuesto en la presente ley.

ARTICULO 84. Vigencia. El presente decreto entrará en vigencia a los ocho días de su publicación en el diario oficial.

PASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCION, PROMULGACION Y PUBLICACION.

DADO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, A LOS TREINTA DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE.

RUBEN DARIO MORALES VELIZ

PRESIDENTE EN FUNCIONES

JORGE PASSARELLI URRUTIA

SECRETARIO

ENRIQUE GONZALEZ VILLATORO

SECRETARIO

PALACIO NACIONAL: Guatemala, veintiuno de diciembre de mil novecientos noventa y nueve.

PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

ARZU IRIGOYEN

LUIS FELIPE LINARES LOPEZ

MINISTRO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

Rosamaria Cabrera Ortiz

Subsecretaria General

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

ENCARGADA DEL DESPACHO